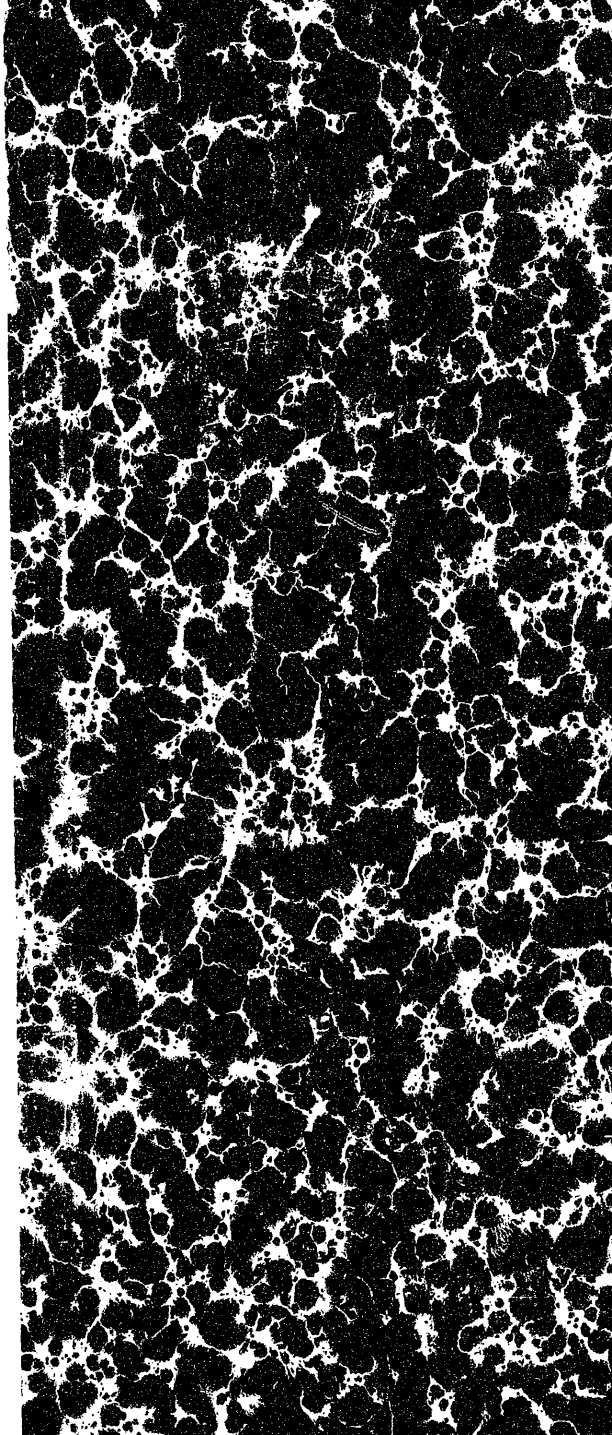
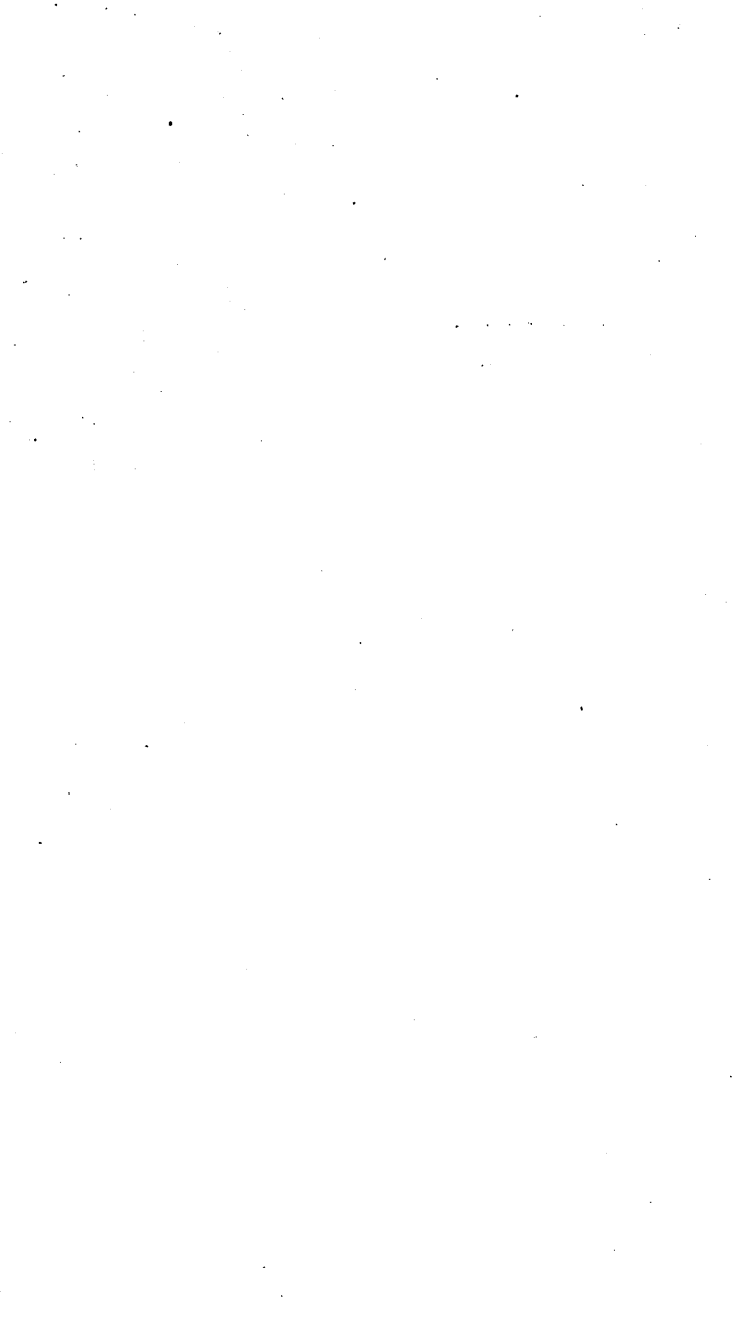




The University of Chicago
Libraries

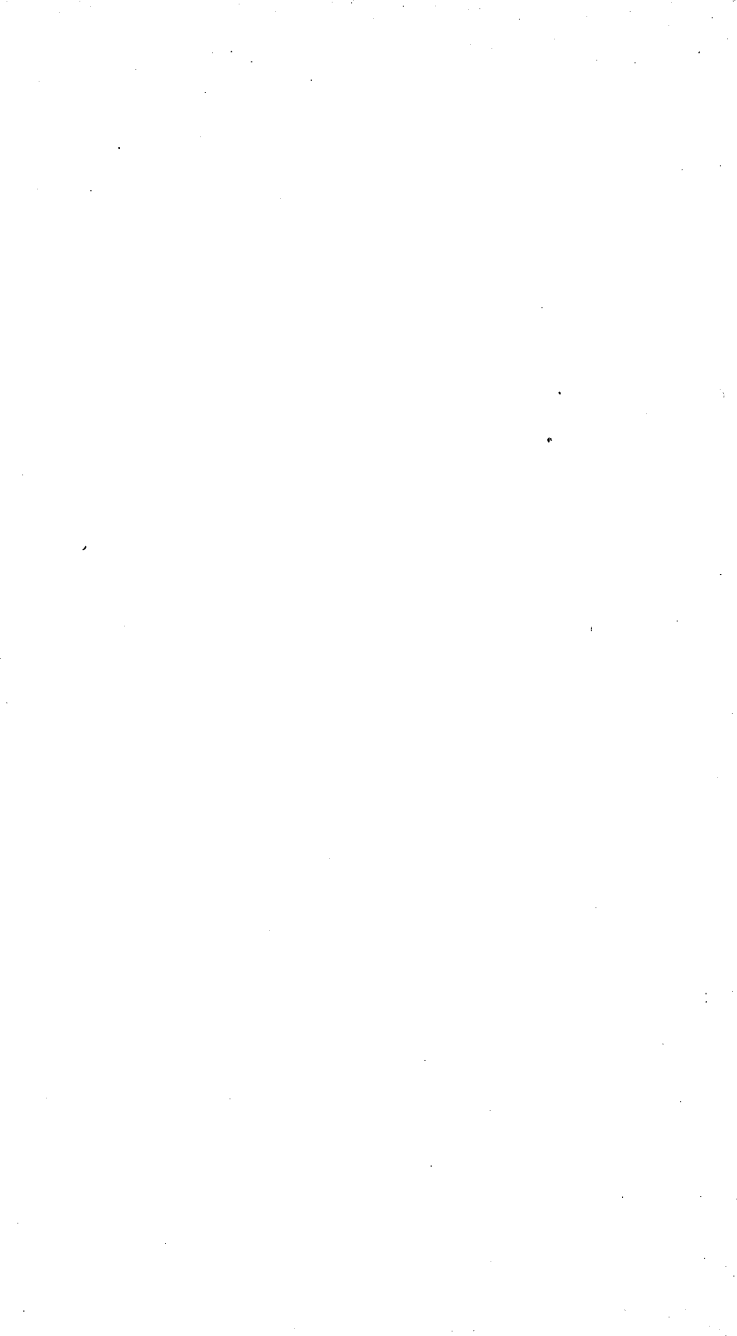




JAIME TORRUBIANO RIPOLL

LOS CONCORDATOS DE LA POSTGUERRA
Y LA CONSTITUCION RELIGIOSA
DE LOS ESTADOS





JAIME TORRUBIANO RIPOLL



LOS CONCORDATOS
DE LA POSTGUERRA Y LA
CONSTITUCION RELIGIOSA
DE LOS ESTADOS

M. AGUILAR • EDITOR

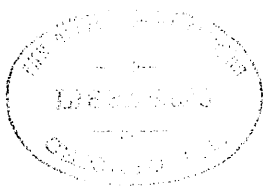
MARQUES DE URQUIJO, 39

MADRID

1931

BV630

.A1T6



ES PROPIEDAD

hist. ✓

PREFACIO

En el momento en que escribimos estas líneas—10 de julio de 1931—está colocada España en la postura más difícil de su historia.

Hora es ésta de graves responsabilidades, de históricas responsabilidades, para los dirigentes del pueblo español.

Los excesos de represión contra los seculares causantes de nuestras desgracias nacionales podrían poner en peligro la revolución ordenada cuyo primer período se abrió con la proclamación de la República. Sin estremecimientos ni sacudidas violentas llegaremos más lejos que dando satisfacción a la sed de venganza que nos abrasa a todos, pero que unos sabemos, aunque con grande esfuerzo, extinguir, y otros pugnan por saciar sin medida.

Uno de los problemas que más ardorosamente apasionan los ánimos en esta hora difícil es el problema religioso. Para resolverlo racionalmente, justicieramente, a la vez que arrancando de cuajo para siempre el funesto oficialismo civil de la religión y la dañosa influencia social del célibe profesional metido en la familia y en la orientación cultural y política, he trabajado y escrito largos años numerosas obras. Con la presente, que hoy comienzo, abocado a las Cortes Constituyentes, quiero continuar mi ininterrumpida tradición, mostrando a nuestros legisladores y rectores de la cosa pública el modelo

del mundo civilizado, para que en medio de él demos una nota armónica, no disonante; principalmente de aquella parte del mundo que se renovó después de la guerra, iluminada por las siempre provechosas lecciones que da el dolor. Los pueblos europeos, que son más viejos, que mejor han podido comparar la eficacia de las teorías frente a la dureza de las realidades, son los que más garantías nos ofrecen de saludable magisterio.

No procedan de ligero nuestros legisladores en el ordenamiento jurídico del problema religioso. Creo que ha de servirles de gran provecho en tan ruda tarea la lectura de este libro, que a paso de carga escribo, para suplir parte de la labor que quise llevar a cabo en las Cortes si no me hubieran puesto el veto para ir a ellas quienes menos debían ponerlo. Cumplidor de mi sagrado deber, dentro o fuera del templo de las leyes, ahí van estas páginas complementarias de anteriores trabajos míos. En ellas hallarán empuje y ánimos los católicos cobardes, que creen equivocadamente inmutables e inviolables nuestras normas religiosas hasta ahora vigentes; y hallarán freno los espíritus antirreligiosos frente a la necesidad de ponerse a tono con el mundo civilizado. En el medio está la virtud, y en el fin que persigue este libro el medio es la posibilidad de la convivencia humana en un estatuto religioso ecudnime.

Es notabilísima, como se observará, la diferencia entre los Concordatos de la postguerra y los anteriores a ella. El mundo, no menos religioso que antes, pero cansado de los graves abusos que al amparo de la religión se han cometido, rechaza el exceso de privilegios que el clero ha querido siempre atribuirse en medio de la sociedad civil, y el Vaticano, que es la potencia diplomática más hábil de la tierra, profundo conocedor del estado de la cosa pública en cada nación, se resigna fácilmente, donde no puede otra cosa, a la inquebrantable defensa de sólo el derecho divino de la Iglesia, que, al fin y

al cabo, en su verdadera y única misión. Y si consuela a un alma católica el gran poder moral que a través del estatuto jurídico-religioso del mundo se descubre conserva todavía universalmente, con aires de firmeza e indestructibilidad, la Iglesia, entristece, por otro lado, ciertamente, contemplar la ceguera del Vaticano, que no se resigna a abandonar por su propia voluntad y convencimiento los viejos métodos, tan funestos para el sincero espíritu religioso, allí, como en Lituania, donde, por la poca cultura del pueblo, todavía tiene fuerza para ejercer su habitual poderío imperialista. Y es tan importante hacer notar la predicha diferencia entre los Concordatos de la postguerra y los anteriores a la guerra, que he querido hacerla resaltar en el propio título de la obra, aunque mejor le hubiera cuadrado este otro título: Estatutos jurídico-religiosos de los Estados civilizados.

A la transcripción de los textos legales donde se contiene la totalidad de la constitución jurídica del problema religioso de cada Estado deberían acompañar oportunos comentarios. Urge dar a luz el presente libro, y dejaremos el comentario para otro libro. Los más aparentes comentarios ya los hará el lector, y entretanto no faltará a nuestros legisladores guión para su tarea.

Madrid, 10 de julio de 1931.

1000

**ESTATUTOS JURIDICO-RELIGIOSOS
DE EUROPA**

CAPITULO PRIMERO

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE ALEMANIA

En varios artículos de la Constitución de Weimar, su carta fundamental presente, tocó Alemania el problema religioso.

En el artículo 10 estatuye dicha Constitución que «el Reich (Estado federal alemán) puede, por vía legislativa, dictar principios en materia de derechos y deberes de las confesiones religiosas».

El pueblo alemán comprendía la importancia que tenía para el mantenimiento de la unidad de la nacionalidad alemana la uniformidad de normas religiosas en la profesión variada de confesiones de los diferentes *länder* (Estados federados en el Reich). Para obtener dicha uniformidad de normas confió la Constitución federal al Reich la facultad que le asigna el artículo 10, en su número primero. No dejó Alemania amplia libertad a los países (*länder*) para que legislasen sobre el problema religioso; comprendió que tan gran libertad podía con el tiempo dar origen a conflictos parecidos a los que a través de la Historia tan graves daños le habían causado. Al prevenir mediante normas federales uniformes esos conflictos, acepta el Reich alemán el reconoci-

miento de la gran importancia que en la vida de los pueblos tiene el sentimiento religioso; reconocimiento contenido en el artículo 10 de la Constitución de Weimar.

Por la relación que con el sentimiento religioso tiene el régimen de inhumaciones, es por lo que la Constitución de Weimar, en el número quinto del citado artículo 10, otorga también al Reich «el poder de dictar, por vía legislativa, principios en materia de régimen de inhumaciones».

* * *

En el artículo 42 habla la Constitución de Weimar del juramento que debe prestar el Presidente del Reich después de su elección. El texto de este juramento lo trae el citado artículo, y en él, ciertamente, no hay palabra alguna que haga alusión religiosa. Pero termina así el mismo artículo: «puede unirse una fórmula de juramento religioso». Váyase observando cómo el sensato pueblo alemán, aleccionado por los graves dolores de la guerra, al darse su carta fundamental, cuando todavía manaba sangre y lágrimas, no olvida en ningún momento el problema religioso y fomenta las elevaciones del alma humana que la religión inspira.

* * *

El artículo 124 de la Constitución de Weimar dice textualmente como sigue:

Todos los alemanes tienen el derecho de formar sociedades o asociaciones cuyos fines no sean contrarios a las leyes penales. Este derecho no puede ser limitado por medidas preventivas. Estas disposiciones aplicanse igualmente a las asociaciones y organizaciones confesionales. Toda asociación puede adquirir la personalidad jurídica de conformidad

con las prescripciones del Derecho civil. Esta personalidad no les puede ser negada por razón de perseguir un fin político, social o religioso.

Siendo el fin religioso un fin lícito de la vida humana, siempre que a la sombra de él no se cometan hechos delictivos, es uno de los inviolables derechos del hombre asociarse con otros hombres para conseguir un fin religioso. Y todas las asociaciones al amparo de este derecho surgidas, no sólo son lícitas, sino que tienen derecho a la personalidad jurídica. Por consiguiente, la revolución alemana no sólo admitió la licitud y personalidad jurídica de las iglesias, cualesquiera que ellas sean, sino también de las órdenes y comunidades religiosas, siempre que en su constitución y funcionamiento se cumplan las prescripciones del derecho civil y no se incurra en hechos penados por el Código Penal.

Pero no sólo de pasada trata el problema religioso la Constitución alemana, involucrando los derechos religiosos entre los derechos generales del hombre, sino que, haciéndose cargo aquel gran pueblo de la importancia de la religión como vínculo social, que ningún poder humano podrá eliminar del corazón del hombre, dedica a él en su carta fundamental una sección entera, la sección tercera, cuyo epígrafe es: «Religión y sociedades religiosas.» Comprende los artículos desde el 135 al 141, ambos inclusive, y su texto es como sigue:

Art. 135. Todos los habitantes del Reich gozan de entera libertad de creencias y de conciencia. El libre ejercicio de la religión es garantido por la Constitución y colocado bajo la protección del Estado.

Art. 136. Los derechos y deberes civiles y cívicos no son ni condicionados ni limitados por el ejercicio de la libertad religiosa. El disfrute de los derechos civiles y cívicos, lo mismo que la admisión a los empleos públicos, son independientes de la confesión religiosa.—Nadie está obligado a

declarar sus convicciones religiosas. Las autoridades no tienen derecho a inquirir a qué confesión religiosa pertenezca alguno, sino cuando se derive de derechos o lo exija una relación estadística ordenada por la ley.—Nadie puede ser forzado a un acto ni a una ceremonia de culto, ni a participar en ejercicios religiosos ni a servirse de una fórmula de juramento religioso.

Art. 137. No existe religión del Estado. Es garantida la libertad de formar asociaciones religiosas. Ellas pueden federarse sin ninguna restricción.—Toda sociedad religiosa regula y administra libremente sus negocios dentro de los límites de la ley aplicable a todos y cumple sus funciones sin la participación del Estado ni de las autoridades locales.—Las sociedades religiosas adquieren personalidad jurídica a tenor de las prescripciones generales del derecho civil.—Las sociedades religiosas que eran anteriormente de derecho público conservan este carácter. Los mismos derechos deben ser, a petición suya, conferidos a las otras sociedades religiosas, cuando ellas presenten, por su constitución y el número de sus miembros, garantías de duración. Cuando muchas sociedades religiosas que tienen este carácter de personas de derecho público se agrupan en una unión, esta unión es igualmente persona de derecho público.—Las sociedades religiosas que son personas de derecho público tienen derecho de hacer levas de impuestos sobre la base de los patrones civiles de impuestos conforme a las leyes del país.—Son asimiladas a las sociedades religiosas las asociaciones que se proponen como fin la prosecución en común de ideales filosóficos.—La reglamentación ulterior que podrá necesitar la aplicación de estas disposiciones incumbe a la legislación de cada país.

Art. 138. Las subvenciones acordadas por el Estado a las sociedades religiosas en virtud de una ley, de un convenio o de títulos jurídicos particulares, son redimidas conforme a las disposiciones de las leyes de cada país. El Reich establece los principios generales sobre la materia.—Son garantidos la propiedad y los otros derechos de las sociedades y asociaciones religiosas sobre sus establecimientos destinados al servicio del culto o a la enseñanza y a la bene-

ficencia, o también sobre las fundaciones y otros bienes.

Art. 139. El domingo y los días de fiesta reconocidos por el Estado continúan protegidos por la ley como días de reposo físico y de perfeccionamiento espiritual.

Art. 140. Debe concederse a los miembros del Ejército el tiempo de libertad necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos.

Art. 141. En la medida en que se haga sentir la necesidad del servicio y del ministerio divinos en el Ejército, los hospitales, los establecimientos penitenciarios u otros establecimientos públicos, son autorizadas a ejercerlos las sociedades religiosas, con ausencia, no obstante, de toda coacción.

Hasta aquí la sección tercera.

Finalmente, vuelve la Constitución alemana a tocar el problema religioso al final de la sección cuarta, sobre «Instrucción y establecimientos de enseñanza», en el artículo 149, que dice de esta manera:

Art. 149. La enseñanza religiosa es materia ordinaria de enseñanza en las escuelas, a excepción de las escuelas que no se incorporen a ninguna confesión. Es ella dada dentro del cuadro de la legislación escolar. La enseñanza religiosa es dada en armonía con los principios de la comunidad religiosa interesada, sin perjuicio del derecho de control del Estado.—Los maestros no dan la enseñanza religiosa y no se ocupan del cumplimiento de las prácticas religiosas más que cuando han manifestado la voluntad de ello; los niños no toman parte en la enseñanza de la religión y en las ceremonias y prácticas del culto sino cuando las personas que han de decidir acerca de su educación religiosa manifiesten su voluntad. Se mantienen las Facultades de Teología de las Universidades.

Tal es la constitución religiosa del Reich alemán.

El fin religioso es, por lo menos, tan respetable como el fin artístico, el político, el científico, el de mejora pro-

fesional, etc. En toda sociedad, pues, organizada a base de justicia es preciso otorgar los mismos derechos, por lo menos, a las sociedades y asociaciones religiosas que a las científicas, artísticas, políticas, etc. No se pueden restringir los derechos ciudadanos a título de religión; hacerlo es persecución religiosa, indigna de todo pueblo civilizado. Así lo entendió el pueblo alemán y se limitó a impedir con sus leyes que, a título de derechos religiosos, pudiera alcanzar predominio político una determinada clase social, en detrimento de las demás clases.

No haremos un estudio técnico de la expresada legislación constitucional del Reich, porque no es éste el objeto del presente libro. Unicamente haremos observar cuán bien y cuán progresivamente viven los católicos alemanes bajo una legislación que no habrían aceptado nunca voluntariamente los católicos españoles, que sólo entienden de privilegios, sin caer en la cuenta de que el catolicismo está más vivo y tiene más preponderancia social en Alemania que en España. Y haremos observar también, dirigiéndonos a los acatólicos españoles, que la revolución alemana no ha encontrado incompatibles los mayores avances sociales y políticos con la plenitud del respeto a los derechos religiosos.

Conozcamos ahora también la constitución jurídico-religiosa vigente de los principales países del Reich.

El Reich no ha celebrado Concordato ninguno con la Santa Sede; pero lo han celebrado cuatro Estados de la Federación: Prusia, Baviera, Baden y Wurtemberg. Los dos primeros, después de la guerra. Los dos últimos conservan los que celebraron antes de ella. Esto da una múltiple policromía al estatuto jurídico-religioso de Alemania.

CAPÍTULO II

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE BAVIERA

El 14 de agosto de 1919 dióse el Estado libre de Baviera, que había sido Estado católico dentro del Imperio alemán, una Constitución eminentemente democrática y de tonos liberalísimos en su aspecto religioso.

A la religión dedica casi toda su sección IV, cuyo epígrafe es: *Libertad de conciencia. Iglesias. Escuelas*. Comprende esta sección los párrafos 17, 18, 19, 20 y 21 de la expresada Constitución.

Dice así:

§ 17.

I. Se garantiza a todos la entera libertad de creencia y de conciencia.

II. El poder de decidir la filiación de los niños a una Iglesia pertenece, hasta los dieciséis años cumplidos, a los que tienen a su cuidado el derecho de educación. Hasta este momento, los padres pueden también reglar por contrato la filiación de sus hijos a una Iglesia. Tal contrato debe ser legalizado por juez o por notario. Si con el consentimiento de los que tienen sobre sí el derecho de educación, un niño, antes de cumplir los dieciséis años, ha sido definitivamente admitido en una Iglesia por un acto de culto de ésta, este estado de cosas no puede ser ya modificado por los que tie-

nen el derecho de educación. A partir de esta edad, es el niño mismo quien debe decidir si permanecerá en la Iglesia.

III. La declaración de salida de una Iglesia puede ser hecha, verbalmente o por escrito, a la autoridad civil del domicilio o de la residencia permanente. La declaración escrita debe ser legalizada por una autoridad pública. El párrafo II es aplicable por analogía. La nulidad y el pleito de validez de la declaración de salida son estimados a tenor de las prescripciones del Código civil.

IV. Las nuevas prestaciones voluntarias del Estado, de las comunidades de laicos y de las regiones administrativas a una Iglesia son suministradas por medio de centésimas adicionales a los impuestos del Estado y por medio de las imposiciones de los miembros de esta Iglesia.

§ 18.

I. La reunión de correligionarios para la celebración en común del culto doméstico o para el ejercicio público del culto, para la constitución de Iglesias, de comunidades eclesiásticas o de comunidades religiosas, es libre dentro de los límites de la ley.

II. Las Iglesias, las circunscripciones eclesiásticas o las comunidades religiosas existentes, sus establecimientos, fundaciones y otras instituciones, conservan la capacidad jurídica en tanto que la poseían hasta el presente; las nuevas pueden adquirir la capacidad jurídica conforme al derecho en vigor. Su propiedad, sus otros derechos, lo mismo que sus características confesionales, son garantidos.

III. El poder de reglar y de administrar sus negocios de manera autónoma es garantido a las Iglesias, a las comunidades eclesiásticas y a las comunidades religiosas; es igualmente garantido a las Iglesias y a las comunidades eclesiásticas que poseen la cualidad jurídica de corporaciones de derecho público, el derecho de hacer tributar a sus miembros por medio de las listas laicas de impuestos en los límites establecidos por la ley.

IV. Hasta la supresión de las prestaciones del Estado,

conforme al artículo 138 de la Constitución del Reich alemán, se mantienen las prestaciones que el Estado suministra a las Iglesias en virtud de la ley, de un contrato o de un título jurídico particular.

V. Hasta el mismo momento, los edificios y los fundos rústicos del Estado que sirven actualmente a fines culturales cualesquiera, no podrán ser distraídos contra la voluntad de los interesados.

§ 19.

I. La creación y sostenimiento de lugares de sepultura incumben a comunidades de legos; lo mismo sucede con la creación y sostenimiento de las instalaciones funerarias.

II. Las comunidades de legos no son obligadas a crear lugares de sepultura ni instalaciones funerarias sino en tanto que las existentes no basten. Por lo demás, el sostenimiento y la creación son regulados por la necesidad pública.

III. En los cementerios que no son destinados más que a una Iglesia determinada debe ser autorizada, en defecto de un lugar de sepultura común, la inhumación de los miembros de otra creencia, según las formas que están en uso para ellos y sin intervalo, según la necesidad, y a disposición de las autoridades competentes.

IV. Por lo demás, el uso común de las iglesias y de los cementerios se regula a tenor del derecho actual, mientras no se introduzcan modificaciones por la ley.

Posteriormente, el número I del párrafo 69 preceptúa:

La libertad de opinión religiosa y política, y la libertad de formar agrupaciones, son garantidas a los funcionarios.

No se ocupa más del problema religioso la Constitución de Baviera. Pero Baviera concertó después de la guerra un Concordato con la Santa Sede, que define firme-

mente el Estatuto religioso de aquel importante Estado alemán.

Es como sigue el texto del mencionado Concordato:

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO DE BAVIERA

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI y el Estado de Baviera, animados del deseo de regular nuevamente de manera estable y correspondiente a la mudada condición de los tiempos la situación de la Iglesia católica en Baviera, han resuelto concluir una solemne Convención.

A tal efecto, Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI ha nombrado plenipotenciario suyo a su excelencia reverendísima monseñor Dr. Eugenio Pacelli, arzobispo de Sardes y nuncio apostólico en Mónaco de Baviera, y el Gobierno de Baviera ha nombrado plenipotenciarios suyos a su excelencia el Sr. Dr. Eugenio von Knilling, ministro de Negocios Extranjeros de Baviera; al Sr. Dr. Francisco Matt, ministro de Instrucción Pública y de Culto, y al Sr. Dr. Guillermo Krauessneck, ministro de Finanzas, los cuales, cambiadas sus respectivas plenipotencias, y halladas en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.

§ 1. El Estado bávaro garantiza el libre y público ejercicio de la religión católica.

§ 2. Reconoce el derecho de la Iglesia de dar en el ámbito de su competencia leyes y decretos que obliguen a sus miembros, y no impedirá ni hará difícil el ejercicio de este derecho.

§ 3. Asegura a la Iglesia católica el imperturbable ejercicio del culto. En los actos de su oficio, los eclesiásticos gozarán de la protección del Estado.

Artículo 2.

Las Ordenes y las Congregaciones religiosas podrán libremente constituirse; de conformidad con las prescripciones canónicas, no se someterán a limitación alguna de parte del Estado con relación a su residencia, al número y a la cualidad de sus miembros—salvo el artículo 13, párrafo 2—, ni a su género de vida conforme a la Constitución aprobada por la Iglesia.

Las que gozaren hasta ahora de los derechos de las corporaciones públicas los conservarán; las demás adquirirán la personalidad jurídica o los derechos de las corporaciones públicas según la norma vigente para todos los ciudadanos y Asociaciones. Su propiedad y sus otros derechos son garantidos. Ni en la adquisición ni en la posesión ni en la administración de sus bienes, como ni en la reglamentación de sus negocios, no serán sometidas a ninguna especial restricción o inspección del Estado.

Artículo 3.

§ 1. El nombramiento o la admisión de los profesores o de los docentes en la Facultad Teológica de la Universidad o en la Academia Filosófico-teológica, como también de los maestros de religión en la Escuela Superior, tendrá lugar por parte del Estado, con tal que contra los respectivos candidatos no haya sido opuesta ninguna objeción de parte del competente obispo diocesano.

§ 2. Si alguno de los sobredichos enseñantes es por parte del obispo diocesano declarado inhábil por grave motivo concerniente a su doctrina o a su conducta moral, el Gobierno, sin perjuicio de los derechos de aquél como funcionario del Estado, proveerá sin dilación a que sea suplido en su oficio por otra persona idónea,

Artículo 4.

§ 1. La enseñanza en la Facultad de Teología en la Universidad y en la Academia Filosófico-teológica debe corresponder a las necesidades de los candidatos al estado sacerdotal y a la prescripción eclesiástica.

§ 2. En la Facultad Filosófica de las dos Universidades de Mónaco y de Wurzburg deberá haber, por lo menos, un profesor de Filosofía y uno de Historia, contra los cuales no pueda ponerse ninguna excepción desde el punto de vista católico y eclesiástico.

§ 3. La instrucción religiosa permanece en todas las escuelas superiores y medias como materia ordinaria, al menos en la amplitud hasta ahora en vigor.

Artículo 5.

§ 1. La instrucción y educación de los niños en la escuela elemental católica será confiada únicamente a maestros y maestras que sean aptos y estén dispuestos a instruirlos de manera segura en la doctrina católica y a educarlos en el espíritu de la fe católica.

§ 2. Los maestros y las maestras que quieran ser empleados en la escuela católica deberán probar, antes de su nombramiento, haber recibido una formación correspondiente a la naturaleza de la misma, sea en lo que concierne a la instrucción religiosa, sea en lo que se refiere a aquella materia que tenga importancia para la fe y las costumbres. Para dedicarse a la instrucción religiosa se requiere previamente la misión canónica de parte del obispo diocesano.

§ 3. En el nuevo ordenamiento de la escuela magistral, el Estado procurará que haya allí instituciones que aseguren una formación correspondiente a los sobredichos principios para los maestros y las maestras destinados a enseñar en la escuela elemental católica.

§ 4. La superior autoridad eclesiástica será convenientemente representada, al menos por lo que se refiere a la

instrucción religiosa, en la Comisión examinadora para la habilitación para enseñanza en la escuela elemental católica.

§ 5. Como quiera que con el nuevo ordenamiento de la escuela magistral sea todavía posible a los institutos privados asumir la instrucción preparatoria a la formación profesional de los maestros y de las maestras, el Estado, en la admisión de los mismos, tendrá conveniente atención también a los institutos ya existentes de las órdenes y de las congregaciones religiosas.

§ 6. Los alumnos y cuantos hayan frecuentado tales institutos privados serán admitidos a los exámenes del Estado, de conformidad con las disposiciones generales, con tal que los mismos institutos cumplan desde el punto de vista científico las condiciones prescritas por el Estado.

§ 7. Para la habilitación para la enseñanza en las escuelas elementales, medias y superiores, y para el nombramiento para maestros o maestras, no se requerirán en los miembros de las órdenes o de las congregaciones religiosas condiciones diversas de las de los laicos.

Artículo 6.

En todos los Ayuntamientos en los cuales los padres de familia o quienes hicieran sus veces lo exigieran, se deberán fundar escuelas elementales católicas, con tal que, habiendo en ellas un número suficiente de escolares inscritos en dichas escuelas, sea posible un regular funcionamiento de la escuela, si bien únicamente en la forma de una así llamada «escuela indivisa».

Artículo 7.

§ 1. En todas las escuelas elementales, con excepción únicamente de aquellas de que se habla en el siguiente párrafo, la instrucción religiosa queda como materia ordinaria de enseñanza. La amplitud de dicha instrucción se fija-

rá, de acuerdo con la superior autoridad eclesiástica, en medida no inferior a la practicada actualmente.

Aun cuando el Estado bávaro no se encontrase legalmente en condición de dar en alguna escuela a la instrucción religiosa el carácter de materia ordinaria de enseñanza, ésta podrá siempre, al menos, ser en la misma dada privadamente, y a tal fin serán puestos a su disposición los locales de la escuela, con calefacción e iluminación, a expensas del Ayuntamiento o del Estado.

§ 2. A los escolares de los institutos elementales, medios y superiores, debe dárseles, de acuerdo con la superior autoridad eclesiástica, modo oportuno y conveniente de cumplir sus deberes religiosos.

Artículo 8.

§ 1. Son garantidas a la Iglesia la vigilancia y la dirección de la instrucción religiosa en la escuela elemental, media y superior.

§ 2. Produciéndose daños en la vida religiosa o moral de los estudiantes católicos, como también influencia perniciosa o indebida de los suyos mismos en la escuela, y de manera particular, eventual ofensa a su fe o a sus sentimientos religiosos en la enseñanza, el obispo y sus delegados tendrán el derecho de recurrir a la autoridad escolástica del Estado, la cual tendrá cuidado de poner conveniente remedio.

Artículo 9.

§ 1. Las órdenes y las congregaciones religiosas son admitidas a fundar y dirigir escuelas privadas según la norma de las prescripciones generales del derecho común. El reconocimiento de los derechos referentes a las escuelas mismas ha lugar, según la regla vigente para las otras escuelas privadas.

§ 2. Las escuelas dirigidas por las órdenes y las congregaciones religiosas que hasta ahora han gozado el carácter

de escuelas públicas lo conservarán, cumpliendo los requisitos exigidos para tales escuelas. Con las mismas condiciones el Estado podrá concertar qué carácter tendrán las nuevas escuelas de las órdenes y congregaciones religiosas.

Artículo 10.

§ 1. El Estado bávaro cumplirá siempre hacia la Iglesia católica, en Baviera, sus obligaciones financieras fundadas en ley, convención o particular título jurídico. Las obligaciones de tal naturaleza fijadas en el Concordato de 1817 serán substituídas por el siguiente acuerdo:

a) El Estado proveerá a la dotación de las sedes arzobiscales y episcopales y de los cabildos metropolitanos y catedrales *in bonis fundisque stabilibus*, cuyos réditos anuales netos serán calculados sobre la base a que se fijaron en el mencionado Concordato, teniendo en cuenta el valor de la moneda en el año 1817. Estos bienes serán libremente administrados por la Iglesia. Hasta que tal dotación no pueda ser efectuada en el modo sobreindicado, el Estado proporcionará, en lugar de ésa, una renta anual que será computada sobre la base de las obligaciones establecidas en el Concordato de 1817, y adaptada a las condiciones económicas de cada tiempo, análogamente a los correspondientes gastos del Estado para sus propios fines.

Las prestaciones financieras a las sedes episcopales diocesanas de Augsburgo, Regensburg, Würzburg, Passau, Eichstätt y Spira deberán ser iguales.

A los obispos auxiliares les corresponderá la asignación suplementaria prevista en la Convención del 1920, igualmente adaptada a la condición económica de cada tiempo.

b) Todos los cabildos tendrán dos dignidades (el arcipreste y el deán); los cabildos metropolitanos tendrán diez canónigos; los catedrales, ocho; los unos y los otros tendrán además sus vicarios destinados al servicio del coro y de la curia diocesana.

Para los canónigos que hayan cumplido la edad de setenta años y no sean ya hábiles para prestar su servicio

podrán ser nombrados, de acuerdo con el Gobierno, coadjutores con o sin derecho de sucesión, los cuales tendrán las mismas rentas que los canónigos estatutarios.

c) El Estado subvencionará al vicario general y al secretario del obispo con un honorario igualmente adaptado a la condición económica de cada tiempo.

d) En la vacante de la sede arzobispal y episcopal de una dignidad, de los canónigos o del vicario, las sobredichas rentas serán percibidas y conservadas en provecho de la respectiva iglesia.

e) A los arzobispos y a los obispos, a los canónigos más ancianos (cinco en los cabildos metropolitanos y cuatro en los catedrales), y a los tres vicarios igualmente más ancianos, les será asignada una habitación correspondiente a su dignidad y condición.

f) Los fondos, los réditos, los bienes muebles e inmuebles de la iglesia metropolitana y catedral y de su fábrica serán conservados, y cuando ellos no sean suficientes para la manutención de la misma iglesia, para los gastos del culto divino y para los estipendios de los necesarios servidores laicos, el Estado suplirá lo que falte.

g) Para la curia arzobispal y episcopal, para el cabildo y el archivo, será igualmente destinado un conveniente edificio; para satisfacer el déficit eventual en los gastos ocurientes en la curia arzobispal y episcopal se aplica análogamente la disposición de la letra f.

h) El Estado hávaro otorgará los correspondientes subsidios a los seminarios existentes menor y mayor, ordenados según la prescripción del Código de Derecho canónico.

i) A los eclesiásticos jubilados el Estado provee destinando a tal fin institutos con suficiente dotación, o prestando un suplemento a la relativa pensión.

k) Si de inteligencia con el Gobierno son erigidos nuevos oficios con cura de almas o mudados los ya existentes, el Estado corresponderá a los eclesiásticos que los desempeñen *pro tempore*, por medio de un conveniente complemento de la respectiva dotación en el cuadro de las prestaciones financieras hasta ahora en uso para los eclesiásticos que tengan cura de almas en general.

Aunque se llegase a una desvinculación o a un nuevo ordenamiento de las prestaciones del Estado a la Iglesia fundadas en ley, convención o particular título jurídico, el Estado bávaro asegurará los intereses de la Iglesia mediante compensaciones, las cuales, correspondientemente al contenido y a la extensión de la relación jurídica, y teniendo en cuenta el valor del dinero, constituyan un pleno subrogado del cesado derecho.

§ 2. Si no son necesarios subsidios o mayores gastos por parte del Estado, los oficios eclesiásticos podrán ser libremente erigidos o mudados.

§ 3. Los edificios y los fondos del Estado que al presente sirvan inmediatamente o mediatamente a los fines eclesiásticos poseídos o disfrutados por las órdenes o congregaciones religiosas, son dejados a tales fines también para lo sucesivo, guardándose los contratos eventualmente existentes.

§ 4. Los bienes de los seminarios, de las parroquias, de los beneficios, de las fábricas y de todas las otras fundaciones eclesiásticas, serán garantidos en los límites del Derecho común, no podrán ser enajenados sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica. La Iglesia tiene el derecho de adquirir y poseer nuevos bienes, y las cosas así adquiridas serán en la misma manera inviolables.

§ 5. La Iglesia tiene derecho de librar impuestos sobre la base de los registros civiles de las tasas.

Artículo 11.

El Estado bávaro proveerá a los gastos adecuados a fin de que los que se encuentren en sus institutos (cárceles, casas de curación, colegios, hospitales) tengan una correspondiente asistencia religiosa, sea por medio de sacerdotes a propósito para ello diputados, sea de otro modo oportuno. El nombramiento de los dichos sacerdotes tiene lugar de acuerdo con el obispo diocesano.

En la aprobación de los institutos subvencionados, por otro lado, el Estado bávaro tendrá el mayor cuidado posi-

ble a fin de que se provea a la misma asistencia según que el caso lo requiera.

Artículo 12.

La actual constitución de las provincias eclesiásticas y de las diócesis no será cambiada, salvo las pequeñas modificaciones requeridas por los intereses de la cura de almas, lo mismo que las mudanzas de los confines diocesanos, los cuales, en los casos singulares, son una consecuencia del cambio de los confines de la parroquia.

Artículo 13.

§ 1. En consideración de los gastos del Estado bávaro para las asignaciones de los eclesiásticos, la Iglesia no tomará para la dirección y administración de las diócesis, lo mismo que de los institutos diocesanos de educación ni para la cura parroquial ni para la enseñanza religiosa en las escuelas elementales, más que a los eclesiásticos y a los que:

a) tengan la ciudadanía bávara o de cualquier otro Estado germánico;

b) hayan obtenido en un gimnasio humanístico alemán *pleni iuris* la certificación de competencia, que puede ser conseguida también después de los estudios privados y ante un instituto privado reconocido por el Estado;

c) hayan terminado con éxito los estudios filosófico-teológicos prescritos por la Iglesia en una escuela superior germánica del Estado o en una escuela superior germánica episcopal, que se atenga a las disposiciones del canon 1.365 del Código de Derecho canónico, o en una escuela superior pontificia en Roma.

§ 2. Igualmente en las órdenes y congregaciones religiosas, como también en sus casas, los superiores que tengan su residencia en Baviera deberán tener la ciudadanía bávara, o de cualquier otro Estado germánico, salvo el derecho de los superiores de otra ciudadanía residentes fuera del

territorio bávaro, de visitar por sí o por otros sus casas puestas en Baviera, como también el derecho de los religiosos de adquirir los estudios filosóficos y teológicos en las escuelas de su instituto, según la norma del Código de Derecho canónico, canon 1.365, poco antes mencionado, en el párrafo primero, letra c.

Artículo 14.

§ 1. El nombramiento de los arzobispos y de los obispos corresponde en toda libertad a la Santa Sede. Teniendo lugar la vacante de una iglesia arzobispal o episcopal, el respectivo cabildo someterá directamente a la Santa Sede una lista de los candidatos dignos del oficio episcopal e idóneos para regir la diócesis vacante, entre los cuales, como también entre los sugeridos por los obispos y los cabildos bávaros, en la respectiva lista trienal, la Santa Sede se reserva libre elección. Antes de la publicación de la bula, la Santa Sede se asegurará, por vía oficiosa cerca del Gobierno bávaro, de que contra el candidato no hay oposición ninguna de orden político.

§ 2. La provisión de las canonjías en los cabildos metropolitanos y catedrales se efectúa alternativamente por libre colación de parte del obispo diocesano, oído el cabildo, y mediante la elección del cabildo, salva la confirmación, según la norma del canon 177 del Código de Derecho canónico.

Las dignidades serán conferidas según el Derecho canónico común.

§ 3. En consideración a los gastos del Estado bávaro para las asignaciones de los eclesiásticos, la Iglesia, antes del nombramiento de los párrocos en sentido estricto, comunicará al Gobierno los nombres y los informes personales de los candidatos; si éste, eventualmente, tuviese dificultad, deberá significarla en el más breve tiempo posible. Los derechos de patronato o presentación del Estado, fundados en especial título canónico, permanecerán intactos en la forma hasta aquí usada.

Artículo 15.

§ 1. Si en lo por venir surgiese cualquier dificultad sobre la interpretación de los precedentes artículos, la Santa Sede y el Estado bávaro procederán, de común acuerdo, a una amigable solución.

§ 2. Con la entrada en vigor del presente Concordato queda declarado abolido el del año 1817. Las leyes del Estado bávaro, las órdenes y los decretos hasta ahora emanados y todavía en vigor, en cuanto se encuentren en oposición con las disposiciones de la presente Convención, serán abrogados.

Artículo 16.

El canje de las ratificaciones tendrá lugar en el más breve término posible, y el Concordato entrará en vigor en la fecha de este canje.

En fe de lo cual, los sobredichos plenipotenciarios han firmado el presente Concordato.

Mónaco (Baviera), 29 marzo de 1924.

Eugenio Pacelli, arzobispo de Sardes.—*Dr. Eugen von Knilling*, ministro de Negocios Extranjeros.—*Dr. Franz Matt*, ministro de Instrucción y de Cultos.—*Dr. Wilhelm Krauschnek*, ministro de Finanzas.

El cambio de ratificaciones se hizo el 24 de enero de 1925.

CAPITULO III

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE PRUSIA

Aparte de la Constitución general del Reich, poco tiene legislado constitucionalmente Prusia en el problema religioso.

El Estado libre de Prusia dióse su Constitución el 30 de noviembre de 1920. Todo lo en ella religiosamente legislado como ley propia de este país del Reich se limita al artículo 11, núm. 4, y al artículo 76. En lo demás se atiene Prusia, como todos los demás países del Reich, a la Constitución general alemana de Weimar.

El artículo 11 de la Constitución de Prusia dice así. Pertenece a la sección III, cuyo epígrafe es *La Dieta*.

Artículo 11. 1. Los funcionarios, los empleados y obreros del Estado y de las corporaciones de derecho público no tienen necesidad de licencia para cumplir su mandato de diputado.

2. Si son candidatos a un asiento de diputado, entonces ha lugar a concederles el permiso necesario para la preparación de su campaña electoral.

3. El pago de sus dietas y salarios debe seguir haciéndoseles.

4. Los derechos garantidos a las comunidades religiosas por el artículo 137 de la Constitución del Reich no son atacados por estas disposiciones.

El artículo 76 llena él solo toda una sección, la IX, cuyo epígrafe es: *De las comunidades religiosas*. Y dice textualmente:

Artículo 76. 1. Quienquiera desee cesar de formar parte, a título temporal, de una comunidad religiosa de derecho público, debe hacer conocer su intención al Tribunal o dirigirle una declaración individual dotada de legalización pública. No cesará de tributar antes de terminar el año fiscal o curso durante el cual haya declarado su renuncia.

2. Los pormenores serán regulados por la ley.

Pero, además, Prusia, con ser un país eminentemente luterano, ha celebrado, para su estatuto religioso católico, un Concordato con la Santa Sede, que es como sigue. También es Concordato posterior a la guerra.

SOLEMNE CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DE PRUSIA

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI y el ministro del Estado prusiano, concordes en el deseo de conformar la mudada condición de la situación jurídica de la Iglesia católica en Prusia, han resuelto regularla de un modo estable, mediante una solemne Convención.

A tal efecto, Su Santidad ha nombrado plenipotenciario suyo a

Su excelencia reverendísima el Sr. Dr. D. Eugenio Paccelli, arzobispo de Sardes y nuncio apostólico en Berlín,

y el Ministerio del Estado prusiano ha nombrado plenipotenciarios suyos al

señor Dr. Otto Braun, presidente del Ministerio del Estado prusiano,

al señor profesor Dr. D. Carlos Enrique Becker, ministro prusiano de Ciencia, Arte e Instrucción Pública, y

al señor Dr. Hermann Hoepker-Aschoff, ministro prusiano de Finanzas,

los cuales, habiendo cambiado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.

El Gobierno prusiano dará protección legal a la libertad de la profesión y del ejercicio de la religión católica.

Artículo 2.

1. La actual organización y circunscripción diocesana de la Iglesia católica en Prusia se conserva la misma, a excepción de las siguientes mudanzas.

2. En Aquisgram será nuevamente erigida una sede episcopal, y el cabildo colegial será transformado en cabildo catedral. La diócesis de Aquisgram abarcará el distrito gubernativo de Aquisgram, como también los circundantes de Grenembrock, Gladbach, M. Gladbach, Rheydt, Krefeld (ciudad y campo) y Kempen, y pertenecerá a la provincia eclesiástica de Colonia.

3. A la diócesis de Osnabrück serán incorporados los territorios de misiones hasta ahora administrados por aquel obispo. Ella será en lo sucesivo sufragánea de la archidiócesis de Colonia.

4. A la sede episcopal de Paderbona será conferido el carácter de metropolitana; su cabildo catedral vendrá a ser cabildo metropolitano. A la provincia eclesiástica de Paderborna pertenecerán, aparte de la archidiócesis de Paderborna, la diócesis de Hildesheim y de Fulda. La archidiócesis de Paderborna cederá a la diócesis de Fulda los distritos del comisariato de Heiligenstadt y del decanado de Elfurt.

5. La diócesis de Fulda cede a la diócesis de Hildesheim el distrito del condado Schamburg, y a la diócesis de Limburgo, la parte que hasta ahora le pertenecía de la ciudad de Francfort. Como Fulda, así también la diócesis de Lim-

burgo será desmembrada de la provincia eclesiástica de Friburgo, pero unida a la de Colonia.

6. La sede episcopal de Breslau será erigida en metropolitana, y el respectivo cabildo catedral en cabildo metropolitano. El distrito de la delegación de Berlín, subordinado hasta ahora al obispo de Breslau, será constituido en diócesis independiente; el obispo y el cabildo catedral residirán en S. Edvige, en Berlín. En Schneidemühl será instituida una prelatura *nullius* con los residuos occidentales del territorio de la archidiócesis de Guesna y Posnania y de la diócesis de Culma, regidos actualmente por un administrador apostólico. El territorio de la Pomerania, perteneciente ya a la diócesis de Culma, y ahora gobernado por el obispo de Warmia como administrador apostólico, será unido a la diócesis de Warmia. La diócesis de Warmia y de Berlín y la prelatura de Schneidemühl formarán, junto con la archidiócesis de Breslau, la provincia eclesiástica de Breslavia.

7. El cabildo catedral en Aquisgram será constituido por el preboste, por seis canónigos efectivos, por cuatro canónigos honorarios y por seis vicarios; el cabildo catedral de Berlín, por el preboste, cinco canónigos efectivos, un canónigo honorario y cuatro vicarios; en lo sucesivo, el cabildo catedral de Frauenburg, del preboste, del decano, de seis canónigos efectivos, de cuatro canónigos honorarios y de cuatro vicarios. En el cabildo metropolitano de Breslavia será suprimido el puesto hasta ahora reservado al preboste de S. Edvige, en Berlín. En Hildesheim y en Fulda, el número de los canónigos efectivos será en lo sucesivo de cinco.

8. Uno de los miembros honorarios del cabildo metropolitano de Colonia y de Breslau y del cabildo catedral de Münster será escogido entre el profesorado de la Facultad Teológica existente en las respectivas archidiócesis o diócesis.

9. La nueva erección de una diócesis o de una provincia eclesiástica u otro cambio de la circunscripción diocesana, que aparecieren eventualmente necesarios en lo sucesivo, quedan reservados a un futuro acuerdo suplementario.

10. Para ayuda del obispo diocesano será dado en lo

sucesivo a las sedes arzobispales de Colonia, Breslau y Paderborna y a las sedes episcopales de Teveris, Münster y Aquisgram un obispo auxiliar, el cual será nombrado por la Santa Sede a instancia del obispo diocesano. Según la necesidad, podrán ser constituidos de la misma manera otros obispos auxiliares, lo mismo para las sobredichas que para otras diócesis. Para residencia de un obispo auxiliar no podrá ser establecido un lugar diverso de la sede del obispo diocesano, sino después de establecido contrato con el Gobierno prusiano.

Artículo 3.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 2, los oficios eclesiásticos podrán ser libremente erigidos o mudados, cuando no sean exigidos pagos de los fondos del Estado. El concurso del Estado en la fundación y en el cambio de parroquia o de otra comunidad eclesiástica tendrá lugar según las directrices que serán establecidas de acuerdo con los obispos diocesanos.

Artículo 4.

1. La dotación de las diócesis y de los institutos diocesanos montará en lo sucesivo anualmente dos millones ochocientos mil marcos. Ella será repartida entre los particulares según normas de especial acuerdo.

2. Las habitaciones de oficio y los edificios que sirvan a fines diocesanos son dejados a la Iglesia. Los derechos existentes de propiedad y de uso serán sobre demanda asegurados por medio de la inscripción en el Catastro.

3. En el caso de cesación de la prestación financiera del Estado, de conformidad con el artículo 138, párrafo primero, de la Constitución del Reich germánico, queda como norma la situación jurídica hasta ahora vigente para la dotación de las diócesis.

Artículo 5.

1. La propiedad y los otros derechos patrimoniales de las cooperaciones, de los institutos y de las fundaciones de derecho público de la Iglesia católica son garantidos según la Constitución del Reich alemán.

2. Los edificios y los fondos del Estado destinados a fines de la Iglesia son dejados para ello como hasta ahora, sin perjuicio de los contratos eventualmente existentes.

Artículo 6.

1. Verificándose la vacación de una sede arzobispal u obispal, lo mismo el respectivo cabildo metropolitano o catedral como los arzobispos y obispos diocesanos de Prusia, presentarán a la Santa Sede lista de los candidatos canónicamente idóneos. Teniendo presente esta lista, la Santa Sede designa al cabildo tres personas, entre las cuales se ha de elegir por votación libre y secreta el arzobispo o el obispo. La Santa Sede no nombrará a ningún arzobispo ni obispo acerca del cual el cabildo, después de la elección, no se haya primeramente asegurado cerca del Gobierno prusiano de que contra él no hay objeciones de carácter político.

2. En la formación de las listas de los candidatos y en la elección participarán también los canónigos honorarios.

Artículo 7.

La Santa Sede no nombrará ningún prelado *nullius* o coadjutor de un obispo diocesano con derecho de sucesión sin haberse primeramente asegurado cerca del Gobierno prusiano de que no existen contra el candidato objeciones de carácter político.

Artículo 8.

1. Las dignidades de los cabildos metropolitanos y catedrales son conferidas por la Santa Sede, y donde existan dos dignidades, la primera (prepositura) a instancia del cabildo, la segunda (decanato) a instancia del obispo diocesano; donde exista una sola (prepositura o decanato), alternativamente a instancia del cabildo o del obispo diocesano.

2. El obispo diocesano confiere las canonjías alternativamente *oyendo* al cabildo o *de consentimiento* del cabildo.

3. El obispo nombra los vicarios de la catedral *oyendo* al cabildo.

Artículo 9.

1. En atención a la dotación de las diócesis y de los institutos diocesanos, asegurada en este solemne Concordato, un eclesiástico será nombrado ordinario de una archidiócesis o de una diócesis o de una prefectura *nullius*, obispo auxiliar, miembro de un cabildo catedral, vicario de un cabildo catedral, miembro de un oficio diocesano o bien director o profesor de un instituto diocesano de educación, solamente si ellos:

a) Tienen la ciudadanía alemana.

b) Han obtenido un atestado de madurez que habilite para el estudio en una Universidad alemana.

c) Han hecho, al menos por un trienio cumplido, los estudios de Filosofía y Teología en una alta escuela alemana del Estado, en uno de los seminarios episcopales a esto destinados, de conformidad con el artículo 12, o en una alta escuela pontificia en Roma.

2. Mediante inteligencia entre la autoridad eclesiástica y la gubernativa se podrá prescindir de los requisitos enumerados en el párrafo primero, letras *a*, *b* y *c*; de una manera especial podrán ser reconocidos los estudios cumplidos en otra alta escuela de carácter germánico diversa de las nombradas en la letra *c*.

3. Al menos dos semanas antes del proyectado nombramiento de un eclesiástico para miembro de un cabildo catedral o para director o profesor en un seminario diocesano, la competente autoridad eclesiástica dará conocimiento al Gobierno de tal intención, y con especial cumplimiento del párrafo 1 de este artículo, y para cumplimiento del párrafo 2 del artículo 12, comunicará los informes personales del mismo eclesiástico. Inmediatamente después de hecho el nombramiento de un administrador provisional de una diócesis o prelatura, o de un obispo auxiliar, o de vicario general, será hecha la respectiva notificación.

Artículo 10.

1. Los obispos diocesanos y el prelado *nullius* exigirán para sus eclesiásticos a los cuales haya de ser conferido un oficio parroquial estable, los requisitos indicados en el artículo 9, párrafo 1, letras *a*, *c*, y para los otros eclesiásticos que deban ser colocados de manera no transitoria en la cura parroquial de las almas, al menos los requisitos enumerados en las letras *a* y *b*. Para entrambos casos vale el artículo 9, párrafo 2.

2. En el caso de estable colocación de un oficio parroquial, el obispo diocesano o el prelado *nullius*, inmediatamente después del nombramiento, comunicarán al Gobierno el nombre del eclesiástico, con especial cumplimiento del párrafo 1 de este artículo.

Artículo 11.

Hasta un nuevo acuerdo, especialmente para el caso de derivación de la ley prevista en el artículo 83 de la Constitución de la República prusiana, la presentación sobre la base de un así llamado patronato fiscal tendrá lugar de parte del Estado solamente después de tomado acuerdo con el obispo diocesano o con el prelado *nullius*, según norma de una instrucción que habrá de concertarse separadamente.

Artículo 12.

1. Para la formación científica de los eclesiásticos queda la Facultad teológica católica en la Universidad de Breslau, Bonn y Münster y en la Academia de Braunsberg. Y sus relaciones con la autoridad eclesiástica son reguladas de conformidad con los Estatutos en vigor para la Facultad teológica católica de Breslau y de Bonn.

2. El arzobispo de Paderborna y los obispos de Tréveris, Fulda, Limburgo, Hildesheim y Osnabrück son autorizados a tener en sus diócesis un seminario para la formación científica de los eclesiásticos. La enseñanza en estos seminarios estará conforme con las prescripciones eclesiásticas, así como también con la enseñanza teológica en la alta escuela germánica. Los sobredichos obispos diocesanos pondrán en conocimiento del ministro prusiano de Ciencia, Arte e Instrucción Pública los Estatutos y el programa de enseñanza de los seminarios. Como profesores en los seminarios serán nombrados solamente los eclesiásticos, que, para la enseñanza de la materia a ellos confiada, tengan una calificación correspondiente a la exigencia de la alta escuela científica alemana.

Artículo 13.

Las Altas Partes Contratantes arreglarán por la vía amistosa las divergencias de opinión que surgieren eventualmente en lo sucesivo entre ellas acerca de la interpretación de cualquier disposición del presente Concordato.

Artículo 14.

1. Este solemne Concordato, que en texto italiano o en texto germánico hacen la misma fe, deberá ser ratificado, y los instrumentos de la ratificación deberán ser canjeados cuanto antes en Berlín. Entrará él en vigor el día del canje de los dichos instrumentos.

2. Con la puesta en vigor de este solemne Concordato quedarán al mismo tiempo abrogadas las leyes y los ordenamientos opuestos a las disposiciones en él contenidas.

En fe de lo cual los plenipotenciarios han firmado el presente solemne Concordato. Hecho en doble original.—Berlín, 14 de junio de 1929.—*Eugenio Pacelli*, arzobispo de Sardes, nuncio apostólico.—*Dr. Otto Braun*, presidente del Consejo prusiano.—*Dr. Carlos Heinwich Becker*, ministro prusiano de Ciencia, Arte e Instrucción Pública.—*Dr. Hermann Höpker-Aschoff*, ministro de Finanzas.

PROTOCOLO FINAL

Al momento de proceder a la firma del solemne Concordato hoy concluído entre la Santa Sede y Prusia, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados, han hecho las siguientes concordes declaraciones, que formarán parte integrante del mismo Concordato.

Acerca del artículo 4, párrafo 1, proposición 1.ª

Al determinar la dotación se han tomado como punto de partida las actuales expensas del Estado prusiano para semejantes fines personales y reales. Así, se acuerda que para lo sucesivo, en caso de eventuales cambios en esta materia, se deberá tener adecuada cuenta de los resguardos de la dotación.

Acerca del artículo 9, párrafo 1, letra c.

El estudio filosófico teológico en una Universidad austriaca del Estado se iguala al cumplido en una alta escuela germánica del Estado, en correspondencia con los principios que valen para las otras disciplinas filosóficas, literarias y jurídicas.

Acerca del artículo 9, párrafo 3, proposición 1.^a

Esto no importa un derecho de veto de parte del Estado.

Acerca del artículo 12, párrafo 1, proposición 2.^a

El sentido del párrafo 4, números 1 y 2, de los Estatutos de Bonn y del párrafo 48, letras *a* y *b*, de los Estatutos de Breslau, es el siguiente:

Antes que alguno sea nombrado o admitido al ejercicio de un oficio de enseñanza en una Facultad teológica católica, será interrogado el obispo católico competente si hay motivadas objeciones que oponer acerca de la doctrina o la conducta de la persona propuesta. No se efectuará el nombramiento o la admisión de un candidato contra el cual se hayan puesto tales excepciones.

La elección que precede al nombramiento (párrafo 1), es decir, la oferta de la respectiva cátedra de parte del Ministerio de Ciencia, Arte e Instrucción Pública, se hará en forma confidencial y con la reserva de acudir al obispo diocesano. Al mismo tiempo es informado el obispo, el cual es rogado a expresar su parecer, para lo cual le será concedido un tiempo suficiente. En tal parecer deberán ser indicadas las objeciones existentes contra la enseñanza o la conducta de la persona propuesta; déjase, sin embargo, al justo juicio del obispo decidir hasta qué punto pueda él manifestar las objeciones mismas. El nombramiento será publicado solamente después que el obispo haya declarado al ministro que él no tiene que oponer excepciones contra la enseñanza y la conducta del candidato.

Si un profesor perteneciente a una Facultad teológica católica ofendiese con su enseñanza o con sus escritos la doctrina católica, o bien cometiese una grave o escandalosa falta contra las exigencias de la conducta sacerdotal, el obispo competente es autorizado a dar de ello comunicación al ministro de Ciencia, Arte e Instrucción Pública. En este caso, el ministro, sin perjuicio de los derechos en él derivados de su condición de funcionario del Estado, pondrá a

ello remedio y de modo particular proveerá de una substitución correspondiente a las necesidades de la enseñanza.

Arcerca del artículo 12, párrafo 2, proposición 4.^a

La calificación se prueba principalmente por medio de un trabajo científico correspondiente al escrito para la habilitación a libre enseñanza en la Universidad; si tal trabajo es de especial importancia científica se podrá también prescindir de la exigencia de la promoción a doctor en Teología.

Berlín, 14 de junio de 1929.—(Los mismos firmantes.)

CAPITULO IV

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LOS ESTADOS MENORES ALEMANES

Aceptado el Estatuto general religioso del Reich por todos los Estados alemanes, no por eso dejaron de conservar, los que los tenían hechos, sus pactos internacionales con la Santa Sede.

Efectivamente, Baden y Württemberg venían rigiéndose por Concordatos, que han venido a formar parte de su Estatuto vigente jurídico-religioso después de la guerra.

Su texto es como sigue :

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GRAN DUCADO DE BADEN

En nombre de la Santísima e individua Trinidad,

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y Su Regia Excelstitud Serenísima Federico, Gran Duque de Baden, deseando proveer a los negocios de la Iglesia católica romana en el Gran Ducado de Baden, nombraron sus plenipotenciarios, a saber :

Su Santidad, al eminentísimo señor cardenal presbítero Carlos Augusto Reisach, del título de Santa Anastasia;

Su Regia Excelsitud el Gran Duque de Baden, al noble caballero D. Cristián Gustavo, barón de Berckheim, su ministro plenipotenciario cerca de la Santa Sede, y a don Francisco Carlos Rorshirt, doctor y conciliario del Supremo Tribunal.

Los cuales plenipotenciarios, después de cambiados entre sí los legítimos y auténticos instrumentos de su plenipotencia, convinieron en los siguientes artículos:

Artículo I.

Acerca de la provisión de la sede arzobispal de Friburgo, de las canonjías y prebendas de la iglesia catedral se guardarán sólo aquellas cosas acerca de las cuales se haya convenido con la Santa Sede.

Artículo II.

El arzobispo, antes de tomar el gobierno de su iglesia, presentará ante la Excelsitud Real juramento de fidelidad, expresado en las siguientes palabras:

«Yo juro y prometo sobre los Santos Evangelios, como corresponde a un obispo, obediencia y fidelidad a la Excelsitud Real y a sus sucesores; juro también y prometo que no tendré comunicación ninguna y que no intervendré en consejo alguno que dañe a la pública tranquilidad, y que no conservaré ninguna sospechosa unión ni dentro ni fuera de los confines del Gran Ducado, y si supiere que amenaza algún peligro público, nada omitiré que sea útil para apartarlo.»

Artículo III.

El Gobierno del Gran Duque, cuanto antes sea posible, cuidará que el arzobispado tenga su dotación en bienes estables.

Artículo IV.

Para el régimen de su archidiócesis será lícito al arzobispo ejercer todas aquellas cosas que le competan en virtud de su ministerio pastoral, ya por declaración, ya por disposición de los sagrados cánones, según la disciplina presente de la Iglesia y aprobada por la Santa Sede, y principalmente:

1. Conferir todos los beneficios, excepto aquellos que están sometidos a derecho de patronato.

2. Elegir y nombrar a su vicario general y los consilia-
rios y asesores extraordinarios de la diócesis y confirmar a los decanos rurales.

3. Prescribir, anunciar y dirigir los exámenes que se han de celebrar, ya por aquellos a quienes se han de conferir los beneficios con cura de almas, ya por los alumnos que han de ser recibidos en los seminarios.

4. Conferir órdenes sagradas a los clérigos, no sólo por títulos aprobados por los sagrados cánones, sino también a título de mesa.

5. Según la prescripción de los sagrados cánones, ordenar y estatuir todas aquellas cosas que pertenecen al culto divino, a las funciones eclesiásticas y sagradas ceremonias y cuanto corresponde a aquellos ejercicios de religión con los que la piedad de los fieles es más y más fomentada y confirmada.

6. Constituir en la propia diócesis órdenes o congregaciones religiosas de ambos sexos aprobadas por la Santa Sede, tomando, sin embargo, en cada caso consejo del Gobierno.

7. Convocar y celebrar sínodo, ya diocesano, ya provincial.

Artículo V.

El Tribunal arzobispal juzga, según la norma de los cánones y los decretos del Tridentino, todas las causas eclesiásticas que se refieren a la fe, a los sacramentos, a las

sagradas funciones y a los deberes y derechos anejos al sagrado ministerio; y, por tanto, también tendrá jurisdicción sobre causas matrimoniales, remitido, no obstante, al juez secular el juicio sobre efectos civiles del matrimonio.

Es exclusivo del arzobispo vigilar las costumbres de los clérigos e infligir, en su fuero, según la norma de los sagrados cánones, penas contra aquellos a quienes hallare dignos de reprensión o por razón de la vida o por cualquier otro motivo, salvo, no obstante, el recurso canónico.

Compete al arzobispo castigar con censuras a los legos transgresores de las leyes eclesiásticas.

Aun cuando por derecho de patronato conozca el juez eclesiástico, consiente, sin embargo, la Santa Sede que, cuando se trate del patronato laical, puedan los Tribunales seculares juzgar de los derechos y cargas civiles con tal patronato conexos, como también de la sucesión respecto al mismo patronato, lo mismo que las controversias se ventilen entre verdaderos y supuestos patronos como se ventilen entre eclesiásticos que hubieren sido designados por los mismos patronos.

Habida cuenta de la condición de los tiempos, Su Santidad permite que las causas meramente civiles de los clérigos, como de contratos, débitos, herencias, las conozcan y definan los jueces seculares.

También la Santa Sede consiente que se decidan en el fuero secular los pleitos sobre derechos civiles o cargas de las iglesias, beneficios, diezmos, como también del gravamen de construir edificios eclesiásticos.

Por la misma causa, la Santa Sede no impide que las causas de los clérigos por crímenes o delitos que son castigados por leyes penales del Gran Ducado sean llevadas a juez laico, a quien, sin embargo, incumbe hacer sabedor de ello al arzobispo sin demora. Y si contra el eclesiástico se fulmina sentencia de pena de muerte o de más de cinco años de cárcel, siempre han de ser comunicados los autos al arzobispo y se le ha de dar facultad de oír al condenado para que pueda conocer de la pena eclesiástica que se le ha de infligir. Esto mismo, si lo pidiere el prelado, se otorgará si hubiere sido decretada menor pena.

Artículo VI.

Arzobispo, clero y pueblo tendrán libertad de comunicarse en las cosas eclesiásticas con la Santa Sede. Además, el arzobispo comunicará libremente con clero y pueblo. De ahí que las instrucciones y ordenaciones del arzobispo y las actas sobre cosas eclesiásticas del sínodo diocesano, del concilio provincial y de la misma Santa Sede se publicarán sin previa inspección o aprobación del Gobierno.

Artículo VII.

El arzobispo, por deber del propio oficio pastoral, cuidará la instrucción y educación religiosa de la juventud católica en todas las escuelas públicas y privadas y vigilará sobre ambas. Por consiguiente, establecerá qué libros y catecismos se han de emplear para la instrucción religiosa.

En las escuelas elementales darán los párrocos la instrucción religiosa; en las demás escuelas, solamente aquellos a quienes haya conferido el arzobispo autoridad y misión para ello y no se las haya revocado después.

Artículo VIII.

Será libre el arzobispo de erigir seminario según la forma del Concilio tridentino, en el que admitirá para formarlos a adolescentes y a niños a quienes considerare que se han de recibir según necesidad y utilidad de su diócesis. El ordenamiento, la doctrina, el gobierno y la administración del cual seminario estarán sometidos de pleno y libre derecho a la autoridad del arzobispo. Por lo cual nombrará el arzobispo a rectores, profesores o maestros y los removerá siempre que lo juzgare necesario o útil.

Artículo IX.

Mientras no fuere constituido, según la forma tridentina, el seminario, consiente la Santa Sede, por las peculiares circunstancias de las cosas, que entretanto los alumnos de Teología cursen los estudios en las escuelas públicas de la Universidad de Friburgo y se instaure el colegio teológico o comunidad que ya antes existía.

La inspección y régimen de este colegio dependerán del arzobispo, que, por tanto, prescribirá la disciplina doméstica, nombrará a los varones que hayan de formar el consejo o comisión de administración económica del colegio, lo mismo que al rector, repetidores y ecónomo, y los dirigirá a todos en el ejercicio de su cargo y los separará de él si lo juzgare necesario. Sin consentimiento de él no será admitido ningún alumno, y los que fueren admitidos puede él en cualquier tiempo, si fuere necesario, dimitirlos. En este colegio puede admitir el arzobispo a los que deseando dar su nombre a la milicia eclesiástica quisiese él que ampliasen en la Universidad los estudios de Filosofía.

Consiente la Santa Sede que el arzobispo gaste en la sustentación de este colegio la suma que hasta ahora acostumbró a gastar en el mismo colegio de los bienes atribuidos al seminario, con tal que de los fondos eclesiásticos generales y de otros destinados a asuntos católicos se tributen aquellas cantidades que hasta ahora se han tributado, y si éstas no bastan, suminístrese todo aquello que se juzgue necesario en conversación con el arzobispo.

Todos los alumnos del mismo colegio, hechos los estudios en las escuelas de la Universidad, han de ser admitidos en el seminario clerical situado en San Pedro, cerca de Friburgo, y permanecerán allí hasta que hubieren sido iniciados en el orden del presbiterado. El cual seminario estará sometido al arzobispo de pleno y libre derecho, como el otro que en lo sucesivo ha de ser erigido en la forma del Concilio tridentino, de que se ha hecho mención en el precedente artículo.

Artículo X.

Cuando el Gobierno, para la recta institución de la juventud católica, intente erigir algunos colegios en aquellos lugares en los que existen ya públicos gimnasios o liceos destinados a los católicos, podrán, entretanto, y mientras falten seminarios de niños, ser también admitidos entre los demás aquellos niños y adolescentes que desean ser adscritos al clero.

Los estatutos y reglas de estos colegios han de prescribirse en conversaciones habidas entre el arzobispo y el Gobierno, y después, si fuere necesario, han de ser mudados de la misma manera.

También los superiores y repetidores han de ser elegidos entre varones eclesiásticos, siempre de inteligencia con el arzobispo. Y todos los que en tales colegios desempeñen algún cargo han de ser católicos.

Entre los alumnos sólo podrán ser admitidos niños y adolescentes católicos, previo examen, sin embargo, al que debe asistir un delegado del arzobispo. Nadie sea admitido sin consentimiento del arzobispo; nadie tampoco sea retenido en el colegio de quien creyere el mismo arzobispo que ha de ser despedido.

Todos los maestros que en tales gimnasios y liceos ejercen el oficio de enseñar han de ser escogidos de entre varones católicos. Y si el arzobispo creyere que hay que castigar o reprender algo en los maestros y en los demás adscritos a tales comunidades, ya por razón de estudios, ya por razón de disciplina, entonces el Gobierno procurará del mejor modo que pudiere dar satisfacción a las advertencias y deseos del arzobispo.

Libre también será el arzobispo de ordenar y estatuir todas aquellas cosas que se refieren en el colegio a la religiosa instrucción y educación de los alumnos, y de vigilar que en la enseñanza de cualquiera disciplina no haya cosa alguna que se oponga a la religión católica y a la honestidad de las costumbres. Por tanto, podrá visitar dichos colegios, enviar delegados a los exámenes y exigir de los superiores periódicas relaciones.

Artículo XI.

La Facultad de Teología católica de la Universidad de Friburgo, en cuanto al oficio eclesiástico de enseñar, estará sujeta al régimen e inspección del arzobispo. Podrá, por tanto, el arzobispo dar a profesores y maestros la autoridad y misión de enseñar y revocarla cuando lo creyere oportuno, exigirles profesión de fe y someter a su examen sus escritos y compendios.

Artículo XII.

Los bienes temporales que posea como propios la Iglesia o adquiriera en lo sucesivo serán conservados siempre e íntegramente; pero estarán sometidos, lo mismo que las demás propiedades, a las cargas e impuestos públicos y a las leyes generales del Gran Ducado.

Los bienes eclesiásticos serán administrados en nombre de la Iglesia y bajo la inspección del arzobispo por aquellos a quienes compete esta administración, o por disposición de los cánones, o por la costumbre, o por privilegio, o por fundación; mas todos los administradores están obligados a rendir cuenta todos los años al ordinario o su delegado, aun cuando tengan también que darla a otros por los predichos títulos.

Mas por especiales circunstancias de las cosas y mientras se subvenga a las necesidades de la Iglesia con fondos generales o locales del Erario público, en la conservación y administración de los bienes eclesiásticos, mientras duren las mismas circunstancias, se observará lo que en los siguientes artículos se establece.

Artículo XIII.

Todos los bienes de fundación de cada iglesia no podrán venderse, ni permutarse, ni entregarse en enfiteusis, ni some-

terse a hipoteca ni a otras cargas, ni ser enajenados por ninguna transacción, ni ser arrendados para más de nueve años, ni jamás ser empleadas sus rentas en otros usos ajenos a las leyes de las fundaciones, sin venia de la potestad eclesiástica.

Mas consiente la Santa Sede que en la enajenación, gravamen de los bienes eclesiásticos o en la inversión de las rentas en otros usos se tenga consentimiento del Gobierno.

Artículo XIV.

Mas los bienes que pertenecen a la Mesa arzobispal y a aquel cabildo de canónigos, al templo metropolitano y al seminario han de ser con toda libertad administrados por el mismo arzobispo o por el mismo cabildo de canónigos, según las sanciones canónicas, como también todos los otros fondos que sobraren de la administración de los mismos bienes o de la vacante de la sede arzobispal o de cualquier beneficio del templo metropolitano, o se hubieren colectado o en lo sucesivo pudieren colectarse de nuevas fundaciones de particulares.

Mas los fondos y bienes éstables que ya han sido atribuidos por el Gobierno como dotación a la iglesia arzobispal o se atribuyan en lo sucesivo, no podrán ser enajenados ni en modo alguno gravados sin consentimiento del Gobierno. Nada obsta, ciertamente, que el mismo Gobierno pueda conocer por sí mismo si dichos bienes están asegurados.

Artículo XV.

Mas los bienes que los cabildos rurales, así llamados, poseen serán libremente administrados por los mismos cabildos bajo la sola inspección del arzobispo.

Artículo XVI.

Los fundos y todos los bienes que pertenecen ya a las fábricas de las iglesias, ya a las fundaciones eclesiásticas de

cada lugar, podrán ser administrados por los colegios destinados a la administración de los mismos bienes en cada una de las comunidades católicas, del mismo modo que prevaleció; con tal, sin embargo, que se administren en nombre de la Iglesia, y los párrocos y los otros sacerdotes ejerzan por autoridad y mandato del arzobispo el oficio que desempeñan en esas comunidades.

Además, todos aquellos que por los sufragios de los católicos de cada lugar son elegidos para este colegio y el racionador que ha de ser elegido por el mismo colegio, han de ser confirmados tanto por el Gobierno como por el arzobispo. Y su administración ha de ser inspeccionada justamente, ya por los decanos diputados por el arzobispo, ya por los ministros públicos del Gobierno.

Artículo XVII.

Mas los bienes aplicados a socorrer las necesidades de alguna región serán administrados por los colegios. Los cuales colegios deberán constar de varones católicos elegibles en igual número por el Gobierno que por el arzobispo y aceptos a ambos. A cada uno de estos colegios debe presidir un varón elegido por el mismo colegio; y el racionador que sirva al mismo colegio ha de ser aprobado por el Gobierno y por el arzobispo.

Artículo XVIII.

Habrà de ser constituído además otro consejo o comisión mixta que en nombre de la Iglesia cuidadosamente vigilará la administración de los fundos intercalares y de otras fundaciones generales eclesiásticas, y a la vez tendrá el cuidado supremo de la administración de todas las fundaciones eclesiásticas existentes en el Gran Ducado de Baden. Por lo cual este consejo o comisión, en nombre ya del arzobispo, ya del Gobierno, exigirá cuentas a todos los administradores de lo ingresado y de lo gastado y formulará

el oportuno juicio de cada administración. Mas cuáles fundaciones han de considerarse como fundaciones generales eclesiásticas ha de establecerse de mutuo acuerdo entre el Gobierno y el arzobispo.

Artículo XIX.

Este consejo constará de varones católicos en igual número elegidos por el Gobierno y por el arzobispo y aprobados por ambos. Mas porque a este consejo o comisión deberá presidirla algún varón católico, por eso tanto el Gobierno como el arzobispo tendrán derecho de proponer a aquellos que juzgaren más idóneos para desempeñar este cargo. Y aquél desempeñará el cargo de presidente que fuere elegido y nombrado tanto por el Gobierno como por el arzobispo, después de cambiadas las oportunas conversaciones; y el Gobierno constituirá a este mismo varón presidente del otro consejo, al cual se ha confiado en el Gran Ducado el régimen de las escuelas católicas y a la vez se le ha confiado el cuidado de la administración de los bienes que, en el mismo Gran Ducado, han sido destinados a la vida católica.

Y toda la manera de conducirse o el método que debe usar en el cumplimiento de su misión este consejo o comisión mixta ha de ser prescrito por el Gobierno y el arzobispo de mutuo acuerdo.

Y todos los administradores, ya de los fundos intercalares, ya de la fundación general de cada iglesia, de que se habló en el artículo XVIII, han de ser elegidos de entre varones católicos, de mutuo acuerdo entre el Gobierno y el arzobispo.

Artículo XX.

El arzobispo tiene pleno derecho de conocer y minuciosamente inspeccionar el estado de cada fundación eclesiástica, su razón, índole y las cargas y documentos que a cada

fundación pertenecen, para que, pesado todo cuidadosamente, y consultado el Gobierno, pueda constituirse una debida norma por la cual habrá de ser llevada la administración de cada fundación eclesiástica y distribuidos los réditos de cada año. Esta norma deberá tenerla presente la comisión mixta en el desempeño de su cargo y en el examen de las cuentas de lo ingresado y gastado. Mas en la fijación de la proporcional cantidad de gastos que en cada iglesia deben hacerse para el culto divino, se tendrá principal cuenta de las peticiones del arzobispo, a quien después únicamente corresponde prescribir cómo deban gastarse las sumas fijadas para sostener y aumentar el culto divino. El mismo arzobispo se aconsejará del Gobierno siempre que por extraordinarias necesidades del culto juzgue oportuno hacer unos gastos que excedan de las rentas de alguna fundación eclesiástica.

Artículo XXI.

Los beneficios serán administrados por sus rectores según la norma de los sagrados cánones, bajo la inspección de la repetidamente citada comisión mixta. Y cuando vacaren los beneficios, los bienes de los mismos serán administrados por los camarlingos de los cabildos rurales o por otros varones acerca de los cuales concuerde el Gobierno con el arzobispo, y las rentas de cualquier beneficio que sobren después de levantadas sus cargas hanse de aplicar al fundo intercalar, a no ser que por las peculiares circunstancias de los lugares hayan de gastarse las mismas rentas o en aumento del mismo beneficio o en la mayor utilidad o necesidad de la iglesia de aquel lugar.

Artículo XXII.

El arzobispo comunicará inmediatamente con todos los magistrados del Gran Ducado.

Artículo XXIII.

Cualesquiera edictos y decretos que no están de acuerdo con la presente Convención son abrogados, y las disposiciones de las leyes que son contrarias a esta Convención serán mudadas.

Artículo XXIV.

Si surgiere en lo sucesivo alguna dificultad sobre las cosas aquí convenidas, Su Santidad y la Real Excelsitud procurarán arreglar las cosas amigablemente.

Las ratificaciones del presente Convenio se entregarán mutuamente en Roma, en el espacio de dos meses, o antes, si fuese posible.

En fe de lo cual, los predichos plenipotenciarios firmaron esta Convención y la signaron con su respectivo sello.

Dado en Roma el 28 de junio del año de la Redención 1859.—*Carlos Augusto Card. de Reisach.*—*Cristián Gustavo*, barón de Berckheim.—*Francisco Carlos Rosshirt.*

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y GUILLERMO I, REY
DEL WÜRTTEMBERG

En nombre de la Santísima e Individua Trinidad,

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y Su Majestad Serenísima Guillermo I, Rey de Würtemberg, deseando arreglar en el Reino de Würtemberg los negocios de la Iglesia católica romana, nombraron sus plenipotenciarios, a saber: Su Santidad, al eminentísimo señor cardenal presbítero Carlos Augusto de Reisach, del título de Santa Anastasia, y

Su Majestad el Rey de Würtemberg, al noble barón Adolfo barón de Ow, su ministro plenipotenciario cerca de Su Majestad Cesáreo-Real Apostólica, emperador de Austria y secretario del Consejo de Legaciones.

Los cuales plenipotenciarios, después de cambiados entre sí los legítimos y auténticos instrumentos de su plenipotencia, convinieron acerca de los siguientes artículos:

Artículo I.

Acerca de la provisión de la sede episcopal de Rottemburgo, de las canonjías y de las prebendas de la Iglesia catedral se guardarán solamente aquellas cosas acerca de las cuales se ha convenido con la Santa Sede.

Artículo II.

El obispo, antes de tomar las riendas de su iglesia, emitirá ante la Regia Majestad el juramento de fidelidad con las siguientes palabras:

«Yo juro y prometo sobre los Santos Evangelios, como corresponde a un obispo, obediencia y fidelidad a la Real Majestad y a sus sucesores; juro también y prometo que no tendré comunicación alguna y que no asistiré a ningún consejo que pueda dañar a la pública tranquilidad, y que no guardaré ninguna sospechosa unión ni dentro ni fuera de los límites del Reino, y si supiere que amenaza algún público peligro, nada omitiré que sea conducente a apartarlo.»

Artículo III.

El Gobierno real no faltará a la obligación, que siempre reconoció, de dotar al Obispado en fondos estables, cuanto antes lo permitiere la condición de los tiempos.

Artículo IV.

Para el régimen de su iglesia, tendrá derecho el obispo de ejercer todas aquellas cosas que le competen en virtud

de su ministerio pastoral, ya por declaración, ya por disposición de los sagrados cánones, según la presente disciplina de la Iglesia y aprobada por la Santa Sede, y principalmente:

a) Conferir todos los beneficios, excepto aquellos que están sujetos a derecho de patronato legítimamente adquirido;

b) elegir, nombrar o confirmar a su vicario general y a los consejeros extraordinarios de la diócesis, o asesores, y a los decanos rurales;

c) prescribir, señalar y dirigir los exámenes, lo mismo en la recepción de alumnos en el seminario que para aquellos a quienes se han de conferir beneficios curados;

d) conferir a los clérigos las sagradas órdenes, no sólo por los títulos aprobados por los sagrados cánones, sino también a título de mesa, a señalamiento de él;

e) según las prescripciones de los sagrados cánones, ordenar todas aquellas prescripciones que pertenecen ya al culto divino, ya a las funciones eclesiásticas, ya a aquellos ejercicios de religión que se instituyen para suscitar y confirmar la piedad de los fieles;

f) convocar y celebrar sínodo diocesano y asistir a los Concilios provinciales;

g) constituir en la propia diócesis órdenes o congregaciones de ambos sexos aprobadas por la Santa Sede, consultando, sin embargo, en cada caso, con el Gobierno real.

Artículo V.

El Tribunal del obispo juzga según los decretos del Tridentino, y conforme a la norma de los cánones, todas las causas eclesiásticas que se refieren a la fe, a los sacramentos, a las sagradas funciones y a los deberes y derechos anejos al sagrado ministerio, y, por consiguiente, también juzga de las causas matrimoniales, aunque remitiendo al juez seglar el juicio acerca de los efectos civiles del matrimonio.

Es de derecho del obispo vigilar las costumbres de los clérigos e infligir en su fuero penas conformes a las leyes ca-

nónicas contra aquellos a quienes o por su razón de vida o de alguna manera hallare dignas de reprensión, salvo siempre el recurso canónico.

Compete también al obispo infligir censuras contra los legos transgresores de las leyes eclesiásticas.

Aunque el juez eclesiástico conozca del derecho de patronato, consiente, no obstante, la Santa Sede que cuando se trate de patronato laical, puedan los tribunales seculares juzgar de los derechos y de las cargas civiles conexas con dicho patronato, como también de la sucesión en cuanto al mismo patronato, ya se tenga la misma controversia entre verdaderos y supuestos patronos, ya entre varones eclesiásticos que hubieren sido designados por los mismos patronos.

Habida razón de los tiempos, Su Santidad permite que los jueces seculares conozcan y definan las causas meramente civiles de los clérigos, como de contratos, deudas, herencias.

También consiente la Santa Sede en que los pleitos referentes a derechos y cargas civiles de las Iglesias, de los beneficios y de los diezmos y del gravamen de construir edificios eclesiásticos se diriman en el fuero secular.

Por la misma causa, la Santa Sede no recusa que las causas de los clérigos por crímenes o delitos que estén penados por las leyes penales del Reino sean llevados al juez laico, al cual, sin embargo, incumbirá hacer sabedor de ello al obispo sin demora. Y si contra el eclesiástico se diera sentencia de muerte o sentencia de cárcel superior a cinco años, se comunicarán siempre los autos judiciales al obispo y se le dará facultad de oír al condenado en cuanto sea necesario para que pueda conocer de la pena eclesiástica que se le ha de infligir. Esto mismo se le otorgará si hubiese sido decretada pena menor, siempre que el obispo lo pidiere.

Artículo VI.

Obispos, clero y pueblo tendrán libre la mutua comunicación con la Santa Sede en las cosas eclesiásticas. Tam-

bién el obispo comunicará libremente con clero y pueblo.

De ahí que las instrucciones y ordenaciones del obispo, del sínodo diocesano y del Concilio provincial, y de la misma Santa Sede, acerca de cosas eclesiásticas, se publicarán sin previa inspección y aprobación del Gobierno real.

Artículo VII.

El obispo, por deber del propio oficio pastoral, dirigirá la instrucción y educación religiosa de la juventud católica en las escuelas públicas y en las privadas, y vigilará sobre ambas. Por tanto, establecerá qué libros y catecismos se han de usar para la instrucción religiosa.

En las escuelas elementales darán los párrocos la instrucción religiosa; en las demás, sólo aquellos a quienes el obispo hubiere conferido para ello autoridad y misión, y no las hubiese revocado después.

Artículo VIII.

Tendrá pleno derecho el obispo de erigir seminario según la forma del Concilio tridentino, en el cual admitirá para formarlos a adolescentes y a niños que, según la necesidad y utilidad de su diócesis, juzgue que debe recibir. El ordenamiento de este seminario, la doctrina, el gobierno y la administración estarán sujetas a la autoridad del obispo de pleno y libre derecho.

El obispo nombrará también a profesores o maestros, y los removerá siempre que lo creyere necesario o útil.

Y mientras falte un seminario según la norma del Tridentino, y mientras existan en Elsinga, Rotvila y Tubinga colegios sustentados a expensas del Erario público, se observarán estas cosas:

a) Por lo que se refiere a la educación religiosa y disciplina doméstica, aquellos institutos están sometidos al régimen e inspección del obispo.

b) Los alumnos de estos institutos, en cuanto son ense-

ñados en las escuelas públicas, están sometidos, igual que los demás discípulos, a las leyes que han sido dadas para aquellas escuelas y a las normas prescritas acerca de la razón y curso de los estudios.

Si en aquella cosa el obispo (en cuanto a los gimnasios) juzgare necesaria o muy oportuna alguna mudanza, celebrará consejo con el Gobierno real, el cual tampoco, por su parte, mudará nada sin antes haber consultado con el obispo.

c) El obispo nombrará a los rectores y repetidores de los mismos institutos y los removerá; sin embargo, nunca elegirá a los que supiere fuesen menos aceptos al Gobierno real por graves causas fundadas en hechos acerca de cosas civiles y políticas. Además, destituirá a los que después comprendiere que son ingratos al Gobierno por las mismas causas.

d) Es de competencia del obispo visitar los mismos institutos, enviar delegados suyos a los exámenes públicos, principalmente para la recepción de alumnos, y exigir relaciones periódicas.

e) Procurará el Gobierno real que en los gimnasios a los cuales estén unidos colegios inferiores, sean instituidos poco a poco sólo profesores que pertenezcan al orden clerical.

Artículo IX.

La Facultad teológica de la Universidad real, en cuanto a la enseñanza de los eclesiásticos, está sometida al régimen e inspección del obispo. Puede, por tanto, el obispo dar a profesores y maestros autoridad y misión de enseñar, y revocarla cuando le pareciere oportuno, exigir de ellos profesión de fe y someter a su examen sus escritos y compendios.

Artículo X.

Los bienes temporales que posee la Iglesia como propios o que adquiriera en lo sucesivo, se conservarán siempre e in-

tegramente, ni podrán, sin venia de la potestad eclesiástica, distraerse y enajenarse ni convertir sus frutos en otros usos; sin embargo, estarán sometidos, como las demás propiedades, a las cargas públicas y tributos y a las otras leyes generales del Reino.

Los bienes eclesiásticos serán administrados en nombre de la Iglesia y bajo la inspección del obispo por aquellos a quienes compete legítimamente la administración o por disposición de los cánones o por costumbre o privilegio o por alguna constitución del lugar; mas todos los administradores, aunque por los mismos títulos hayan de dar a otros razón de la administración, están, sin embargo, obligados a darla igualmente todos los años al ordinario o a sus delegados.

Por tanto, la Santa Sede, consideradas las peculiares circunstancias de las cosas, consiente que las fábricas de cada iglesia y las demás fundaciones eclesiásticas de cada lugar sean administradas en nombre de la Iglesia de aquel modo que ya es recibido en el reino, con tal que los párrocos y los decanos rurales ejerzan por autoridad del obispo el oficio que en esta parte desempeñan. De la especial ejecución de este negocio, el Gobierno real concertará con el obispo.

Además, la Santa Sede está conforme en que mientras se subvenga a las necesidades, ya generales, ya locales, de la Iglesia con fondos del Erario público, los beneficios vacantes y el fondo formado de los frutos intercalares de ellos sean administrados bajo la autoridad del obispo y en nombre de la Iglesia por una comisión mixta formada principalmente por varones eclesiásticos diputados por el obispo y por igual número de varones católicos constituidos por el Gobierno real. Esta comisión será presidida por el mismo obispo o su delegado. Acerca de lo cual se hará una especial y meditada convención entre el Gobierno real y el obispo.

Las rentas de esos bienes hanse de gastar siempre con preferencia a aumentar la consignación de los párrocos hasta la congrua, en asegurar congruentes pensiones a los beneficiados retirados por enfermedad o vejez, en constituir para los clérigos títulos de ordenación, en los necesarios es-

tipendios para los vicarios, y lo que sobrare no se empleará en otros usos que en los de la Iglesia.

El Gobierno real será siempre informado por la comisión administradora de la conservación de los bienes y del reparto de los frutos.

Mientras exista la comisión mixta para la administración del mismo fundo, también los demás beneficios serán administrados por sus rectores, bajo la inspección general de la predicha comisión, según los cánones.

Artículo XI.

El obispo comunicará inmediatamente con todos los reales magistrados.

Artículo XII.

Los reales decretos y edictos que no estén conformes con esta convención son abrogados, y las disposiciones de las leyes que sean contrarias a esta convención serán mudadas.

Artículo XIII.

Si en lo sucesivo sobreviniere alguna dificultad acerca de las cosas que aquí se han convenido, Su Santidad y la Real Majestad conferenciarán entre sí para resolverla amigablemente.

Las ratificaciones del presente convenio se entregarán mutuamente en Roma, en el espacio de dos meses, o antes, si es posible.

En fe de lo cual los predichos plenipotenciarios firmaron esta convención y la sellaron con su sello.

Dado en Roma, a 8 de abril del año de la Redención 1857.
Carlos Augusto, cardenal Reisach.—Adolfo, barón de Ow.

CAPITULO V

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE POLONIA

La Constitución polaca está impregnada de esencia religiosa.

La República de Polonia dióse su Constitución el 17 de marzo de 1921, que fué revisada en 1926.

Ya en el preámbulo se echa de ver el espíritu eminentemente religioso del pueblo polaco. Dice así el preámbulo :

En nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros, Nación polaca, agradeciendo a la Providencia el habernos devuelto la libertad después de siglo y medio de servidumbre; evocando con reconocimiento la bravura y el fervor implacables de las generaciones que han luchado sin tregua y han consagrado lo mejor de sus esfuerzos a la causa de la independencia; renovando la tradición gloriosa de la Constitución del Tres de Mayo; teniendo a la vista el bien de nuestra Madre-Patria toda entera, libre y unificada, deseosa de asegurar su independencia, su poder, su seguridad, así como el orden social, sobre los principios eternos del derecho y de la libertad; deseosa igualmente de asegurar el desenvolvimiento de todas sus fuerzas morales y materiales para el bien de la humanidad entera renaciente, como también de garantizar a todos los ciudadanos de la República la igualdad y el respeto para el trabajo, el reconocimiento de sus derechos y la protección particular del Estado,

hemos acordado y decretamos, en Dieta Constituyente de la República de Polonia, la ley constitucional, que es del tenor siguiente.

En once artículos de esta ley constitucional estableció Polonia su ley fundamental religiosa. Son ellos: 54, 95, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120.

El artículo 54 prescribe el juramento que ha de prestar el presidente de la República antes de entrar en funciones. Y dice así:

Artículo 54. Antes de entrar en funciones, el presidente de la República presta ante la Asamblea Nacional el juramento siguiente:

«Yo juro ante Dios Todopoderoso, uno en la Santísima Trinidad, y yo acepto la obligación ante ti, Nación Polaca, al asumir las funciones de presidente de la República, de observar escrupulosamente y de defender las leyes de la República, y ante todo su Constitución; de servir fielmente y con todas mis fuerzas los intereses generales de la nación; de aplicarme con vigilancia a apartar todos los males y daños que puedan amenazar al Estado; de salvaguardar sin desfallecimiento la dignidad del nombre polaco; de cumplir la justicia en favor de todos los ciudadanos sin distinción como el primero de mis deberes, y de consagrarme sin división a las obligaciones de mi cargo. Que Dios me ayude y la Santa Pasión de su Hijo. Amén.»

El artículo 95 es de carácter general, y dice:

Artículo 95. La República de Polonia garantiza a cada uno, sobre su territorio, la protección entera de su vida, de su libertad y de sus bienes, sin distinción de origen, de nacionalidad, de lengua, de raza o de religión.

Los extranjeros disfrutan, bajo condiciones de reciprocidad, de derechos iguales a los de los ciudadanos polacos y tienen también las mismas obligaciones que ellos, salvo los casos en que la ley los hace depender de la nacionalidad polaca.

Lo mismo que el artículo 102, que dice:

Artículo 102. El trabajo, fuente principal de riqueza para la República, debe ser objeto de una solicitud especial del Estado.

Todo ciudadano tiene derecho a la protección de su trabajo por el Estado, y en caso de paro, enfermedad, accidente o invalidez, a los seguros sociales que serán instituidos por una ley especial.

El Estado tiene igualmente el deber de suministrar directamente a los ciudadanos colocados bajo su servicio directo en los establecimientos públicos, tales como casas de educación, cuarteles, hospitales, prisiones y asilos, la posibilidad de cultivarse moralmente y de cumplir sus deberes religiosos.

Pero ya en los artículos siguientes acomete directamente el problema religioso, prescribiendo:

Artículo 110. Los ciudadanos polacos pertenecientes a las minorías nacionales de religión o de lengua, tienen, al igual que los demás ciudadanos, el derecho de fundar, fiscalizar y administrar a sus expensas todas las instituciones de beneficencia, religiosas y sociales, escuelas y otros establecimientos de educación, lo mismo que de hacer en ellos libremente uso de su lengua y satisfacer a las prescripciones de su religión.

Artículo 111. La libertad de conciencia y de religión es garantida a todos los ciudadanos. No se puede hacer ninguna restricción a los derechos de los ciudadanos por razón de su confesión o de sus convicciones religiosas.

Todos los habitantes del Estado polaco tienen derecho de ejercer libremente su culto, tanto en público como en privado, y de satisfacer a las prescripciones de su religión o de su rito, en la medida en que estas prácticas no comprometan el orden público ni las buenas costumbres.

Artículo 112. No se puede usar de la libertad religiosa de manera contraria a las leyes. Nadie se podrá apoyar en sus creencias religiosas para substraerse al cumplimiento de sus

obligaciones cívicas. Nadie puede ser forzado a participar en las ceremonias o servicios religiosos, a menos de estar sometido a la patria potestad o estar en tutela.

Artículo 113. Toda asociación religiosa reconocida por el Estado tiene derecho de organizar manifestaciones comunes y públicas de culto, de gobernar libremente sus negocios interiores, de poseer y adquirir bienes muebles e inmuebles, de administrarlos y disponer de ellos; ella queda en la posesión y disfrute de sus fundaciones y capitales, como también de los establecimientos que tengan un destino religioso, escolar o de caridad. Ninguna asociación religiosa puede, no obstante, ser contraria a las leyes del Estado.

Artículo 114. La confesión católico-romana, siendo la religión de la gran mayoría de la nación, ocupa en el Estado el primer lugar entre las confesiones iguales en derecho.

La Iglesia católico-romana es regida por sus propias leyes. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado serán fijadas sobre la base de un Concordato con la Santa Sede, el cual deberá ser ratificado por la Dieta.

Artículo 115. Las iglesias de las minorías religiosas y todas las demás asociaciones religiosas reconocidas por la ley son regidas por sus propias leyes, que el Estado no podrá dejar de reconocer si no contienen disposiciones ilegales.

Las relaciones entre el Estado y estas iglesias o confesiones serán fijadas por vía legislativa, mediante acuerdo con sus representaciones legales.

Artículo 116. El reconocimiento de una confesión nueva o todavía no reconocida por la ley no se podrá negar a las asociaciones religiosas cuya organización y doctrina no sean contrarias al orden público ni a las buenas costumbres.

La última referencia de la Constitución polaca al problema religioso es del artículo 120, que dice:

En todos los establecimientos de instrucción cuyo programa contiene la formación de la juventud por debajo de los dieciocho años, y que es sostenido en todo o en parte por el Estado o por las colectividades autónomas, la enseñanza

religiosa es obligatoria para todos los alumnos. La dirección y la vigilancia de esta enseñanza pertenecen a la asociación religiosa interesada, bajo reserva del derecho superior de vigilancia, que pertenece a las autoridades escolares del Estado.

Completa el Estatuto jurídico-religioso de Polonia el amplio Concordato de dicha República, firmado en Roma el 10 de febrero de 1925 y ratificado por la Dieta y el Senado polacos.

He aquí el texto del citado Concordato:

SOLEMNE CONVENCION ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DE POLONIA

EN NOMBRE DE LA SANTÍSIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD

Su Santidad el Papa Pío XI y el Presidente de la República de Polonia, M. Estanislao Wojciechowski,

Animados del deseo de determinar la situación de la Iglesia católica en Polonia y de establecer las reglas que regirán de una manera digna y estable los negocios eclesiásticos sobre el territorio de la República,

Han decidido a estos fines concertar un Concordato.

En consecuencia, S. S. el Papa Pío XI y el Presidente de la República de Polonia, Estanislao Wojciechowski, han nombrado sus plenipotenciarios respectivos,

Su Santidad:

A Su Emcia. Rdma. el cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado.

El Presidente de la República:

A su Excia. M. Ladislao Skrzynski, embajador de la República de Polonia cerca de la Santa Sede;

Al profesor Estanislao Grabski, diputado en la Dieta de Polonia, antiguo ministro de Cultos y de Instrucción Pública.

Los plenipotenciarios sobredichos, después del canje de

sus plenipotencias, han convenido las disposiciones siguientes, a las cuales, por lo demás, las Altas Partes contratantes se comprometen a conformarse.

Artículo I.

La Iglesia católica, sin distinción de ritos, gozará en Polonia de una plena libertad. El Estado garantiza a la Iglesia el libre ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción eclesiástica, lo mismo que la libre administración y gestión de sus negocios y de sus bienes, conforme a las leyes divinas y al Derecho canónico.

Artículo II.

Los obispos, el clero y los fieles comunicarán libremente y directamente con la Santa Sede. En el ejercicio de sus funciones, los obispos comunicarán libremente y directamente con su clero y sus fieles y publicarán asimismo sus instrucciones, sus ordenanzas y sus letras pastorales.

Artículo III.

A fin de mantener las relaciones amistosas entre la Santa Sede y la República de Polonia, residirá en Polonia un nuncio apostólico y residirá junto a la Santa Sede un embajador de la República. Los poderes del nuncio apostólico en Polonia se extenderán sobre el territorio de la ciudad libre de Dantzig.

Artículo IV.

Las autoridades civiles prestarán su apoyo a la ejecución de las decisiones y de los decretos eclesiásticos: a) en caso de destitución de un eclesiástico, de su privación de

un beneficio de la Iglesia, después de la promulgación de un decreto canónico relativo a la destitución o privación sobredichas, o en el caso de defensa de llevar hábito eclesiástico; b) en caso de percepciones de tasas o prestaciones destinadas a fines eclesiásticos y prevenidas por las leyes del Estado; c) en todos los otros casos previstos por las leyes en vigor.

Artículo V.

Los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio de una protección jurídica especial. Al igual que los funcionarios del Estado, se beneficiarán del derecho de exención del embargo judicial para una parte de sus consignaciones. Los eclesiásticos que hayan recibido las órdenes, los religiosos que hayan pronunciado sus votos, los alumnos de los seminarios y los novicios que se hayan presentado en los seminarios y en los noviciados antes de una declaración de guerra serán exentos del servicio militar, exceptuando los casos de leva en masa. En estos últimos casos, los presbíteros ordenados ejercerán en el ejército su ministerio, sin que, no obstante, se cause por ello perjuicio a los intereses de las parroquias, mientras que los restantes miembros del clero serán incorporados al servicio sanitario. Los eclesiásticos serán libres de las funciones cívicas incompatibles con la vocación sacerdotal, como las de jurados, miembros de los Tribunales, etc.

Artículo VI.

Queda asegurada la inmunidad de las iglesias, capillas y cementerios, sin perjuicio de la seguridad pública.

Artículo VII.

Los ejércitos de la República de Polonia disfrutarán de todas las exenciones que han sido acordadas en favor de

los ejércitos por la Santa Sede, según las prescripciones del Derecho canónico. En particular los capellanes castrenses tendrán, con relación a los militares y a sus familias, los derechos parroquiales y ejercerán las funciones de su ministerio bajo la jurisdicción de un obispo castrense, que tendrá derecho de nombrarlos. La Santa Sede permite que este clero, en lo que concierne a su servicio militar, esté sometido a las autoridades militares.

Artículo VIII.

Los domingos y el día de fiesta nacional del *Tres de Mayo*, los presbíteros oficiantes rezarán una plegaria litúrgica por la prosperidad de la República de Polonia y de su Presidente.

Artículo IX.

Ninguna parte de la República de Polonia dependerá de obispo cuya sede se halle fuera de las fronteras del Estado polaco. La jerarquía católica en la República de Polonia será constituida como sigue:

A) *Rito latino.*

I. Provincia eclesiástica de Guiezno y Poznan:

Archidiócesis de Guiezno y Poznan.

Diócesis de Chelmno.

Diócesis de Wloclawek.

II. Provincia eclesiástica de Varsovia:

Archidiócesis de Varsovia.

Diócesis de Plock.

Diócesis de Sandomierz.

Diócesis de Lublin.

Diócesis de Podlachie.

Diócesis de Lodz.

III. Provincia eclesiástica de Wilna:

Archidiócesis de Wilna.

Diócesis de Lomza.

Diócesis de Pinsk.

IV. Provincia eclesiástica de Lwow:

Archidiócesis de Lwow.

Diócesis de Przemyśl.

Diócesis de Luck.

V. Provincia eclesiástica de Cracovia:

Archidiócesis de Cracovia.

Diócesis de Tarnow.

Diócesis de Kielce.

Diócesis de Czystohowa.

Diócesis de Silesia.

B) *Rito greco-ruteno.*

Provincia eclesiástica de Lwow:

Archidiócesis de Lwow.

Diócesis de Przemyśl.

Diócesis de Stanislawow.

C) *Rito armenio.*

Archidiócesis de Lwow.

La Santa Sede no procederá a ninguna modificación de la jerarquía arriba dicha o de la circunscripción de las provincias y diócesis sino de acuerdo con el Gobierno polaco, salvo las pequeñas rectificaciones de límites exigidas por el bien de las almas.

Artículo X.

La creación y la modificación de los beneficios eclesiásticos, de las congregaciones y órdenes religiosas, lo mismo que de sus casas y establecimientos, dependerá de la autori-

dad eclesiástica competente, la cual, siempre que las dichas medidas entrañasen gastos para el Tesoro del Estado, procederá en ello previa inteligencia con el Gobierno. Los extranjeros no obtendrán el cargo de superiores provinciales de las órdenes religiosas, a menos de haber obtenido del Gobierno una autorización para este efecto.

Artículo XI.

La elección de los arzobispos y obispos corresponde a la Santa Sede. Su Santidad consiente en dirigirse al Presidente de la República antes de nombrar a los arzobispos y obispos diocesanos, los coadjutores con derecho de sucesión, lo mismo que el obispo castrense, para asegurarse que el Presidente no tiene razón de carácter político para oponerse a estas elecciones.

Artículo XII.

Los ordinarios arriba dichos, antes de asumir sus funciones, prestarán en manos del Presidente de la República un juramento de fidelidad a tenor de la fórmula siguiente:

«Delante de Dios y de los Santos Evangelios juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad a la República de Polonia. Juro y prometo respetar con toda lealtad y hacer respetar por mi clero el Gobierno establecido por la Constitución. Juro y prometo además que no participaré en ningún acuerdo ni asistiré a ningún consejo que puedan atentar contra el Estado polaco o contra el orden público. No permitiré nunca a mi clero participar en tales acciones. Cuidadoso del bien y del interés del Estado, procuraré apartar de él todo daño del que le supiere amenazado.»

Artículo XIII.

1.º En todas las escuelas públicas, a excepción de las escuelas superiores, la enseñanza religiosa es obligatoria. Esta

enseñanza será dada a la juventud católica por maestros nombrados por las autoridades escolares, que los escogerán exclusivamente entre las personas autorizadas por los ordinarios para enseñar la religión. Las autoridades eclesiásticas competentes vigilarán la enseñanza religiosa en lo que concierne a su contenido y a la moral de sus maestros.

En el caso en que el ordinario retirase a un profesor la autorización que le hubiese dado, éste será por lo mismo privado del derecho de enseñar la religión.

Los mismos principios concernientes a la elección y revocación de los maestros serán aplicados a los profesores, agregados y adjuntos universitarios de las Facultades de Teología católica (Ciencias eclesiásticas) de las Universidades del Estado.

2.º En todas las diócesis la Iglesia católica poseerá seminarios eclesiásticos de conformidad con el Derecho canónico, que ella dirigirá y cuyo cuerpo docente ella nombrará.

Las patentes de estudios libradas por los seminarios mayores serán suficientes para enseñar la religión en todas las escuelas públicas, exceptuadas las escuelas superiores.

Artículo XIV.

Los bienes pertenecientes a la Iglesia no serán sometidos a ningún acto jurídico que modifique su destino, sin el consentimiento de las autoridades eclesiásticas, salvo los casos previstos por las leyes sobre la expropiación por causa de sistematización de las vías de transporte y de los ríos, de defensa nacional o causas parecidas. En todo caso, el destino de los inmuebles y muebles consagrados exclusivamente al servicio divino, como las iglesias, los objetos de culto, etcétera, no podrá ser modificado sin que la autoridad eclesiástica competente les haya privado anticipadamente de su carácter sagrado.

Ninguna construcción, modificación o restauración de iglesias y capillas tendrá lugar sino de acuerdo con las prescripciones técnicas y artísticas de las leyes concernien-

tes a la construcción de edificios y a la conservación de monumentos.

En cada diócesis será formada una Comisión nombrada por el obispo de acuerdo con el ministro competente, para la conservación en las iglesias y lugares eclesiásticos de antigüedades, obras de arte, documentos de archivos y manuscritos que posean un valor histórico o artístico.

Artículo XV.

Los eclesiásticos, sus bienes y los bienes de las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas son sujetos de impuestos lo mismo que las personas y los bienes de los ciudadanos de la República y de las personas jurídicas laicas, a excepción, no obstante, de los edificios consagrados al servicio divino, los seminarios eclesiásticos, las casas de formación de los religiosos y religiosas, lo mismo que las casas de habitación de religiosos y religiosas que hayan hecho voto de pobreza y de los bienes y títulos cuyas rentas son destinados a las necesidades del culto religioso y no contribuyen a las rentas personales de los beneficiarios. Las viviendas de los obispos y del clero parroquial, lo mismo que sus locales oficiales, serán tratados por el Fisco lo mismo que las habitaciones oficiales de los funcionarios y los locales de las instituciones del Estado.

Artículo XVI.

Todas las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas polacas tienen, según las reglas del Derecho común, el derecho de adquirir, de ceder, de poseer y de administrar, conforme al Derecho canónico, sus bienes muebles o inmuebles, lo mismo que el derecho de comparecer ante las autoridades del Estado para la defensa de sus derechos civiles. Las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas son reconocidas como polacas en tanto que los fines para los cuales han sido establecidas conciernan a los negocios eclesiásticos o

religiosos de Polonia y que las personas autorizadas para representarlas y para administrar sus bienes residan en los territorios de la República de Polonia. Las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas que no tengan las condiciones arriba exigidas gozarán de los derechos civiles acordados por la República para los extranjeros.

Artículo XVII.

Las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas tienen el derecho de establecer, poseer y administrar, según el Derecho canónico y de acuerdo con el Derecho común del Estado, cementerios destinados a la sepultura de los católicos.

Artículo XVIII.

Los eclesiásticos y los fieles de todos los ritos que se encuentren fuera de sus diócesis serán sometidos al ordinario local, según las reglas del Derecho canónico.

Artículo XIX.

La República garantiza el derecho de las autoridades competentes de atribuir las funciones, los cargos y los beneficios eclesiásticos a tenor de las prescripciones del Derecho canónico. A la atribución de los beneficios parroquiales serán aplicadas las reglas siguientes:

En los territorios de la República de Polonia no pueden obtener beneficios parroquiales, a menos de haber recibido el consentimiento del Gobierno polaco: 1.º, los extranjeros no naturalizados, como tampoco las personas cuya educación teológica no haya sido hecha en los Institutos teológicos de Polonia o en los Institutos pontificios; 2.º, las personas cuya actividad es contraria a la seguridad del Estado.

Antes de proceder al nombramiento para estos beneficios,

la autoridad eclesiástica se informará cerca del Ministerio competente de la República para asegurarse de que no se oponen ninguna de las razones previstas arriba en los puntos 1.º y 2.º En el caso en que el Ministerio mencionado no presentase en el término de treinta días las dichas objeciones contra la persona cuyo nombramiento se pretende, la autoridad eclesiástica procederá al nombramiento.

Artículo XX.

En el caso en que las autoridades de la República tengan que oponer contra un eclesiástico objeciones desde el punto de vista de su actividad como contraria a la seguridad del Estado, el ministro competente presentará las dichas objeciones al ordinario, el cual, de acuerdo con este ministro, tomará en el término de tres meses las medidas oportunas. En el caso de una divergencia entre el ordinario y el ministro, la Santa Sede confiará la solución de la cuestión a dos eclesiásticos de su elección, los cuales, de acuerdo con dos delegados del Presidente de la República, tomarán una decisión definitiva.

Artículo XXI.

El derecho de patronato, sea del Estado, sea de los particulares, permanece en vigor hasta nuevo acuerdo. La presentación de un digno eclesiástico para el puesto vacante será efectuada por el patrono en el espacio de treinta días sobre una lista de tres nombres propuestos por el ordinario. Si en los treinta días no ha sido hecha la presentación, la provisión del beneficio quedará libre. En el caso en que se tratase de beneficio parroquial, el ordinario, antes de proceder al nombramiento, consultará al ministro competente, conforme al artículo XIX.

Artículo XXII.

Si los eclesiásticos o religiosos son acusados cerca de los Tribunales laicos de crímenes previstos por las leyes

penales de la República, estos Tribunales informarán inmediatamente al ordinario competente de cada asunto de este género y le transmitirán, al concluirse la causa, el acta de acusación y la sentencia judicial con sus considerandos. El ordinario o su delegado tendrán derecho, después de concluido el procedimiento judicial, de conocer los autos correspondientes. En el caso de arresto o prisión de las personas arriba mencionadas, las autoridades civiles procederán con los miramientos debidos a su estado y a su rango jerárquico.

Los eclesiásticos y religiosos serán detenidos y sufrirán las penas de reclusión en lugares separados de los lugares destinados a los laicos, a menos de haber sido privados por el ordinario competente de su dignidad eclesiástica. En el caso en que sean condenados por juicio a detención, sufrirán esta pena en un convento u otra casa religiosa o en lugares destinados a esto.

Artículo XXIII.

No se hará ningún cambio en la lengua empleada en las diócesis de rito latino para los sermones, las preces suplementarias y los cursos distintos de los de ciencias sagradas en los seminarios, sino sobre una autorización especial dada por la conferencia de los obispos de rito latino.

Artículo XXIV.

1. La República de Polonia reconocе los derechos de propiedad de las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas a todos los bienes muebles e inmuebles, capitales, rentas y otros derechos que estas personas jurídicas posean actualmente en los territorios del Estado polaco.

2. La República de Polonia consiente en que los derechos de propiedad arriba mencionados, en los casos en que no sean ellos todavía inscritos en los registros hipotecarios a nombre de las personas jurídicas que los poseen (obispos,

cabildos, congregaciones, órdenes religiosas, seminarios, beneficios parroquiales, otros beneficios, etc.), sean inscritos en ellos, y ello sobre una declaración del ordinario competente certificada por la autoridad civil competente.

3. La cuestión de los bienes de los que la Iglesia ha sido privada por Rusia, Austria y Prusia, y que se encuentran actualmente en posesión del Estado polaco, será reglada por acuerdo ulterior. Hasta esa fecha, el Estado polaco garantiza a la Iglesia dotaciones anuales no inferiores en valor real a las dotaciones que los Gobiernos ruso, austriaco y prusiano concedían a la Iglesia sobre los territorios que pertenecen actualmente a la República de Polonia. Las dotaciones arriba mencionadas serán calculadas y repartidas como se ha indicado en el anejo A. En el caso de desmembramiento de los dichos bienes, las Mesas episcopales, los seminarios y los beneficios parroquiales que no posean actualmente tierras o que posean de ellas cantidades insuficientes, obtendrán en propiedad, en la medida de las disponibilidades, hasta la cantidad de 180 hectáreas por Mesa episcopal y de 180 hectáreas por seminario, y, según la cualidad del suelo, de 15 a 30 hectáreas por beneficio parroquial. La suma global de las dotaciones en dinero, fijadas en el anejo A, será reducida para las diócesis en que tenga lugar esta atribución de tierras en 50 zlotys anualmente por cada hectárea que sea atribuida como arriba se ha dicho.

4. Será conservado el destino de los bienes que la República de Polonia reivindicará de los antiguos Estados entre los que estuvo dividida, como sucesor de los derechos que provenían a estos Estados de sus relaciones legales con las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas de Polonia y que conciernen, ya a las prestaciones consentidas por estos Estados en favor de las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas, ya a la administración de los bienes inmuebles y de los capitales destinados a la Iglesia.

5. Para mejorar la situación económica y social de la población agrícola y para promover tanto más la paz cristiana del país, la Santa Sede consiente en que la República de Polonia rescate a los beneficios episcopales, a los seminarios, a los beneficios capitulares, a los beneficios parro-

quiales, lo mismo que a los simples beneficios que posean bienes raíces, las cantidades de tierras arables que excedan para cada una de esas entidades de 15 a 30 hectáreas, según la cantidad del suelo, por parroquia y beneficio simple, de 180 hectáreas por cabildo, de 180 hectáreas por Mesa episcopal y de 180 hectáreas por seminario. En las diócesis cuyos seminarios no poseen tierras arables distintas de las del obispado, se les otorgarán, sobre las tierras que pertenezcan al obispado, 180 hectáreas libres de rescate, independientemente de las 180 hectáreas reservadas para la Mesa episcopal.

6. Las personas jurídicas eclesiásticas arriba mencionadas tendrán el derecho de escoger ellas mismas, sobre los bienes que les pertenezcan, las parcelas de tierras que en las cantidades indicadas arriba han de quedar de su propiedad.

7. El precio del rescate de las tierras arriba indicadas será pagado conforme a los reglamentos que serán aplicados al rescate de los bienes pertenecientes a los propietarios privados y quedará a disposición de la Iglesia.

8. La Santa Sede consiente asimismo que las tierras arables pertenecientes a las casas de las congregaciones y órdenes religiosas, lo mismo que a sus instituciones de beneficencia, consideradas cada una separadamente como unidades agrícolas distintas, sean rescatadas por el Estado, de acuerdo con los reglamentos que serán aplicados al rescate de los bienes pertenecientes a las personas jurídicas laicas, con derecho para cada una de las casas sobredichas, lo mismo que para cada una de sus instituciones de beneficencia, de conservar al menos 180 hectáreas de tierras arables.

9. Las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas tendrán el derecho, al igual que las personas jurídicas laicas, de proceder directamente a la parcelación de las tierras arables que les pertenezcan.

Artículo XXV.

Todas las leyes, ordenamientos o decretos que estén en contradicción con las estipulaciones de los artículos prece-

dentes, serán por este mismo hecho anulados, desde la entrada en vigor del presente Concordato.

Artículo XXVI.

La Santa Sede procederá, en el término de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Concordato, y de acuerdo con el Gobierno, a la constitución y delimitación de las provincias eclesiásticas y de las diócesis enumeradas en el artículo IX. Los límites de las provincias eclesiásticas y de las diócesis serán conformes a las fronteras del Estado polaco.

Los bienes eclesiásticos situados en Polonia, mas pertenecientes a personas jurídicas eclesiásticas y religiosas que tengan su sede fuera de las fronteras del Estado polaco, y recíprocamente, formarán el objeto de una convención especial.

Artículo XXVII.

El presente Concordato entrará en vigor dos meses después del cambio de su ratificación.

Roma, 10 de febrero de 1925.—*Pedro Cardenal Gasparri.*
Ladislao Skrzynski.—*Estanislao Grabski.*

Anejo A.

Las dotaciones atribuidas a la Iglesia católica por el Estado polaco, conforme al artículo XXIV del presente Concordato, serán calculadas como sigue:

I. Dotación del clero:

Dotaciones mensuales a tenor del coeficiente corriente para los funcionarios del Estado:

1.º Cardenales: 2.500 puntos (1); además, 800 zlotys para sostenimiento de capellanes, equipajes, etc.

(1) «La expresión *punto* no significa moneda, sino los puntos de la escala de emolumentos de los funcionarios públicos en Polonia.» (De una atenta carta del señor encargado de Negocios de Polonia en España.)

2.º Arzobispos: 2.000 puntos, más 600 zlotys para sostenimiento de capellanes, equipajes, etc.

3.º Obispos diocesanos: 1.700 puntos, más 600 zlotys para el sostenimiento de capellanes, equipajes, etc.

4.º Obispos auxiliares: 1.250 puntos.

5.º Miembros de los cabildos: 600 puntos.

6.º Curas: 270 puntos.

7.º Rectores de iglesias filiales, vicarías y funcionarios de los consistorios: 200 puntos.

8.º Religiosos de las congregaciones que reciben dotación del Estado: 125 puntos.

9.º Profesores de los seminarios: 600 puntos.

10. Alumnos de los seminarios: 125 puntos.

11. Auditor del Tribunal de la Sagrada Rota (tratamiento igual al de los profesores de las Universidades).

12. Secretario del auditor: 600 puntos.

13. Profesores de los Institutos teológicos, teniendo derechos de profesores de gimnasios (tratamiento igual al de los profesores de escuelas secundarias).

II. *Dotación anual para las pensiones de retiro*: 383.413 zlotys.

1.º Pensiones de retiro del clero: 254.117 zlotys.

2.º Pensiones de retiro para viudas y huérfanos del clero grecocatólico: 129.296 zlotys.

III. *Dotación anual para sostenimiento de los coros de las catedrales y para los empleados subalternos de las iglesias*: 63.298 zlotys.

IV. *Gastos anuales de administración eclesiástica*: zlotys 750.940.

1.º Visitas pastorales de los obispos: 340.000 zlotys.

2.º Consistorios episcopales: 66.000 zlotys.

3.º Teneduría de registros parroquiales: 197.940 zlotys.

4.º Gastos postales: 147.000 zlotys.

V. *Subvención anual para las instituciones eclesiásticas*: 20.900 zlotys.

VI. *Fondo anual de construcción*: 1.016.000 zlotys.

VII. *Otros gastos anuales*: 45.500 zlotys.

Las dotaciones de que se ha hablado serán atribuidas por

el ministro de Finanzas a cada diócesis separadamente, en sumas globales, establecidas a tenor de presupuestos especificados presentados por los ordinarios competentes. Para el reparto entre los diocesanos de la suma de las dotaciones aseguradas a los curas por el Estado se tendrá en cuenta la renta de las tierras poseídas por los beneficios parroquiales.

En caso de necesidad, y si la situación financiera del Estado lo permite, las dotaciones sobredichas serán aumentadas suficientemente para asegurar una existencia material conveniente a los curas y a los otros miembros del clero, y ello sobre la base de un acuerdo especial que tenga por objeto los *derechos de estola*.

El reparto de las dotaciones enumeradas arriba será confiado en cada diócesis al ordinario, el cual, después de la puesta en vigor del presente Concordato, prestará el juramento de fidelidad prevenido en el artículo XII.

Pedro Cardenal Gasparri.

Ladislao Skrzynski.

Estanislao Grabski.

CAPITULO VI

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LETONIA

Ni una palabra se lee de religión en la vigente Constitución de la República de Letonia, que es de 15 de febrero de 1922.

No obstante, dicha República celebró un Concordato con la Santa Sede el 30 de mayo del mismo año, vigente en la actualidad.

Este Concordato es textualmente como sigue:

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO DE LETONIA

La Santa Sede, representada por S. Emma. el cardenal Gasparri, secretario de Estado de S. S. Pío XI, y el Gobierno de Letonia, representado por su excelencia monseñor Sigfrido A. Mieirovics, presidente del Consejo, ministro de Negocios Extranjeros, después de haber canjeado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:

I. La religión católica será libre y públicamente ejercida en Letonia, y le será reconocida la personalidad jurídica con todos los derechos que el Código civil de Letonia reconoce a las otras personas civiles.

II. La Santa Sede, entendiéndose con el Gobierno de Letonia, y después que éste habrá entregado al arzobispo la iglesia y el inmueble a que se refiere el artículo VII, erige en Riga una sede arzobispal y da al arzobispo de Riga uno o dos obispos auxiliares. El arzobispo y los obispos serán de nacionalidad letona.

III. Para todos los negocios eclesiásticos, el arzobispo de Riga dependerá directamente de la Santa Sede.

IV. La Santa Sede, antes de nombrar al arzobispo de Riga, notificará al Gobierno de Letonia el candidato que ha escogido, para saber si, desde el punto de vista político, no tiene el Gobierno nada que objetar contra esta elección.

V. Antes de entrar en funciones, el arzobispo prestará en manos del presidente de la República de Letonia juramento de fidelidad en la forma siguiente: «Yo juro delante de Dios y sobre los Santos Evangelios, como conviene a un obispo, respetar y hacer respetar por el clero al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Letonia y de no hacer nada que comprometa el orden público.»

VI. La Santa Sede, previa inteligencia con el Gobierno de Letonia, constituye el cabildo diocesano de Riga según las prescripciones del Derecho canónico.

VII. La República de Riga se compromete de su parte:

a) a dar a Riga para el culto católico-romano una iglesia catedral escogida por el Gobierno y juzgada conveniente por el arzobispo;

b) a dar un inmueble conveniente para servir de residencia al arzobispo y al cabildo con las oficinas de la Cancillería y del Consistorio.

VIII. Los miembros del cabildo, los curas párrocos y, en general, todos los eclesiásticos, son nombrados por el arzobispo según las normas del Derecho canónico.

IX. Los eclesiásticos, a partir del orden del subdiacónado inclusive, son exceptuados del servicio militar y de las otras funciones cívicas incompatibles con la vocación sacerdotal, como, por ejemplo: jurados, miembros del Tribunal, etc.

X. La Iglesia católica tiene el derecho de fundar y de mantener sus propias escuelas confesionales; el Gobierno

de Letonia se compromete a respetar el carácter confesional de estas escuelas, y, de su parte, la Iglesia se compromete a respetar toda ley sobre escuelas privadas, conforme con este compromiso del Gobierno.

XI. Para la formación de un clero letón será fundado un seminario eclesiástico diocesano según las prescripciones canónicas y bajo la autoridad del arzobispo. La lengua empleada en la enseñanza del seminario, salvo para la filosofía y las materias eclesiásticas, será el letón.

Por lo que concierne a la fundación de un colegio letón en Roma y a la concesión de un número determinado de becas en aquellos de los escolares que el arzobispo quiera enviar a Roma para hacer allí estudios eclesiásticos superiores, el Gobierno letón se entenderá con la Santa Sede.

XII. Visto el número todavía insuficiente de eclesiásticos de nacionalidad letona, el arzobispo tendrá el derecho, para un período de transición, de hacer venir, según las necesidades, eclesiásticos extranjeros, que podrán libremente ejercer las funciones que les sean encargadas por el arzobispo. El arzobispo tendrá cuidado de indicar al Gobierno de la República los nombres de estos eclesiásticos para saber si, desde el punto de vista político, no tiene el Gobierno objeciones que formular contra ellos. Los miembros del cabildo, los deanes y los curas párrocos titulares deben ser ciudadanos letones.

XIII. La República de Letonia no pondrá obstáculos a la actividad, fiscalizada por el arzobispo de Riga, de las Asociaciones católicas en Letonia, las cuales tendrán los mismos derechos que las demás Asociaciones reconocidas por el Estado.

XIV. Las iglesias, capillas, cementerios católicos, son considerados como propiedad de la Iglesia católica en Letonia; ellos son libremente administrados por la autoridad eclesiástica; no podrán ser enajenados ni confiscados por nadie, ni destinados a otros usos contra la voluntad de la autoridad eclesiástica.

XV. La inmunidad de las iglesias, capillas y cementerios será observada según las normas del Derecho canónico.

XVI. Las propiedades de la Iglesia podrán ser sometidas

das a impuestos, como los bienes de los otros ciudadanos, excepto los edificios destinados al culto divino, lo mismo que los seminarios y las viviendas episcopales y presbiterales.

XVII. Los eclesiásticos acusados de haber faltado a las obligaciones de su estado sacerdotal se justificarán ante el arzobispo o sus mandatarios. Del juicio episcopal no cabrá recurso a los Tribunales laicos.

XVIII. Si algunos eclesiásticos son acusados cerca de Tribunales laicos de crímenes previstos por el Código de Letonia, el arzobispo o su delegado será con tiempo oportunamente avisado, y él o su delegado podrán asistir a las sesiones de los Tribunales y a los debates del proceso.

XIX. Los eclesiásticos condenados en juicio a la detención sufrirán su pena de arresto en un monasterio. En los otros casos, los eclesiásticos culpables sufrirán su pena como los otros condenados, después que el arzobispo les haya privado de la dignidad eclesiástica.

XX. La duración del presente Concordato será de tres años, a partir de la fecha del depósito de la ratificación, y será prolongado por renovación tácita de año en año, salvo denuncia con seis meses de anticipación.

En caso de denuncia del Concordato, los inmuebles de que habla el Concordato, con sus inmunidades, quedan de propiedad de la Iglesia católica, y las personas visadas por el Concordato entran en el derecho común de Letonia.

XXI. El presente Concordato será ratificado por la Santa Sede y por la Asamblea Constituyente de Letonia.

XXII. El canje de las ratificaciones será efectuado en el Vaticano, y el Concordato entrará en vigor desde la fecha de depósito de las ratificaciones.

En fe de lo cual los plenipotenciarios arriba citados han firmado el presente Concordato.

Fecho en el Vaticano a 30 de mayo de 1922, en doble ejemplar.

Pedro Cardenal Gasparri.

Sigfrid A. Meierovics.

DECLARACION

En nombre del Gobierno de la República de Letonia, yo declaro lo que sigue:

El Gobierno de Letonia acordará en favor del arzobispo, de los obispos y de los miembros del cabildo una asignación suficiente que les permita vivir de manera digna de su rango, y, en caso de divergencia sobre la cantidad de la asignación, el Gobierno se entenderá con la Santa Sede. Se compromete también a proporcionar el inmueble de que hace mención el artículo VII *b* del presente Concordato. Los edificios y fondos necesarios para la fundación de un seminario eclesiástico diocesano serán dados por el Gobierno de Letonia, y serán asimismo mantenidos los otros beneficios pagados hasta el presente por el Gobierno.

Fecho en Roma, el 30 de mayo de 1922.

Sigfrido A. Meierovics.

La entrega de las ratificaciones se hizo en el Vaticano el 3 de noviembre de 1922, entre el cardenal Gasparri y el Excmo. Germán Albat, subsecretario de Negocios Exteriores de la República de Letonia.

CAPITULO VII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LITUANIA

La vigente Constitución lituana es dictatorial. Fué elaborada sin concurso de la Dieta y proclamada por el Presidente de la República el 15 de mayo de 1928. Ha reemplazado a la *Ley constitucional de la República de Lituania*, votada por la Dieta Constituyente el 1.º de agosto de 1922.

El contenido religioso de esta Constitución vigente es como sigue:

Artículo 11. Todos los ciudadanos lituanos, hombres y mujeres, son iguales ante la ley. No se puede otorgar ningún privilegio a un ciudadano ni tener atención a sus derechos por razón de su origen, de su religión o de su lengua.

Artículo 14. Todo ciudadano goza de libertad de creencia y de conciencia.

El hecho de profesar una religión o una doctrina filosófica determinada no puede ser invocado para justificar un acto delictivo o para recusar los deberes públicos.

Artículo 19. Para fines confesionales y culturales pueden formarse personas morales de derecho público, según el orden establecido por la ley.

Artículo 81. La instrucción religiosa en las escuelas es obligatoria, a excepción de las escuelas creadas para los niños cuyos padres no pertenecen a ninguna organización confesional. La enseñanza religiosa debe ser dada de conformi-

dad con las exigencias de la organización confesional a la cual pertenece el alumno.

Artículo 83. Las escuelas confesionales privadas, si responden al programa mínimo fijado por las leyes, reciben del Tesoro del Estado una parte de las sumas previstas en el presupuesto para las necesidades de la instrucción, en relación con el número de los ciudadanos y de los alumnos pertenecientes oficialmente a la organización confesional cuya doctrina es enseñada en las escuelas.

Posteriormente dedica la Constitución lituana al Estatuto religioso todo el título X, bajo este epígrafe: «Materias confesionales y culturales», desde el artículo 84 al 88, ambos inclusive.

Artículo 84. A todas las organizaciones confesionales existentes en Lituania el Estado reconoce un derecho igual de administrarse conforme a sus cánones o estatutos, de propagar libremente su doctrina y de celebrar las ceremonias de su culto, de fundar y gobernar los edificios consagrados a su culto, las escuelas, las instituciones de educación y de beneficencia, de fundar monasterios, congregaciones confesionales, asociaciones fraternales, de imponer a sus miembros tasas destinadas a cubrir las necesidades de las organizaciones confesionales, de adquirir bienes muebles e inmuebles y de administrarlos.

Las organizaciones confesionales poseen en el Estado el derecho de personas morales.

Los eclesiásticos son dispensados de las obligaciones militares.

Artículo 85. El Estado reconoce las organizaciones confesionales nuevas que nazcan, si su doctrina confesional o moral o sus estatutos no son contrarios al orden y a la moral.

Las condiciones de aparición y existencia de tales organizaciones son fijadas por la ley.

Artículo 86. Los actos de nacimiento, de matrimonio y de defunción celebrados por los creyentes ante los repre-

sentantes de su culto, si están conformes con las prescripciones de la ley, tienen validez legal en Lituania, y los ciudadanos no son obligados a renovarlos ante otra autoridad.

Artículo 87. Las leyes respetan los domingos y otros días de fiesta reconocidos por el Estado.

Artículo 88. Los militares deben disponer de tiempo libre que les permita cumplir sus deberes religiosos.

A las personas retenidas en hospitales, prisiones y otros establecimientos públicos débeseles dar posibilidad de cumplir sus deberes religiosos.

Remata el Estatuto jurídico-religioso de Lituania su Concordato con la Santa Sede, que es como sigue:

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO DE LITUANIA

EN NOMBRE DE LA SANTÍSIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD

Su Santidad el Papa Pío XI y el Presidente de la República de Lituania, M. Antanas Smetona,

Animados del deseo de determinar la situación de la Iglesia católica en Lituania y de establecer las reglas que regirán de una manera digna y estable los negocios eclesiásticos sobre el territorio de la República,

Han decidido a estos fines concluir un Concordato.

En consecuencia, Su Santidad el Papa Pío XI y el Presidente de la República de Lituania, M. Antanas Smetona, han nombrado sus plenipotenciarios respectivos:

Su Santidad,

A su eminencia reverendísima el cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado;

El Presidente de la República,

A su excelencia el profesor Agustín Valdemaras, presidente del Consejo y ministro de Negocios Extranjeros.

Los plenipotenciarios sobredichos, después del cambio de sus plenos poderes, han concertado las disposiciones siguientes:

Artículo I.

La Iglesia católica, sin distinción de ritos, gozará en la República de Lituania de todas las libertades necesarias para el ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción eclesiástica, lo mismo que para la administración y gestión de sus negocios y de sus bienes, conforme a las leyes divinas y al Derecho canónico.

Artículo II.

Los obispos, el clero y los fieles comunicarán libre y directamente con la Santa Sede. En el ejercicio de sus funciones, los obispos comunicarán libre y directamente con su clero y sus fieles, y podrán publicar también sus instrucciones, mandamientos y cartas pastorales.

Artículo III.

A fin de mantener las relaciones amistosas entre la Santa Sede y la República de Lituania, residirá en Lituania un internuncio apostólico y residirá un ministro de la República cerca de la Santa Sede.

Artículo IV.

Las autoridades civiles prestarán su apoyo a la ejecución de las decisiones y de los decretos eclesiásticos: en el caso de destitución de un eclesiástico o de su privación de un beneficio eclesiástico; en caso de defensa del uso del hábito eclesiástico; en caso de percepción de tasas destinadas a fines eclesiásticos y permitidas por las leyes del Estado,

Artículo V.

Los eclesiásticos disfrutarán, en el ejercicio de su ministerio, de una protección jurídica especial. Al igual que los funcionarios del Estado, gozarán del derecho de exención de embargo judicial para una parte de su paga.

Los eclesiásticos que hayan recibido órdenes, los religiosos que hayan pronunciado sus votos, los alumnos de los seminarios y los novicios en los noviciados, si perseveran en su estado eclesiástico o religioso, serán exentos del servicio militar, aun en caso de guerra y de leva en masa. Los eclesiásticos serán también exentos de funciones cívicas incompatibles con la vocación sacerdotal, según el Derecho canónico.

Artículo VI.

Se asegura la inmunidad de las iglesias, de las capillas y de los cementerios, sin que por eso tenga que sufrir la seguridad pública.

Artículo VII.

Los ejércitos de la República de Lituania gozarán de todas las exenciones que son acordadas para los ejércitos por la Santa Sede, según las prescripciones del Derecho canónico. Los capellanes ejercerán las funciones de su ministerio bajo la jurisdicción del arzobispo, que tendrá el derecho de elegirlos.

Artículo VIII.

Los domingos y el día de la fiesta nacional de la Independencia, los presbíteros oficiantes rezarán una oración litúrgica para la prosperidad de la República de Lituania y de su Presidente.

Artículo IX.

Ninguna parte de la República de Lituania dependerá de un obispo cuya sede se halle fuera de las fronteras del Estado lituano. La provincia eclesiástica cuyas diócesis y prelatura son fijadas por la *Bula Lithuanorum gente*, no será modificada sin acuerdo previo con el Gobierno lituano, salvo las rectificaciones parroquiales exigidas por el bien de las almas. En todo caso, los límites de la provincia eclesiástica de las diócesis y de la prelatura serán conformes a las fronteras del Estado lituano.

Artículo X.

La creación y la modificación de los beneficios eclesiásticos, de las congregaciones y órdenes religiosas, lo mismo que de sus casas y establecimientos, dependerá de la autoridad eclesiástica competente, la cual, siempre que las dichas medidas acarreen gastos para el Tesoro del Estado, procederá de acuerdo con el Gobierno. Las congregaciones y órdenes religiosas podrán de pleno derecho establecerse y existir en Lituania si constituyen ellas en la República una provincia según las reglas del Derecho canónico.

Si no cumpliesen ellas esta condición y existen ya en el territorio del Estado, las casas existentes al momento de la ratificación del presente Concordato serán reconocidas por el Estado; sin embargo, no podrán ellas abrir casas nuevas sin autorización especial de la Santa Sede.

Artículo XI.

La elección de los obispos pertenece a la Santa Sede. Su Santidad consiente en dirigirse al Presidente de la República antes de nombrar al arzobispo, a los obispos diocesanos, a los coadjutores con derecho de sucesión, para

asegurarse que el Presidente no tiene razones de carácter político para oponerse a esta elección.

Artículo XII.

Los ordinarios arriba dichos, antes de asumir sus funciones, prestarán entre las manos del Presidente de la República un juramento de fidelidad de la fórmula siguiente:

«Delante de Dios y sobre los Santos Evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad a la República de Lituania. Juro y prometo respetar con toda lealtad y hacer respetar por mi clero al Gobierno establecido por la Constitución. Juro y prometo además que no participaré en ningún acuerdo ni asistiré a ningún consejo que pueda atacar al Estado lituano o al orden público. No permitiré a mi clero participar en tales acciones. Celoso del bien y del interés del Estado, cuidaré de evitar todo daño del que le supiere amenazado.»

Artículo XIII.

1.º En todas las escuelas públicas o subvencionadas por el Estado es obligatoria la enseñanza religiosa. La autoridad religiosa competente establecerá su programa y elegirá sus textos. El nombramiento de los profesores y el servicio de la enseñanza religiosa, en lo que concierne a su contenido y a la moral de los maestros, se efectuará conforme al Derecho canónico.

En caso en que el ordinario retirase a un maestro la autorización que le había dado, este último será, por lo mismo, privado del derecho de enseñar la religión.

Los mismos principios concernientes a la elección y revocación de preceptores serán aplicados a los profesores, a los agregados y a los adjuntos universitarios de la Facultad de Filosofía y Teología que el Estado mantiene a sus expensas.

2.º En todas las diócesis, la Iglesia católica, de conformidad con el Derecho canónico, poseerá seminarios eclesiásticos subvencionados por el Estado, que ella dirigirá y de los cuales ella nombrará los profesores.

Los certificados de estudios librados por los grandes seminarios serán suficientes para enseñar la religión en todas las escuelas públicas o subvencionadas por el Estado.

3.º En todas las escuelas públicas o subvencionadas por el Estado, éste cuidará, de acuerdo con los ordinarios, que los alumnos puedan convenientemente cumplir sus deberes religiosos.

4.º En lo que concierne a la educación de la juventud católica, el Estado reconoce los derechos prevenidos por el canon 1.381, y dará curso a las advertencias justificadas de los mismos ordinarios.

5.º Todas las escuelas que se encuentren bajo la dependencia del ordinario y se conformen con el programa del Ministerio de Instrucción Pública son asimiladas, por lo que se refiere al valor de los diplomas, a las escuelas del Estado.

Artículo XIV.

El clero en Lituania es autorizado a tener registros de nacimiento y de bautismo, de matrimonio y de defunción, que, conforme a la Constitución del país, hacen fe aun en el fuero civil. La Iglesia facilita al Estado copias de los registros del año en curso, lo mismo que los registros de las colectas del año correspondiente. Si el trabajo de la redacción de las actas no es pagado por los interesados mismos, el Estado los retribuirá.

Artículo XV.

Los matrimonios celebrados de conformidad con las prescripciones del Código canónico, obtienen por lo mismo efectos civiles.

Artículo XVI.

Los eclesiásticos, sus bienes y los bienes de las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas son susceptibles de impuestos, al igual de las personas y de los bienes de los ciudadanos de la República y de las personas jurídicas laicas, a excepción, sin embargo, de los edificios consagrados al servicio divino, de los seminarios eclesiásticos, de las casas de formación de religiosos y religiosas, lo mismo que de las casas de habitación de religiosos y religiosas que han hecho voto de pobreza y de los bienes y títulos cuyas rentas son destinadas a las necesidades del culto religioso y no contribuyen a los gastos personales de los beneficiarios. Las habitaciones de los obispos y del clero parroquial, lo mismo que sus locales oficiales, serán tratados por el Fisco igual que las habitaciones oficiales de los funcionarios y de los locales de las instituciones del Estado.

Artículo XVII.

Todas las personas jurídicas, eclesiásticas y religiosas tienen, según las reglas del Derecho común, el derecho de adquirir, ceder, poseer y administrar conforme al Derecho canónico sus bienes muebles e inmuebles, lo mismo que el derecho de comparecer ante toda instancia o autoridad del Estado para la defensa de sus derechos civiles.

Artículo XVIII.

La República garantiza el derecho de las autoridades competentes de atribuir funciones, cargos y beneficios eclesiásticos a tenor de las prescripciones del Derecho canónico. A la atribución de los beneficios parroquiales serán aplicadas las reglas siguientes:

En el territorio de la República de Lituania no pueden obtener beneficios parroquiales, a menos de haber recibido el consentimiento del Gobierno:

1.º Los extranjeros no naturalizados.

2.º Las personas cuya actividad ha sido contraria a la seguridad del Estado.

Antes de proceder a los nombramientos para estos beneficios, la autoridad eclesiástica se informará cerca del ministro competente de la República para asegurarse de que no se opone ninguna de las razones prevenidas arriba en los puntos 1.º y 2.º En el caso en que el ministro sobredicho no presentase en el término de treinta días tales objeciones contra la persona cuyo nombramiento es examinado, la autoridad eclesiástica procederá al nombramiento.

Artículo XIX.

El derecho de patronato, sea del Estado, sea de particulares, permanece en vigor hasta nuevo acuerdo. La presentación de un digno eclesiástico para un puesto vacante será efectuada por el patrono en el término de treinta días sobre una lista de tres nombres propuesta por el ordinario. Si en los treinta días no ha sido hecha la presentación, la provisión del beneficio quedará libre. En el caso de tratarse de un beneficio parroquial, el ordinario, antes de proceder al nombramiento, consultará al ministro competente, conforme al artículo XVIII.

Artículo XX.

Si algunos eclesiásticos o religiosos son acusados cerca de los Tribunales laicos de crímenes prevenidos por las leyes penales de la República, estos Tribunales informarán inmediatamente al ordinario competente de cada negocio de este género y le transmitirán, exigiéndolo el caso, el acta de acusación y de auto judicial con sus considerandos. El ordinario, o su delegado, tendrán derecho, después de la conclusión del proceso judicial, de tomar notas de los expedientes respectivos. En el caso de arresto o de prisión de las personas arriba dichas, las autoridades civiles procede-

rán con los miramientos debidos a su estado y a su rango jerárquico.

Los eclesiásticos y religiosos serán detenidos y sufrirán la pena de reclusión en lugares separados de los lugares destinados a laicos, a menos de haber sido privados por el ordinario competente de su dignidad de eclesiásticos. En el caso en que sean condenados por juicio a la detención, sufrirán esta pena en un convento u otra casa religiosa, en lugares destinados a este efecto.

Artículo XXI.

Los ordinarios velarán para que todos los fieles tengan asistencia religiosa en su lengua materna, según las reglas de la Iglesia.

Artículo XXII.

1.º La República de Lituania reconoce los derechos de propiedad de las personas jurídicas eclesiásticas y religiosas a todos los bienes muebles e inmuebles, capitales, rentas y otros derechos que estas personas jurídicas posean actualmente en el territorio del Estado.

2.º La República de Lituania consiente en que los derechos de propiedad arriba mencionados, en los casos en que no sean ellos todavía inscritos en los registros hipotecarios u otros instrumentos jurídicos equivalentes, en nombre de las personas jurídicas que los poseen (obispos, cabildos, congregaciones, órdenes religiosas, seminarios, beneficios parroquiales, otros beneficios, etc.), sean inscritos en ellos, y esto sobre una declaración del ordinario competente certificada por la autoridad civil competente.

3.º La cuestión de los bienes inmuebles de los cuales la Iglesia ha sido privada por Rusia y que se encuentren actualmente en posesión del Estado lituano, será reglada por un convenio ulterior.

4.º Los bienes que la República de Lituania reivindica-

rá de los otros Estados y que pertenecieron en otro tiempo a la Iglesia, les serán restituidos conforme al Derecho canónico.

Artículo XXIII.

Las sumas pagadas por la República conforme a los estados fijados por la ley en vigor bajo los nombres de las diócesis de Samogitia y de Seinai y de la Administración apostólica del Vilnius, respectivamente, a las archidiócesis de Kaunas y a las diócesis de Vilkauskis y de Kaisedorys, serán pagadas también, y en la misma proporción, a las nuevas diócesis de Telsiai y Panevezys. El Estado se compromete, sin embargo, a aumentar estas dotaciones en la misma proporción que lo hará para las otras ramas de la Administración del Estado.

Un acuerdo ulterior entre las Altas Partes contratantes regulará todo lo que se refiere al mantenimiento de las iglesias y de los otros edificios eclesiásticos, lo mismo que las construcciones nuevas exigidas por el bien de las almas.

Artículo XXIV.

El arzobispo, los obispos, el clero y el cuerpo docente en los seminarios mayores tienen derecho al retiro. Su participación en la caja de retiro será regulada ulteriormente de acuerdo con los ordinarios.

Artículo XXV.

El Estado acordará plena libertad de organización y de funcionamiento a las asociaciones que persigan fines principalmente religiosos, formando parte de la Acción Católica, y, como tales, dependientes de la autoridad del ordinario.

Artículo XXVI.

Todas las leyes, ordenanzas o decretos que estén en contradicción con las estipulaciones de los artículos precedentes serán por este mismo hecho anulados desde la entrada en vigor del presente Concordato.

Artículo XXVII.

Los bienes eclesiásticos situados en Lituania, mas pertenecientes a personas jurídicas, eclesiásticas y religiosas que tienen su domicilio fuera de las fronteras del Estado lituano, e inversamente, serán objeto de un convenio especial.

Artículo XXVIII.

El presente Concordato entrará en vigor el día del cambio de las actas de su ratificación.

Roma, 27 de septiembre de 1927.—*Pedro Cardenal Gasparri.*—*Agustín Valdemaras.*

CAPITULO VIII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE CHECOSLO- VAQUIA

El párrafo 106 de la Constitución de Checoslovaquia, en su número 2, preceptúa :

Todos los habitantes de la República checoslovaca disfrutan sobre su territorio, en la misma medida que sus ciudadanos, de una plena y entera protección de su vida y de su libertad, sin diferencia ninguna de origen, de nacionalidad, de lengua, de raza o de religión. No puede haber excepciones a este principio más que en el caso en que el Derecho internacional las admita.

El número 2 del párrafo 120 preceptúa también :

La dirección suprema y fiscalización de la instrucción y de la educación todo enteras pertenecen al Estado.

Es garantida la libertad de conciencia y de religión.

Regulan también la religión los párrafos desde el 122 al 125, ambos inclusive, todo enteros.

§ 122.

Todos los habitantes de la República checoslovaca tienen, en la misma medida que sus ciudadanos, el derecho de prac-

ticar públicamente o en privado un culto, religión o creencia cualquiera, con tal que no estén en contradicción con los reglamentos o el orden público o las buenas costumbres.

§ 123.

Nadie puede ser forzado ni directa ni indirectamente a tomar parte en algún ejercicio religioso, haciendo reserva de los derechos que se derivan de la potestad paterna o tutelar.

§ 124.

Todas las religiones son iguales ante la ley.

§ 125.

Puede ser prohibido el ejercicio de ciertas prácticas religiosas si contravienen ellas al orden o a la moralidad públicos.

Los números 1 y 2 del párrafo 128 también se ocupan del problema religioso, prescribiendo:

Todos los ciudadanos de la República checoslovaca son iguales ante la ley y disfrutan de los mismos derechos civiles y políticos, sin distinción de raza, de lengua ni de religión.

La religión, la creencia, la confesión ni la lengua de los ciudadanos checoslovacos pueden jamás dañarles dentro de los límites fijados por las leyes generales, principalmente en cuanto a la admisión a los empleos públicos, funciones y honores o al ejercicio de las diferentes profesiones o industrias.

Finalmente, el párrafo 130:

Las leyes generales conceden a los ciudadanos el derecho de crear, dirigir y vigilar, a sus propias expensas, institu-

ciones de caridad, religiosas y sociales, escuelas y otros establecimientos de educación; todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, de lengua, de religión o de raza, disfrutaban igualmente del derecho de usar libremente de su propia lengua y de ejercitar libremente su religión en estos establecimientos.

Checoslovaquia ha concertado también su *Modus vivendi* con la Santa Sede. Es como sigue:

«MODUS VIVENDI» ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DE CHECOSLOVAQUIA

I.—La Santa Sede y el Gobierno checoslovaco se ponen de acuerdo sobre el principio de que ninguna parte de la República checoslovaca dependa de un ordinario cuya sede se encuentre fuera de las fronteras del Estado checoslovaco, lo mismo que ninguna diócesis de Checoslovaquia se extienda más allá de las fronteras del país. La Santa Sede y el Gobierno checoslovaco se pondrán de acuerdo respecto de la nueva delimitación y de la dotación de las diócesis. Para preparar este acuerdo serán organizadas en el término de dos meses dos comisiones, independientes la una de la otra: la primera, formada por la Santa Sede y compuesta de delegados de todas las diócesis interesadas, bajo la presidencia del representante de la Santa Sede en Praga; la segunda, formada por el Gobierno checoslovaco y compuesta de representantes de las diócesis interesadas y de peritos.

II.—La administración de los inmuebles y de los bienes mobiliarios eclesiásticos en Checoslovaquia, que son actualmente conservados bajo secuestro, es provisional hasta el acuerdo mencionado en el artículo precedente, y es confiada a una comisión bajo la presidencia del obispado de la región interesada.

III.—Las órdenes y las congregaciones religiosas cuyas casas se encuentran en Checoslovaquia no dependerán de los superiores de las casas provinciales de las mismas órdenes

y congregaciones en el extranjero. Si la creación de una provincia en Checoslovaquia es imposible, las dichas casas religiosas checoslovacas serán directamente sometidas a la casa generalicia.

Los superiores provinciales y los superiores de las casas religiosas dependientes directamente de la casa generalicia serán súbditos checoslovacos.

IV.—La Santa Sede, antes de proceder al nombramiento de los arzobispos y de los obispos diocesanos, de los coadjutores con derecho de sucesión, lo mismo que del ordinario del ejército, comunicará al Gobierno checoslovaco el nombre del candidato para asegurarse de que el Gobierno no tiene razones de carácter político para oponerse a esta elección. Los prelados sobredichos serán súbditos checoslovacos.

Entiéndense por objeciones de carácter político todas las objeciones que el Gobierno motive por razones de ataque a la seguridad del Estado; por ejemplo, que el candidato elegido se haya hecho culpable de una actividad política irredentista, separatista, o bien dirigida contra la Constitución o contra el orden público del país.

El nombre del candidato indicado por la Santa Sede al Gobierno, lo mismo que las conversaciones relativas, permanecerán secretos.

Las disposiciones relativas al ordinario del ejército no entran en vigor más que en el caso en que sea mantenido el sistema de servicios religiosos exentos de los militares. En este caso se tendrán en cuenta, entre otras cosas, las objeciones de carácter político, lo mismo que las que tengan relación a la posición del candidato en el ejército.

V.—Los dignatarios mencionados en el artículo precedente, después del nombramiento de la Santa Sede y antes de asumir sus funciones, prestarán servicio de fidelidad al Estado checoslovaco por la fórmula siguiente: «Juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad a la República checoslovaca, y que nada haré que sea contra la salud, seguridad o integridad de la República.»

VI.—El Gobierno tendrá cuidado de conformar, en el más breve plazo, las disposiciones legales en vigor al presente *Modus vivendi*.

CAPITULO IX

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE RUMANIA

Rumania se dictó su vigente Constitución en 1922, y fué publicada el 29 de marzo de 1923.

Diez artículos contiene la Constitución de Rumania relativos al problema religioso.

Son ellos:

Artículo 5. Todos los rumanos, sin distinción de origen étnico, de lengua ni de religión, gozan de libertad de conciencia, de libertad de enseñanza, de libertad de Prensa, de libertad de reunión, de libertad de asociación y de todos los derechos y libertades establecidos por las leyes.

Artículo 7. Las creencias religiosas, la confesión, el origen étnico y la lengua no constituyen en Rumania impedimento para el disfrute y ejercicio de los derechos políticos.

Artículo 8. No se admite ninguna distinción de nacimiento o clase social.

Todos los rumanos, sin distinción de origen étnico, de lengua o de religión, son iguales ante la ley y deben contribuir igualmente a los impuestos y a las cargas públicas.

Artículo 22. La libertad de conciencia es absoluta.

El Estado garantiza a todos los cultos una libertad y una protección iguales, en la medida en que su ejercicio no sea contrario al orden público, a las buenas costumbres y a las leyes de organización del Estado.

La Iglesia cristiana ortodoxa y la Iglesia greco-católica son Iglesias rumanas.

Siendo la Iglesia ortodoxa rumana la religión de la mayor parte de los rumanos, es la Iglesia dominante en el Estado rumano, y la Iglesia greco-católica tiene la primacía sobre los otros cultos.

La Iglesia ortodoxa rumana es y permanece independiente de toda autoridad espiritual extranjera, conservando, sin embargo, en lo que concierne a los dogmas, su unidad con la Iglesia ecuménica de Oriente.

En todo el reino de Rumania, la Iglesia cristiana ortodoxa recibirá una organización unitaria, de la que participarán todos sus miembros, lo mismo clérigos que legos.

Una ley especial establecerá los principios fundamentales de esta organización unitaria, lo mismo que las formas según las cuales la Iglesia, por sus propios órganos y bajo el control del Estado, regulará las cuestiones religiosas y culturales, dirigirá y administrará sus fundaciones de beneficencia y sus diversos establecimientos.

Las cuestiones espirituales y canónicas que interesan a la Iglesia ortodoxa rumana serán reguladas por una autoridad sinodal central única.

La elección de los metropolitanos y de los obispos de la Iglesia ortodoxa rumana será regulada por una ley especial única.

La ley regulará las relaciones entre los diferentes cultos y el Estado.

Artículo 23. Los actos del estado civil son regidos por la ley civil. El establecimiento de estos actos deberá siempre preceder a la ceremonia o acto religioso correspondiente.

Artículo 28. Los rumanos, sin distinción de origen étnico, de lengua o de religión, tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, conformándose con las leyes que regulan el ejercicio de este derecho, para discutir cuestiones de toda naturaleza; no se necesita para este objeto autorización antecedente.

Se permiten las reuniones al aire libre, menos en las vías y plazas públicas.

Las reuniones, procesiones y manifestaciones sobre las vías y plazas públicas son sometidas a las leyes de policía.

Artículo 29. Los rumanos, sin distinción de origen étnico, de lengua o de religión, tienen el derecho de asociarse, conformándose con las leyes que regulan el ejercicio de este derecho.

El derecho de libre asociación no implica por sí mismo el derecho de crear personas morales.

Las condiciones en las cuales es acordada la personalidad moral serán determinadas por una ley especial.

Artículo 72. Son, por derecho propio, miembros del Senado, en virtud de su alta situación en el Estado o en la Iglesia:

a) El heredero del Trono, a partir de los dieciocho años cumplidos.

b) Los metropolitanos.

c) Los obispos diocesanos de las iglesias ortodoxas, rumana y greco-católica, si han sido elegidos conforme a las leyes.

d) Los jefes de las confesiones reconocidas por el Estado, a razón de uno por confesión, si han sido elegidos o nombrados conforme a las leyes, y representen más de doscientos mil fieles, lo mismo que los jefes religiosos de los musulmanes del reino.

Artículo 77. Los descendientes de Su Majestad serán educados en la religión ortodoxa oriental.

Artículo 119. Todos los rumanos, sin distinción de origen étnico, de lengua o de religión, forman parte de uno de los órganos de la fuerza armada, conforme a leyes especiales en la materia.

Rumania, además, ha concertado con la Santa Sede un importante Concordato, que es como sigue:

SOLEMNE CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL REINO DE RUMANIA

Su Santidad el Papa Pío XI, representado por su eminencia reverendísima el cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado, y Su Majestad el Rey de Rumania, Fernan-

do I, representado por su excelencia Mr. V. Goldis, su ministro secretario de Estado en el Departamento de Cultos y de Artes, después de haber cambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes:

Artículo I

La religión católica, apostólica, romana, de todos los ritos, será practicada y ejercida libre y públicamente en todo el reino de Rumania.

Artículo II

En el reino de Rumania la jerarquía católica será constituida de esta manera:

A) *Para el rito griego:*

Provincia eclesiástica de *Alba-Julia y Fagaras*.

Metrópolis:

BLAJ

Con cuatro sufragáneas:

1. Oradea-Mare.

2. Lugoj.

3. Chezla (sede episcopal y cabildo, que se han de transformar, de común acuerdo, entre la Santa Sede y el Gobierno Real).

4. Una nueva diócesis que se ha de eregir al Norte, con sede episcopal, a designar, de común acuerdo, entre la Santa Sede y el Gobierno Real.

De esta diócesis formarán parte también los greco-rutenos, con una administración especial.

B) *Para el rito latino:*

Provincia eclesiástica de *Bucarest*.

Metrópolis:

BUCAREST

Con cuatro sufragáneas:

1. Alba-Julia.

2. Timisowa.

3. Satumare y Oradea-Mare, unidas *aeque principaliter*.

Por la ratificación del presente Concordato cesa la administración apostólica, y el territorio de Oradea-Mare pasa a la jurisdicción del obispo actual de Satumare.

4. Jasi. A esta diócesis será unida la Bucovina.

El territorio del antiguo reino pasa, de la jurisdicción de la Congregación de Propaganda Fide, al derecho común.

C) *Para el rito armenio:*

Un jefe espiritual para todos los armenios del reino, con sede en Gherla.

La Santa Sede no procederá a modificación ninguna de la jerarquía más arriba establecida, ni de las circunscripciones de las provincias eclesiásticas y de las diócesis, sin acuerdo precedente con el Gobierno rumano, salvo las pequeñas modificaciones parroquiales exigidas por el bien de las almas.

Artículo III

Ninguna parte del reino de Rumania dependerá de obispo cuya sede se encuentra fuera de las fronteras del Estado rumano; al mismo tiempo, ninguna diócesis de Rumania podrá extenderse más allá de las fronteras del país.

Artículo IV

La comunicación directa de los obispos, del clero y del pueblo con la Santa Sede, y viceversa, en materia espiritual y en negocios eclesiásticos, será absolutamente libre.

Artículo V

§ 1. Los que sean llamados a gobernar las diócesis, lo mismo que sus coadjutores, con derecho de sucesión, así como el jefe espiritual de los armenios, deberán ser ciudadanos rumanos, salvo las excepciones admitidas, de común acuerdo, por la Santa Sede y el Gobierno Real.

§ 2. La Santa Sede, antes de su nombramiento, notificará al Gobierno Real la persona que se va a nombrar, para comprobar, de común acuerdo, si no hay contra ella razones de orden político.

Artículo VI

Los obispos, antes de tomar posesión de sus diócesis, prestarán juramento, según la fórmula que sigue:

«Ante Dios, y sobre los Santos Evangelios, yo juro y prometo fidelidad a Su Majestad el Rey de Rumania, lo mismo que a sus sucesores, y como es conforme a un obispo, respetar y hacer respetar por mis súbditos, con la fidelidad al Rey, la Constitución y las leyes del país. Además, no acometeré nada que pueda atacar el orden público o la integridad del Estado. Así Dios me ayude y sus Santos Evangelios.»

Artículo VII

La fórmula de las plegarias para el Soberano «Señor, haz salvo al Rey» será cantada en los oficios divinos, conforme a las normas jurídicas.

Artículo VIII

Los ordinarios tendrán plena libertad en el ejercicio de las funciones eclesiásticas y en el gobierno de sus propias diócesis. Podrán ejercer todos los derechos y prerrogativas propios del ministerio pastoral, conforme a la disciplina

aprobada por la Iglesia católica, y serán libres de dar las instrucciones religiosas, morales y eclesiásticas, como su ministerio sagrado lo exige. Cuando sean ellas de interés general y publicadas por los prelados, serán inmediatamente puestas en conocimiento del Ministerio de Cultos. De ellos dependerán exclusivamente los otros miembros del clero católico en todo lo que concierne al nombramiento y al ejercicio del ministerio sagrado. El nombramiento hecho será puesto en conocimiento del Ministerio de Cultos.

Artículo IX

El Estado reconoce a la Iglesia católica, representada por sus legítimas autoridades jerárquicas, la personalidad jurídica, según el derecho común del país.

En consecuencia, las parroquias, los arciprestazgos, los monasterios, los cabildos, los prioratos, las abadías, los obispados, las metrópolis y las otras organizaciones canónica y legalmente constituidas, son personas jurídicas, y la plena propiedad de sus bienes, de cualquiera naturaleza que sea, es garantida por el Estado, según la Constitución del reino, a la Iglesia católica representada por sus legítimas autoridades jerárquicas.

Artículo X

La Iglesia católica y sus miembros, ciudadanos rumanos, disfrutarán, de parte del Estado, de un trato que no podrá ser inferior al que disfrutaban, según la Constitución, las otras religiones del reino.

Bien entendido, por otro lado, que los obispos rumanos diocesanos de rito griego, lo mismo que el arzobispo latino de Bucarest, serán senadores por derecho propio.

Artículo XI

§ 1. En todas las iglesias catedrales será mantenido el cabildo de canónigos en el estado jurídico y patrimonial en

que se encuentra actualmente, a reserva de las disposiciones del artículo XIII. La nueva diócesis será provista de su cabildo.

§ 2. Los canónigos deberán ser ciudadanos rumanos, salvo las excepciones admitidas, de común acuerdo, por la Santa Sede y el Gobierno Real.

Artículo XII

§ 1. Los ordinarios serán libres de eregir nuevas parroquias, de establecer o fundar iglesias filiales; entre tanto, si ellas piden la contribución del Estado, deberán proceder de acuerdo con el Gobierno, el cual dará su consentimiento si se trata de 400 familias para las ciudades y de 200 para los pueblos. En casos especiales, el Gobierno podrá dar su consentimiento aun para número inferior de familias.

§ 2. El nombramiento de curas, que deberán ser ciudadanos rumanos y no haber sufrido condena por sentencia definitiva por crímenes contra la seguridad del Estado, es de la competencia exclusiva del ordinario. El consentimiento del Gobierno será pedido en el caso en que se trate de nombrar cura a un extranjero, el cual deberá, sin embargo, adquirir ulteriormente la cualidad de ciudadano rumano.

Artículo XIII

§ 1. Será constituido un *Patrimonio sagrado* interdiocesano con títulos de la renta rumana que pertenezcan actualmente a las prebendas de los obispos, de los canónigos, de los curas y de los seminarios teológicos.

§ 2. El destino del *Patrimonio sagrado* es el sostenimiento de Ordinarios y Ordinariados, de los seminarios teológicos, de los canónigos y de las personas al servicio de las parroquias. En el caso en que las rentas prevenidas en el párrafo primero no alcanzaren la cantidad debida, según el artículo X, lo suplirá el Estado, conforme a las leyes en vigor concernientes a los honorarios del clero.

§ 3. Este *Patrimonio sagrado* será administrado por el

Consejo de los obispos diocesanos, según los Estatutos redactados por ellos mismos y aprobados por la Santa Sede y por el Gobierno.

§ 4. El mismo Consejo administrará los frutos de las rentas provenientes del *fondo general católico de Religión y del fondo general católico de Instrucción*, los cuales gozan ya de personalidad jurídica y quedan en el estado patrimonial y jurídico actual.

§ 5. El *Patrimonio sagrado* gozará de personalidad jurídica, conforme al derecho común del país.

Artículo XIV

Las propiedades de las escuelas, de los institutos de educación y de beneficencia y de todas las otras instituciones piadosas de cada diócesis serán administradas por las autoridades diocesanas y empleadas para el mismo fin prevenido y querido por cada fundación aparte, según las modalidades previstas por las leyes del Estado.

Artículo XV

Los derechos y las obligaciones de patronato de todas las categorías son y permanecen abolidos sin ninguna indemnización:

Los edificios sagrados, las casas parroquiales con sus dependencias, lo mismo que los otros bienes afectos por el patrón a la Iglesia: a) Si ellos son inscritos en los libros fundacionales a nombre de las personas jurídicas indicadas en el artículo IX, quedan en plena propiedad; b) Si son inscritos a nombre de los patronos, quedan en posesión de la Iglesia para uso de las parroquias respectivas.

En el caso en que la parroquia viniese canónica y legalmente a desaparecer, el antiguo patrono, si es el Estado o una institución del Estado, podrá disponer libremente de sus bienes; si es un particular, los edificios y los bienes arriba indicados quedan en posesión y en uso de la Iglesia.

Artículo XVI

§ 1. En cada diócesis, el seminario para la formación de la juventud estará bajo la dependencia exclusiva del ordinario.

§ 2. Los profesores serán ciudadanos rumanos, salvo las excepciones admitidas, de común acuerdo, por la Santa Sede y el Gobierno Real.

§ 3. El programa de estudios será fijado por la autoridad eclesiástica competente.

§ 4. En los seminarios, el estudio de la lengua y de la historia nacional será obligatorio, según el programa establecido por la Conferencia de obispos diocesanos, de acuerdo con el Ministerio competente, en la medida que no impida los estudios teológicos y de manera que sea compatible con el carácter religioso de estos institutos; a este efecto, el dicho Ministerio tendrá conocimiento del programa a que se refiere el párrafo precedente.

Artículo XVII

1.º Las órdenes y las congregaciones religiosas existentes en el reino deberán tener su provincial y sus miembros, ciudadanos rumanos, domiciliados en el país.

2.º A las órdenes y congregaciones religiosas como tales, el Estado reconoce la personalidad jurídica con tal que cumplan las condiciones establecidas por la leyes en vigor.

3.º Los fondos pertinentes a las órdenes y a las congregaciones religiosas deberán ser distribuidos según la voluntad de los bienhechores y según la naturaleza y fin del instituto religioso.

4.º Podrán establecerse en Rumania nuevas órdenes y congregaciones religiosas, y las que hay en ella actualmente podrán abrir nuevas casas, con la sola aprobación dada, de acuerdo, por la Santa Sede y el Gobierno rumano.

Artículo XVIII

La Iglesia católica tiene el derecho de proveer a la asistencia religiosa de todo linaje, para sus fieles, en el ejército, en los hospitales civiles y militares, los orfanatos, las escuelas correccionales, las penitenciarías, teniendo en cuenta los reglamentos de las instituciones respectivas.

Artículo XIX

§ 1. La Iglesia católica tiene el derecho de crear y mantener a sus expensas escuelas primarias y secundarias, que estarán bajo la dependencia de los ordinarios respectivos y bajo la inspección y control del Ministerio de Instrucción Pública.

§ 2. En las mismas condiciones podrá ella mantener el número actual de escuelas normales.

§ 3. Todas las escuelas de las órdenes y congregaciones religiosas son colocadas bajo la dependencia del ordinario del lugar; en consecuencia, ellas gozarán también del derecho de fijar la lengua de enseñanza.

§ 4. Todas las escuelas indicadas en los párrafos precedentes tendrán el derecho de publicidad, según las modalidades de las leyes en vigor.

Artículo XX

§ 1. La Iglesia católica tiene el derecho de dar instrucción religiosa a los alumnos católicos en todas las escuelas públicas y particulares del reino; esta instrucción religiosa les será dada en su lengua materna.

§ 2. En las escuelas secundarias del Estado, frecuentadas en mayoría por católicos, la enseñanza de la religión será dada por maestros católicos, clérigos o legos, nombrados, de común acuerdo, por el ordinario y el Ministerio de Instrucción Pública, y pagados por el Gobierno, de conformidad con las leyes en vigor.

§ 3. En las escuelas primarias del Estado, frecuentadas en su mayoría por católicos, la enseñanza de la religión católica será dada por sacerdote designado por el ordinario, y, en defecto de sacerdote, por laico católico, que podrá ser también el maestro de la escuela, con tal que sea él reconocido capaz por el ordinario.

§ 4. Si el ordinario informa al Ministerio que el maestro de la religión no es idóneo, por motivos relativos a doctrina o a moralidad, el maestro será obligado a cesar inmediatamente en la enseñanza, y se procederá al nombramiento del sucesor, según los párrafos 2 y 3 de arriba.

§ 5. En las escuelas del Estado, el programa de enseñanza religiosa para los católicos será redactado por el ordinario y comunicado al Ministerio competente.

§ 6. Los textos escolares deberán ser igualmente aprobados por el ordinario, el cual tendrá también el derecho de vigilar la enseñanza que se dé en dichas escuelas.

Artículo XXI

Los bienes eclesiásticos situados en Rumania, pero que pertenecen a personas jurídicas eclesiásticas y religiosas domiciliadas fuera de las fronteras del Estado rumano, y recíprocamente, serán objeto de un convenio especial.

Artículo XXII

Todas las dificultades y las cuestiones que puedan surgir, concernientes a la interpretación del presente Concordato, serán resueltas, de común acuerdo, entre la Santa Sede y el Gobierno.

Artículo XXIII

El presente Concordato entrará en vigor inmediatamente después del cambio de ratificaciones entre la Santa Sede y el Gobierno Real.

Las dos partes contratantes se reservan la facultad de denunciar el presente Concordato, con seis meses de anticipación.

Artículo XXIV

El cambio de ratificaciones tendrá lugar en Roma lo antes posible.

Artículo adicional.

En el término de dos meses después de la ratificación se constituirá una Comisión, de la que formará parte un delegado de la Santa Sede y otro del Gobierno, para proceder, con asistencia de un delegado del Episcopado, a la delimitación de las circunscripciones eclesiásticas, lo mismo que a la liquidación de los bienes que formarán el *Patrimonio sagrado*, según el artículo XIII.

En fe de lo cual los plenipotenciarios sobredichos han firmado el presente Concordato.

En el Vaticano, a 10 de mayo de 1927.—*P. Cardenal Gasparri*.—*V. Galdi*.

CAPITULO X

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE GRECIA, TURQUIA, RUSIA, ESTONIA Y FINLANDIA

PARRAFO PRIMERO

ESTATUTO JURÍDICO-RELIGIOSO DE GRECIA

La Constitución vigente de Grecia es de 2 de junio de 1927. Esta Constitución da mucha importancia al problema religioso, señal evidente de que Grecia no ha sido nunca dominada por la Curia Romana. Las naciones dominadas por ésta acaban sumergidas en el mayor escepticismo religioso.

Véase el contenido religioso de esta Constitución :

Artículo primero. La religión dominante en Grecia es la de la Iglesia ortodoxa oriental de Cristo.

La Iglesia ortodoxa de Grecia está inseparablemente unida, desde el punto de vista dogmático, con la Grande Iglesia de Constantinopla y toda otra Iglesia homodoxa de Jesucristo que observe inmutablemente, como ella, los santos cánones apostólicos y sinodales y las santas tradiciones. Ella es autocéfala; ejerce, independientemente de toda otra Iglesia, sus derechos soberanos, y es administrada por un santo sínodo de arzobispos. Los ministros de todos los cultos están sometidos al mismo servicio de parte del Estado que los de la religión dominante.

La libertad de conciencia es inviolable.

Todos los cultos conocidos pueden ser ejercidos libremente, bajo la protección de la ley, con tal que no sean contrarios al orden público ni a las buenas costumbres. El proselitismo está prohibido.

El texto de las Santas Escrituras permanece inalterable. Está absolutamente prohibido traducirlo en otra forma de lengua cualquiera sin la autorización precedente de la Iglesia.

Artículo 7. Todas las personas que se encuentran sobre el territorio de la República helénica disfrutan de la protección absoluta de su vida y de su libertad, sin distinción de nacionalidad, de religión o de lengua. Se autorizan excepciones en los casos previstos por el Derecho internacional.

Artículo 16. Es igualmente prohibido el embargo de los periódicos y de otros impresos, sea antes, sea después de su publicación. Es, por excepción, autorizado el embargo, después de la aparición, por ultraje a la religión cristiana, en los casos especificados por la ley y para publicaciones indecentes que constituyan un atentado manifiesto al pudor público.

Artículo 42. Antes de entrar en funciones, los diputados prestan el juramento siguiente en el palacio legislativo y en sesión pública:

«Yo juro, en nombre de la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible, fidelidad a la patria, obediencia a la Constitución republicana y a las leyes del Estado, y también cumplir conscientemente mis deberes.»

Los diputados que pertenezcan a otra religión, en lugar de la invocación «yo juro en nombre de la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible», prestan juramento según la fórmula de la religión a que pertenezcan.

Artículo 69. Después de su elección, el presidente de la República presta ante la Asamblea nacional el juramento siguiente: «Yo juro, en nombre de la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible, guardar la Constitución republicana y las leyes, defender la independencia nacional y la integridad del Estado helénico y consagrar todas mis fuerzas al cumplimiento de mis deberes, teniendo constantemente a la vista el bien y el progreso del pueblo heleno.»

Pertenece al problema religioso el capítulo XI entero de dicha Constitución, que tiene por epígrafe: «Administración del Monte Athos»; comprende los artículos desde el 109 al 112 inclusive. Y es como sigue:

Artículo 109. La península del Athos, a partir de Megali Vigla hacia el otro lado, que forma el distrito del Monte Athos, constituye, conforme a su antiguo Estatuto privilegiado, una ciudad dotada del *selfgovernment* en el Estado griego, cuya soberanía sobre este territorio permanece entera. Desde el punto de vista espiritual, la Santa Montaña se halla bajo la jurisdicción inmediata del patriarcado ecuménico. Todos los que se retiran allí adquieren la nacionalidad helénica desde su admisión como novicios o como monjes, y sin otra formalidad.

Artículo 110. La Santa Montaña es administrada según su Estatuto para sus veinte monasterios, entre los cuales se reparte toda la península del Athos, donde el suelo no puede ser expropiado. La administración es ejercida por representantes de estos monasterios, que forman la Santa Comunidad. Está absolutamente prohibido hacer modificación alguna en el sistema administrativo o en el número de los conventos del Monte Athos, o en su organización jerárquica, o en sus relaciones con sus dependencias. Se prohíbe establecerse allí a heterodoxos o a cismáticos.

Artículo 111. El reglamento detallado del régimen del Monte Athos y de su funcionamiento se hace por medio de una Carta constitucional de la Santa Montaña, que es elaborada y votada por los veinte santos monasterios, con la cooperación del representante del Estado. Dicha Carta es ratificada por el patriarca ecuménico y por la Cámara de los helenos.

La observancia rigurosa del Estatuto de la Santa Montaña es colocada, por el lado espiritual, bajo la supremacía del patriarca ecuménico, y por el lado administrativo, bajo la soberanía del Estado, al cual pertenece exclusivamente el mantenimiento del orden y de la seguridad pública.

Artículo 112. Los poderes que pertenecen al Estado a tenor de los artículos 109 y 111 son ejercidos por un goberna-

dor, cuyos derechos y deberes son determinados por una ley, lo mismo que el poder judicial ejercido por las autoridades conventuales y la Santa Comunidad, como también las ventajas aduaneras y fiscales acordadas para el Monte Athos.

También en el artículo 114 toca algo al problema religioso. Pues a él pertenece esta cláusula:

Las condiciones de aptitud exigidas de los funcionarios de la administración en general son determinadas por una ley... De las condiciones de aptitud requeridas y de la tributación pueden ser dispensados por ley los ministros y agentes diplomáticos, los gobernadores generales, los secretarios generales y directores generales de los Ministerios, los prefectos, el procurador del Gobierno cerca del Santo Sínodo...

PARRAFO II

ESTATUTO JURÍDICO-RELIGIOSO DE TURQUÍA

La Constitución de Turquía es de 20 de abril de 1924. Fué votada por la Asamblea Nacional de Angora. En esta Constitución decía en el artículo 2: «La religión del Estado turco es el Islamismo»; pero estas palabras fueron suprimidas por la Gran Asamblea Nacional en 1928.

El resto del contenido religioso de esta Constitución son los artículos 75 y 86.

Artículo 75. Nadie puede ser inquietado por motivo de su religión, de su culto o de sus convicciones filosóficas. Todos los ritos que no sean contrarios al orden público, a las buenas costumbres o a las leyes, son libres.

Artículo 88. Desde el punto de vista de la nacionalidad, todos los habitantes de Turquía, sin distinción de religión o de raza, son cualificados turcos...

PARRAFO III

ESTATUTO JURÍDICO-RELIGIOSO DE RUSIA

La República Socialista Federativa Soviética Rusa (R. S. F. S. R.) dióse su Constitución el 10 de julio de 1918, y fué revisada el 11 de mayo de 1925.

Su contenido religioso es como sigue:

Artículo 4. Para asegurar a los trabajadores la verdadera libertad de conciencia, la Iglesia es separada del Estado y la escuela de la Iglesia, y se reconoce a todos los ciudadanos libertad de propaganda religiosa y antirreligiosa.

Artículo 12. La República Socialista Federativa Soviética Rusa acuerda el derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos por su actividad política o sus convicciones religiosas.

Artículo 68. El derecho de elegir y de ser elegido para los Soviets pertenece, sin distinción de sexo, de confesión, de raza, de nacionalidad, de domicilio, etc., a los ciudadanos de la República... que tienen dieciocho años cumplidos...

Artículo 69. No pueden elegir ni ser elegidos, aunque entren en alguna de las categorías dichas arriba... d) Los monjes y sacerdotes de los cultos de todas las lenguas y confesiones, cuyo ministerio es una profesión.

El XIV Congreso Panruso de Soviets modificó algunos de los artículos de la citada Constitución, dejando los que a nosotros nos atañen de esta manera:

Artículo 4. Para asegurar a los trabajadores la verdadera libertad de conciencia, la Iglesia es separada del Estado; la escuela, de la Iglesia, y se asegura a todos los ciudadanos la libertad de confesión religiosa y de propaganda antirreligiosa.

Artículo 12. La República Socialista Federativa Soviética

ca Rusa acuerda el derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos por su actividad de emancipación revolucionaria.

PARRAFO IV

ESTATUTO JURÍDICO-RELIGIOSO DE ESTONIA

La independencia de Estonia se proclamó el 24 de febrero de 1918, y el pueblo estón dióse su Constitución el 15 de junio de 1920.

Poco contenido religioso expresa dicha Constitución. Todo él se halla en los artículos 6 y 11.

Artículo 6. Todos los ciudadanos de la República son iguales ante la ley. El nacimiento, la confesión, el sexo, la situación social y la nacionalidad no pueden fundar, en Derecho público, ni privilegio ni inferioridad legal.

Artículo 11. Se reconoce la libertad de religión y de conciencia. Nadie puede ser forzado a practicar un culto, a formar parte de una confesión ni a soportar carga alguna pública en interés de una organización confesional.

Todo ciudadano estón puede libremente practicar la religión que le agrade, con tal que no se oponga al orden ni a la moral públicos.

Nadie puede invocar sus opiniones religiosas o filosóficas como excusa de un delito cometido o del incumplimiento de sus obligaciones cívicas. No existe en Estonia religión del Estado.

PARRAFO V

ESTATUTO JURÍDICO-RELIGIOSO DE FINLANDIA

Finlandia dióse su Constitución el 17 de julio de 1919.

El contenido religioso de ella exprésase en los artículos siguientes:

Artículo 8. El ejercicio, tanto público como privado, de los cultos es libre, con tal que no contenga cosa alguna contra la ley ni las buenas costumbres. Los ciudadanos finlandeses tienen también el derecho de abandonar la Iglesia a la cual pertenezcan, conforme a las reglas especiales sobre la materia, y el derecho de adherirse a otra confesión.

Artículo 9. Los ciudadanos finlandeses de todas las confesiones o sin confesión tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Las restricciones legales relativas a las funciones públicas quedarán, sin embargo, en vigor hasta que se establezca lo contrario por una ley.

Artículo 83. La organización y la administración de la Iglesia evangélica luterana son y serán reguladas por las prescripciones dictadas por esta Iglesia.

Las otras confesiones actualmente existentes son reguladas por las prescripciones que son o serán dictadas a este fin.

Podrán fundarse nuevas confesiones conforme a las disposiciones legales.

Artículo 87. El presidente de la República nombra:

... ..

2) Al arzobispo y a los obispos, lo mismo que al canciller de la Universidad.

CAPITULO XI

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE ESPAÑA

No estará de más que nuestros legisladores, a la vez que estudian los Estatutos jurídicos religiosos del mundo, tengan a la mano para comparar el vigente Estatuto español, que se va a transformar.

El se contiene en varios artículos de la Constitución y en los pactos concertados con la Santa Sede.

En cuanto a la Constitución :

Artículo 11. La religión católica, apostólica, romana es la del Estado.

La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.

Artículo 21. Son senadores por derecho propio :

... ..

El patriarca de las Indias y los arzobispos.

Artículo 22. Sólo podrán ser senadores, por nombramiento del rey o por elección de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan pertenecido a una de las siguientes clases :

... ..

4.º Los obispos...

Artículo 29. Para ser elegido diputado se requiere ser español, de estado seglar...

El resto de nuestra vigente constitución religiosa se contiene en las leyes concordadas, que van a continuación.

CONCORDATO DE LA SANTA SEDE CON ISABEL II, REINA DE ESPAÑA

En el nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

Deseando vivamente Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX proveer al bien de la religión y a la utilidad de la iglesia de España con la solicitud pastoral con que atiende a todos los fieles católicos, y con especial benevolencia a la inclita y devota nación española; y poseída del mismo deseo S. M. la Reina católica doña Isabel II, por la piedad y sincera adhesión a la Sede Apostólica, heredadas de sus antecesores, han determinado celebrar un solemne Concordato, en el cual se arreglen todos los negocios eclesiásticos de una manera estable y canónica.

A este fin, Su Santidad el Sumo Pontífice ha tenido a bien nombrar por plenipotenciario al Excmo. Sr. D. Juan Brunelli, arzobispo de Tesalónica, prelado doméstico de Su Santidad, asistente al solio pontificio y nuncio apostólico en los reinos de España, con facultades de legado *a latere*; y Su Majestad la Reina católica al Excmo. Sr. D. Manuel Beltrán de Lis, caballero gran cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III, de la de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña y de la de Francisco I de Nápoles, diputado a Cortes y su ministro de Estado, quienes, después de entregadas mutuamente sus respectivas plenipotencias y reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo siguiente:

Artículo I. La religión católica, apostólica, romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de Su Majestad católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. II. En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la misma religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Art. III. Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie, bajo ningún pretexto, en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. Su Majestad y su real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos.

Art. IV. En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.

Art. V. En atención a las poderosas razones de necesidad y conveniencia que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción de diócesis en toda la Península e islas adyacentes. Y, al efecto, se conservarán las actuales Sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y se elevará a esta clase la sufragánea de Valladolid.

Asimismo se conservarán las diócesis sufragáneas de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Gua-

dix, Huesca, Jaén, Jaca, León, Lérida, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Túc, Urgel, Vich y Zamora.

La diócesis de Albarracín quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro, a la de Huesca; la de Ceuta, a la de Cádiz; la de Ciudad-Rodrigo, a la de Salamanca; la de Ibiza, a la de Mallorca; la de Solsona, a la de Vich; la de Tenerife, a la de Canarias, y la de Tudela, a la de Pamplona.

Los prelados de las Sillas a que se reúnen otras añadirán al título de obispos de la iglesia que presiden el de aquella que se les une.

Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad Real, Madrid y Vitoria.

La Silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará a Logroño; la de Orihuela, a Alicante, y la de Segorbe, a Castellón de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oídos los respectivos prelados y cabildos.

En los casos en que para el mejor servicio de alguna diócesis sea necesario un obispo auxiliar, se proveerá a esta necesidad en la forma canónica acostumbrada.

De la misma manera se establecerán vicarios generales en los puntos en que, con motivo de la agregación de diócesis prevenida en este artículo o por otra justa causa, se creyeren necesarios, oyendo a los respectivos prelados.

En Ceuta y Tenerife se establecerán, desde luego, obispos auxiliares.

Art. VI. La distribución de las diócesis referidas, en cuanto a la dependencia de sus respectivas metropolitanas, se hará como sigue:

Serán sufragáneas de la iglesia metropolitana de Burgos las de Calahorra o Logroño, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.

De la de Granada, las de Almería, Cartagena o Murcia, Guadix, Jaén y Málaga.

De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Túc.

De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba e Islas Canarias.

De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich.

De la de Toledo, las de Ciudad Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza.

De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela o Alicante y Segorbe o Castellón de la Plana.

De la de Valladolid, las de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia y Zamora.

De la de Zaragoza, las de Jaca, Huesca, Pamplona, Tarragona y Teruel.

Art. VII. Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas diócesis se determinarán, con la posible brevedad y del modo debido (*servatis servandis*), por la Santa Sede, a cuyo efecto delegará en el nuncio apostólico en estos reinos las facultades necesarias para llevar a cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (*collatis consiliis*) con el Gobierno de Su Majestad.

Art. VIII. Todos los RR. obispos y sus iglesias reconocerán la dependencia canónica de los respectivos metropolitanos, y, en su virtud, cesarán las exenciones de los obispos de León y Oviedo.

Art. IX. Siendo, por una parte, necesario y urgente acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo, por otra parte, conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado, y las prerrogativas de los Reyes de España, como grandes maestros de las expresadas órdenes por concesión apostólica, se designará en la nueva demarcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto redondo para que ejerza en él como hasta aquí el gran maestro la jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo a la expresada concesión y bulas pontificias.

El nuevo territorio se titulará *priorato de las órdenes militares*, y el prior tendrá el carácter episcopal con título de iglesia *in partibus*.

Los pueblos que actualmente pertenecen a dichas órdenes militares y no se incluyan en su nuevo territorio se incorporarán a las diócesis respectivas.

Art. X. Los M. RR. arzobispos y RR. obispos extenderán el ejercicio de su autoridad y jurisdicción ordinaria a todo el territorio que en la nueva circunscripción quede comprendido en sus respectivas diócesis; y, por consiguiente, los que hasta ahora, por cualquier título, lo ejercían en distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella.

Art. XI. Cesarán también todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, cualesquiera que sean su clase y denominación, incluso la de San Juan de Jerusalén. Sus actuales territorios se reunirán a las respectivas diócesis en la nueva demarcación que se hará de ellas, según el artículo 7.º, salvas las exenciones siguientes:

1.ª Las del procapellán mayor de Su Majestad.

2.ª La castrense.

3.ª La de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, en los términos prefijados en el artículo 9.º de este Concordato.

4.ª La de los prelados regulares.

5.ª La del nuncio apostólico *pro tempore* en la iglesia y hospital de italianos de esta corte.

Se conservarán también las facultades especiales que corresponden a la Comisaría general de cruzada en cosas de su cargo, en virtud del breve de delegación y otras disposiciones apostólicas.

Art. XII. Se suprime la colectoría general de expolios, vacantes y anualidades, quedando por ahora unida a la Comisaría general de cruzada la comisión para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes.

Queda asimismo suprimido el Tribunal apostólico y real de la Gracia del Escusado.

Art. XIII. El cabildo de las iglesias catedrales se compondrá de deán, que será siempre la primera silla *post pontificalem*; de cuatro dignidades, a saber: la de arcipreste y la de maestro-escuela, y, además, la de tesorero en las iglesias metropolitanas; de cuatro canónigos de oficio, a sa-

ber: el magistral, el doctoral, el lectoral y el penitenciario, y del número de canónigos de gracia que se expresan en el artículo 17.

Habrà, además, en la iglesia de Toledo otras dos dignidades con los títulos respectivos de capellán mayor de reyes y capellán mayor de muzárabes; en la de Sevilla, la dignidad de capellán mayor de San Fernando; en la de Granada, la de capellán mayor de los Reyes Católicos, y en la de Oviedo, la de abad de Covadonga.

Todos los individuos del cabildo tendrán en él igual voz y voto.

Art. XIV. Los prelados podrán convocar el cabildo y presidirle cuando lo crean conveniente; del mismo modo podrán presidir los ejercicios de oposición a prebendas.

En éstos y en cualquiera otros actos, los prelados tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste ningún privilegio ni costumbre en contrario; y se les tributarán todos los homenajes de consideración y respeto que se deben a su sagrado carácter y a su cualidad de cabeza de su iglesia y cabildo.

Cuando presidan, tendrán voz y voto en todos los asuntos que no les sean directamente personales, y su voto, además, será decisivo en caso de empate.

En toda elección o nombramiento de personas que corresponda al cabildo tendrá el prelado tres, cuatro o cinco votos, según que el número de los capitulares sea de dieciséis, veinte o mayor de veinte. En estos casos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una comisión de él a recibir sus votos.

Cuando el prelado no presida el cabildo, lo presidirá el deán.

Art. XV. Siendo los cabildos catedrales el Senado y Consejo de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, serán consultados por éstos para oír su dictamen o para obtener su consentimiento, en los términos en que, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido por el Derecho canónico y especialmente por el sagrado Concilio de Trento. Cesarà, por consiguiente, desde luego toda inmunidad, exención, privilegio, uso o abuso que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España en favor de

los mismos cabildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados.

Art. XVI. Además de las dignidades y canónigos que componen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales beneficiados o capellanes asistentes, con el correspondiente número de otros ministros y dependientes.

Así las dignidades y canónigos como los beneficiados o capellanes, aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen divididos en presbiterales, diaconales y subdiaconales, deberán ser todos presbíteros, según lo dispuesto por Su Santidad, y los que no lo fueren al tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro del año, bajo las penas canónicas.

Art. XVII. El número de capitulares y beneficiados en las iglesias metropolitanas será el siguiente:

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán veintiocho capitulares, y veinticuatro beneficiados la de Toledo; veintidós la de Sevilla, y veintiocho la de Zaragoza. Las de Tarragona, Valencia y Santiago, veintiséis capitulares y veinte beneficiados, y las de Burgos, Granada y Valladolid, veinticuatro capitulares y veinte beneficiados.

Las iglesias sufragáneas tendrán, respectivamente, el número de capitulares y beneficiados que se expresa a continuación:

Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, León, Málaga y Oviedo tendrán veinte capitulares y dieciséis beneficiados. Las de Badajoz, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Jaén, Lugo, Pádua, Pamplona, Salamanca y Santander, dieciocho capitulares y catorce beneficiados. Las de Almería, Astorga, Ávila, Canarias, Ciudad Real, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, Jaca, Lérida, Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Zamora, dieciséis capitulares y doce beneficiados.

La de Madrid tendrá veinte capitulares y veinte beneficiados, y la de Menorca, doce capitulares y diez beneficiados.

Art. XVIII. En subrogación de los cincuenta y dos beneficios expresados en el Concordato de 1753, se reservan a la libre provisión de Su Santidad la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragáneas de

Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaén, Lugo, Málaga, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Táy, Vitoria y Zamora; y en las sufragáneas, una canonjía de las de gracia, que quedará determinada por la primera provisión que haga Su Santidad. Estos beneficios se conferirán con arreglo al mismo Concordato.

La dignidad de deán se proveerá siempre por Su Majestad en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vague. Las canonjías de oficio se proveerán, previa oposición, por los prelados y cabildos. Las demás dignidades y canonjías se proveerán, en rigurosa alternativa, por Su Majestad y los respectivos arzobispos y obispos. Los beneficiados y capellanes asistentes se nombrarán alternativamente por Su Majestad y los prelados y cabildos.

Las prebendas, canonjías y beneficios expresados que resulten vacantes por resigna o por promoción del poseedor a otro beneficio, no siendo de los reservados a Su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por Su Majestad.

Asimismo lo serán los que vagueu *sede vacante*, o los que hayan dejado sin proveer los prelados a quienes correspondía proveerlos al tiempo de su muerte, traslación o renuncia.

Corresponderá asimismo a Su Majestad la primera provisión de las dignidades, canonjías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que se aumenten en la nueva metropolitana de Valladolid, a excepción de las reservadas a Su Santidad y de las canonjías de oficio, que se proveerán como de ordinario.

En todo caso, los nombrados para los expresados beneficios deberán recibir la institución y colación canónicas de sus respectivos ordinarios.

Art. XIX. En atención a que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes como por razón de las disposiciones del presente Concordato, han variado notablemente las circunstancias del clero español, Su Santidad, por su parte, y Su Majestad la Reina, por la suya, convienen en que no se conferirá ninguna dignidad, canonjía o beneficio de los que exigen personal residencia a los que por razón de cualquier otro cargo o comisión estén obligados a residir continuamen-

te en otra parte. Tampoco se conferirá a los que estén en posesión de algún beneficio de la clase indicada ninguno de aquellos cargos o comisiones, a no ser que renuncien uno de dichos cargos o beneficios, los cuales se declaran, por consecuencia, de todo punto incompatibles.

En la capilla real, sin embargo, podrá haber hasta seis prebendados de las iglesias catedrales de la Península; pero en ningún caso podrán ser nombrados los que ocupan las primeras Sillas, los canónigos de oficio, los que tienen cura de almas ni dos de una misma iglesia.

Respecto de los que en la actualidad, y en virtud de indultos especiales o generales, se hallen en posesión de dos o más de estos beneficios, cargos o comisiones, se tomarán, desde luego, las disposiciones necesarias para arreglar su situación a lo prevenido en el presente artículo según las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos.

Art. XX. En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea, en el término marcado y con arreglo a lo que previene el sagrado Concilio de Trento, nombrará un solo vicario capitular, en cuya persona se refundirá toda la potestad ordinaria del cabildo, sin reserva o limitación alguna por parte de él y sin que pueda revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo, quedando, por consiguiente, enteramente abolido todo privilegio, uso o costumbre de administrar en cuerpo, de nombrar más de un vicario o cualquiera otro que, bajo cualquier concepto, sea contrario a lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. XXI. Además de la capilla del real servicio se conservarán:

1.º La de reyes y la muzárabe, de Toledo, y las de San Fernando, de Sevilla, y de los Reyes Católicos, de Granada.

2.º Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde no exista Silla episcopal.

3.º Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el exceso de gasto que ocasionará la colegiata sobre el de la iglesia parroquial.

4.º Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de León, Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera.

5.º Las catedrales de las Sillas episcopales que se agre-

guen a otras en virtud de las disposiciones del presente Concordato se conservarán como colegiatas.

Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y fundación, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo impidan, a iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que, además del párroco, se contemplen necesarios, tanto para el servicio parroquial como para el decoro del culto.

La conservación de las capillas y colegiatas expresadas deberá entenderse siempre con sujeción al prelado de la diócesis a que pertenezcan y con derogación de toda exención y jurisdicción *vere* o *quasi nullius* que limite en lo más mínimo la nativa del ordinario.

Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor si en el pueblo hubiese otra u otras.

Art. XXII. El cabildo de las colegiatas se compondrá de un abad, presidente, que tendrá anexa la cura de almas, sin más autoridad y jurisdicción que la directiva y económica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de oficio con los títulos de magistral y doctoral, y de ocho canónigos de gracia. Habrá, además, seis beneficiados ó capellanes asistentes.

Art. XXIII. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así para la provisión de las prebendas y beneficios o capellanías de las iglesias catedrales como para el régimen de sus cabildos, se observarán puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas.

Art. XXIV. A fin de que en todos los pueblos del reino se atienda con el esmero debido al culto religioso y a todas las necesidades del pasto espiritual, los muy RR. arzobispos y RR. obispos procederán, desde luego, a formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio de la población y las demás circunstancias locales, oyendo a los cabildos catedrales, a los respectivos arciprestes y a los fiscales de los Tribunales eclesiásticos, y tomando, por su parte, todas las disposiciones necesarias a fin de que pueda darse por concluído y ponerse en ejecución el precitado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de Su Majestad, en el menor término posible.

Art. XXV. Ningún cabildo ni corporación eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los curatos y vicarías perpetuas que antes estaban unidas *pleno jure* a alguna corporación, quedarán en todo sujetas al Derecho común. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas o iglesias no parroquiales dependerán del cura propio de su respectivo territorio y estarán subordinados a él en todo lo tocante al culto y funciones religiosas.

Art. XXVI. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases ni de tiempos en que vaquen, se proveerán en concurso abierto con arreglo a lo dispuesto por el santo Concilio de Trento, formando los ordinarios ternas de los opositores aprobados y dirigiéndolas a Su Majestad para que nombre entre los propuestos. Cesará, por consiguiente, el privilegio de patrimonialidad y la exclusiva preferencia que en algunas partes tenían los patrimoniales para la obtención de curatos y otros beneficios.

Los curatos de patronato eclesiástico se proveerán nombrando el patrono entre los de la terna que del modo ya dicho formen los prelados y los del patronato laical, nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva, señalándose a los que no se hallen en este caso el término de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejercicios, hechos en la forma indicada, salvo siempre el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono si lo estima conveniente.

Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los ordinarios, previo examen sinodal.

Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios o cargos que hubieren de suprimirse a consecuencia de los que en él se determina.

El Gobierno de Su Majestad católica, sin perjuicio de establecer oportunamente, previo acuerdo con la Santa Sede y tan pronto como las circunstancias lo permitan, seminarios generales en que se dé la extensión conveniente a los estu-

dios eclesiásticos, adoptará, por su parte, las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis donde no se hallen establecidos, a fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles iglesia alguna que no tenga, al menos, un seminario suficiente para la instrucción del clero.

Serán admitidos en los seminarios y educados e instruídos del modo que establece el sagrado Concilio de Trento, los jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen conveniente recibir, según la necesidad o utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los seminarios, a la enseñanza y a la administración de sus bienes se observarán los decretos del mismo Concilio de Trento.

Si de resultas de la nueva circunscripción de diócesis quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital actual del obispado y otro en la que se le ha de unir, se conservarán ambos mientras el Gobierno y los prelados, de común acuerdo, los consideren útiles.

Art. XXIX. A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de Su Majestad, que se propone mejorar oportunamente los colegios de misiones para Ultramar, tomará, desde luego, las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán, al propio tiempo, de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

Art. XXX. Para que haya también casas religiosas de mujeres en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa y a la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajo la dirección de los clérigos de San Vicente Paúl, procurando el Gobierno su fomento.

También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnen la educación y enseñanza de las niñas u otras obras de caridad.

Respecto a las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de enseñanza o de caridad que sea conveniente establecer en ellas.

No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma.

Art. XXXI. La dotación del M. R. arzobispo de Toledo será de 160.000 reales anuales.

La de los de Sevilla y Valencia, de 150.000.

La de los de Granada y Santiago, de 140.000.

Y la de los de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza, de 130.000

La dotación de los RR. obispos de Barcelona y Madrid será de 110.000 reales.

La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga, de 100.000.

La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora, de 90.000 reales.

La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad Real, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Túc, Urgel, Vich y Vitoria, de 80.000 reales.

La del patriarca de las Indias, no siendo arzobispo u obispo propio, de 150.000, deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que por vía de pensión eclesiástica o en otro concepto percibiese del Estado.

Los prelados que sean cardenales disfrutará de 20.000 reales sobre su dotación.

Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el prior de las órdenes tendrán 40.000 reales anuales.

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por razón del coste de las bulas, que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que por éstas puedan ocurrir en España.

Además, los arzobispos y obispos conservarán sus palacios y los jardines, huertas o casas que en cualquier parte de la diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enajenadas.

Queda derogada la actual legislación relativa a expolios de los arzobispos y obispos, y, en su consecuencia, podrán disponer libremente, según les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su fallecimiento, sucediéndoles *ab intestato* los herederos legítimos, con la misma obligación de conciencia; exceptúanse en uno y otro caso los ornamentos y pontificales, que se considerarán como propiedad de la Mitra y pasarán a sus sucesores en ella.

Art. XXXII. La primera Silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá de dotación 24.000 reales; las de las demás iglesias metropolitanas, 20.000; las de las iglesias sufragáneas, 18.000, y las de las colegiatas, 15.000.

Las dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas tendrán 16.000 reales; los de las sufragáneas, 14.000, y los canónigos de oficio de las colegiatas, 8.000.

Los beneficiados o capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas tendrán 8.000 reales; 6.000 los de las sufragáneas y 3.000 los de las colegiatas.

Art. XXXIII. La dotación de los curas en las parroquias urbanas será de 3.000 a 10.000 reales; en las parroquias rurales el mínimum de la dotación será de 2.200.

Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2.000 a 4.000 reales.

Además, los curas propios y, en su caso, los coadjutores disfrutarán las casas destinadas a su habitación y los huertos o heredades que no se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominación de iglesarios, mansos u otras.

También disfrutarán los curas propios y sus coadjutores la parte que les corresponda en los derechos de estola y pie de altar.

Art. XXXIV. Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias metropolitanas anualmente de 90 a 140.000 reales; las sufragáneas, de 70 a 90.000, y las colegiatas, de 20 a 30.000

Para los gastos de administración y extraordinarios de

visita tendrán de 20 a 30.000 reales los metropolitanos, y de 16 a 20.000 los sufragáneos.

Para los gastos del culto parroquial se asignará a las iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 1.000 reales, además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados o se fijen para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis.

Art. XXXV. Los seminarios conciliares tendrán de 90 a 120.000 reales anuales, según sus circunstancias y necesidades.

El Gobierno de Su Majestad proveerá por los medios más conducentes a la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el art. 29.

En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas, se observará lo dispuesto en el art. 30.

Se devolverán desde luego y sin demora, a las mismas, y en su representación a los prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no hayan sido enajenados. Pero teniendo Su Santidad en consideración el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, a fin de que con su producto pueda atenderse con más igualdad a los gastos del culto y otros generales, dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora a la venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas, hechas en la forma canónica y con intervención de persona nombrada por el Gobierno de Su Majestad. El producto de estas ventas se convertirá en intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital e intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender a los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho a percibir las, sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las pensionadas.

Art. XXXVI. La dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero se entenderán sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas

cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún caso particular alguna de las asignaciones expresadas en el art. 34, el Gobierno de Su Majestad proveerá lo conveniente al efecto; del mismo modo proveerá a los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto.

Art. XXXVII. El importe de la renta que se devengue en la vacante de las Sillas episcopales, deducidos los emolumentos del ecónomo, que se diputará por el cabildo en el acto de elegir el vicario capitular, y los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por iguales partes en beneficio del seminario conciliar y del nuevo prelado.

Asimismo, de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canonjías, parroquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las respectivas cargas, se formará un cúmulo o fondo de reserva a disposición del ordinario para atender a los gastos extraordinarios e imprevistos de las iglesias y del clero, como también a las necesidades graves y urgentes de la diócesis. Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente a la duodécima parte de su dotación anual, que satisfarán por una vez dentro del primer año los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios, debiendo, por tanto, cesar todo otro descuento que por cualquier concepto, uso, disposición o privilegio se hiciese anteriormente.

Art. XXXVIII. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero serán:

1.º El producto de los bienes devueltos al clero por la ley de 3 de abril de 1845.

2.º El producto de las limosnas de la Santa Cruzada.

3.º Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes y que vacaren.

4.º Una imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria, en la cuota que sea necesario para completar la dotación, tomando en cuenta los productos expresados en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º, y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen a este objeto.

El clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos, en especie o en dinero, previo concierto que podrá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias o con los particulares, y en los casos necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposición, aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones.

Además, se devolverán a la Iglesia, desde luego y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero, atendidas las circunstancias actuales de unos y de otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar a la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta, inmediatamente y sin demora, en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado de 3 por 100, observándose exactamente la forma y las reglas establecidas en el art. 35, con referencia a la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo.

Art. XXXIX. El Gobierno de Su Majestad, salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas aseguren los medios de cumplir las cargas a que dichos bienes estuvieren afectos.

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este gravamen.

El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de los impuestos sobre los bienes que se hubieren vendido por el Estado libres de esta obligación.

Art. XL. Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen en propiedad a la Iglesia, y que, en su nombre, se disfrutarán y administrarán por el clero.

Los fondos de cruzada se administrarán en cada diócesis por los prelados diocesanos, como revestidos al efecto de

las facultades de la bula, para aplicarlos según está prevenido en la última prórroga de la referida concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá verificarse dicha administración se fijará, de acuerdo, entre el Santo Padre y Su Majestad católica.

Igualmente administrarán los prelados diocesanos los fondos del indulto cuadragesimal, aplicándolos a establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las diócesis respectivas, con arreglo a las concesiones apostólicas.

Las demás facultades apostólicas relativas a este ramo y las atribuciones a ella consiguientes se ejercerán por el arzobispo de Toledo en la extensión y forma que se determinará por la Santa Sede.

Art. XLI. Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora o adquiriera en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los obispos, según el Santo Concilio de Trento.

Art. XLII. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar a la religión de este convenio, el Santo Padre, a instancias de Su Majestad católica, y para proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles a la sazón vigentes, y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido o sucedan en sus derechos a dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; antes bien, así ellos como sus causahabientes disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y productos.

Art. XLIII. Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente.

Art. XLIV. El Santo Padre y Su Majestad católica de-

claran quedar salvas e ilesas las reales prerrogativas de la corona de España, en conformidad a los convenios anteriormente celebrados entre ambas potestades. Y, por tanto, los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el Sumo Pontífice Benedicto XIV y el rey católico Fernando VI en el año 1753, se declaran confirmados, y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se altere o modifique por el presente.

Art. XLV. En virtud de este Concordato, se tendrán por revocadas, en cuanto a él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios. Y, por tanto, una y otra de las partes contratantes prometen, por sí y sus sucesores, la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriera alguna dificultad, el Santo Padre y Su Majestad Católica se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.

Art. XLVI y último. El canje de las ratificaciones del presente Concordato se verificará en el término de dos meses, o antes si fuere posible.

En fe de lo cual, nos, los infrascritos plenipotenciarios, hemos firmado el presente Concordato y selládolo con nuestro propio sello en Madrid a 16 de marzo de 1851.—Firmado: *Juan Brunelli, arzobispo de Tesalónica*.—Lugar del sello.—Firmado: *Manuel Beltrán de Lis*.—Lugar del sello.

Este Concordato actualmente vigente fué luego explicado y ampliado, el año 59, mediante otro que va a continuación:

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y ESPAÑA

En el nombre de la Santísima e Individua Trinidad,
El Sumo Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica Doña Isabel II, Reina de España, queriendo proveer, de común acuerdo, el arreglo definitivo de la dotación del culto y el

clero en los dominios de Su Majestad, en consonancia con el solemne Concordato de 16 de marzo de 1851, han nombrado, respectivamente, por sus plenipotenciarios:

Su Santidad, al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Santiago Antonelli, su secretario de Estado,

Y Su Majestad, al excelentísimo señor D. Antonio de los Ríos y Rosas, su embajador extraordinario cerca de la Santa Sede, los cuales, canjeados sus plenos poderes, han convenido en lo siguiente:

Artículo I.

El Gobierno de Su Majestad católica, habida consideración a las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar a la Iglesia perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, promete a la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de enajenación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede.

Artículo II.

Queriendo llevar definitivamente a efecto de un modo seguro, estable e independiente el plan de dotación del culto y clero prescrito en el mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad católica convienen en los puntos siguientes:

Artículo III.

Primeramente el Gobierno de Su Majestad reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, que

dando, en consecuencia, derogada por este convenio cualquiera disposición que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley de 1.º de mayo de 1855.

Los bienes que, en virtud de este derecho, adquiriera y posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está asignada por el Concordato.

Artículo IV.

En virtud del mismo derecho, el Gobierno de Su Majestad reconoce a la Iglesia como propietaria de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero bien habida consideración al estado de deterioro de la mayor parte de los que aun no han sido enajenados, a su difícil administración y a los varios contradictorios e inexactos cálculos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotación del clero incierta y aun incongrua, el Gobierno de Su Majestad ha propuesto a la Santa Sede una permutación, dándose a los obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquél, en cambio de todos ellos y mediante su cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la deuda pública consolidada en España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.

Artículo V.

La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente a efecto una dotación cierta, segura e independiente para el culto y para el clero, oídos los obispos de España, y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutación se realice en la forma siguiente:

Artículo VI.

Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad de la Iglesia en cada diócesis todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 del Concordato de 1851, a saber: los huertos, jardines, palacios y otros edificios que, en cualquier lugar de la diócesis, estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos. También se le reservarán las casas destinadas a la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de *iglesarios*, *mansos* y otras. Además, retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos y las bibliotecas o casas de corrección o cárceles eclesiásticas y, en general, todos los edificios que sirvan en el día para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen a tales objetos.

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotación prescrita para el culto y clero en el Concordato.

En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce a la Santa Sede a admitir la expresada permutación de valores, si en alguna diócesis estimare el obispo que, por particulares razones, conviene a la Iglesia retener alguna finca sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutación, imputándose el importe de su renta en dotación del clero.

Artículo VII.

Hecha por los obispos la estimación de los bienes sujetos a la permutación, se entregarán inmediatamente aquellos títulos o inscripciones intransferibles, así por el completo valor de los mismos bienes como por el valor venal de los que han sido enajenados después del Concordato. Verificada la entrega, los obispos, competentemente autorizados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesión de todos los bienes que, con arreglo a este convenio, están sujetos a la permutación.

Las inscripciones se imputarán al clero como parte integrante de su dotación, y los respectivos diocesanos aplicarán sus réditos a cubrirla en el modo prescrito en el Concordato.

Artículo VIII.

Atendida la perentoriedad de las necesidades del clero, el Gobierno de Su Majestad se obliga a pagar mensualmente la renta consolidada correspondiente a cada diócesis.

Artículo IX.

En el caso de que, por disposición de la autoridad temporal, la renta del 3 por 100 de la deuda pública del Estado llegue a sufrir cualquiera disminución o reducción, el Gobierno de Su Majestad se obliga desde ahora a dar a la Iglesia tantas inscripciones intransferibles de la renta que se substituya a la del 3 por 100 cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente el importe anual de la que va a emitirse en favor de la Iglesia; de modo que esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningún tiempo.

Artículo X.

Los bienes pertenecientes a capellanías colectivas y a otras semejantes fundaciones piadosas familiares que, a causa de su peculiar índole y destino y de los diferentes derechos que en ellos radican, no pueden comprenderse en la permutación de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y Su Majestad Católica.

Artículo XI.

El Gobierno de Su Majestad, confirmando lo estipulado en el artículo 39 del Concordato, se obliga de nuevo a satis-

facier a la Iglesia, en la forma que de común acuerdo se convenga, por razón de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporción con las mismas cargas. También se compromete a cumplir por su parte, en términos hábiles, las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho artículo.

Se instituirá una comisión mixta con el carácter de consultiva que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este artículo, y proponga la cantidad alzada que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado.

Artículo XII.

Los obispos, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 35 del Concordato, distribuirán entre los conventos de monjas existentes en sus respectivas diócesis las inscripciones intransferibles correspondientes ya a los bienes de su propiedad que ahora se ceden al Estado, ya a los de la misma procedencia que se hubieran vendido en virtud de dicho Concordato o de la ley de 1.º de mayo de 1855. La renta de estas inscripciones se imputará a dichos conventos como parte de su dotación.

Artículo XIII.

Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los religiosos de ambos sexos, como también cuanto se prescribe en los artículos 35 y 36 del mismo acerca del mantenimiento de las casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la reparación de los templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga, además, a construir a sus expensas las iglesias que se consideren necesarias, a conceder pensiones a los pocos religiosos legos exclaustrados y a pro-

veer a la dotación de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis.

Artículo XIV.

La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dotación, se destinará exclusivamente en adelante a los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesan sobre aquélla por convenios celebrados con la Santa Sede.

El importe anual de la misma renta se computará por el año común del último quinquenio en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

El Estado suplirá como hasta aquí la cantidad que falte para cubrir la asignación concedida al culto por el artículo 34 del Concordato.

Artículo XV.

Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anual que para completar su dotación se estableció en el párrafo cuarto del art. 38 del Concordato, y se repetirá y cobrará dicha imposición en los términos allí definidos. Sin embargo, el Gobierno de Su Majestad se obliga a acceder a toda instancia que por motivos locales o por cualquiera otra causa le hagan los obispos para convertir las cuotas de imposición correspondientes a las respectivas diócesis en inscripciones intransferibles de la referida deuda consolidada, bajo las condiciones y en los términos definidos en los artículos 7, 8 y 9 de este convenio.

Artículo XVI.

A fin de conocer exactamente la cantidad a que debe ascender la mencionada imposición, cada obispo, de acuerdo con su cabildo, hará, a la mayor brevedad, un presupuesto definitivo de la dotación de su diócesis, ateniéndose al formarlo a las prescripciones del Concordato. Y para determi-

nar fijamente en cada caso las asignaciones respecto a las cuales se ha establecido en aquél un *máximum* y un *mínimum*, podrán los obispos, de acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio cuando así lo exijan las necesidades de las iglesias y todas las demás circunstancias atendibles.

Artículo XVII.

Se procederá inmediatamente a la nueva circunscripción de parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas potestades.

Artículo XVIII.

El Gobierno de Su Majestad, conformándose a lo prescrito en el art. 36 del Concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asignaciones le hagan los obispos en los casos previstos en dicho artículo, y señaladamente las relativas a seminarios.

Artículo XIX.

El Gobierno de Su Majestad, correspondiendo a los deseos de la Santa Sede y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposición a promover no sólo los intereses materiales, sino también los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá óbice a la celebración de sínodos diocesanos cuando los respectivos prelados estimen conveniente convocarlos.

Asimismo declara que sobre la celebración de sínodos provinciales y sobre otros varios puntos arduos e importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al mayor bien y esplendor de la Iglesia.

Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia, a fin de que se lleven a efecto sin demora las disposiciones del Concordato que aun se hallan pendientes de ejecución,

Artículo XX.

En vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultan a la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de Su Majestad católica, ha acordado extender, como de hecho extiende, el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del Concordato, a los bienes eclesiásticos enajenados a consecuencia de la referida ley de 1.º de mayo de 1855.

Artículo XXI.

El presente convenio, adicional al solemne y vigente Concordato celebrado el 16 de marzo de 1851, se guardará en España perpetuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato.

Artículo XXII.

El canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en el término de tres meses, o antes si fuere posible.

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente convenio con sus respectivos sellos.

Dado en Roma, en dos ejemplares, a 25 de agosto de 1859.—*Antonio de los Ríos y Rosas.*—*G. Card. Antonelli.*

ACUERDO PRELIMINAR CON ESPAÑA PARA LA MODIFICACION DEL CONCORDATO DE 1851

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío X y Su Majestad católica el Rey D. Alfonso XIII, deseando vivamente llegar a un común acuerdo acerca de la necesidad y forma de introducir alguna modificación en el Concordato de 1851 en cuan-

to se refiere a los gastos del culto y del clero y su mejor distribución, han nombrado, con este objeto, sus plenipotenciarios, a saber:

Su Santidad el Sumo Pontífice, a su excelencia monseñor Arístides Rinaldini, arzobispo de Heraclea, Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y de la de Leopoldo de Bélgica, nuncio apostólico en el reino de España, etcétera, etc., y

Su Majestad el Rey católico de España, al excelentísimo señor D. Faustino Rodríguez San Pedro, Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, de la de Santiago y la Espada de Portugal, senador vitalicio del reino, su ministro de Estado, etc., etc.

Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes y hallarlos en debida forma, han convenido formalizar este protocolo.

Artículo I.

De igual modo que se hizo para el Concordato de 1851, se creará, dentro del plazo de un mes, contado desde la ratificación de este protocolo, una Junta o Comisión mixta, la mitad de cuyos miembros serán nombrados por Su Santidad y la otra mitad por el Gobierno de Su Majestad católica.

Art. II.

Será presidente de esta Junta o Comisión mixta el muy reverendo arzobispo de Toledo.

Art. III.

Dicha Junta o Comisión mixta tendrá las atribuciones siguientes:

A) Estudiar y trazar una nueva división y circunscripción de las diócesis de toda la Península e islas adyacentes,

completándola con las modificaciones de parroquias y demás a que esto pueda dar lugar.

B) Proponer, si por resultas de sus trabajos la creyese oportuna y útil, la supresión de alguna o algunas de las expresadas diócesis o circunscripciones, haciendo esta propuesta a los fines del artículo siguiente.

C) A la vez que lleve a cabo los trabajos antes referidos, deberá examinar atenta y detenidamente la posibilidad y la forma de realizar en los gastos del culto y el clero otras economías que, sin perturbar gravemente el estado de la Iglesia en España, alivien la situación del Erario público.

D) Examinar y proponer de igual manera las medidas que juzgue más prácticas y oportunas para mejorar la situación de los párrocos rurales.

Art. IV.

Las propuestas de esta Junta o Comisión mixta se considerarán y tendrán en su conjunto por la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Católica como bases y punto de partida para llegar a un acuerdo definitivo sobre los puntos indicados en este protocolo.

Art. V.

Este protocolo será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Madrid, en el más breve plazo posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado el presente protocolo y lo han autorizado con su sello, en Madrid a doce de julio de mil novecientos cuatro.

Arístides Rinaldini, arzobispo de Heraclea, nuncio apostólico.—*Faustino Rodríguez San Pedro*.

CONVENCION ENTRE LA SANTA SEDE Y ALFONSO XIII DE ESPAÑA RELATIVAMENTE A LAS ORDENES RELIGIOSAS

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío X y Su Majestad el Rey católico de España D. Alfonso XIII, con el fin de aclarar las dudas suscitadas sobre la situación jurídica de las órdenes religiosas en España y la interpretación y alcance que debe darse en esa materia, así a los artículos del Concordato vigente como a los preceptos de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y a las autorizaciones otorgadas a las órdenes y casas religiosas existentes y resoluciones dictadas por diferentes Gobiernos sobre este particular, han resuelto celebrar un convenio, a cuyo efecto han nombrado por sus plenipotenciarios, a saber:

Su Santidad el Sumo Pontífice a su excelencia monseñor Arístides Rinaldini, arzobispo de Heraclea, gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III y de Leopoldo de Bélgica, nuncio apostólico en el reino de España, etc., etc., y Su Majestad el Rey católico de España, el Excmo. Sr. don Faustino Rodríguez San Pedro, gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III, de la de Santiago y la Espada, de Portugal, senador vitalicio del reino, su ministro de Estado, etc., etc.

Quienes después de haber canjeado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo primero.

Las órdenes y congregaciones religiosas existentes en España en la fecha de la ratificación del presente convenio, y que hayan cumplido antes de ella con las formalidades establecidas en la Real orden circular de nueve de abril de mil novecientos dos, gozarán de la personalidad jurídica de que hoy están en posesión; se considerarán comprendidas en la excepción establecida en el párrafo primero del artículo se-

gundo de la ley de treinta de junio de mil ochocientos siete y se regirán por sus reglas y disciplina propia y por las disposiciones de este mismo convenio.

Artículo segundo.

Las órdenes y congregaciones religiosas no tendrán derecho a subvención ni auxilio alguno del presupuesto del Estado y estarán sometidas, en cuanto a su régimen canónico, a los diocesanos y prelados propios, según las reglas de sus Estatutos y las disposiciones del Derecho canónico y de la disciplina eclesiástica vigente, y en cuanto a sus relaciones con el poder civil, a las leyes generales del reino. En caso de discordia, la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad se entenderán amigablemente para allanar las dificultades que pudieran surgir.

Artículo tercero.

Las casas o conventos de las citadas órdenes o congregaciones religiosas estarán sujetas a los impuestos del país por sus bienes o por las profesiones e industrias que ejerzan, en condiciones de igualdad respecto de las demás personas jurídicas o súbditos españoles, y no serán objeto de ninguna tributación o exacción especial.

Artículo cuarto.

Se mantendrán las casas y conventos que a la fecha de la ratificación de este convenio tengan establecidas las órdenes y congregaciones religiosas citadas en el artículo primero; pero no podrá abrirse ni establecerse ninguna otra en la que se haga vida común, sin previo consentimiento del prelado diocesano y sin autorización dictada por Real orden. Estas autorizaciones se publicarán necesariamente en la *Gaceta de Madrid*.

Artículo quinto.

Las casas o conventos de las órdenes o congregaciones religiosas en que haya menos de doce individuos que hagan vida común se suprimirán, agregándose los religiosos o religiosas a otros conventos o casas de la misma orden, y quedando los edificios y propiedades en que se hallasen establecidos los que se supriman, a la libre disposición de los superiores. Se exceptúan del anterior precepto las comunidades religiosas que no hacen vida conventual o que en virtud de su instituto se dedican a obras de beneficencia, enseñanza, caridad y asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres y abandonados, como también las casas de procura y los sanatorios que pudiesen tener las diferentes órdenes y congregaciones en algunos lugares especiales. El presente artículo tendrá fuerza ejecutiva transcurridos que sean seis meses de la publicación de este convenio en la *Gaceta de Madrid*.

Artículo sexto.

No se podrá establecer en España ninguna orden o congregación nueva sin que esté autorizada por Su Santidad y sin previo acuerdo del Gobierno con la Santa Sede, consignado en Real decreto publicado en la *Gaceta de Madrid*.

Artículo séptimo.

La orden de los PP. Escolapios continuará en las mismas condiciones, derechos y beneficios que hoy disfruta.

Artículo octavo.

Las asociaciones para fines religiosos cuyos individuos no estén unidos por vínculos de profesión religiosa ni hagan vida común y, por lo tanto, no tengan el carácter de orden o congregación religiosa, se entiende que, sin perjuicio de la auto-

ridad que corresponde a los obispos en la dirección del régimen espiritual y religioso de las mismas, se regirán por la ley general de Asociaciones y los principios del Derecho común, sin limitación alguna para el presente ni para lo por venir, debiendo inscribirse en el Registro especial a que se refiere el artículo séptimo de la mencionada ley de Asociaciones de treinta de junio de mil ochocientos ochenta y siete y cumplir los demás preceptos de la misma.

Artículo noveno.

Los extranjeros no podrán constituir en España órdenes ni congregaciones religiosas de las mencionadas en el artículo primero sin haberse naturalizado previamente en el reino con arreglo a la ley común. Los religiosos que, conservando su condición de extranjeros, ingresen o residan en algún convento o casa religiosa existente en España, seguirán sujetos a todas las disposiciones del Derecho común vigentes para los súbditos extranjeros.

Artículo décimo.

En el Ministerio de Gracia y Justicia se abrirá un Registro especial en el que se inscribirán las órdenes y congregaciones religiosas a que se refiere este convenio y las que, por acuerdo de ambas potestades, se constituyan en lo sucesivo.

Artículo undécimo.

El Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de ministros y en concordia con la Santa Sede, dictará las medidas reglamentarias y aclaratorias que pudiera necesitar la ejecución del presente convenio en lo relativo a las órdenes y congregaciones religiosas establecidas o que se establezcan por acuerdo de las dos potestades.

Artículo duodécimo.

El canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en Madrid lo antes que fuere posible.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio y le han autorizado con su sello.

Hecho por duplicado en Madrid, a diecinueve de junio de mil novecientos cuatro.

FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO,

A. RINALDINI,

Arzobispo de Heraclea.

Nuncio apostólico.

CAPITULO XII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE YUGOESLAVIA

El pueblo yugoeslavo dióse su Constitución el 28 de junio de 1921.

Su contenido religioso se halla en los artículos siguientes :

Artículo 12. La confesión no tiene influencia en el disfrute de los derechos civiles y políticos. Nadie puede invocar la prescripciones de su religión para sustraerse a sus deberes y obligaciones civiles y militares.

Son reconocidas todas las religiones que han obtenido el reconocimiento legal en una parte cualquiera del reino. La ley servia puede reconocer otras confesiones. Las confesiones reconocidas se administran libremente y disponen libremente de los bienes que ellas han adquirido o que les han sido legados en los límites fijados por la ley.

Nadie es obligado a practicar su religión. Nadie es obligado a tomar parte en actos, fiestas, ceremonias, prácticas y ejercicios religiosos, salvo con ocasión de las fiestas y ceremonias oficiales y a excepción de las personas que están bajo la patria potestad, en tutela o sometidas a la autoridad militar.

Las confesiones reconocidas pueden comunicarse con sus jefes religiosos, aun residiendo en el extranjero, si sus principios lo exigen y conforme a las leyes que fijarán la reglamentación de esa comunicación.

Los recursos previstos en el presupuesto del Estado para los cultos serán repartidos entre las confesiones reconocidas a

prorrata del número de sus fieles y según sus necesidades, debidamente justificadas.

Los ministros de los cultos no deben ni en los lugares del ejercicio del culto, ni en sus escritos confesionales, ni en el ejercicio de sus funciones oficiales en general, usar de su autoridad espiritual en favor de ningún partido.

Artículo 16. ... La enseñanza religiosa es dada a gusto de los padres o de los tutores separadamente, según las confesiones y conforme a sus principios.

Artículo 58. El Rey presta ante la Asamblea Nacional el juramento siguiente: «Yo..., al momento de subir al trono de los servios, croatas y eslovenos y de recibir el poder real, juro por Dios todopoderoso mantener la unidad nacional, la independencia del Estado y la integridad de sus fronteras y de salvaguardar la Constitución, de observarla lo mismo que las leyes y de atender y querer siempre el bien del pueblo. Que así me ayude Dios. Amén.»

Verdad es que esta Constitución fué despóticamente abolida por acto dictatorial el 6 de enero de 1929, debido al Rey Alejandro I, en la parte que se refiere al poder real y a la administración suprema del Estado. Pero esta dictatorial disposición, aparte de no tener valor ninguno, no tocó al problema religioso, que quedó como estaba.

* * *

Yugoeslavia conserva hasta el momento actual los diversos Concordatos, para los distintos territorios, que habían celebrado antes con la Santa Sede los ex Estados de que se forma: Servia, Montenegro, Bosnia y Hertzegovina.

Van los tres Concordatos a continuación.

CONCORDATO ENTRE PIO X Y PEDRO I, REY DE SERVIA

En nombre de la Santísima Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío X y Su Majestad Pedro I, Rey de Servia, han resuelto hacer un Concordato, nombrando a tal efecto dos plenipotenciarios, esto es:

Por parte de Su Santidad:

Al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Rafael Merry del Val, su secretario de Estado.

Y por parte de Su Majestad:

A su excelencia el señor Milenko R. Vesnitch, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Su Majestad el Rey de Servia en Francia y Bélgica, gran cruz del orden de San Sava, doctor en leyes, etc.; los cuales, cambiadas sus respectivas plenipotencias y hallándolas en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo 1.

La religión católica, apostólica, romana tendrá su libre y público ejercicio en el reino de Servia.

Artículo 2.

Se constituye en el reino de Servia una provincia eclesiástica, compuesta de la archidiócesis de Belgrado, con sede en la capital del reino—teniendo como territorio el comprendido en los confines de la Servia antes de los tratados de Londres y Bucarest del año 1913—y de la diócesis de Scopia, sufragánea, con sede en dicha ciudad—comprendiendo los nuevos territorios—pasando de la jurisdicción de la *Propaganda Fide* al Derecho común.

Artículo 3.

El arzobispo de Belgrado y el obispo de Scopia, a cuya jurisdicción eclesiástica pertenecerán todos los católicos del

reino de Servia, dependerán en los negocios eclesiásticos directamente y exclusivamente de la Santa Sede.

Artículo 4.

Su Santidad, antes de nombrar definitivamente al arzobispo de Belgrado y al obispo de Scopia, notificará al Gobierno real la persona del respectivo candidato para conocer si hay hechos o razones de orden político o civil en contrario.

Artículo 5.

El arzobispo de Belgrado y el obispo de Scopia recibirán del real Gobierno un emolumento anual, el primero de 12.000 denarios, con aditamento de 4.000 denarios, y el segundo, de 10.000 denarios, con derecho a pensión no inferior a la de los empleados del Estado.

Artículo 6.

El título oficial del arzobispo de Belgrado y del obispo de Scopia será de ilustrísimo y reverendísimo monseñor.

Artículo 7.

Antes de entrar en funciones, el arzobispo de Belgrado y el obispo de Scopia prestarán, en presencia de un delegado del real Gobierno, el juramento de fidelidad, con la fórmula siguiente: «Yo juro y prometo delante de Dios y sobre los Santos Evangelios obediencia y fidelidad a Su Majestad el Rey de Servia; prometo no participar en ningún acuerdo ni asistir a ningún Consejo ni permitir que se incorpore o coopere el clero a mí subordinado en empresa alguna que tienda a turbar la pública tranquilidad del Estado.»

Artículo 8.

El arzobispo de Belgrado y el obispo de Scopia tendrán plena libertad en el ejercicio de las funciones eclesiásticas y en el régimen de sus diócesis y podrán ejercitar todos sus derechos y las prerrogativas de su pastoral ministerio según la disciplina aprobada por la Iglesia; de ellos, en las respectivas diócesis, dependerán todos los miembros del clero católico en lo que se refiere al ejercicio del sagrado ministerio.

Artículo 9.

Al arzobispo de Belgrado y al obispo de Scopia corresponde, en las respectivas diócesis, la erección de las parroquias, en inteligencia con el Gobierno real. A ellos corresponde también el nombramiento de los párrocos. Pero si se tratara de persona extraña al reino procederán de inteligencia con el Gobierno servio; si se trata de súbditos servios, los obispos se informarán antes cerca del competente ministerio para conocer si hay razones o hechos de orden político o civil en contrario.

Artículo 10.

La instrucción religiosa de la juventud católica es sometida, en todas las escuelas, al arzobispo y al obispo en sus respectivas diócesis. En las escuelas del Estado ella será dada por catequistas, que, previo común acuerdo, serán nombrados por el obispo y por el ministro de Instrucción Pública y de Cultos. Los obispos podrán prohibir la enseñanza religiosa, aun en las escuelas del Estado, a aquellos catequistas que se mostrasen no adaptados a la misión a ellos confiada, dando de ello participación al Ministerio de Instrucción Pública y de Cultos para proceder a otros nombramientos. El real Gobierno remunerará a los catequistas en las escuelas del Estado. La cualidad de párroco no es incompatible con la de catequista.

Artículo 11.

Para la formación de los jóvenes servios idóneos para el sacerdocio católico será instituido un seminario en la capital o en sus proximidades, al cual el Estado proporcionará una congrua dotación anual, quedando a la autoridad eclesiástica respectiva el cuidado de sistematizarla y gobernarla de conformidad con las disposiciones canónicas. En este seminario será usada para las disciplinas no eclesiásticas, como lengua de enseñanza, la servia.

Artículo 12.

El real Gobierno reconoce la validez del matrimonio entre católicos y de los matrimonios mixtos contraídos en presencia del párroco católico, según las leyes de la Iglesia.

Artículo 13.

Las causas matrimoniales entre católicos y entre cónyuges de matrimonio mixto celebrados ante párroco católico, excepto en lo que atañe a los efectos puramente civiles, serán juzgados por los Tribunales eclesiásticos católicos.

Artículo 14.

El cónyuge católico tendrá derecho de pactar que la prole de los matrimonios mixtos celebrados en presencia del párroco católico sea educada en la religión católica.

Artículo 15.

La fórmula de plegaria por el Soberano: *Señor, salva al Rey*, será cantada en los oficios divinos en lengua eslava o latina, según las condiciones locales.

Artículo 16.

El Estado reconoce que la Iglesia, representada por sus legítimas autoridades y por sus órdenes jerárquicos, tiene verdadera y propia personalidad jurídica y capacidad de ejercitar los derechos que le corresponden.

Artículo 17.

La Iglesia tiene derecho de adquirir por justo título, de poseer y libremente administrar bienes, tanto muebles como inmuebles, destinados para los fines propios de la Iglesia y de sus instituciones en el reino; y las cosas que han adquirido y sus fundaciones son inviolables, como los bienes propios de los ciudadanos del Estado.

Artículo 18.

Las propiedades de la Iglesia podrán ser sujetas a los tributos públicos, como los bienes de los otros ciudadanos; exceptuando, sin embargo, los edificios destinados al culto divino y los seminarios y las casas de los obispos y de los párrocos, los cuales serán inmunes de toda tasa y no podrán ser jamás destinados o aplicados a otro uso.

Artículo 19.

Los sacerdotes y los clérigos seculares y regulares no podrán ser obligados a ejercer públicos oficios que fueren contrarios a su sagrado ministerio y a la vida clerical.

Artículo 20.

Si en lo sucesivo surgiese cualquier dificultad sobre interpretación de los precedentes artículos o sobre cuestiones

por ventura no comprendidas en ellos, la Santa Sede y el real Gobierno procederán, de común inteligencia, a una amigable solución en armonía con el Derecho canónico.

Artículo 21.

La presente convención entrará en vigor inmediatamente después de la ratificación de Su Santidad el Sumo Pontífice y de Su Majestad el Rey de Servia.

Artículo 22.

El cambio de ratificaciones tendrá lugar en Roma en el más breve tiempo posible.

Roma, 24 de junio de 1914.

R. CARD. MERRY DEL VAL.

ILMO. R. VESNITCH.

CONCORDATO ENTRE LEON XIII Y NICOLAS I, PRINCIPE DE MONTENEGRO

En nombre de la Santísima Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y Su Alteza Nicolás I, Príncipe de Montenegro, con objeto de tutelar los intereses religiosos de los católicos del principado, han resuelto hacer un convenio, nombrando a tal efecto dos plenipotenciarios, esto es, por parte de Su Santidad:

Al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Ludovico Jacobini, su secretario de Estado, y por parte de Su Alteza:

Al señor caballero Juan Sundecic, su secretario particular.

Los cuales, habiendo cambiado sus respectivas plenipotencias y hallándolas en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo 1.

La religión católica, apostólica, romana tendrá su libre y público ejercicio en Montenegro.

Artículo 2.

Su Santidad, antes de nombrar definitivamente al arzobispo de Antivari, participará al Gobierno la persona del candidato para conocer si hay hechos o razones de orden político o civil en contrario.

Artículo 3.

El arzobispo de Antivari, a cuya jurisdicción eclesiástica pertenecerán todos los católicos de Montenegro, dependerá en los negocios eclesiásticos directamente y exclusivamente de la Santa Sede.

Artículo 4.

Antes de entrar en funciones, el arzobispo de Antivari prestará en las manos de Su Alteza el Príncipe de Montenegro el juramento de fidelidad en la forma siguiente: «Yo juro y prometo delante de Dios y sobre los Santos Evangelios obediencia y fidelidad a Su Alteza el Príncipe de Montenegro; prometo no tener ningún acuerdo, ni asistir a ningún Consejo, ni permitir que se incorpore o participe el clero a mí subordinado en empresa alguna que tienda a turbar la pública tranquilidad del Estado.» El Gobierno montenegrino le reconoce el título de ilustrísimo monseñor y le asigna un emolumento anual de cinco mil francos.

Artículo 5.

El arzobispo de Antivari tendrá plena libertad en el ejercicio de las funciones eclesiásticas y en el régimen de su

diócesis; podrá ejercitar todos los derechos y las prerrogativas propias de su pastoral ministerio, según la disciplina aprobada por la Iglesia; de él dependerán todos los miembros del clero católico en lo que se refiere al ejercicio del sagrado ministerio.

Artículo 6.

Al arzobispo de Antivari corresponde, en inteligencia con el Gobierno montenegrino, la erección de las parroquias. A él corresponde también el nombramiento de los párrocos, y si se tratase de personas extrañas al principado, procederá de inteligencia con el Gobierno montenegrino; si se tratase de súbditos montenegrinos, dará noticia del nombramiento al dicho Gobierno.

Artículo 7.

En las parroquias donde no exista un edificio para el culto católico, el arzobispo se pondrá de acuerdo con la autoridad local para que, dentro de las posibilidades, le sea asignado uno conveniente.

Artículo 8.

El arzobispo, en virtud de su pastoral ministerio, dirigirá la instrucción religiosa de la juventud católica en todas las escuelas y nombrará, de inteligencia con el Gobierno, un eclesiástico o un maestro católico para la instrucción religiosa de los jóvenes católicos en las escuelas del Estado, y éstos tendrán el mismo estipendio de los demás maestros. En las localidades donde la población es exclusivamente o en su mayor parte católica, el Gobierno, en las escuelas del Estado, escogerá por maestros a individuos gratos a la autoridad eclesiástica.

Artículo 9.

El Gobierno reconoce la validez de los matrimonios entre católicos y de los matrimonios mixtos contraídos en presencia del párroco católico, según las leyes de la Iglesia.

Artículo 10.

Las causas matrimoniales entre católicos, excepto en lo que atañe a los efectos civiles, serán juzgadas por el arzobispo de Antivari, y en los matrimonios mixtos, excepto igualmente en lo que se refiere a los efectos civiles, el Gobierno deja a los cónyuges la facultad de llevar sus causas a la presencia del mismo arzobispo.

Artículo 11.

La fórmula de plegaria por el Soberano: *Señor, salva al Príncipe*, será cantada en los oficios divinos en lengua eslava.

Artículo 12.

Para la formación de los jóvenes montenegrinos idóneos para el sacerdocio católico, el Gobierno montenegrino, de común acuerdo con el arzobispo de Antivari, escogerá algunos de los más meritorios, que serán enviados a Roma para fomentar sus estudios, a los cuales pasará para el mismo fin un conveniente subsidio anual.

En los primeros cinco años desde la fecha del presente convenio, estos jóvenes serán en número de dos para cada año, y después será uno solo para cada año. Los dichos jóvenes serán obligados a estudiar en Roma también la lengua servia.

Artículo 13.

Si en lo sucesivo surgiere cualquier dificultad sobre la interpretación de los precedentes artículos, el Santo Padre y Su Alteza Real el Príncipe de Montenegro, de común inteligencia, procederán a una amigable solución.

Artículo 14.

La presente Convención entrará en vigor inmediatamente después de la ratificación de Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y de su Alteza el Príncipe de Montenegro Nicolás I.

Roma, 18 de agosto de 1886.

L. CARD. JACOBINI.

JUAN SUNDECIC.

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO
AUSTRO-HUNGARO PARA LA BOSNIA Y HERZEGOVINA

Después que la administración de la Bosnia y de la Herzegovina ha sido tomada por el Gobierno de Su Majestad Imperial y Real Apostólica, la Santa Sede y el Gobierno mismo han reconocido la necesidad de proveer a los intereses religiosos y a las necesidades espirituales de aquellas provincias mediante una organización eclesiástica que mejor corresponda a la nueva condición de las cosas y haga más libre y más fructuoso el ejercicio de la alta misión de la Iglesia a beneficio de aquella población.

Cambiándose, por ende, sobre este importante objeto las oportunas conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad y tenida cuenta de las dificultades de varios géneros que se oponen actualmente a una plena sistematización de las cosas eclesiásticas y a la actuación inmediata de las relativas presidencias, se ha, entretanto, convenido un acuerdo sobre los siguientes puntos:

El Santo Padre procederá al restablecimiento de la jerarquía eclesiástica en la Bosnia y Herzegovina.

En la ciudad de Sarajevo será instituido un arzobispado del mismo nombre, y a él, con derecho de metropolitano, estarán sujetas, como sufragáneas, todas las sedes episcopales erigidas o que se erigieren en lo sucesivo en las dos provincias.

Será fundado sin tardanza en Sarajevo un cabildo catedral, el cual estará, por ahora, compuesto de cuatro canónigos, a cada uno de los cuales el Gobierno de Su Majestad Apostólica asigna 2.000 florines anuales.

Contemporáneamente se erigirá en Banjaluka una sede episcopal sufragánea de Sarajevo. Su Santidad, además, la hará gobernar provisionalmente por un administrador apostólico con carácter episcopal, en la inteligencia de que se vaya preparando convenientemente la fundación de los institutos necesarios a una bien regulada diócesis.

En la Herzegovina se erigirá un obispado en la ciudad de Mostar, que de ella tomará el nombre.

Siendo necesario que también el obispo de Mostar esté rodeado de su cabildo, admítase en principio la erección, la cual tendrá efecto apenas las circunstancias lo permitan.

La diócesis de Trebigne continuará siendo administrada por el obispo de Ragusa hasta que entre la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Imperial y Real Apostólica háyanse tomado especiales acuerdos para una nueva sistematización de la misma.

La dotación de las sedes arriba mencionadas, con el firme propósito de aumentarla en lo sucesivo, queda por ahora fijada del siguiente modo:

A la sede arzobispal de Sarajevo le son asignados por el Gobierno Imperial y Real 8.000 florines anuales; a la de Mostar, 6.000 florines; al administrador apostólico de Banjaluka, 3.000 florines.

En la archidiócesis de Sarajevo será abierto por ahora y sin tardanza un seminario provincial que satisfaga a las necesidades, no sólo de la archidiócesis, sino también de las demás diócesis sufragáneas, a fin de que, por medio de él, se formen los sujetos hábiles del clero secular que se ocupen voluntariamente del sagrado ministerio y en la cura de las almas, lo mismo que para el clero regular, en favor del cual, atendidos los largos servicios prestados a la Iglesia, hayan de usarse las debidas atenciones. El Gobierno de Su Majestad Imperial y Real Apostólica proporcionará los medios oportunos a tal instituto.

El Santo Padre, sobre la base del nuevo orden de cosas establecidas en la Bosnia y en la Herzegovina, queriendo

mostrar plena confianza y reconocimiento hacia Su Majestad Imperial y Real Apostólica, que con su generosidad y sus cuidados por lo porvenir contribuye tan eficazmente al bien e incremento de la Iglesia, concede a dicha Su Majestad el privilegio de nombramiento del arzobispo y de los obispos en la Bosnia y Herzegovina.

Este privilegio, del cual no se hará mención en la bula de erección de la jerarquía, será ejercitado por Su Majestad en la forma y con las reglas establecidas para la presentación a las sedes episcopales de su imperio.

El Santo Padre, al proceder al nombramiento del administrador apostólico de Banjaluka, con relación a la elección de la persona, tendrá consideración a los deseos que sean manifestados por Su Majestad el Emperador.

El Santo Padre concede a Su Majestad Imperial y Real Apostólica el indulto de nombrar para las prebendas canonicas dotadas por el Gobierno imperial y real; al cual efecto el obispo propondrá al Gobierno de Su Majestad una terna de eclesiásticos que juzgue más dignos; pero quedará exceptuada la primera entre dichas prebendas, la cual, a consecuencia de la recomendación de la misma Su Majestad, será conferida por Su Santidad.

En fe de lo cual los infrascritos, con la debida autorización de Su Santidad y de Su Majestad Imperial y Real Apostólica, ponen su firma en la presente acta, escrita en original duplicado.

Roma, 8 de junio de 1881.

L. CARD. JACOBINI.

CONTE LUDOVICO PAAR.

CAPITULO XIII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE ITALIA

Italia conserva vigente su Constitución de 4 de marzo del año 1848, en lo que no esté abolido por las leyes del régimen fascista y en lo que no esté modificado por el Tratado de Letrán y por los demás convenios celebrados recientemente entre el Estado fascista y el Vaticano.

Lo que en materia religiosa conserva vigente la Constitución del año 48 es lo siguiente:

Artículo 1. La religión católica apostólica romana es la sola religión del Estado. Los otros cultos actualmente existentes son tolerados conforme a las leyes.

A este artículo se añadió posteriormente, en 19 de junio de 1848, esta ley:

La diferencia de culto no acarrea ninguna distinción en cuanto al disfrute de los derechos civiles y políticos y en cuanto a la admisibilidad a empleos civiles y militares.

Artículo 28. La Prensa será libre, pero una ley reprimirá sus abusos. Sin embargo, las Biblias, catecismos, libros litúrgicos y de preces no podrán ser publicados sin autorización previa del obispo.

Esta segunda parte del artículo 28 ha caído en desuso.

Artículo 33. El Senado se compone de miembros nombrados vitaliciamente por el Rey, en número ilimitado, de edad de cuarenta años cumplidos y escogidos entre las categorías siguientes: 1.º Los arzobispos y obispos del Estado...

El régimen fascista, régimen de hecho, pero no de derecho, nada ha modificado de los artículos precedentes. Pero ha alterado profundamente el Estatuto jurídico-religioso de Italia mediante los Tratados que a continuación se traen, y que hará bien Italia en anularlos cuando recobre su régimen de derecho.

TRATADO ENTRE LA SANTA SEDE E ITALIA

En nombre de la Santísima Trinidad.

Presupuesto: Que la Santa Sede e Italia han reconocido la conveniencia de eliminar todo motivo de disidencia existente entre ellas, llegando a un sistema definitivo de recíprocas relaciones, que sea conforme a la justicia y a la dignidad de las dos Altas Partes y que, asegurando a la Santa Sede de un modo estable una condición de hecho y de derecho que le garantice absoluta independencia para el cumplimiento de su alta misión en el mundo, le consienta a la misma Santa Sede reconocer arreglada de un modo definitivo e irrevocable la «cuestión romana», surgida en 1870 con la anexión de Roma al reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Saboya;

Que debiéndose, para asegurar a la Santa Sede absoluta y visible independencia, garantizarle una soberanía indiscutible igualmente en el campo internacional, se ha reconocido la necesidad de constituir, con especial modalidad, la Ciudad del Vaticano, reconociendo sobre la misma a la Santa Sede la plena propiedad y exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana,

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI y Su Majestad Víctor Manuel III, Rey de Italia, han resuelto estipular un tra-

tado, nombrando a tal efecto dos plenipotenciarios, esto es, por parte de Su Santidad, a su eminencia reverendísima el señor cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, a su excelencia el Sr. D. Benito Mussolini, primer ministro y jefe del Gobierno, los cuales, cambiados sus plenos poderes y habiéndolos encontrado en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.

Italia reconoce y ratifica el principio consagrado en el artículo 1.º del Estatuto del reino de 4 de marzo de 1848, por el cual la religión católica, apostólica y romana es la sola religión del Estado.

Art. 2.

Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional como atributo inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las exigencias de su misión en el mundo.

Art. 3.

Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre el Vaticano, como está actualmente constituido, con todas sus pertenencias y dotes, creándose por tal modo la Ciudad del Vaticano para los especiales fines y con las modalidades del presente tratado. Los confines de dicha ciudad están indicados en el plano que constituye el primer anejo del presente tratado, del cual forma parte integrante.

Por lo demás, queda entendido que la plaza de San Pedro, también formando parte de la Ciudad del Vaticano, continuará siendo normalmente abierta al público y sujeta a los poderes de policía de las autoridades italianas, las cuales se detendrán a los pies de la escalinata de la basílica, aunque ésta continúe destinada al culto público, y se abstendrán, por consiguiente, de subir y acercarse a la dicha

basílica, salvo que sean invitadas a intervenir por la autoridad competente.

Cuando la Santa Sede, en vista de particulares funciones, creyese substraer temporalmente la plaza de San Pedro al libre tránsito del público, las autoridades italianas, a menos que no fuesen invitadas por la autoridad competente a quedarse, se retirarán al lado de fuera de las líneas externas de la columnata berniniana y de su prolongación.

Art. 4.

La soberanía y la jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la Santa Sede sobre la Ciudad del Vaticano, significa que en ella misma no pueda explicarse alguna ingerencia por parte del Gobierno italiano, y que no haya más autoridad que la de la Santa Sede.

Art. 5.

Para la ejecución de cuanto se ha establecido en el artículo precedente, antes de entrar en vigor el presente Tratado, el territorio que constituye la Ciudad del Vaticano deberá, por cuenta del Gobierno italiano, ser devuelto libre de todo vínculo y de eventuales ocupantes. La Santa Sede procederá a cerrar las entradas rodeando las partes abiertas, excepto la plaza de San Pedro.

Por lo demás, queda convenido que por cuanto se refiere a los inmuebles allí existentes pertenecientes a institutos o entidades religiosos, procederá directamente la Santa Sede a regular sus relaciones con éstos, desinteresándose el Estado italiano.

Art. 6.

Italia proveerá, por medio de los acuerdos necesarios con las entidades interesadas, que se asegure a la Ciudad del Vaticano una adecuada dotación de agua en propiedad.

Proveerá, además, la comunicación con los ferrocarriles

del Estado mediante la construcción de una estación ferroviaria en la Ciudad del Vaticano, en la localidad indicada en el plano I y mediante la circulación de vehículos propios del Vaticano sobre las vías italianas.

Proveerá asimismo la unión, también directamente con los otros Estados, de los servicios telegráficos, telefónicos, radiotelegráficos, radiotelefónicos y postales en la Ciudad del Vaticano.

Proveerá también al coordinamiento de otros servicios públicos.

Todo se proveerá a expensas del Estado italiano y en el término de un año desde la entrada en vigor del presente Tratado.

La Santa Sede proveerá a sus expensas al sistema de entradas ya existentes en el Vaticano y a las que en adelante creyese abrir.

Se tomarán acuerdos entre la Santa Sede y el Estado italiano para la circulación en el territorio de este último de los vehículos terrestres y aéreos de la Ciudad del Vaticano.

Art. 7.

El Gobierno italiano se obliga a no permitir nuevas construcciones en el territorio alrededor de la Ciudad del Vaticano y a derribar parcialmente las ya existentes en Porta Cavalleggeri y a lo largo de la calle Aurelia y de la avenida Vaticano.

Conforme a las normas del Derecho internacional, está prohibido a los aeroplanos, de cualquier clase que sean, volar sobre el territorio del Vaticano.

En la plaza Rusticuzzi y en las zonas adyacentes a la columnata, donde no se extiende la extraterritorialidad del artículo 15, cualquier mutación edilicia que pueda interesar a la Ciudad del Vaticano se hará de común acuerdo.

Art. 8.

Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice, declara punible el atentado contra ella y la

inducción o provocación a cometerlo, con las mismas penas establecidas para el atentado o provocación a cometerlo contra el Rey.

Las ofensas e injurias públicas cometidas en territorio italiano contra la persona del Sumo Pontífice con discursos, hechos y escritos, están castigadas como las ofensas e injurias a la persona del Rey.

Art. 9.

Conforme a las normas del Derecho internacional, están sujetas a la soberanía de la Santa Sede todas las personas que tienen residencia fija en la Ciudad del Vaticano. Tal residencia no se pierde por el simple hecho de una temporal permanencia en otra parte si no va acompañada de la pérdida del domicilio en la misma ciudad o por circunstancias que comprueben el abandono de dicha residencia.

Cesando de estar sujetas a la soberanía de la Santa Sede, las personas mencionadas en el párrafo o inciso precedente, que, según la ley italiana, independientemente de las circunstancias de hecho arriba previstas, no quieran conservar otra ciudadanía, serán sin más consideradas en Italia como ciudadanos italianos. A las mismas personas, mientras estén sujetas a la soberanía de la Santa Sede, serán aplicables en el reino de Italia, aun en las materias en que se deba observar la ley personal (cuando no estén regidas por normas emanadas de la Santa Sede), las de la legislación italiana, o cuando se trate de persona de otra nacionalidad, las del Estado al cual pertenezca.

Art. 10.

Las dignidades de la Iglesia y las personas pertenecientes a la corte pontificia, que estarán indicadas en un elenco que se ha de concordar entre las Altas Partes contratantes, aunque no sean ciudadanos del Vaticano, serán siempre y en todo caso, respecto a Italia, exentos del servicio militar, curial y de toda prestación de carácter personal.

Esta disposición se aplica también a los funcionarios del Registro declarados indispensables por la Santa Sede, agregados de una manera permanente y con estipendio fijo a las oficinas de la Santa Sede, como también a las dependencias y a los oficios indicados después en los artículos 13, 14, 15 y 16, existentes fuera de la Ciudad del Vaticano. Tales funcionarios serán indicados en otro elenco, que se ha de concordar como arriba se ha dicho, y que anualmente será prorrogado con la Santa Sede.

Los eclesiásticos que, por razón del oficio, participan fuera de la Ciudad del Vaticano de la influencia de los actos de la Santa Sede, no están sujetos, por razón de ellos, a ningún impedimento, investigación o molestia de parte de la autoridad italiana.

Toda persona extranjera investida de oficio eclesiástico en Roma disfruta de las garantías personales correspondientes a los ciudadanos italianos, en virtud de las leyes del Reino.

Art. 11.

Las entidades centrales de la Iglesia Católica son exentas de toda ingerencia de parte del Estado italiano (salvo las disposiciones de las leyes italianas concernientes a los derechos adquiridos de los cuerpos morales), como también de la conversión en los resguardos de los bienes inmuebles.

Art. 12.

Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legislación activo y pasivo, según las normas generales del Derecho internacional.

Los enviados de los Gobiernos extranjeros cerca de la Santa Sede continúan gozando en el reino de todas las prerrogativas e inmunidades que corresponden a los agentes diplomáticos según el Derecho internacional, y sus sedes podrán continuar permaneciendo en territorio italiano gozando de las inmunidades debidas a ellos según las normas del

Derecho internacional, aunque sus Estados no tengan relaciones diplomáticas con Italia.

Queda entendido que Italia se obliga a dejar siempre y en todo caso libre correspondencia de todos los Estados, comprendidos los beligerantes, con la Santa Sede, y viceversa, y también el libre acceso de los obispos de todo el mundo a la Sede Apostólica.

Las Altas Partes contratantes se obligan a establecer entre ellas relaciones diplomáticas normales, mediante la acreditación de un embajador italiano cerca de la Santa Sede y de un nuncio pontificio cerca de Italia, el cual será el decano del cuerpo diplomático, según el Derecho consuetudinario reconocido por el Congreso de Viena efectuado el 9 de junio 1815.

Por efecto de la reconocida soberanía, y sin perjuicio de cuanto está dispuesto en el sucesivo artículo 19, los diplomáticos de la Santa Sede y los correos despachados en nombre del Sumo Pontífice gozan en el territorio italiano, también en tiempo de guerra, del mismo tratamiento debido a los diplomáticos y a los correos de gabinete de otros Gobiernos extranjeros, según las normas del Derecho internacional.

Art. 13.

Italia reconoce a la Santa Sede la absoluta propiedad de las basílicas patriarcales de San Juan de Letrán, Santa María Mayor y San Pablo, con los edificios anexos.

El Estado transfiere a la Santa Sede la libre gestión y administración de la dicha basílica de San Pablo y del monasterio anejo, entregando también a la Santa Sede los capitales correspondientes a las sumas establecidas anualmente en el balance del Ministerio de Instrucción Pública para dicha basílica.

Queda entendido, lo mismo, que la Santa Sede es libre propietaria del edificio dependiente de San Calixto, cerca de Santa María de Trastevere.

Art. 14.

Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad del palacio pontificio de Castel Gandolfo, con todas las dotaciones, posesiones y dependencias, tal como se hallan ya en posesión de la misma Santa Sede, y también se obliga a cederle igualmente en plena propiedad, efectuando la consignación dentro de los seis meses desde la entrada en vigor del presente Tratado, la villa Barberini de Castel Gandolfo, con todas sus dotaciones, pertenencias y dependencias.

Para integrar la propiedad de los inmuebles sitios en el lado del monte Janículo, pertenecientes a la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe, y a otros institutos eclesiásticos que miran hacia los palacios vaticanos, el Estado se obliga a transferir a la Santa Sede o a las entidades indicadas por ella los inmuebles propiedad del Estado o de tercero existentes en dicha zona. Los inmuebles pertenecientes a dicha Congregación y a otros institutos, y los que se transfieren, están indicados en el plano agregado.

Italia, en fin, transfiere a la Santa Sede en plena y libre propiedad los edificios exconventuales de Roma anejos a la basílica de los Doce Santos Apóstoles y a la iglesia de San Andrés del Valle y de San Carlos de Calinari, con todos sus anejos y dependencias, de entregarlos libres de ocupantes dentro de un año desde que empiece a regir el presente Tratado.

Art. 15.

Los inmuebles indicados en el artículo 13 y en las líneas primera y segunda del artículo 14, los palacios de la Data-
ría, Cancillería, de Propagación de la Fe, en la plaza de España, y el palacio del Santo Oficio y adyacentes, el de los Conversos (hoy Congregación para la Iglesia Oriental), en la plaza Scossacavalli; el palacio del Vicariato, y los otros edificios en los cuales la Santa Sede, en el futuro, acreditará que monta otras oficinas suyas, aunque formen parte del territorio italiano, gozarán de las inmunidades recono-

cidas por el Derecho internacional a las sedes de los agentes diplomáticos de Estados extranjeros.

Las mismas inmunidades se aplican también por consideración a las otras iglesias, aunque estén fuera de Roma, durante el tiempo en que se celebren funciones con intervención del Sumo Pontífice, aunque no estén abiertas al público.

Art. 16.

Los inmuebles indicados en los tres artículos precedentes, como también los aplicados a sedes de los siguientes institutos pontificios: Universidad Gregoriana, Instituto Bíblico Oriental, Arqueológico, Seminario Ruso, Colegio Lombardo, los dos palacios de San Apolinar y la casa de los ejercicios para el clero de San Juan y San Pablo, nunca estarán sujetos a vínculos o expropiaciones por causa de utilidad pública, sin previo acuerdo con la Santa Sede, y estarán exentos de tributos ordinarios o extraordinarios, tanto tocante al Estado como hacia otra entidad.

Está en la facultad de la Santa Sede dar a dichos inmuebles indicados en el presente artículo y en los tres artículos precedentes, el destino que crea conveniente, sin necesidad de autorización o consentimiento de la autoridad gubernativa, provincial o comunal italiana, las cuales pueden descansar tranquilamente en la noble tradición artística de que se vanagloria la Iglesia católica.

Art. 17.

Las retribuciones de cualquier naturaleza debidas por la Santa Sede, por otras entidades centrales de la Iglesia católica o por entidades gestadas directamente por la Santa Sede fuera de Roma a dignatarios, empleados y asalariados, aunque no sean estables en el territorio italiano, estarán exentos de cualquier clase de tributo, tanto del Estado como de cualquier otra entidad, a partir del 1.º de enero de 1929.

Art. 18.

Los tesoros de arte y de ciencia existentes en la Ciudad del Vaticano y en el palacio Lateranense permanecerán visibles a los estudiosos y a los visitantes, aunque queda reservada a la Santa Sede la plena libertad de regular el acceso del público.

Art. 19.

Los diplomáticos y los enviados de la Santa Sede, los diplomáticos y los enviados de los Gobiernos extranjeros cerca de la Santa Sede y los dignatarios de la Iglesia procedentes directamente del extranjero a la Ciudad del Vaticano y provistos de pasaportes de los Estados de procedencia, visados por los representantes pontificios en el extranjero, podrán, sin otra formalidad, entrar en la Ciudad del Vaticano a través del territorio italiano. Lo mismo se dice para las sobredichas personas, que, provistas de pasaporte pontificio, se trasladen de la Ciudad del Vaticano al extranjero.

Art. 20.

Las mercancías procedentes del extranjero y dirigidas a la Ciudad del Vaticano, o fuera de la misma a instituciones u oficinas de la Santa Sede, serán siempre admitidas en cualquier punto del territorio italiano y en cualquier puerto del reino de paso por el territorio italiano, con plena exención de derechos arancelarios o de aduanas.

Art. 21.

Todos los cardenales gozan en Italia los honores debidos a los príncipes de sangre real; los residentes en Roma, también fuera de la Ciudad del Vaticano, son, para todos los efectos, ciudadanos de la misma.

Mientras esté vacante la Sede Pontificia Italia proveerá especialmente a que no se obstaculice el libre tránsito de los cardenales a través del territorio italiano y la entrada de los mismos en el Vaticano, y que no se impida o limite su libertad personal.

Cuida además Italia de que en su territorio alrededor de la Ciudad del Vaticano no se cometan actos que puedan turbar las reuniones del Conclave.

Dichas normas valen también para los Conclaves que se reuniesen fuera de la Ciudad del Vaticano, y también para los Concilios presididos por el Sumo Pontífice o por sus legados, y en consideración a sus obispos llamados a participar en ellos.

Art. 22.

A petición de la Santa Sede, y por delegación que ella misma podrá dar en cada caso particular o de un modo permanente, Italia proveerá en su territorio al castigo de los delitos cometidos en la Ciudad del Vaticano, salvo cuando el autor del delito se refugie en territorio italiano, en cuyo caso se procederá contra él sin más, según las normas de las leyes italianas.

La Santa Sede entregará al Estado italiano a las personas a las cuales se les imputen actos de delitos, según las leyes de ambos Estados, cometidos en territorio italiano y se hayan refugiado en la Ciudad del Vaticano. Análogamente se procederá con las personas imputadas de delitos que se hubiesen refugiado en los inmuebles declarados inmunes en el artículo 15, a menos que los prebostes de dichos inmuebles prefieran invitar a los agentes italianos a entrar para detenerlos.

Art. 23.

Para la ejecución en el reino de las sentencias emanadas de los Tribunales de la Ciudad del Vaticano se aplicarán las normas del Derecho internacional.

Tendrán plena eficacia jurídica y todos los efectos civi-

les en Italia, las sentencias y despachos emanados de la autoridad eclesiástica y oficialmente comunicados a las autoridades civiles, respecto a personas eclesiásticas o religiosas y concernientes a materia espiritual o disciplinaria.

Art. 24.

La Santa Sede, en relación a la soberanía que le compete en el campo internacional, declara que quiere permanecer, y permanecerá, extraña a las competencias temporales entre otros Estados y en los Congresos internacionales concertados para tal objeto, a menos que las partes, de mutuo acuerdo, apelen a su misión pacificadora, reservándose en todo caso el hacer valer su poder moral y espiritual.

En consecuencia de esto, la Ciudad del Vaticano será considerada siempre y en todo caso territorio neutral e inviolable.

Art. 25.

Con especial convenio firmado juntamente con el presente Tratado, el cual constituye el alegato IV al mismo y forma parte integrante, se procede a la liquidación de los créditos de la Santa Sede respecto a Italia.

Art. 26.

La Santa Sede sostiene que con los acuerdos firmados hoy se le asegura adecuadamente cuanto es necesario para proceder con la debida libertad e independencia al gobierno pastoral de la diócesis de Roma y de la Iglesia católica en Italia y en el mundo; declara definitivamente e irrevocablemente compuesta, y, por ende, eliminada la *cuestión romana*, y reconoce el Reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Savoia, con Roma capital del Estado italiano.

A su vez, Italia reconoce el Estado de la Ciudad del Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice.

Queda abrogada la ley de 13 de mayo de mil ochocientos

setenta y uno, número doscientos catorce, y cualquiera otra disposición contraria al presente Tratado.

Art. 27.

El presente Tratado, no más allá de cuatro meses de la firma, será sometido a la ratificación del Sumo Pontífice y del Rey de Italia, y entrará en vigor en el acto mutuo del canje de las ratificaciones.

Roma, once de febrero de mil novecientos veintinueve.

PEDRO, CARDERAL GASPARRI.

BENITO MUSSOLINI.

CONVENIO FINANCIERO

Se previene:

Que la Santa Sede e Italia, a continuación de la estipulación del Tratado, con el cual ha quedado definitivamente arreglada la *cuestión romana*, han considerado necesario regular por medio de un convenio distinto, pero formando parte integrante del mismo, sus relaciones financieras;

Que el Soberano Pontífice, considerando de un lado los daños ingentes sufridos por la Sede Apostólica por la pérdida del patrimonio de San Pedro, constituido por los antiguos Estados Pontificios y de los bienes de las entidades eclesiásticas, y por otro lado las necesidades, siempre crecientes, de la Iglesia no solamente en la ciudad de Roma, y, sin embargo, teniendo también presente la situación financiera del Estado y las condiciones económicas del pueblo italiano, especialmente después de la guerra, ha resuelto limitar a lo estrictamente necesario la exigencia de la indemnización, requiriendo una parte en contante, parte en consolidado, la cual es de un valor muy inferior a aquella que en el momento actual el Estado debía haber pagado a la misma Santa Sede, aun sólo por el cumplimiento del deber contraído por la ley del 13 de mayo de 1871;

Que el Estado italiano, apreciando los paternos senti-

mientos del Sumo Pontífice, ha creído de su deber atender al requerimiento del pago de dicha suma;

Las dos Altas Partes, representadas por los mismos plenipotenciarios, han convenido:

Artículo 1.

Italia se compromete a pagar, al canje de las ratificaciones del Tratado, a la Santa Sede la suma de setecientos cincuenta millones de liras italianas y a consignar simultáneamente a la misma valores del Consolidado italiano 5 por 100 al portador (con cupón pendiente al 30 de junio próximo veniente) por valor de mil millones de liras italianas.

Artículo 2.

La Santa Sede declara aceptar cuanto arriba se ha dicho acerca del definitivo arreglo de sus relaciones financieras con Italia, como consecuencia de los acontecimientos del año 1870.

Artículo 3.

Todos los actos para dar cumplimiento a la ejecución del Tratado, del presente Convenio y del Concordato, serán exentos de todo tributo.

Roma, 11 de febrero de 1929.

PEDRO, CARDENAL GASPARRI.

BENITO MUSSOLINI.

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE E ITALIA

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Presupuesto:

Que al principio del Tratado entre la Santa Sede e Italia para resolver la *cuestión romana*, la Santa Sede misma ha

propuesto que el Tratado relativo a dicha cuestión fuese acompañado, como necesario complemento, de un Concordato, dirigido a regular las condiciones de la Religión y de la Iglesia en Italia;

Que ha sido concluído y firmado hoy mismo el Tratado para la solución de la *cuestión romana*;

Su Santidad el Sumo Pontífice y Su Majestad Víctor Manuel III, Rey de Italia, han resuelto hacer un Concordato, y para este fin han nombrado los mismos plenipotenciarios delegados para la estipulación del Tratado, esto es, de parte de Su Santidad, su Emma. Rma. el Sr. Cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, Su Excelencia el señor caballero Benito Mussolini, primer ministro y jefe del Gobierno, los cuales, habiendo cambiado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.

Italia, en el sentido del artículo 1 del Tratado, asegura a la Iglesia católica el libre ejercicio del poder espiritual, el libre y público ejercicio del culto, como también de su jurisdicción en materia eclesiástica, de conformidad con las normas del presente Concordato; donde haya lugar, acuerdo para los eclesiásticos, por los actos de su ministerio espiritual, la defensa por parte de su autoridad.

En consideración al carácter sagrado de la Ciudad Eterna, sede episcopal del Soberano Pontífice, centro del mundo católico y meta de peregrinaciones, el Gobierno italiano tendrá cuidado de impedir en Roma todo lo que pueda estar en contraste con dicho carácter.

Artículo 2.

La Santa Sede comunica y tiene correspondencia libremente con los obispos, con el clero y con todo el mundo católico, sin ingerencia alguna del Gobierno italiano.

Igualmente, para todo cuanto se refiere al ministerio pas-

toral, los obispos comunican y se corresponden libremente con su clero y con todos los fieles.

Tanto la Santa Sede como los obispos pueden publicar libremente y también fijar en el interior y en la puerta externa de los edificios destinados al culto o a los oficios de su ministerio, las instrucciones, ordenanzas, letras pastorales, boletines diocesanos y otros documentos relativos al gobierno espiritual de los fieles que creyesen emanar del ámbito de su competencia. Tales publicaciones y fijaciones, y en general todos los actos y documentos relativos al gobierno espiritual de los fieles, no son sujetos a las cargas fiscales.

Las dichas publicaciones, por lo que se refiere a la Santa Sede, podrán ser hechas en cualquier idioma; las de los obispos son hechas en lengua italiana o latina, mas junto al texto italiano la autoridad eclesiástica podrá unir la traducción en otra lengua.

Las autoridades eclesiásticas pueden, sin ingerencia ninguna de la autoridad civil, hacer colectas en el interior y a la entrada de las iglesias, y también en los edificios de su propiedad.

Artículo 3.

Los estudiantes de Teología, los de los últimos dos años de propedéutica a la Teología preparados para el sacerdocio y los novicios de los institutos religiosos pueden, a su petición, diferir de año en año, hasta el vigésimosexto de su edad, el cumplimiento de las obligaciones del servicio militar.

Los ordenados *in sacris* y los religiosos que han emitido sus votos son exentos del servicio militar, salvo el caso de movilización general. En tal caso, los sacerdotes pasan a la fuerza armada del Estado, pero conservando el hábito eclesiástico a fin de que ejerzan entre la tropa el sagrado ministerio, bajo la jurisdicción eclesiástica del ordinario militar, al tenor del artículo 14. Los otros clérigos o religiosos serán, con preferencia, destinados a los servicios sanitarios.

Sin embargo, aunque se haya dispuesto la movilización general, son dispensados de presentarse al llamamiento los sacerdotes con cura de almas. Se considerarán tales los or-

dinarios, los párrocos, los vicepárrocos o coadjutores, los vicarios y los sacerdotes establemente puestos al frente de la rectoría de una iglesia abierta al culto.

Artículo 4.

Los eclesiásticos y los religiosos son exentos del oficio de jurado.

Artículo 5.

Ningún eclesiástico puede ser admitido o permanecer en un empleo u oficio del Estado italiano o de entidades públicas dependientes del mismo, si para ello le pone obstáculo el ordinario diocesano.

La revocación de la autorización del ordinario diocesano priva al eclesiástico de continuar en el ejercicio del empleo o el oficio recibido.

En todo caso, los sacerdotes apóstatas o gravados con censura no podrán ser empleados ni conservados en una enseñanza, oficio o empleo en los cuales estén en contacto inmediato con el público.

Artículo 6.

Los estipendios y las otras asignaciones de que gocen los eclesiásticos por razón de su oficio están exentos de pignorabilidad, en la misma medida en que lo son los estipendios y las asignaciones de los empleados del Estado.

Artículo 7.

Los eclesiásticos no pueden ser requeridos por los magistrados o por otras autoridades para dar informes sobre persona o materia acerca de las cuales hayan venido en conocimiento por razón del sagrado ministerio.

Artículo 8.

En el caso de deferimiento al magistrado penal de un eclesiástico o de un religioso por delito, el procurador del Rey debe informar inmediatamente al ordinario de la diócesis en el cual territorio ejercite él la jurisdicción, y debe solícitamente transmitir de oficio al mismo la decisión instructoria, y, donde haya lugar, la sentencia terminativa del juicio, tanto en primer grado como en apelación.

En caso de arresto, el eclesiástico o el religioso serán tratados con el respeto debido a su estado y a su grado jerárquico.

En el caso de condena de un eclesiástico o religioso, la pena se cumplirá en lugar separado, en cuanto se pueda, de los lugares destinados a los legos, a menos que el ordinario competente no haya reducido al condenado al estado laical.

Artículo 9.

En general, los edificios abiertos al culto son exentos de requisa u ocupación.

Siendo necesario, por grave necesidad pública, ocupar un edificio abierto al culto, la autoridad que proceda a la ocupación debe ponerse previamente de acuerdo con el ordinario, a menos que razones de absoluta urgencia se opongan a ello. En tal hipótesis, la autoridad procedente debe informar inmediatamente al mismo.

Salvo los casos de urgente necesidad, la fuerza pública no puede entrar, para el ejercicio de sus funciones, en los edificios abiertos al culto sin haber dado previo aviso a la autoridad eclesiástica.

Artículo 10.

No se podrá, por ninguna causa, proceder a la demolición de los edificios abiertos al culto sin previo acuerdo con la competente autoridad eclesiástica.

Artículo 11.

El Estado reconoce los días de fiesta establecidos por la Iglesia, que son los siguientes:

Todos los domingos.

El primer día del año.

El día de la Epifanía (6 de enero).

El día de la fiesta de San José (19 de marzo).

El día de la Ascensión.

El día del Corpus.

El día de la fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 de junio).

El día de Todos los Santos (1 de noviembre).

El día de la fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

El día de Navidad (25 de diciembre).

Artículo 12.

Los domingos y días festivos de precepto en la Iglesia, en la iglesia en que oficia un cabildo el celebrante de la misa conventual cantará, según la norma de la Sagrada Liturgia, una plegaria por la prosperidad del Rey de Italia y del Estado italiano.

Artículo 13.

El Gobierno italiano comunicará a la Santa Sede la tabla orgánica del personal eclesiástico afecto al servicio de la asistencia espiritual cerca de las fuerzas militares del Estado, tan luego haya sido aprobada por una ley.

La designación de los eclesiásticos a quienes es encomendada la alta dirección del servicio de asistencia espiritual (ordinario militar, vicario e inspectores), es hecha confidencialmente por la Santa Sede al Gobierno italiano. Siempre que el Gobierno italiano tenga razones para oponerse a la designación hecha, dará de ello comunicación a la Santa Sede, la cual procederá a otra designación.

El ordinario militar será revestido de la dignidad arzobispal.

El nombramiento de los capellanes militares es hecho por la competente autoridad del Estado italiano sobre la designación del ordinario militar.

Artículo 14.

Las tropas italianas de aire, de tierra y de mar gozarán, para el cumplimiento de los deberes religiosos, de los privilegios y de las exenciones acordadas por el Derecho canónico.

Los capellanes militares tendrán, con relación a las referidas tropas, competencia parroquial. Ellas ejercerán el sagrado ministerio bajo la jurisdicción del ordinario militar, asistido por la propia curia.

El ordinario militar tiene también jurisdicción sobre el personal religioso, masculino y femenino, afectos a los hospitales militares.

Artículo 15.

El arzobispo ordinario militar es puesto al frente del cabildo de la iglesia del Panteón, en Roma, constituyendo con él el clero a quien es confiado el servicio religioso de dicha basílica.

Tal clero es autorizado a proveer a todas las funciones religiosas, aun fuera de Roma, que, de conformidad con las reglas canónicas, sean requeridas por el Estado italiano o por la Real Casa.

La Santa Sede acuerda conferir a todos los canónigos afectos al cabildo del Panteón la dignidad de protonotarios *ad instar* mientras ocupen dicho cargo. El nombramiento de cada uno de ellos será hecho por el cardenal vicario de Roma dentro de la presentación de S. M. el Rey de Italia, previa confidencial indicación del presentando.

La Santa Sede se reserva transferir a otra iglesia la diaconía.

Artículo 16.

Las Altas Partes contratantes procederán de acuerdo, por medio de comisiones mixtas, a una revisión de la circunscripción de las diócesis, con el fin de hacerla posiblemente coincidente con la de las provincias del Estado.

Queda entendido que la Santa Sede erigirá la diócesis de Zara; que ninguna parte del territorio sometido a la soberanía del reino de Italia dependerá de un obispo cuya sede se encuentre en territorio sujeto a la soberanía de otro Estado, y que ninguna diócesis del reino comprenderá zona de territorio sometida a la soberanía de otro Estado.

El mismo principio será observado para todas las parroquias existentes o que hayan de constituirse en territorios vecinos a las fronteras del Estado.

Las modificaciones que, después del acuerdo antes indicado, se debieren en lo sucesivo producir en las circunscripciones de las diócesis, serán dispuestas por la Santa Sede, previos acuerdos con el Gobierno italiano y observando las directrices arriba expresadas, salvo las pequeñas rectificaciones de territorio exigidas por el bien de las almas.

Artículo 17.

La reducción de las diócesis que resultare de la aplicación del artículo precedente, será ejecutada a medida que las mismas diócesis vayan vacando.

Queda entendido que la reducción no importará supresión de los títulos de las diócesis ni de los cabildos, que serán conservados, pero agrupándose las diócesis de manera que las capitales de las mismas correspondan a las de las provincias.

Las sobredichas reducciones dejarán salvos todos los actuales recursos económicos de las diócesis y de las otras entidades eclesiásticas existentes en las mismas, comprendidas las asignaciones ahora convenidas con el Estado italiano.

Artículo 18.

Debiéndose, por disposición de la autoridad eclesiástica, agregarse, ya con carácter provisional, ya definitivo, muchas parroquias, sea confiándolas a un solo párroco, asistido por uno o muchos vicepárrocos, ya reuniendo en un solo presbiterio a muchos sacerdotes, el Estado mantendrá inalterado el tratamiento económico debido a dichas parroquias.

Artículo 19.

La elección de los arzobispos y obispos corresponde a la Santa Sede.

Antes de proceder al nombramiento de un arzobispo o de un obispo diocesano o de un coadjutor con derecho de sucesión, la Santa Sede comunicará el nombre de la persona preelegida al Gobierno italiano para asegurarse que dicho Gobierno no tiene razones de carácter político para oponerse al nombramiento.

Las diligencias correspondientes se desarrollarán con la mayor posible solicitud y con toda reserva, de manera que sea mantenido el secreto sobre la persona preelegida mientras no venga el nombramiento de la misma.

Artículo 20.

Los obispos, antes de tomar posesión de su diócesis, prestarán, en manos del jefe del Estado, un juramento de fidelidad, según la fórmula siguiente:

«Delante de Dios y de sus santos ángeles yo juro y prometo, conforme conviene a un obispo, fidelidad al Estado italiano. Yo juro y prometo respetar y hacer respetar por mi clero al rey y al Gobierno establecido según las leyes constitucionales del Estado. Yo juro y prometo, además, que no participaré en ningún acuerdo ni asistiré a ningún consejo que pueda causar daño al Estado italiano y al orden

público, y que no permitiré a mi clero semejante participación. Preocupándome del bien y de los intereses del Estado italiano, procuraré evitarle todo daño que pueda amenazarle.»

Artículo 21.

La provisión de los beneficios eclesiásticos pertenece a la autoridad eclesiástica.

Los nombramientos de los investidos con beneficios parroquiales serán comunicados reservadamente al Gobierno italiano por la competente autoridad eclesiástica, y no podrán tener curso hasta pasados treinta días de la comunicación.

En este término, el Gobierno italiano, cuando graves razones se opongan al nombramiento, podrá manifestarlo reservadamente a la autoridad eclesiástica, la cual, persistiendo el disentimiento, deferirá el caso a la Santa Sede.

Surgiendo graves razones que hagan dañosa la permanencia de un eclesiástico en un determinado beneficio parroquial, el Gobierno italiano comunicará tales razones al ordinario, que, de acuerdo con el Gobierno, tomará dentro de tres meses las medidas apropiadas. En caso de divergencia entre el ordinario y el Gobierno, la Santa Sede confiará la solución de la cuestión a dos eclesiásticos de su elección, los cuales, de acuerdo con dos legados del Gobierno italiano, tomarán una resolución definitiva.

Artículo 22.

No podrán ser investidos de beneficios existentes en Italia eclesiásticos que no sean ciudadanos italianos. Los titulares de las diócesis y de las parroquias deberán, además, hablar la lengua italiana.

Si ocurriere, deberán serles asignados coadjutores que, aparte del italiano, entiendan y hablen también la lengua localmente en uso, con el fin de prestar la asistencia religiosa en la lengua de los fieles, según las reglas de la Iglesia.

Artículo 23.

Las disposiciones de los artículos 16, 17, 19, 20, 21 y 22 no las guardarán Roma ni las diócesis suburbicarias.

Queda entendido también que, aun cuando la Santa Sede procediese a un nuevo arreglo de las dichas diócesis, quedarán invariadas las asignaciones hoy acordadas por el Estado italiano, sea para las nuevas, sea para otras instituciones eclesiásticas.

Artículo 24.

Quedan abolidos el *exequatur* y el regio *placet*, como todos los nombramientos cesáreos o regios en materia de provisiones de beneficios u oficios eclesiásticos en toda Italia, salvo la excepción establecida en el artículo 29, letra g.

Artículo 25.

El Estado italiano renuncia a la prerrogativa soberana del regio patronato sobre los beneficios mayores y menores.

Es abolida la regalía sobre los beneficios mayores y menores.

Es abolido también el tercio pensionable en la provincia del ex reino de las dos Sicilias.

Las cargas relativas cesarán de gravar al Estado y a las administraciones dependientes.

Artículo 26.

Los nombramientos de los investidos con beneficios mayores y menores, y de los que representan temporalmente la sede o el beneficio vacante, tendrán efecto desde la fecha de la provisión eclesiástica, que será oficialmente participada al Gobierno. La administración y el disfrute de las rentas durante la vacante, es disciplinada según las normas del Derecho canónico.

En caso de mala gestión, el Estado italiano, tomados acuerdos con la autoridad eclesiástica, podrá proceder al secuestro de las temporalidades del beneficio, devolviendo su renta neta en favor del investido o, en su defecto, en ventaja del beneficio.

Artículo 27.

Las basílicas de la Santa Casa de Loreto, de San Francisco de Asís y de San Antonio de Padua, con los edificios y obras anejos, exceptuadas las de carácter meramente laico, serán cedidas a la Santa Sede y su administración corresponderá libremente a la misma. Serán igualmente libres de toda ingerencia del Estado y de conversión las demás entidades de cualquier naturaleza gestionadas por la Santa Sede en Italia, como también los Colegios de Misiones.

Resultan, sin embargo, en todo caso aplicables las leyes italianas concernientes a las adquisiciones de los cuerpos morales.

Relativamente a los bienes actualmente pertenecientes a los dichos santuarios, se procederá al reparto por medio de comisión mixta, teniendo respeto a los derechos de terceros y a las dotaciones necesarias a las dichas obras meramente laicas.

Para los otros santuarios en los cuales existan administraciones civiles, entrará la libre gestión de la autoridad eclesiástica, salvo, en su caso, el reparto de los bienes según la norma del párrafo precedente.

Artículo 28.

Para tranquilizar las conciencias, la Santa Sede acordará plena condonación a todos aquellos que, como consecuencia de las leyes italianas onerosas del patrimonio eclesiástico, se encuentren en posesión de bienes eclesiásticos.

A tal fin, la Santa Sede dará a los ordinarios las oportunas instrucciones.

Artículo 29.

El Estado italiano revisará su legislación en cuanto interesa a materia eclesiástica, a fin de reformarla e integrarla, para ponerla en armonía con la directriz en la cual se inspira el Tratado estipulado con la Santa Sede y el presente Concordato.

Queda hasta ahora convenido entre las Altas Partes contratantes cuanto sigue:

a) Quedando firme la personalidad jurídica de las entidades eclesiásticas hasta ahora reconocidas por las leyes italianas (Santa Sede, diócesis, cabildos, seminarios, parroquias, etc.), tal personalidad será reconocida también a las iglesias públicas abiertas al culto, que no la hayan tenido antes, comprendidas las que antes hubiesen pertenecido a las entidades eclesiásticas suprimidas, con asignación, por lo que se refiere a estas últimas, de la renta que actualmente el fondo para el culto destina a cada una de ellas.

Salvo cuanto es dispuesto en el precedente artículo 27, los consejos de administración, dondequiera que existan y cualesquiera que sean sus denominaciones, compuestos totalmente o en su mayor parte de legos, deberán no ingerirse en los servicios del culto, y el nombramiento de los componentes será hecho en inteligencia con la autoridad eclesiástica.

b) Será reconocida la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, con o sin votos, aprobadas por la Santa Sede, que tengan su sede principal en el reino y estén en él representadas, jurídicamente y de hecho, por persona que tenga la ciudadanía italiana y esté domiciliada en Italia.

Será reconocida, además, la personalidad jurídica de las provincias religiosas italianas, en los límites del territorio del Estado y sus colonias, de las asociaciones que tengan la sede principal en el extranjero, cuando concurren las mismas condiciones. Será reconocida también la personalidad jurídica de las casas, cuando por las reglas particulares de cada orden sea atribuída a las mismas la capacidad de adquirir y poseer. Será reconocida, en fin, la personalidad jurídica a las Casas generalicias y a las Procuradurías de las

asociaciones religiosas, también extranjeras. Las asociaciones o las casas religiosas que hayan tenido hasta ahora la personalidad jurídica la conservarán.

Los actos relativos a las transferencias de los inmuebles, de los cuales están ya las asociaciones en posesión, lo mismo que las actuales transferencias testamentarias a las asociaciones mismas, serán exentos de todo tributo.

c) Las confraternidades que tengan por fin exclusivo o prevalente el culto no están sujetas a ulteriores transformaciones en los fines y dependerán de la autoridad eclesiástica en cuanto se refiere al funcionamiento y a la administración.

d) Son admitidas las fundaciones de culto de cualquier especie, con tal que conste que responden a la exigencia religiosa de la población y no se derive de ellas alguna carga financiera al Estado. Tal disposición se aplica también a las fundaciones ya existentes de hecho.

e) En la administración civil del patrimonio eclesiástico proveniente de las leyes aversivas, los consejos de administración serán formados por mitad con miembros designados por la autoridad eclesiástica. Dígase otro tanto respecto a los fondos de religión de las nuevas provincias.

f) Los actos realizados hasta ahora por entidades eclesiásticas o religiosas sin cumplimiento de las leyes civiles, podrán ser reconocidos o regularizados por el Estado italiano sobre demanda del ordinario que debe presentarse dentro de los tres años de entrar en vigor el presente Concordato.

g) El Estado italiano renuncia a los privilegios de exención jurisdiccional eclesiástica del clero palatino en toda Italia (salvo para el agregado a las iglesias de la Santa Sábana de Turín y de Superga, del Sudario, de Roma, y a las capillas anejas a los palacios de residencia de los Soberanos y del Príncipe Real), entrando todos los nombramientos y provisiones de beneficios y oficios bajo las normas de los artículos precedentes. Una conveniente comisión proveerá a la asignación a toda basílica o iglesia palatina de una congrua dotación con los criterios indicados para los bienes de los santuarios en el artículo 27.

h) Quedando firmes las facilidades tributarias ya establecidas a favor de las entidades eclesiásticas por las leyes italianas hasta ahora vigentes, el fin de culto o de religión.

es, para todos los efectos tributarios, equiparado a los fines de beneficencia y de instrucción.

Es abolida la tasa extraordinaria del treinta por ciento impuesta por el artículo 18 de la ley de 15 de agosto de 1867, número 3.848; la cuota de concurso a que se refieren los artículos 31 de la ley 7 julio 1866, número 3.036, y 20 de la ley 15 agosto 1867, número 3.848; también la tasa sobre la circulación del usufructo de los bienes que constituyen la dotación de los beneficios y otras entidades eclesiásticas, establecida por el artículo 1 del R. D. 30 diciembre 1923, número 3.270, quedando excluida también para lo sucesivo la institución de cualquier tributo especial a cargo de los bienes de la Iglesia. No serán aplicados a los ministros del culto, por el ejercicio del ministerio sacerdotal, los impuestos sobre profesiones y la tasa de patentes, instituídas por el R. D. 18 noviembre 1923, número 2.538, en lugar de la suprimida tasa de ejercicio y reventa, ni ningún otro tributo del mismo género.

i) El uso del hábito eclesiástico o religioso por parte de seglares, o por parte de eclesiásticos y religiosos a los cuales haya sido entredicho por procedimiento definitivo por la competente autoridad eclesiástica, lo cual deberá, a este fin, ser oficialmente comunicado al Gobierno italiano, es vedado y castigado con las mismas sanciones y penas con las que es vedado y castigado el uso abusivo de las divisas militares.

Artículo 30.

La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a cualesquiera instituto eclesiástico o asociación religiosa ha lugar bajo la vigilancia y la fiscalización de la competente autoridad de la Iglesia, excluida toda intervención de parte del Estado italiano y sin obligación de sujetar a conversión los bienes inmuebles.

El Estado italiano reconoce a los institutos eclesiásticos y a las asociaciones religiosas la capacidad de adquirir bienes, salvo las disposiciones de las leyes civiles concernientes a las adquisiciones de los cuerpos morales.

El Estado italiano, hasta que se establezca un nuevo acuerdo distinto, continuará supliendo la deficiencia de las rentas de los beneficios eclesiásticos con asignaciones que sean en medida no inferior al valor real de lo establecido por las leyes actualmente en vigor; en consideración de lo cual, la gestión patrimonial de los dichos beneficios, para cuanto concierne a los actos o contratos que excedan de la simple administración, tendrá lugar con intervención por parte del Estado italiano, y, en caso de vacante, la consignación de los bienes será hecha con la presencia de un representante del Gobierno, redactándose acuerdo verbal.

No están sujetas a la intervención sobredicha las mesas episcopales de las diócesis suburbicarias y los patrimonios de los cabildos y de las parroquias de Roma y de las dichas diócesis. A los efectos del suplemento de la congrua, el monto de las rentas que sobre dichas mesas y patrimonios corresponden a los beneficiados resultará de una declaración rendida anualmente bajo la propia responsabilidad por el obispo suburbicario para las diócesis y por el cardenal vicario para la ciudad de Roma.

Artículo 31.

La erección de nuevas entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas será hecha por la autoridad eclesiástica, según las normas del Derecho canónico; su reconocimiento para los efectos civiles será hecho por la autoridad civil.

Artículo 32.

Los reconocimientos y las autorizaciones previstas en las disposiciones del presente Concordato y del Tratado tendrán lugar según las normas establecidas por las leyes civiles, que deberán ser puestas en armonía con las disposiciones del Concordato mismo y del Tratado.

Artículo 33.

Es reservada a la Santa Sede la disponibilidad de las catacumbas existentes en el subsuelo de Roma y de las otras

partes del territorio del reino, con la carga consiguiente de la custodia, de la manutención y de la conservación.

Ella puede, por ende, cumpliendo las leyes del Estado y salvando los eventuales derechos de terceros, proceder a las oportunas excavaciones y al traslado de los cuerpos santos.

Artículo 34.

El Estado italiano, queriendo devolver a la institución del matrimonio, que es la base de la familia, dignidad conforme a la tradición católica de su pueblo, reconoce al sacramento del matrimonio, disciplinado por el Derecho canónico, los efectos civiles.

Las proclamas del matrimonio arriba dicho serán efectuadas lo mismo en la iglesia parroquial que en la Casa Comunal.

Inmediatamente después de la celebración, el párroco explicará a los cónyuges los efectos civiles del matrimonio, dando lectura de los artículos del Código civil relativos a los derechos y a los deberes de los cónyuges, y redactará el acta matrimonial, de la cual, en término de cinco días, transmitirá copia integral al común, con objeto de que sea transcrita a los registros del Estado civil.

Las causas concernientes a la nulidad del matrimonio y a la dispensa del matrimonio rato no consumado, son reservadas a la competencia de los Tribunales y de las oficinas eclesiásticas.

Los proveídos y las sentencias relativas, cuando hayan sido definitivas, serán llevadas al Supremo Tribunal de la Signatura, el cual comprobará si han sido respetadas las normas del Derecho canónico relativas a la competencia del juez, a las citaciones y a la legítima representación o contumacia de las partes.

Los dichos proveídos y sentencias definitivas, con los decretos respectivos del Supremo Tribunal de la Signatura, serán transmitidos a la Corte de Apelación del Estado por el territorio, la cual, con ordenamiento emitido en la Cámara del Consejo, los hará ejecutivos a los efectos civiles y ordenará que sean anotados en los registros del estado civil, al margen del acta de matrimonio.

Cuanto a las causas de separación personal, la Santa Sede consiente que sean juzgadas por la autoridad judicial civil.

Artículo 35.

Para las escuelas de instrucción media tenidas por las entidades eclesiásticas o religiosas, queda firme el Estatuto de examen del Estado para la efectiva paridad de condiciones para los candidatos de los institutos gubernativos y los candidatos de dicha escuela.

Artículo 36.

Italia considera fundamento y coronamiento de la instrucción pública la enseñanza de la doctrina cristiana, según la forma recibida por la tradición católica. Y por eso consiente que la enseñanza religiosa ahora dada en las escuelas públicas elementales tenga un ulterior desenvolvimiento en las escuelas medias, según programa que ha de establecerse, de acuerdo entre la Santa Sede y el Estado.

Tal enseñanza será dada por medio de maestros y profesores, sacerdotes o religiosos, aprobados por la autoridad eclesiástica, y subsidiariamente por medio de maestros y profesores legos, que estén para este fin provistos de un certificado de idoneidad que ha de ser cursado por el ordinario diocesano.

La revocación del certificado por parte del ordinario priva, sin más, al docente de la capacidad de enseñar.

Para la dicha enseñanza religiosa en las escuelas públicas no serán adoptados más que los libros de texto aprobados por la autoridad eclesiástica.

Artículo 37.

Los dirigentes de la educación estatal para la educación física para la instrucción premilitar, de los avanguardistas y de los Balilla, para hacer posible la instrucción y la asis-

tencia religiosa de la juventud a ellos confiada, dispondrán los horarios de manera que no impidan los domingos y días festivos de precepto el cumplimiento de los deberes religiosos.

Otro tanto dispondrán los dirigentes de las escuelas públicas en las eventuales reuniones de los alumnos en los dichos días festivos.

Artículo 38.

El nombramiento de los profesores de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y del dependiente Instituto del Magisterio María Inmaculada, está subordinado a que no haya ninguna oposición de parte de la Santa Sede, dirigida a asegurar que no haya que poner veto desde el punto de vista moral y religioso.

Artículo 39.

La Universidad y los seminarios mayores y menores, sean diocesanos, interdiocesanos o regionales, las academias, los colegios y los otros institutos católicos para la formación y la cultura de los eclesiásticos, continuarán dependiendo únicamente de la Santa Sede, sin ingerencia alguna de la autoridad escolástica del reino.

Artículo 40.

El doctorado en sagrada Teología dado por Facultad aprobada por la Santa Sede, será reconocido por el Estado italiano.

Serán igualmente reconocidos los diplomas que se consigan en las escuelas de paleografía, archivística y diplomática documentaria, erigidas en la biblioteca y archivo de la Ciudad del Vaticano.

Artículo 41.

Italia autoriza en el reino y en sus colonias el uso de honores de caballería pontificios, mediante registro del breve de nombramiento, que debe hacerse a la presentación del mismo breve, acompañado de una solicitud escrita del interesado.

Artículo 42.

Italia admitirá el reconocimiento, mediante decreto Real, de los títulos nobiliarios conferidos por los Soberanos Pontífices, aun después de 1870, y de los que en adelante serán conferidos.

Serán establecidos casos en los cuales el dicho reconocimiento no está sujeto en Italia al pago de tasa.

Artículo 43.

El Estado italiano reconoce las organizaciones dependientes de la Acción Católica Italiana, en cuanto ellas, según la Santa Sede lo ha dispuesto, desenvuelvan su actividad, fuera de todo partido político y bajo la inmediata dependencia de la jerarquía de la Iglesia, para la difusión y la actuación de los principios católicos.

La Santa Sede toma ocasión de la estipulación del presente Concordato para renovar a todos los eclesiásticos y religiosos de Italia la prohibición de inscribirse y militar en cualquier partido político.

Artículo 44.

Si en lo sucesivo surgiese cualquier dificultad sobre la interpretación del presente Concordato, la Santa Sede e Italia procederán, de común acuerdo, a una amigable solución.

Artículo 45.

El presente Concordato entrará en vigor al cambio de las ratificaciones, contemporáneamente al Tratado estipulado entre las mismas Altas Partes, que elimina la *cuestión romana*.

Con la entrada en vigor del presente Concordato cesarán de aplicarse en Italia las disposiciones de los Concordatos decaídos de los ex Estados italianos. Las leyes austriacas, las leyes y reglamentos, las ordenanzas y los decretos del Estado italiano actualmente vigentes, en cuanto estén en oposición con las disposiciones del presente Concordato, se considerarán abrogados con la entrada en vigor del mismo.

Para disponer la ejecución del presente Concordato será nombrada, inmediatamente después de la firma del mismo, una comisión compuesta de las personas designadas por ambas Altas Partes.

Roma, 11 de febrero 1929.—*Pedro Cardenal Gasparri*.—*Benito Mussolini*.

CAPITULO XIV

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE PORTUGAL

La República portuguesa dióse su Constitución el 11 de agosto de 1911.

Todo su contenido religioso está en el artículo 3.

Artículo 3. ...

4.º La libertad de conciencia y de creencia es inviolable.

5.º El Estado reconoce la igualdad política y civil de todos los cultos y garantiza su ejercicio dentro de los límites compatibles con el orden público, las leyes y las buenas costumbres, mientras ellos no ofendan los principios del derecho público portugués.

6.º Nadie puede ser perseguido por motivo de religión y nadie puede ser requerido por ninguna autoridad a declarar la que profesa.

7.º Nadie puede, por motivo de opinión religiosa, ser privado de un derecho o dispensarse del cumplimiento de un deber cívico cualquiera.

8.º Es libre el culto público, no importa de qué religión, en los lugares que sean escogidos a este objeto o a él destinados por sus adeptos respectivos, y que podrán siempre revestir la forma exterior de un templo; sin embargo, en interés del orden público, de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos, una ley especial fijará las condiciones de su ejercicio.

9.º Los cementerios públicos tendrán carácter secular, quedando en ellos libre la celebración de los ritos respecti-

vos de todas las creencias religiosas, con tal que ellos no ofendan la moral pública y los principios de derecho público portugués y la ley.

10. La enseñanza dada en los establecimientos públicos y particulares atendidos por el Estado será neutra en materia religiosa.

12. Es mantenida en vigor la legislación que ha suprimido y disuelto en Portugal la Compañía de Jesús, las asociaciones a ella afiliadas, cualquiera que sea su denominación, y todas las congregaciones religiosas y todas las órdenes monásticas, que jamás serán admitidas en territorio portugués.

Mas Portugal mantiene en vigor o ha concertado recientemente con la Santa Sede diversos Concordatos, que van a continuación.

Uno es el Concordato que Portugal conserva para la metrópoli y otros los concertados para sus posesiones.

El Concordato vigente para el interior de la metrópoli es el último que Portugal concertó con Roma, y éste data de 20 de julio de 1778.

Dice así:

CONCORDATO ENTRE EL PAPA PIO VI Y MARIA I DE PORTUGAL

En nombre de la Santísima Trinidad:

Habiéndose convenido entre la Santidad de Pío VI y la Reina Fidelísima prescribir una nueva regla, de la cual ha de usarse en el nombramiento de los beneficios en los reinos de Portugal y de los Algarbes, ambos celebraron, de mutuo consentimiento, el presente Concordato.

A este efecto fueron designados plenipotenciarios, de parte de Su Santidad, el excelentísimo y reverendísimo señor D. Bernardino Muto, arzobispo petrense, nuncio de la misma Santidad en la Corte Olissiponense; de parte de la Rei-

na, el excelentísimo e ilustrísimo señor D. Ario de Sa Mellio, de su Consejo y su administrador de Negocios Exteriores y secretario de Estado, los cuales, habiéndose comunicado sus respectivas plenipotencias y habiéndolas juzgado en buena y debida forma, convinieron en los siguientes artículos:

1. El Santísimo Padre concede perpetuo indulto para que Su Majestad Real la Reina Fidelísima de Portugal y los Algarbes y sus sucesores pueda y puedan presentar a Su Santidad y a sus sucesores a personas idóneas y aprobadas, según las sanciones canónicas, para los beneficios eclesiásticos, aun curados, excepto los infrascritos, sitos en los reinos de Portugal y los Algarbes, vacantes por muerte de sus respectivos poseedores y reservados a la colación y disposición de la Sede Apostólica en los cuatro de los ocho y en los tres de los seis meses del año, de manera que corresponda a la misma Reina y a sus sucesores el derecho de nombrar para los beneficios que vacaren en los meses de febrero, marzo, agosto y noviembre, o si aconteciere que el arzobispo u obispo de alguna Iglesia aceptare la gracia de alternativa de meses, ofrecida en la regla novena de la Cancillería Apostólica, y al ocurrir esto sólo perteneciese a la Santa Sede la colación de los mismos beneficios sólo en seis alternos meses, entonces para aquellos beneficios que vacaren los meses de marzo, julio y noviembre; y por lo que se refiere a los beneficios curados, habidos en éstos concursos, según forma prescrita por el Concilio Tridentino, será total derecho de Su Majestad nombrar para ellos a las personas que, según informe que ha de darle el ordinario, que se ha de atender a la actas del concurso, fueren consideradas como más dignas. Mas, en igual concurso de méritos entre dos o muchas personas, será libre Su Majestad en gratificar a quien más le pluguiere.

2. Que las dignidades mayores en las iglesias catedrales y las principales en las iglesias colegiales serán reservadas, siempre que vacaren, como antes, a la colación de la Sede Apostólica; así también de pontificia colación, también como antes, serán los beneficios, no sólo cerca de la Sede Apostólica, sino también los respectivamente vacantes, según el decreto puesto en las provisiones de la Sede Apostólica. Asimismo aquellos beneficios que vacaren entre las personas de

los familiares de los cardenales de la S. R. I. y de los oficiales del Sumo Pontífice y, generalmente, todos aquellos que correspondían a la Sede Apostólica, según las reservaciones apostólicas y en vigor de ellas, exceptas las vacantes en los meses enunciados.

3. Que todos, aun los nombrados por el Rey, han de impetrar de la Sede Apostólica oportunas letras apostólicas, selladas con el plomo, según costumbre, y sin mudanza alguna, de suerte que no se les puede dar la posesión de los dichos beneficios sino después de expedidas y presentadas las referidas letras.

4. Que el presente indulto nada se oponga al otro del cual gozan los cardenales y el nuncio apostólico en los mismos reinos, sino que ellos podrán, según las facultades a ellos concedidas, conferir beneficios como antes.

5. Que es derecho pleno de la Sede Apostólica admitir, a su voluntad, renunciaciones de los beneficios y coadjutorías con futura sucesión, sin limitación ninguna, lo mismo que si la presente concesión no se hubiera hecho.

En fe de lo cual, nos, los infrascritos plenipotenciarios, firmamos, de nuestra mano y en nombre de nuestros respectivos señores y en virtud de las facultades de que para este fin hemos sido investidos, el presente Concordato, y lo sellamos con nuestros sellos, en Lisboa, a 20 de julio del año 1778.—*Arzobispo Petrense, Nuncio Apostólico.*—*Ayres de Sa Mello.*

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL ACERCA DEL PATRONATO REGIO DE LAS INDIAS ORIENTALES

La Santa Sede y el Gobierno portugués, reconociendo las dificultades que presenta la ejecución del Concordato de 1886 (1), en consecuencia de las profundas modificaciones ocu-

(1) Se refiere al anterior Concordato, abolido, acerca del Patronato de las Indias orientales.

rridas tanto en Portugal como en la vida religiosa de las Indias, especialmente después de la guerra, se pusieron de acuerdo en regular la circunscripción de las diócesis, el nombramiento de los obispos y la doble jurisdicción de que trata el referido Concordato, y han nombrado plenipotenciario, por parte de la Santa Sede, a su eminencia el cardenal Pedro Gasparri, secretario de Estado de Su Santidad; y por parte del Gobierno portugués, a su excelencia el Dr. D. Augusto de Castro Sampaio Corte-Real, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario; para firmar, bajo reserva de ratificación, el siguiente protocolo:

Artículo I.

La archidiócesis de Goa, a la cual va anejo el título de patriarcal, es incrementada:

a) Con la posesión portuguesa de Damao al norte de Bombay;

b) Con la isla de Diu, sobre la costa de Katiabar.

En consecuencia, el arzobispo será denominado arzobispo de Goa y Damao.

Artículo II.

La parte de la diócesis de Damao que no permanezca incorporada a la archidiócesis de Goa será agregada a la diócesis de Bombay, la cual mantendrá su actual organización eclesiástica.

Artículo III.

El arzobispo de Bombay será alternamente de nacionalidad portuguesa y británica, y tendrá jurisdicción sobre todo el territorio de la archidiócesis, incrementado como queda dicho. Los párrocos portugueses de las dos iglesias de San

Francisco Javier y Nuestra Señora de la Gloria, en Bombay, serán camareros secretos de Su Santidad mientras dure el empleo.

Artículo IV.

La Santa Sede y el Gobierno portugués decláranse de acuerdo para modificar los límites de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor de manera que aseguren de la mejor forma la continuidad del territorio en que se ejerce la jurisdicción episcopal.

En estos términos serán desanejadas de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor las catorce parroquias dispersas en el territorio de las diócesis de Trichinópolis y Tuticorin (costa de Tepescaria) y las seis parroquias dispersas en el territorio de las diócesis de Dacca y de Calcuta.

La diócesis de Santo Tomé de Meliapor conservará los dos territorios continuos de Santo Tomé (junto a Madrasta y en la parte interior de Madrasta) y de Tanjore (más al Sur) y las cinco parroquias dispersas en la ciudad de Madrasta.

Para las compensaciones territoriales y personales que se han de dar a la diócesis de Santo Tomé de Meliapor, la Santa Sede y el Gobierno portugués, tomados los necesarios y oportunos informes, y teniendo a la vista los principios que inspiran la presente convención, especialmente con respecto a las condiciones jurídicas, demográficas y políticas, establecerán un acuerdo dentro de los ocho meses, a contar de la entrada en vigor del presente protocolo. Solamente después de transcurridos los referidos ocho meses se fijarán con bula los nuevos límites de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor.

Artículo V.

El presente protocolo refiérese únicamente a la jurisdicción episcopal y no a la propiedad de los bienes, de los tesoros artísticos, de las escuelas, etc., portugueses, que con-

tinuarán siendo propiedad de las entidades a las cuales actualmente pertenecen.

El clero de las parroquias portuguesas continuará igualmente siendo portugués.

Artículo VI.

En la provisión de las sedes de Goa, Cochim, Santo Tomé de Meliapor y Macao:

a) La Santa Sede, después de consultar, conforme a las prácticas usadas en la Curia romana, a los obispos de la provincia, por intermedio del delegado apostólico de la India y, respectivamente, de la China, escogerá el candidato portugués más idóneo para dirigir la diócesis.

b) Por intermedio del nuncio apostólico de Lisboa o de la Legación de Portugal cerca del Vaticano, la Santa Sede transmitirá confidencialmente a su excelencia el presidente de la República portuguesa el nombre del candidato escogido.

c) El presidente de la República, si el candidato no ofrece dificultad de orden político, presentará oficialmente el nombre a la Santa Sede.

d) Presúmese afirmativa la respuesta del presidente de la República a la consulta de la Santa Sede si no la hace llegar dentro de dos meses a contar del día de la entrega de la respectiva comunicación.

e) Las dos Altas Partes contratantes se pondrán de acuerdo por cada vez para la publicación contemporánea del nombramiento, que deberá permanecer oculto hasta el término de los actos oficiales.

Artículo VII.

En la provisión de las sedes de Bombay, Mangalor, Quilón y Trichinópolis:

a) La Santa Sede, escogido el candidato más idóneo, lo hará conocer, por intermedio del nuncio o de la Legación de Portugal cerca del Vaticano, al presidente de la República.

los familiares de los cardenales de la S. R. I. y de los oficiales del Sumo Pontífice y, generalmente, todos aquellos que correspondían a la Sede Apostólica, según las reservaciones apostólicas y en vigor de ellas, exceptas las vacantes en los meses enunciados.

3. Que todos, aun los nombrados por el Rey, han de impetrar de la Sede Apostólica oportunas letras apostólicas, selladas con el plomo, según costumbre, y sin mudanza alguna, de suerte que no se les puede dar la posesión de los dichos beneficios sino después de expedidas y presentadas las referidas letras.

4. Que el presente indulto nada se oponga al otro del cual gozan los cardenales y el nuncio apostólico en los mismos reinos, sino que ellos podrán, según las facultades a ellos concedidas, conferir beneficios como antes.

5. Que es derecho pleno de la Sede Apostólica admitir, a su voluntad, renunciadas de los beneficios y coadjutorías con futura sucesión, sin limitación ninguna, lo mismo que si la presente concesión no se hubiera hecho.

En fe de lo cual, nos, los infrascritos plenipotenciarios, firmamos, de nuestra mano y en nombre de nuestros respectivos señores y en virtud de las facultades de que para este fin hemos sido investidos, el presente Concordato, y lo sellamos con nuestros sellos, en Lisboa, a 20 de julio del año 1778.—*Arzobispo Petrense, Nuncio Apostólico.*—*Ayres de Sa Mello.*

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL ACERCA DEL PATRONATO REGIO DE LAS INDIAS ORIENTALES

La Santa Sede y el Gobierno portugués, reconociendo las dificultades que presenta la ejecución del Concordato de 1886 (1), en consecuencia de las profundas modificaciones ocu-

(1) Se refiere al anterior Concordato, abolido, acerca del Patronato de las Indias orientales.

rridas tanto en Portugal como en la vida religiosa de las Indias, especialmente después de la guerra, se pusieron de acuerdo en regular la circunscripción de las diócesis, el nombramiento de los obispos y la doble jurisdicción de que trata el referido Concordato, y han nombrado plenipotenciario, por parte de la Santa Sede, a su eminencia el cardenal Pedro Gasparri, secretario de Estado de Su Santidad; y por parte del Gobierno portugués, a su excelencia el Dr. D. Augusto de Castro Sampaio Corte-Real, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario; para firmar, bajo reserva de ratificación, el siguiente protocolo:

Artículo I.

La archidiócesis de Goa, a la cual va anejo el título de patriarcal, es incrementada:

a) Con la posesión portuguesa de Damao al norte de Bombay;

b) Con la isla de Diu, sobre la costa de Katiabar.

En consecuencia, el arzobispo será denominado arzobispo de Goa y Damao.

Artículo II.

La parte de la diócesis de Damao que no permanezca incorporada a la archidiócesis de Goa será agregada a la diócesis de Bombay, la cual mantendrá su actual organización eclesiástica.

Artículo III.

El arzobispo de Bombay será alternamente de nacionalidad portuguesa y británica, y tendrá jurisdicción sobre todo el territorio de la archidiócesis, incrementado como queda dicho. Los párrocos portugueses de las dos iglesias de San

Francisco Javier y Nuestra Señora de la Gloria, en Bombay, serán camareros secretos de Su Santidad mientras dure el empleo.

Artículo IV.

La Santa Sede y el Gobierno portugués decláranse de acuerdo para modificar los límites de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor de manera que aseguren de la mejor forma la continuidad del territorio en que se ejerce la jurisdicción episcopal.

En estos términos serán desanejadas de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor las catorce parroquias dispersas en el territorio de las diócesis de Trichinópolis y Tuticorin (costa de Tepescaria) y las seis parroquias dispersas en el territorio de las diócesis de Dacca y de Calcuta.

La diócesis de Santo Tomé de Meliapor conservará los dos territorios continuos de Santo Tomé (junto a Madrasta y en la parte interior de Madrasta) y de Tanjore (más al Sur) y las cinco parroquias dispersas en la ciudad de Madrasta.

Para las compensaciones territoriales y personales que se han de dar a la diócesis de Santo Tomé de Meliapor, la Santa Sede y el Gobierno portugués, tomados los necesarios y oportunos informes, y teniendo a la vista los principios que inspiran la presente convención, especialmente con respecto a las condiciones jurídicas, demográficas y políticas, establecerán un acuerdo dentro de los ocho meses, a contar de la entrada en vigor del presente protocolo. Solamente después de transcurridos los referidos ocho meses se fijarán con bula los nuevos límites de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor.

Artículo V.

El presente protocolo refiérese únicamente a la jurisdicción episcopal y no a la propiedad de los bienes, de los tesoros artísticos, de las escuelas, etc., portugueses, que con-

tinuarán siendo propiedad de las entidades a las cuales actualmente pertenecen.

El clero de las parroquias portuguesas continuará igualmente siendo portugués.

Artículo VI.

En la provisión de las sedes de Goa, Cochim, Santo Tomé de Meliapor y Macao:

a) La Santa Sede, después de consultar, conforme a las prácticas usadas en la Curia romana, a los obispos de la provincia, por intermedio del delegado apostólico de la India y, respectivamente, de la China, escogerá el candidato portugués más idóneo para dirigir la diócesis.

b) Por intermedio del nuncio apostólico de Lisboa o de la Legación de Portugal cerca del Vaticano, la Santa Sede transmitirá confidencialmente a su excelencia el presidente de la República portuguesa el nombre del candidato escogido.

c) El presidente de la República, si el candidato no ofrece dificultad de orden político, presentará oficialmente el nombre a la Santa Sede.

d) Presúmese afirmativa la respuesta del presidente de la República a la consulta de la Santa Sede si no la hace llegar dentro de dos meses a contar del día de la entrega de la respectiva comunicación.

e) Las dos Altas Partes contratantes se pondrán de acuerdo por cada vez para la publicación contemporánea del nombramiento, que deberá permanecer oculto hasta el término de los actos oficiales.

Artículo VII.

En la provisión de las sedes de Bombay, Mangalor, Quilón y Trichinópolis:

a) La Santa Sede, escogido el candidato más idóneo, lo hará conocer, por intermedio del nuncio o de la Legación de Portugal cerca del Vaticano, al presidente de la República.

b) El presidente de la República hará oficialmente la presentación del dicho candidato en el período de un mes, y el nombramiento se publicará en la forma arriba prevista en el párrafo e del artículo precedente.

Artículo VIII.

Fuera del territorio de la propia diócesis, los fieles dependerán del ordinario local, según el Derecho canónico.

Artículo IX.

Considérase sin efecto cualquier cláusula contraria al presente protocolo contenida en otros documentos, leyes o notas diplomáticas.

Roma, 15 de abril de 1928.

CONVENIO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA LUSITANA ACERCA DE LA DIOCESIS DE MELIAPOR

La Santa Sede y el Gobierno portugués, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo IV del acuerdo celebrado en 15 de abril de 1928, y ratificado el 4 de mayo del mismo año, nombraron plenipotenciarios, respectivamente, a su eminencia reverendísima el señor cardenal Pedro Gasparri, secretario de Estado de Su Santidad, y su excelencia el Dr. Augusto de Castro Sampaio Corte-Real, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, los cuales, bajo reserva de ratificación, concordaron en los siguientes puntos para la definitiva regularización territorial y jurisdiccional de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor, en las Indias Orientales:

Artículo I.

La diócesis de Santo Tomás de Meliapor será, de futuro, constituída solamente por dos distintos y separados terri-

torios continuos: el de Santo Tomás y el de Tanjore, alargados como se determina en los artículos siguientes, y con exclusión de todas las otras parroquias esparcidas en territorios de otras diócesis.

Artículo II.

En la parte de Tanjore, el territorio continuo de la diócesis de Meliapor está extendido por Occidente con los dos *taluks* de Alangudi o de Tirumayam, en el Estado de Pudukkottah, pertenecientes hasta ahora a la diócesis de Trichinópolis, del cual se han desanexado.

El mismo territorio de Tanjore es alargado en su parte septentrional: a) con la parte del *taluk* de Nannilam que se encuentra al norte del río Vettar; b) con el *taluk* de Mayaparam; c) con el *taluk* de Shiyali, y además; d) con la parte del *taluk* de Chidambaram, en el distrito de South-Arcot, que se encuentra al Sur del río Vallar; territorios que forman actualmente parte de la diócesis de Kumbakonam, del cual son desanejados.

Artículo III.

En la parte de Santo Tomé que se extiende hacia la ciudad de Madrás, la diócesis de Meliapor es extendida con el territorio de la archidiócesis de Madrás, que forma civilmente parte del distrito de Chipleput y se encuentra al norte del río Palar, y al sur del río Cooum, quedando así comprendida también en la diócesis de Santo Tomé, por la arte de la ciudad de Madrás situada al sur del referido río Cooum. En compensación de esta cesión, y en conformidad con lo que se establece en el artículo primero de este protocolo, las cinco parroquias de la diócesis de Meliapor esparcidas en la ciudad de Madrás al norte del referido río pasan a la archidiócesis de Madrás.

Artículo IV.

En conformidad con el presente protocolo, las parroquias

dispersas fuera de los dos territorios de Meliapor anejadas a otras diócesis son las siguientes:

Awoor, Cocurnim, Dindigul, Madura, Malleiadipaty, Oriur, Nuestra Señora de los Dolores, en la ciudad de Trichinópolis de Muttupettah, que pasan a la diócesis de Trichinópolis (la parroquia de Venkatakulam continúa perteneciendo a Meliapor, con la anexión del *taluk* de Alangudi).

Gurdalle, Manapad Puunakail, Nuestra Señora de los Dolores de Tuticarín de Vaippar, cedidas a la diócesis de Tuticorin.

Bortakana, Bandel y Cinsurah, que pasan a la archidiócesis de Calcuta.

Nuestra Señora de la Piedad, en la ciudad de Dacca, Hashnabad, Tesgong y Nagory, que son unidas a la diócesis de Dacca.

Shibpur, que pasa a la diócesis de Chittagong.

Assumpción, Corazón de Jesús, San José, Refugio de Rayapuram, que pasan a la archidiócesis de Madrás.

En compensación, las parroquias que la diócesis de Meliapur recibe, como ampliación de los dos territorios contiguos de Tanjor y Santo Tomé, son las siguientes:

de la diócesis de Trichinópolis, en el *taluk* de Alangudi, las parroquias de Pudukkottai, Kottaukadu y la ya indicada de Venkatakulam, y, en el *taluk* de Tirumayan, la parroquia de Samanasur;

de la diócesis de Kumbakonam en el *taluk* de Naunilam: Perumpanayur, Molancoody y Karaiyur; en el *taluk* de Mayavaram: Mayavaram, Manday, Pillavadanday y Tranquebar; en el *taluk* de Shivoly: la parroquia de Erukoor, y en el *taluk* de Chidambaram, la de Palayankottai;

de la archidiócesis de Madrás: Purificación y Santa Teresa, con dos capillas dentro de la ciudad de Madrás; y Poonamallee, Pannur, Kilacherry, Sellampattida y Valasapuram, fuera de la ciudad.

Artículo V.

Atendiendo a las especiales circunstancias de la parro-

quia de Nagory, el obispo de Dacca, a cuya jurisdicción sigue perteneciendo la dicha parroquia, escogerá el respectivo párroco entre los sacerdotes portugueses de la diócesis de Santo Tomé de Meliapor.

Artículo VI.

El presente acuerdo refiérese únicamente a la jurisdicción episcopal y no a la propiedad de los bienes, de los tesoros artísticos, de las escuelas, etc., portugueses, que continuarán siendo propiedad de las entidades a las cuales actualmente pertenecen.

Artículo VII.

Considerándose revocadas todas las disposiciones de anteriores documentos contrarias al presente protocolo.

Roma, 11 de abril de 1929.—*Pedro, Cardenal Gasparri.*—*Augusto de Castro Sampaio Corte-Real.*

CAPITULO XV

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE AUSTRIA

La República federal austriaca dióse su Constitución el 1.º de octubre de 1920, siendo revisada el 30 de julio de 1925 y reformada el 7 de diciembre de 1929.

Poco contenido religioso tiene dicha Constitución: los artículos 7 y 10.

Artículo 7. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No se puede establecer privilegio fundado en nacimiento, sexo, edad, clase ni confesión.

Artículo 10. Pertenece a la Confederación la legislación y ejecución en las materias siguientes: ... núm. 13... cultos...

Austria no ha concertado ningún Concordato después de la guerra. Por consiguiente, está en vigor el anterior a ella, como lo está todavía en España.

Este Concordato es el siguiente:

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y FRANCISCO JOSE I, EMPERADOR DE AUSTRIA

En nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

(Puesto el encabezamiento, siguen los artículos.)

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana se conservará siempre incólume en todo el imperio de Austria y en cada una de las partes de que se compone, con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según el ordenamiento de Dios y los sagrados cánones.

Artículo II.

Teniendo el Romano Pontífice, por derecho divino, el primado lo mismo de honor que de jurisdicción sobre toda la Iglesia, será totalmente libre la comunicación mutua de obispos, clero y pueblo con la Sede Apostólica en las cosas espirituales y negocios eclesiásticos, sin necesidad ninguna de obtener el *regium placet*.

Artículo III.

Los arzobispos, obispos y todos los ordinarios de los lugares comunicarán libremente con el clero y pueblo diocesanos, según el oficio pastoral, y publicarán también libremente sus instrucciones y ordenaciones acerca de las cosas eclesiásticas.

Artículo IV.

Los arzobispos y los obispos tendrán pleno derecho para ejercer también todo aquello que les compete para el régimen de las diócesis, ya por declaración, ya por disposición de los sagrados cánones, según la presente, y aprobada por la Sede Apostólica, disciplina de la Iglesia, y principalmente:

a) Constituir por vicarios, consiliarios y auxiliares de su administración a cualesquiera eclesiásticos a quienes juzgasen idóneos para los predichos oficios.

b) Tomar para el estado clerical y promover a las sa-

gradas órdenes, según los cánones, a los que juzgaren necesarios o útiles a sus diócesis, y, al contrario, apartar de las sagradas órdenes a quienes juzgasen indignos.

c) Erigir beneficios menores y, tomando consejo de la cesárea majestad, principalmente para la conveniente asignación de rentas, crear parroquias, dividir las o unir las.

d) Prescribir preces públicas y otras pías obras, cuando lo exija el bien de la Iglesia, del Estado o del pueblo; prescribir sagradas preces y peregrinaciones y regular las exequias y todas las demás sagradas funciones, guardando en todo las prescripciones canónicas.

e) Convocar y celebrar, según la norma de los sagrados cánones, concilios provinciales y sínodos diocesanos, y divulgar sus actas.

Artículo V.

Toda la formación de la juventud católica en todas las escuelas, lo mismo públicas que privadas, será conforme a la doctrina de la religión católica. Y los obispos, por propio deber de su cargo pastoral, dirigirán la educación religiosa de la juventud en todos los lugares públicos y privados de instrucción y vigilarán diligentemente que en la enseñanza de cualquier disciplina nada haya que se oponga a la religión católica y a la honestidad de las costumbres.

Artículo VI.

Nadie enseñará Sagrada Teología, disciplina catequista o doctrina religiosa en cualquier instituto público o privado si no hubiere obtenido misión y autoridad del obispo diocesano, quien puede revocarla cuando lo creyere oportuno. Los profesores públicos de Teología y los maestros de disciplina catequista, después que los prelados hubiesen expuesto su parecer acerca de la fe de los candidatos, de su ciencia y piedad, serán nombrados de entre aquellos a quienes se encontrasen dispuestos a concederles misión y autoridad de

enseñar. Mas donde algunos profesores de la Facultad de Teología son empleados por el obispo para enseñar la Teología a algunos alumnos de su seminario, serán nombrados como tales profesores aquellos varones a quienes los preladados juzgaren más hábiles para desempeñar tal cargo. Para los exámenes de aquellos que aspiran al grado de doctor en Teología o Sagrados Cánones, la mitad de los examinadores los nombrará el obispo diocesano de entre los doctores de Teología o Derecho canónico.

Artículo VII.

En los gimnasios y en todas las escuelas que llaman medias, destinadas a la juventud católica, sólo serán nombrados profesores o maestros varones católicos, y toda enseñanza estará ordenada, según la naturaleza de la cosa que se trata, a grabar en los corazones la ley de la vida cristiana. Qué libros, en las mismas escuelas, para dar la instrucción religiosa, se han de usar, lo acordarán los obispos, conferenciando entre sí. Para el nombramiento de los maestros de religión en los públicos gimnasios y en las escuelas medias quedará firme lo que acerca de esto saludablemente ha sido constituido.

Artículo VIII.

Todos los maestros de las escuelas elementales destinadas a los católicos estarán sometidos a la inspección eclesiástica. Su majestad cesárea nombrará a los inspectores diocesanos de las escuelas de entre los varones propuestos por el obispo diocesano. En el caso de que en las mismas escuelas no se haya provisto suficientemente a la instrucción religiosa, el obispo nombrará libremente a un varón eclesiástico que enseñe el catecismo a los discípulos. Los que han de ser nombrados maestros de juegos es menester que sean inmaculados en la fe y en la conversación. Será removido de su lugar quien se apartare del recto camino.

Artículo IX.

Los arzobispos, obispos y todos los ordinarios de los lugares ejercerán la propia autoridad con omnímoda libertad para perseguir con censura los libros perniciosos a la religión y a la honestidad de las costumbres, y apartarán a los fieles de su lectura. Pero también el Gobierno, para que no se divulguen estos libros por el Imperio, procurará usar de todos los remedios oportunos.

Artículo X.

Comoquiera que todas las causas eclesiásticas, y en especial las que se refieren a la fe, sacramentos, sagradas funciones y deberes y derechos anejos al sagrado ministerio pertenecen únicamente al fuero de la Iglesia, conocerá de ellas el juez eclesiástico, el cual, por ende, juzgará también de las causas matrimoniales, según los sagrados cánones y, en primer lugar, los decretos tridentinos, dejando sólo al juez secular los efectos civiles del matrimonio. Por lo que atañe a esponsales, la autoridad eclesiástica juzgará de su existencia y de sus efectos en cuanto a impedir el matrimonio, guardando lo que establecen el mismo concilio y las letras apostólicas que comienzan: «Auctorem fidei.»

Artículo XI.

Serán libres los prelados en infligir a los clérigos que no lleven el honesto hábito clerical congruente con su orden y dignidad, las penas establecidas por los sagrados cánones y otras que los mismos obispos juzgaren convenientes, y recluirlos en monasterios, seminarios y casas a esto destinadas. Los mismos prelados no serán impedidos de que fulminen censuras contra cualesquiera fieles transgresores de las leyes eclesiásticas y de los cánones.

Artículo XII.

Del derecho de patronato conocerá el juez eclesiástico; consiente, sin embargo, la Santa Sede en que, cuando se trate de patronato laical, puedan los Tribunales seculares juzgar de la sucesión en cuanto al mismo patronato, ya sean las controversias entre los verdaderos y supuestos patronos, ya entre varones eclesiásticos que hubiesen sido designados por los mismos patronos.

Artículo XIII.

Teniendo en cuenta la condición de los tiempos, Su Santidad consiente en que las causas meramente civiles de los clérigos, como de contratos, débitos, herencias, las conozcan y definan los jueces meramente seculares.

Artículo XIV.

Por la misma causa, la Santa Sede no impide que las causas de los eclesiásticos por crímenes o delitos que son castigados por las leyes penales del Imperio sean llevadas a juez laico, a quien, sin embargo, incumbe hacer de ello sabedor al obispo cuanto antes. Además, en la aprehensión y detención del reo se emplearán aquellas maneras que exige la reverencia del estado clerical. Y si contra algún eclesiástico se da sentencia de muerte o de más de cinco años de cárcel, se comunicarán siempre al obispo los autos judiciales y se le dará facultad de oír al condenado en cuanto sea necesario para que pueda conocer de la pena eclesiástica que se le ha de infligir. Esto mismo se hará, a petición del prelado, si se decretare menor pena. Los clérigos cumplirán la pena de cárcel siempre en lugares separados de los seglares. Y si hubiesen sido condenados por delito o transgresión, serán reclusos en monasterio u otra casa eclesiástica.

En la disposición de este artículo no se comprenden las

causas mayores, acerca de las que decretó el Concilio Tridentino, ses. 24, c. 5, de reform. Para resolver éstas, Su Santidad y su majestad cesárea, si fuera preciso, proveerán.

Artículo XV.

Para que sea honrada la casa de Dios, que es Rey de Reyes y Señor de los que dominan, se guardará la inmunidad de los sagrados templos, en cuanto lo permitan la pública seguridad y las exigencias de la justicia.

Artículo XVI.

El augustísimo emperador no permitirá que la Iglesia católica y su fe, liturgia e instituciones sean despreciadas, ya por palabras, ya por hechos, ya por escritos, y que sean molestados los prelados o los ministros en el ejercicio de su oficio, principalmente en lo que se refiere a la guarda de la fe y en la doctrina de las costumbres y en la disciplina de la Iglesia. Además, si fuere necesario, prestará auxilio eficaz para que las sentencias dadas por los obispos contra los clérigos olvidados de sus deberes sean cumplidas.

Deseando, además, que a los sagrados ministros les sea guardado el debido honor, según los divinos mandamientos, no permitirá que se haga cosa alguna que pueda acarrearles desdoro o proporcionarles desprecio; antes al contrario, mandará que todos los magistrados de su Imperio presten a los mismos arzobispos u obispos, y al clero en toda ocasión, la reverencia y el honor debidos a su dignidad.

Artículo XVII.

Se conservarán los seminarios episcopales, y donde su dotación no baste plenamente al fin para el que deben servir, según la mente del tridentino, se proveerá a su aumento de manera congrua. Los jefes diocesanos los gobernarán y

administrarán de pleno y libre derecho, según la norma de los sagrados cánones. Y así, nombrarán los rectores de los predichos seminarios y los profesores y los maestros, y los removerán siempre que lo juzgaren útil o necesario. Recibirán en ellos, para formarlos, a jóvenes y niños, en tanto juzgaren en el Señor que conviene a sus diócesis. Los que cursaren los estudios en estos seminarios podrán ser admitidos en las escuelas de otro cualquier instituto, previo el examen de idoneidad, y concursar, *servatis servandis*, para cualquier cátedra fuera del seminario.

Artículo XVIII.

La Santa Sede, usando de propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas cuando lo pidiere el bien espiritual de los fieles. Sin embargo, cuando ocurriere, aconsejese del Gobierno imperial.

Artículo XIX.

Su majestad cesárea, en la selección de los obispos, a quienes presenta o nombra para que sean canónicamente instituidos por la Santa Sede, en virtud del privilegio apostólico devuelto a ella por sus serenísimos antecesores, en lo sucesivo se aconsejará también de los obispos comprovinciales.

Artículo XX.

Los metropolitanos y los obispos, antes de tomar posesión del gobierno de la Iglesia, emitirán juramento de fidelidad ante su majestad cesárea, expresado en las siguientes palabras: «Yo juro y prometo sobre los Santos Evangelios de Dios, como corresponde a un obispo, obediencia y fidelidad a la majestad cesáreo-regia apostólica y a sus sucesores; juro también y prometo que no tendré comunicación alguna ni intervendré en ningún consejo que pueda dañar la

pública tranquilidad, ni conservaré ninguna sospechosa unión ni dentro ni fuera de los límites del Imperio, y si llegara a mi conocimiento que amenaza algún peligro, nada omitiré para apartarlo.»

Artículo XXI.

En todas las partes del Imperio, arzobispos, obispos y eclesiásticos tendrán pleno derecho para disponer, según los sagrados cánones, de aquellas cosas que han de dejar al tiempo de la muerte; cuyas prescripciones han de ser observadas también diligentemente por sus herederos legítimos que han de sucederles *ab intestato*. Sin embargo, en ambos casos se exceptúan los ornamentos y vestuario pontifical de los prelados diocesanos, lo cual todo ha de tenerse como de la mesa episcopal, y, por lo tanto, pasarán a los sucesores del prelado. Esto mismo se observará en cuanto a los libros, donde este uso ha sido recibido.

Artículo XXII.

En todas las iglesias metropolitanas o arzobispales y sufragáneas, Su Santidad conferirá la primera dignidad, a no ser que fuera de patronato laical privado, en el cual caso se substituirá por la segunda. Para las demás dignidades y prebendas canonicas, su majestad continuará nombrando, exceptuadas aquellas permanentes que son de libre colación episcopal o están sometidas a derecho de patronato legítimamente adquirido. Para canónigos de dichas iglesias, no serán nombrados sino sacerdotes que tengan las dotes generalmente prescriptas por los cánones y estuvieren versados en la cura de almas, o en los negocios eclesiásticos, o en la enseñanza de las sagradas disciplinas. Se quitará la necesidad que había, además, de título nobiliario, salvo, sin embargo, las condiciones que conste fueron puestas en la fundación. Se conservará diligentemente la laudable costumbre de conferir las canonjías por público concurso, donde esté vigente.

Artículo XXIII.

En las iglesias metropolitanas y episcopales, donde falten, se constituirán, cuanto antes pudiera ser, el canónigo penitenciario y el teólogo, y en las colegiatas, el teólogo, según el modo prescrito por el Concilio Tridentino, confiriendo los obispos dichas prebendas, según las sanciones del mismo Concilio y los respectivos decretos pontificios.

Artículo XXIV.

Se proveerá a todas las parroquias por público concurso, y guardadas las prescripciones del Concilio Tridentino. Para las parroquias de patronato eclesiástico presentarán los patronos a uno de los tres a quienes el obispo propusiere en la forma indicada arriba.

Artículo XXV.

Su Santidad, para dar un testimonio de singular benevolencia a la majestad apostólica del emperador y rey Francisco José, concede a él y a sus sucesores católicos en el Imperio el indulto de nombrar para todas las canonjías y parroquias que están sujetas a resultas del derecho de patronato por fundación religiosa o de estudios, de tal manera, sin embargo, que elijan a uno de los tres a quienes, por público concurso, juzgare el obispo más digno que los demás.

Artículo XXVI.

A las parroquias que no tengan congrua suficiente (según los tiempos y los lugares) se les aumentará la dotación cuanto antes pueda ser, y a los párrocos católicos de rito oriental se les atenderá del mismo modo que a los de rito latino. Por lo demás, lo predicho no se refiere a las iglesias parro-

quiales de derecho de patronato, ya eclesiástico, ya laical canónicamente adquirido, cuyas cargas incumben a los respectivos patronos. Y si los patronos no cumplen satisfactoriamente las obligaciones a ellos impuestas por ley eclesiástica y principalmente cuando ha sido constituída al párroco dotación de fundo de religión, se habrá de proveer del modo que aconsejen las circunstancias.

Artículo XXVII.

Cuando el derecho sobre bienes eclesiásticos derive de canónica institución, todos los que hubieren sido presentados o nombrados para cualesquiera beneficios mayores o menores, no podrán asumir la administración de los bienes anejos a ellos, sino en virtud de canónica institución. Por lo demás, en la posesión de las iglesias catedrales y de los bienes anejos, se observará cuidadosamente lo que ha sido prescrito en las sanciones canónicas, y principalmente en el pontifical y en el ceremonial romano, abolido todo uso o costumbre en contrario.

Artículo XXVIII.

Los regulares, que, según las constituciones de su orden, están sujetos a superiores generales, residentes cerca de la Sede Apostólica, serán regidos por ellos según la norma de las predichas constituciones, salva siempre la autoridad de los obispos, según las sanciones de los cánones y principalmente del Concilio Tridentino. Y así, los predichos superiores generales comunicarán libremente con sus súbditos en todas las cosas que se refieren al ministerio que les incumbe. Además, los regulares que no tengan impedimento del respectivo orden, instituto o congregación, observarán las reglas y admitirán candidatos para el noviciado y para la profesión religiosa según las prescripciones de la Santa Sede.

Todas estas cosas se observarán también respecto a las monjas en lo que a ellas se refiere.

Arzobispos y obispos serán libres de constituir en sus propias diócesis, según los sagrados cánones, órdenes o congregaciones religiosas de ambos sexos; sin embargo, pedirán consejo sobre ello al Gobierno imperial.

Artículo XXIX.

La Iglesia tendrá su derecho de adquirir por cualquier título justo nuevas posesiones, y será solemnemente inviolable su propiedad en todo lo que ahora posee o adquiriera en lo sucesivo. Por tanto, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no se podrá hacer supresión ni cesión alguna sin intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvo las facultades concedidas a los obispos por el Concilio Tridentino.

Artículo XXX.

La administración de los bienes eclesiásticos la tendrán aquellos a quienes corresponde según los cánones. Atendidos, sin embargo, los subsidios que el augustísimo emperador concede del Erario público para subvenir a las necesidades de las iglesias, no podrán ser dichos bienes vendidos ni notablemente gravados, si no dieren su consentimiento lo mismo la Santa Sede que su majestad cesárea, o aquellos a quienes hubieren confiado este encargo.

Artículo XXXI.

Los bienes que constituyen, como se dice, fondos de religión o de estudios, pertenecen por su origen a propiedad de la Iglesia, y en nombre de la Iglesia serán administrados, ejerciendo los mismos obispos la debida inspección según la forma que convendrán la Santa Sede y su majestad cesárea.

Las rentas del fundo de religión, mientras por mutuo acuerdo entre la Sede Apostólica y el Gobierno imperial, se

divida el mismo fundo en dotaciones estables y eclesiásticas, habrán de gastarse en el culto divino, en los edificios de las iglesias, en los seminarios y en todas aquellas cosas que se refieren al ministerio eclesiástico. Para suplir lo que falte, su majestad socorrerá también graciosamente en lo sucesivo, del mismo modo que hasta ahora; y aun, si lo permite la condición de los tiempos, ha de suministrar más amplios subsidios. Del mismo modo, las rentas del fundo de estudios únicamente se gastarán en educación católica y según la piadosa mente de los fundadores.

Artículo XXXII.

Los frutos de los beneficios vacantes, en cuanto se acostumbró hasta ahora, se acumularán al fundo de la religión y a él su majestad cesárea asigna también de *proprio motu* las rentas de los obispados y abadías seculares vacantes por Hungría y los dominios antiguamente anejos, que sus predecesores en el reino de Hungría poseyeron tranquilamente por una larga serie de siglos. En aquellas provincias del Imperio donde no existe fundo de religión, se instituirán para cada diócesis comisiones mixtas que, según la forma y la regla acerca de la cual Su Santidad concertará con la majestad cesárea, administrarán los bienes, ya de la mesa episcopal, ya de todos los beneficios durante el tiempo de la vacante.

Artículo XXXIII.

Cuando, durante el tiempo de las pasadas vicisitudes y en muchos lugares de los dominios austriacos, fueron abolidos los diezmos por ley civil, y no puede hacerse, atendidas las circunstancias, que se restituya su prestación en todo el Imperio, a instancias de su majestad y con miras a la pública tranquilidad, que también a la religión interesa grandemente, Su Santidad permite y establece que, salvo el derecho de exigir los diezmos, donde de hecho existen, en otros lugares, en lugar de los mismos diezmos o a título de

compensación, se asignen dotaciones por el Gobierno imperial, ya en bienes y fundos estables, o fundadas en deuda del Imperio, y que se den a todos aquellos y cada uno que tenían derecho a exigir diezmos; y, además, su majestad declara que las mismas dotes se han de tener, según fueron asignadas, a título oneroso, y se han de percibir y retener por el mismo derecho que los diezmos a los que suceden.

Artículo XXXIV.

Todo lo demás pertinente a personas o cosas eclesiásticas de que no se hace mención en estos artículos, se dirigirá y administrará según la doctrina de la Iglesia y su vigente disciplina aprobada por la Santa Sede.

Artículo XXXV.

Por esta solemne Convención se tendrán por abrogados las leyes, ordenaciones y decretos de cualquier modo y forma dados hasta ahora en el Imperio austriaco y en cada uno de sus dominios, en cuanto le son contrarios; y la misma Convención regirá perpetuamente como ley del Estado en los mismos dominios. Y, por tanto, ambas partes contratantes prometen que ellas y sus sucesores guardarán santamente todas y cada una de las cosas acerca de las cuales se ha concertado. Y si en lo sucesivo sobreviniere alguna dificultad, Su Santidad y su majestad cesárea se pondrán de acuerdo para arreglarla amigablemente.

Artículo XXXVI.

La entrega de las ratificaciones de la presente Convención se hará en el espacio de dos meses a partir de la fecha de estos artículos, o antes, si pudiera ser.

En fe de lo cual, los predichos plenipotenciarios firmaron esta Convención y la sellaron con su sello.

En Viena, a 18 de agosto del año de la Redención 1855.
José Othmar de Bacesches, arzobispo de Viena.—*Miguel, Cardenal Viale Prelá*.

CAPITULO XVI

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE SUIZA

Suiza dióse su vigente Constitución federal el 29 de mayo de 1874.

Su contenido religioso es como sigue :

Artículo 49. La libertad de conciencia y de creencia es inviolable.

Nadie puede ser obligado a formar parte de una Asociación religiosa, a seguir una enseñanza religiosa, a cumplir un acto religioso ni a incurrir en pena ninguna, de ninguna especie que sea, por causa de opinión religiosa.

La persona que ejerce autoridad paternal o tutelar tiene el derecho de disponer, conforme a los principios arriba dichos, de la educación religiosa de los niños hasta la edad de dieciséis años cumplidos.

El ejercicio de los derechos cívicos o políticos no puede ser restringido por prescripciones o condiciones de naturaleza eclesiástica o religiosa cualesquiera.

Nadie puede, por causa de opinión religiosa, excusarse del cumplimiento de un deber cívico.

Nadie está obligado a pagar impuestos cuyo producto es especialmente aplicado a gastos propiamente dichos del culto de una comunidad religiosa a la cual él no pertenece. La ejecución ulterior de este principio queda reservada a la legislación federal.

Artículo 50. El libre ejercicio de los cultos es garantido

en los límites compatibles con el orden público y las buenas costumbres.

Los cantones y la Confederación pueden tomar las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público y de la paz entre los miembros de las diversas comunidades religiosas, lo mismo que contra las intromisiones de las autoridades eclesiásticas sobre los derechos de los ciudadanos y del Estado.

Los pleitos de derecho público o de derecho privado a los cuales da lugar la creación de las comunidades religiosas o una escisión de comunidades religiosas existentes, pueden ser llevados por vía de recurso ante las autoridades federales competentes.

No se pueden eregir obispados sobre el territorio suizo sin la aprobación de la Confederación.

Artículo 51. La orden de los Jesuitas y las sociedades que le son afiliadas no pueden ser reconocidas en ninguna parte de Suiza, y toda acción en la Iglesia o en la escuela es prohibida a sus miembros.

Esta interdicción puede ser extendida también, por vía de acuerdo federal, a otras órdenes religiosas cuya acción fuese dañosa para el Estado o turbase la paz entre las confesiones.

Artículo 52. Está prohibido fundar nuevos conventos de órdenes religiosas y restablecer los que han sido suprimidos.

Artículo 53. El estado civil y la tenencia de los registros que a él se refieren son de la competencia de las autoridades civiles. La legislación federal establecerá a este objeto las disposiciones necesarias. El derecho de disponer de los lugares de sepultura pertenece a la autoridad civil. Esta debe proveer a que toda persona fallecida pueda ser enterrada decentemente.

Artículo 54. No puede fundarse ningún impedimento al matrimonio en motivos confesionales.

Artículo 58. ... La jurisdicción eclesiástica (de los Tribunales) es abolida.

La mayoría de los cantones no tiene otra constitución religiosa que la federal; pero algunos añaden algo más

a ella. Es digna de especial mención la ley supresiva del presupuesto de cultos, de 15 de junio de 1907, del cantón de Ginebra. Dice así:

Artículo 1.º La libertad de cultos es garantida.

El Estado y los comunes no pueden asalariar ni subvencionar a culto alguno.

Nadie puede ser obligado a contribuir por medio de impuestos a los gastos de un culto.

2. Los cultos se ejercen y las iglesias se organizan en virtud de la libertad de reunión y del derecho de asociación. Sus afiliados son obligados a conformarse con las leyes generales, lo mismo que a los reglamentos de policía sobre su ejercicio exterior. Las iglesias pueden, conformándose con las prescripciones del Código federal de las obligaciones, adquirir la personalidad civil con todas las consecuencias jurídicas que de ahí se derivan. Ellas pueden, con la autorización del Gran Consejo, constituirse en fundaciones.

3. Los templos, iglesias, curatos o presbiterios, que son propiedad comunal, conservan su destino religioso. Ellos quedan, como en lo pasado, gratuitamente afectos al culto protestante, al culto católico nacional o al culto católico romano, que se ejercerá el día de entrada en vigor de la presente ley. El co-disfrute no podrá tener lugar más que de consentimiento de la comunidad ocupante.

Bajo reserva de aprobación del Consejo de Estado, los comunes tendrán la facultad de transferir la propiedad de estos edificios a los representantes del culto que los ocupe, estando a cargo de ellos su sostenimiento. Esta cesión será gratuita y exceptuada de los derechos de transferencia. En el caso en que los comunes transfieran la propiedad de los edificios citados, se estipulará que conservarán su destino religioso y que no se podrá disponer de ellos a título oneroso.

4. (Disposición especial relativa al templo de San Pedro, del cual continuará el Estado disponiendo para las ceremonias nacionales.)

5. (Disposiciones transitorias acordando pensiones de retiro a los eclesiásticos de los dos cultos precedentemente retribuidos.)

6. (Institución y atribuciones de una comisión de once miembros, de los cuales seis son nombrados por el Consistorio y cinco por el Consejo de Estado, para administrar y aplicar las cédulas de la caja hipotecaria y los otros bienes del Consistorio y de los consejos de parroquia.)

7. Las iglesias y curatos católicos de Versoix y Chene-Bourg son afectos al culto católico romano en las condiciones idénticas a aquéllas que son estipuladas en los acuerdos del Consejo de Estado de 31 de marzo de 1906 para Versoix y del 27 de mayo de 1907 para Chene-Bourg.—En el caso en que uno de los cultos católicos cesare de ser practicado regularmente en una iglesia comunal, el otro culto será colocado al amparo del artículo 3, tanto para el curato como para la iglesia. Los bienes parroquiales tendrán el mismo destino que las iglesias o los curados de que dependen.

La Confederación Helvética no ha celebrado Concordato ninguno con la Santa Sede para la Confederación. Pero lo han celebrado los cantones de Basilea, el Tesino, Sant-Gall, Lucerna, Zoug, Soleure, Argovia y Turgovia, confirmados por el Gobierno federal.

CONVENCIONES PARA EL CANTON DEL TESINO

I.—CONVENCIÓN PARA REGULAR LA SITUACIÓN RELIGIOSA DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN DEL TESINO

El Consejo federal de la Confederación suiza.

Después de haber visto y examinado la convención concluída entre la Confederación suiza, obrando en nombre propio y del cantón del Tesino, de una parte, y la Santa Sede, de otra parte, para regular la situación religiosa de las parroquias del cantón del Tesino, convención firmada en Berna el 1.º de septiembre de 1884 por los plenipotenciarios de las dos partes y cuyo texto sigue:

El Consejo federal suizo

en nombre propio y en nombre del cantón del Tesino,

y la Santa Sede,

habiendo decidido concluir una convención para regular la situación religiosa de las parroquias del cantón del Tesino,

han nombrado a ese objeto por plenipotenciarios,

el Consejo federal,

a Mr. A. O. Aepli, de Sant Gall, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Viena, y a Mr. R. Peterelli, de Savognino, cantón de los Grissones, miembros del Consejo de los Estados suizos;

la Santa Sede,

a monseñor D. Ferrata, prelado de la Cámara de San Pedro, subsecretario de la Congregación de Negocios eclesiásticos extraordinarios,

los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes, bajo reserva de la ratificación de sus altos mandantes:

Artículo 1.

Las parroquias del cantón del Tesino serán separadas canónicamente de las diócesis de Milán y de Como y colocadas bajo la administración de un prelado que tomará el título de administrador apostólico del cantón del Tesino.

Artículo 2.

El nombramiento del administrador apostólico será hecho por la Santa Sede.

Artículo 3.

Para el caso en que el titular acabase de morir antes de la organización definitiva de la situación religiosa de las parroquias del cantón del Tesino, el Consejo federal, el cantón del Tesino y la Santa Sede se entenderán sobre la prolongación de la administración provisional instituída por esta convención.

Artículo 4.

El cantón del Tesino se obliga a tomar las medidas necesarias para la ejecución de esta convención, principalmente en lo que concierne al tratamiento del administrador apostólico, su residencia, etc.

Artículo 5.

Las ratificaciones de esta convención serán canjeadas en Berna en el término de tres meses.

En Berna, el 1.º de septiembre de 1884.—A. O. Aepli.—R. Peterelli.—D. Ferrata;

Declara

en su propio nombre y en nombre del cantón del Tesino, que la convención arriba expresada es ratificada y tiene fuerza de ley en todas sus partes, prometiendo, en nombre de la Confederación suiza y en el del cantón del Tesino, observarla conscientemente y en todo tiempo en tanto que de ellos dependa.

En fe de lo cual,

las presentes han sido firmadas por el Presidente y el canciller de la Confederación suiza y selladas con el sello federal.

En Berna, a 29 de noviembre de 1884.—En nombre del Consejo federal suizo, el Presidente de la Confederación, *Welti*.

II.—CONVENCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN APOSTÓLICA EN EL CANTÓN DEL TESINO

*Confederación suiza.—El Consejo de Estado del cantón
del Tesino.*

Vista y examinada la convención concluída entre el cantón del Tesino y la Santa Sede, con el fin de proveer a la institución de una administración apostólica en el cantón mismo, convención estipulada en Bellinzona el 23 de septiembre del corriente año:

Vista la resolución del Gran Consejo del 27 de noviembre de 1884, por la cual el Consejo de Estado es encargado de conferir la ratificación a la mentada convención, así expresada:

«Como consecuencia de la convención estipulada en Berna el 1.º de septiembre del corriente año entre el delegado de la Santa Sede y los delegados del Alto Consejo federal suizo, con la cual convención el cantón del Tesino asumía la obligación de tomar las providencias necesarias para la institución de una administración apostólica en su territorio, la Santa Sede y el Consejo de Estado del cantón del Tesino han juzgado necesario proceder a una ulterior particular convención, dirigida a determinar y establecer de común acuerdo las predichas providencias.»

A tal fin, han nombrado sus plenipotenciarios, a saber:

La Santa Sede,

a monseñor Domingo Ferrata, prelado doméstico de Su Santidad, subsecretario de la Congregación de Negocios eclesiásticos extraordinarios, y

el Consejo de Estado del cantón del Tesino,

al señor abogado Pedro Regaszi, consejero de Estado, y al señor abogado Maximiliano Magatti, diputado del Gran Consejo, los cuales, después de haber cambiado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido sobre los artículos siguientes, bajo reserva de la ratificación de sus respectivos comitentes:

Artículo 1.

El administrador apostólico será libre de ejercitar su espiritual jurisdicción sobre todo el territorio del cantón del Tesino.

Artículo 2.

El mismo tendrá plena libertad en la elección de su vicario y del personal de su cancillería, como también en la publicación de sus cartas pastorales y de otros documentos referentes a su espiritual ministerio.

Artículo 3.

El administrador apostólico residirá provisionalmente en Balerna. Pero queda convenido que su sede definitiva deberá ser inmediatamente establecida en una de las ciudades del cantón, que será escogida de común acuerdo.

El Gobierno del cantón tesino proveerá al dicho administrador apostólico de alojamiento conveniente, según los fondos a esto reservados.

Artículo 4.

Con los dichos fondos el Gobierno del cantón del Tesino se obliga a constituir a la administración apostólica pro-

pia del cantón del Tesino y directamente dependiente de la Santa Sede, un patrimonio, cuyas rentas anuales no serán inferiores a diecisiete mil francos.

Esta suma, por valor de doce mil francos, constituirá la asignación del administrador apostólico, y por cinco mil francos será gastada en la institución de la cátedra de Filosofía y Teología destinada a la instrucción de los clérigos de ambos ritos, romano y ambrosiano, en torno a los cuales ritos no se hará ninguna innovación.

Artículo 5.

El Gobierno del cantón tesino continuará subvencionando anualmente al seminario de Pollegio con la suma de seis mil francos.

Artículo 6.

El administrador apostólico tendrá completa libertad respecto a todo lo que se refiere al ordenamiento, instrucción y administración del seminario o seminarios del cantón. Estará, por consecuencia, en su poder nombrar y remover a los directores, superiores y profesores de tales institutos.

Artículo 7.

El Gobierno del cantón del Tesino no intenta con esta convención que queden perjudicados de algún modo los derechos o ventajas derivados de las fundaciones religiosas o de los legados y causas pías que, según razón, equidad o costumbre puedan competer al Estado del Tesino, a los cuerpos morales y a los ciudadanos del cantón como formando parte hasta aquí de las diócesis de Milán y Como.

Artículo 8.

Las ratificaciones del presente convenio serán cambiadas en Bellinzona en el término de tres meses.

Bellinzona, 23 de septiembre de 1884.—*Domingo Ferrara*.—*Avv. Pedro Regozzi*.—*Avv. Maximiliano Magatti*;

Declara

que la dicha convención es ratificada y tiene fuerza de ley en todas sus partes, prometiendo en nombre de la República y del cantón del Tesino observarla en consciencia en todo tiempo.

En fe de lo cual,

la presente ratificación está firmada y sellada con el sello del Estado, en Bellinzona, el día 2 de diciembre de 1884.—En nombre del Consejo de Estado, el Vicepresidente, *Dr. Jorge Casella*.—El consejero secretario de Estado, *Ing. F. Gianella*.

III.—CONVENCIÓN RELATIVA AL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DEL
CANTÓN DEL TESINO*El Consejo federal de la Confederación suiza.*

Después de haber visto y examinado la convención concluída, bajo reserva de ratificación, en Berna, el 16 de marzo de 1888 por los plenipotenciarios de Suiza y de la Santa Sede para regular definitivamente la situación religiosa de las parroquias del cantón del Tesino, convención que ha sido aprobada por el Consejo de los Estados de 28 de junio de 1888 y por el Consejo Nacional de 29 del mismo mes, y cuyo texto es como sigue:

El Consejo federal suizo, en su propio nombre y en nombre del cantón del Tesino, y la Santa Sede.

En ejecución de la convención de 1.º de septiembre de 1884, queriendo regular definitivamente la situación religiosa de las parroquias del cantón del Tesino, han nombrado para este objeto sus plenipotenciarios, a saber:

El Consejo federal suizo,

a monseñor Numa Droz, jefe del Departamento de Negocios Extranjeros, y a monseñor Louis Ruchonnet, jefe del Departamento de Justicia y Policía.

La Santa Sede,

a monseñor Domingo Ferrata, arzobispo de Tesalónica, nuncio apostólico en Bruselas, los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido acerca de los siguientes artículos, a reserva de la ratificación de sus altos comitentes:

Artículo 1.

En el momento de entrar en vigor la presente convención, la iglesia parroquial y colegial de San Lorenzo, en Lugano, será erigida en iglesia catedral para todo el territorio del cantón del Tesino, y esta iglesia será unida canónicamente y con igualdad de derechos a la iglesia de Basilea, cuyo ordinario llevará en adelante el título de obispo de Basilea y de Lugano.

Artículo 2.

Para la administración de la iglesia catedral reünida, la Santa Sede nombrará, de inteligencia con el obispo diocesano,

un administrador apostólico, que será escogido entre los sacerdotes dependientes de la jurisdicción del Tesino.

El administrador apostólico tendrá el carácter episcopal; residirá en el cantón y llevará el título de administrador apostólico del Tesino.

Artículo 3.

Las disposiciones de la convención del 26 de marzo de 1828 concernientes al nombramiento del obispo de Basilea serán extendidas a la iglesia catedral reunida, si las otras partes interesadas consienten en ello.

Artículo 4.

No se aporta ninguna modificación al artículo IV de la convención del 1.º de septiembre de 1884 y a los arreglos que puedan derivarse de ahí.

En consideración al hecho de que el cantón del Tesino soporta los gastos de su administración especial, este cantón y su administrador apostólico no contribuirán ni a la mesa del obispo diocesano ni a otros gastos de la administración general de la diócesis.

Artículo 5.

El administrador actual permanece en el beneficio de su nombramiento, hecho por la Santa Sede el 20 de septiembre de 1887.

Artículo 6.

Las ratificaciones de este convenio serán cambiadas en Roma en el término de cuatro meses, y la convención entrará en vigor seis meses después de este canje.

Protocolo final.

Se entiende: 1.º, que la iglesia catedral reunida no tomará otra parte alguna en la administración de la diócesis de Basilea, que aquella de que hace mención el artículo 3; 2.º, que la puesta en vigor y la plena aplicación de la convención no están subordinadas a la extensión de las disposiciones de la convención de 26 de marzo de 1828, prevista por dicho artículo 3, ni al uso eventual de la facultad que se deriva de esta extensión.

Berna, 16 de marzo de 1888.—*Droz.*—*L. Ruchonnet.*—*Domingo Ferrata*, arzobispo de Tesalónica, nuncio apostólico en Bruselas;

Declara

que la convención puesta arriba es ratificada y tiene fuerza de ley en todas sus partes, prometiendo, en nombre de la Confederación suiza, observarla conscientemente en todo tiempo, en tanto que dependa de ésta.

En fe de lo cual, la presente ratificación ha sido firmada por el Vicepresidente de la Confederación suiza y sellada con el sello federal.

En Berna, el 4 de julio de 1888.—En nombre del Consejo federal, el Vicepresidente, *Hammer.*—El canciller de la Confederación, *Ringier.*

CONVENCION PARA LA ADMINISTRACION REGULAR DE LA DIOCESIS DE BASILEA

El Consejo federal de la Confederación suiza.

Después de haber visto y examinado la convención concluída entre la Confederación suiza, procediendo en nombre de los cantones de Lucerna, Zoug, Soleure, Basilea-Campiña, Argovia y Turgovia, de una parte, y la Santa Sede,

de otra, para proveer a la administración regular de la diócesis de Basilea, convención firmada en Berna el 1.º de septiembre de 1884 por los plenipotenciarios de las dos partes, y cuyo tenor es como sigue:

La situación anormal en que se encuentra la diócesis de Basilea, habiendo reclamado la atención de la Santa Sede y de los cantones diocesanos,

el Consejo federal suizo,

en nombre de los cantones de Lucerna, Zoug, Soleure, Basilea-Campiña, Argovia y Turgovia, y

la Santa Sede,

han juzgado necesario proveer a la administración regular de esta diócesis.

Han nombrado a ese objeto sus plenipotenciarios, a saber:

El Consejo federal,

a monseñor A. O. Aepli, de San-Gall, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Viena, y a monseñor R. Peterelli, de Savognino, cantón de los Grissones, miembros del Consejo de los Estados suizos.

La Santa Sede,

a monseñor Domingo Ferrata, prelado doméstico de Su Santidad, subsecretario de la Congregación de Negocios eclesiásticos extraordinarios,

los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y halládoslos en buena y debida forma, han convenido, salvo la ratificación de sus altos comitentes, en los artículos siguientes:

Artículo 1.

Luego que monseñor Eugenio Sachat haya recibido de la Santa Sede otro destino, se procederá al nombramiento de un sucesor en la sede episcopal de Basilea.

Artículo 2.

En derogación de las disposiciones de la convención de 26 de marzo de 1828, que regula las relaciones entre las partes contratantes, el nombramiento del sucesor de monseñor Sachat es devuelto a la Santa Sede, que escogerá para esta dignidad a un eclesiástico de la diócesis de Basilea, aceptado por el Consejo federal y poseyendo las cualidades exigidas por los cánones de la Iglesia.

Se entiende expresamente que esta derogación no creará un precedente contrario a las disposiciones de la precitada convención.

Artículo 3.

Una vez instalado el nuevo obispo, se procederá a la constitución del cabildo catedral de Soleure y al reglamento de las cuestiones financieras que puedan surgir.

Artículo 4.

La ratificación de la presente convención será canjeada en Berna en el término de tres meses.

En Berna, 1.º de septiembre de 1884.—A. O. Aepli.—R. Peterelli.—D. Ferrata;

Declara

en nombre de los cantones de Lucerna, Zoug, Soleure, Basilea-Campiña, Argovia y Turgovia, que la convención arriba

dicha es ratificada y tiene fuerza de ley en todas sus partes, prometiendo, en nombre de los cantones arriba mencionados, observarla conscientemente y en todo tiempo y en cuanto de ella dependa.

En fe de lo cual, las presentes han sido firmadas por el Presidente y el canciller de la Confederación suiza y selladas con su sello.

En Berna, el 29 de noviembre de 1884.—En nombre del Consejo federal suizo, el Presidente de la Confederación, *Wetti*.—El canciller de la Confederación, *Ringier*.

REORGANIZACION DEL OBISPADO DE SAN-GALL

Entre el Rvmo. y Excmo. Sr. D. Jerónimo de Andrea, arzobispo de Mileto, nuncio apostólico cerca de la Confederación Helvética, etc., etc., delegado por la Santidad del Papa Gregorio XVI, y los señores D. Jacobo Baumgartner, consejero del Gobierno, y D. Leonardo Gmür, miembro del Senado administrativo de los católicos del cantón de San-Gall, en nombre y por mandato del Supremo consejo católico y del Senado administrativo de los católicos del mismo cantón, delegados para esto.

Entregados mutuamente los legítimos y auténticos instrumentos de su respectiva plenipotencia, a reserva de la aprobación suprema mutua, es decir, el consentimiento del Supremo consejo católico del cantón de San-Gall y la sanción del gran Consejo del mismo cantón, convinieron acerca de los siguientes artículos:

Artículo 1. Se constituye por fin la diócesis de San-Gall, rota la unión con la diócesis de Coira, en propio e indivisible obispado, para los pobladores católicos del cantón de San-Gall dentro de sus términos geográficos.

Artículo 2. El obispo residirá junto a la iglesia primaria de los católicos del cantón de San-Gall, la cual, guardada su cualidad de iglesia parroquial, obtendrá el nombre de iglesia catedral de San-Gall.

Artículo 3. El nuevo cabildo de la iglesia catedral de San-Gall constará de cinco capitulares residentes con la sola

dignidad del decano (deán, en España) y cuatro canónigos, y además ocho canónigos foráneos, o rurales o titulares, y tres presbíteros auxiliares o vicarios.

Artículo 4. La cura de almas de los parroquianos será habitual cerca del cabildo residente, la cual ejercerá del modo hasta aquí usado, ayudado por tres coadjutores ya existentes. Y los tres vicarios predichos se añadirán de más al cabildo, ya para el servicio de la iglesia en la ejecución de las funciones sagradas, ya en auxilio para ejercer la cura de almas.

Artículo 5. Los canónigos residenciales constituirán ordinariamente el senado del obispo e intervendrán en las cosas del gobierno de la Iglesia y en regir el seminario y ejercer la cura en él, y proveerán al servicio divino público en la iglesia de San-Gall. Para el cumplimiento de las católicas sanciones, el obispo mandará ejercer a uno de los capitulares el oficio de penitenciario y a otro el de teólogo, el cual, los días establecidos, enseñará la doctrina católica.

Artículo 6. Para la primera elección del obispo, el Supremo senado católico del cantón de San-Gall exhibirá a la sede apostólica una nota de cinco clérigos elegibles, de entre los cuales nombrará al obispo el Santo Padre, al cual conferirá a la vez la institución canónica.

Artículo 7. Sobreveniendo de cualquier modo la vacante de la sede episcopal de San-Gall, el derecho de elección del nuevo obispo residirá en el cabildo catedral y ha de ser ejercido por los canónigos, tanto residenciales como foráneos o titulares, en el término de tres meses, a contar desde el día de la defunción del obispo.

El elegido debe ser persona no ingrata al Supremo consejo católico.

Artículo 8. Si la elección se reconoce hecha canónicamente y constare debidamente, según la forma usada en Suiza para los obispados, de las cualidades del mismo elegido según la norma de los sagrados cánones, el Sumo Pontífice dará al elegido la institución canónica.

Artículo 9. Para que alguien sea elegible para la dignidad de obispo, aparte de las cualidades canónicas, se requiere que el eligiendo sea presbítero del clero diocesano y se

hubiere consagrado durante muchos años en la misma diócesis a la cura de almas, a la enseñanza o a la administración de la diócesis con mérito y distinción.

Artículo 10. El obispo de San-Gall emitirá ante los delegados del Gobierno del cantón el juramento de fidelidad según la fórmula aprobada por la Santa Sede.

Artículo 11. El cabildo catedral se constituirá la primera vez de esta manera: Después que el obispo hubiere sido instituido por autoridad de la sede apostólica, el Sumo Pontífice le comisionará para que en nombre de él elija al decano y a los canónigos, lo mismo residentes que foráneos, y a los vicarios del cabildo de entre tales presbíteros que no sean ingratos al Senado administrativo católico, y les conferirá la institución canónica.

Artículo 12. En las futuras vacantes del decanato, el obispo presentará del orden de los canónigos residentes o foráneos a tres candidatos al Senado administrativo católico, de entre los cuales el Senado nombrará al decano; mas el nombrado, antes de tomar posesión de su prebenda y de percibir rentas, deberá obtener la institución canónica de la sede apostólica. De las demás cuatro canonjías residenciales, para dos nombrará el Senado católico de administración, y los nombrados recibirán, como arriba, institución canónica del Sumo Pontífice; para las otras dos nombrará el obispo, que también dará a los nombrados la institución canónica.

Artículo 13. Para cada una de las canonjías foráneas, siempre que vacaren, se ha de exhibir al Senado administrativo católico dentro de seis semanas, a partir del día de la vacante, una nota de cinco candidatos que estén dotados de las cualidades requeridas; el Senado, si quiere, excluirá dentro de otras seis semanas a los que no le agradaren, dejando, sin embargo, en cada caso tres para la libre opción del nominante, de entre los cuales, luego, es elegido el canónigo en el espacio de un mes, de esta manera:

Para las canonjías que vacaren los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, el obispo propondrá una nota del nombramiento al supracitado Senado administrativo católico, y el cabildo de los canónigos, ya residentes, ya

foráneos, nombrará al canónigo de entre los candidatos remanentes en la nota, el cual, después, deberá obtener, como arriba, la institución canónica de la sede apostólica.

Para las canonjías que vacaren en los restantes meses del año, el cabildo propondrá al Senado administrativo católico la nota del nombramiento, y de entre los candidatos que quedaren en la nota el obispo elegirá al canónigo, al cual conferirá también la institución canónica.

Los tres vicarios siempre serán elegidos libremente por el obispo de entre los clérigos elegibles del cantón, y por él serán canónicamente instituidos.

Artículo 14. Elegibles para canonjías son los presbíteros seculares que tengan los requisitos canónicos en general y en especial que sean diocesanos de San-Gall y dedicados allí durante mucho tiempo a la cura de almas con celo y prudencia, o adictos a otras funciones eclesiásticas, o beneméritos o muy notables e ilustres en oficios de la curia episcopal, o en la dirección del seminario, o en la función de enseñar.

Artículo 15. El seminario para formación de los clérigos de la diócesis de San-Gall, ya instituido, estará bajo la dirección del obispo, según las prescripciones de la Iglesia. El Senado administrativo católico le asignará, según su condición hasta ahora observada, congruente habitación y fondos.

Artículo 16. Se constituirán y asignarán para el obispo unas rentas anuales de 4.000 florines renanos; para el decano del cabildo, 1.200 florines; para cada uno de los restantes cuatro canónigos, 1.000 florines, y para cada uno de los tres vicarios, 400 florines.

Los canónigos foráneos, cuantas veces son convocados a cabildo, recibirán congrua gratificación.

Las rentas del canónigo a quien se hubiere confiado la administración de la parroquia se aumentarán hasta la suma de 1.200 florines.

Artículo 17. Aparte de las citadas rentas anuales, al obispo, al decano y a cada uno de los restantes canónigos residenciales se les asignarán habitaciones libres y congruas a su dignidad y también se les asignarán a los vicarios lu-

gares necesarios para habitar, y serán conservados a expensas del Senado administrativo católico.

Del mismo modo se otorgarán gratis lugares oportunos al obispo y a la curia episcopal para el régimen de la diócesis, a la cancillería y al archivo, y al seminario clerical.

Artículo 18. Del régimen de aranceles y tasas que por cualquier título se han de exigir, ya para gastos de cancillería, ya para gastos del Senado episcopal en las causas eclesiásticas, principalmente matrimoniales, el obispo lo acordará junto con el Senado administrativo católico.

Artículo 19. Acerca de las rentas de la mesa episcopal que acrezcan por la vacante de la sede, corresponderá la mitad al obispo sucesor, para que tenga por donde proveer a las primeras necesidades de su casa; pero la restante parte corresponderá al vicario capitular.

Artículo 20. Para constituir y defender la dotación, ya de sustentación de la iglesia catedral y del seminario clerical, ya de los frutos y rentas del obispo y del cabildo, se constituirán y asignarán capitales y fondos correspondientes en títulos e hipotecas seguros, y se declararán como dotación enajenable de ellos, en estas cantidades:

a) Para la iglesia catedral y las prebendas adjuntas, 200.000 florines, cuyos títulos existen ya, y se guardarán en el archivo de la misma iglesia;

b) Para el seminario clerical y la prebenda adjunta, 75.000 florines, cuyos títulos existen, y se conservarán en el mismo archivo de la catedral.

c) Para la mesa episcopal y las restantes prebendas del cabildo, 160.000 florines, cuyos títulos, al mismo tiempo que fuere promulgada la bula pontificia sobre reorganización del obispado de San-Gall, se depositarán y en adelante se conservarán en el archivo episcopal.

Artículo 21. Además, en expresos términos se declara y sanciona que las dotaciones propias de la iglesia catedral y del seminario clerical, colocadas para ellos en la presente suma de capitales, han de ser conservadas con toda seguridad en todo caso.

Artículo 22. Todos y cada uno de los documentos, cualesquiera que sean, en favor de la administración de la dió-

cesis, que se refieran a la diócesis de San-Gall, sacados de las escribanías de los viejos archivos episcopales, han de ser entregados a la nueva cancillería episcopal.

Artículo 23. Y si en lo sucesivo también otros cantones, con sus habitantes católicos, quieren unirse a la diócesis de San-Gall, resérvanse a ulterior convención las disposiciones requeridas para esto.

La Convención, escrita por duplicado, firmada y sellada por los delegados de ambas partes contratantes, después que fueren publicadas las ratificaciones que se reservaron al principio, se ha de poner en ejecución.

En Lucerna, a 7 de noviembre de 1845.—En nombre del Sumo Pontífice el Papa Gregorio XVI, *Jerónimo de Andrea*, arzobispo melitense y nuncio apostólico.—En nombre del Supremo consejo católico y por mandato del Senado de administración de los católicos del cantón de San-Gall, los delegados del mismo Senado, *Jacobo Baumgartner*, consejero del Gobierno; *Leonardo Gmür*, consejero de la Administración católica.

CAPITULO XVII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE SUECIA, NORUEGA, HUNGRIA, DINAMARCA Y DANTZIG

I. SUECIA

La Constitución vigente en Suecia es de 6 de junio de 1809.

Su contenido religioso es como sigue:

Artículo 2. El Rey deberá siempre profesar la pura doctrina evangélica, tal como fué adoptada y explicada por la confesión inalterada de Augsburgo y por la decisión del Sínodo de Upsal en 1593.

El artículo 4 obliga a que todos los miembros del Consejo de Estado profesen la pura religión evangélica, condición que fué suprimida en 1845 como contraria al artículo 28.

Artículo 16. El Rey debe mantener y favorecer la justicia y la verdad, combatir e impedir la injusticia y la iniquidad...; no violentar ni permitir que se violente la conciencia de nadie, sino que debe proteger a todos en el libre ejercicio de su religión, con tal que no sea turbada la tranquilidad pública o no resulte escándalo público...

Artículo 28. ... El Rey podrá también, después de haber tomado informe o sobre presentación de autoridades competen-

tes, nombrar o promover a extranjeros de un mérito distinguido, que hagan profesión de la pura doctrina evangélica, a funciones de profesor en las Universidades...

... las mujeres... no podrán ser nombradas para cargos eclesiásticos... Nadie puede ser nombrado para cargos eclesiásticos ni a empleo alguno que acarree obligación de dar instrucción cristiana o enseñar teología, si no hace profesión de la pura doctrina evangélica. Todos los otros empleos y funciones, salvo la excepción indicada en el artículo 4, concerniente a los miembros del Consejo de Estado, pueden ser desempeñados por personas pertenecientes a otras confesiones cristianas, y aun de la religión mosaica; sin embargo, nadie puede, si no pertenece a la pura doctrina evangélica, participar, en cualidad de juez o de titular de una función pública, en la deliberación o decisión de los negocios relativos al cuidado de la religión, a la instrucción religiosa o a los nombramientos en el seno de la Iglesia sueca...

Artículo 29. El arzobispo y los obispos serán nombrados por el Rey, sobre una lista de presentación de tres candidatos que le será propuesta de la manera prescrita por las leyes eclesiásticas.

Artículo 30. La colación de las funciones eclesiásticas en las asambleas y el derecho que pertenece, a este respecto, al Rey y a las asambleas, serán objeto de una ley especial elaborada en la forma prescrita en el artículo 87, párrafo 2.

Artículo 88. La interpretación de las leyes civiles, criminales y eclesiásticas será tratada como su confección misma. Las interpretaciones que dé el Rey por el órgano del Tribunal Supremo, en el intervalo de las sesiones del Riksdag, en respuesta a las cuestiones propuestas sobre el verdadero sentido de la ley, podrán ser anuladas... si la interpretación se refiere a materia de las leyes eclesiásticas, por el primer Sínodo general que se reunirá después de haberse dado la decisión interpretativa...

Artículo 114. Los privilegios, prerrogativas, derechos y libertades de las antiguas órdenes del Reino permanecerán en vigor, a menos que se vinculen indisolublemente al derecho de representación que pertenecía antiguamente a las

órdenes y no hayan desaparecido con este derecho. Ellas no podrán ser modificadas o abrogadas sino por decisión conforme del Rey y del Riksdag, y, si se trata de privilegios, prerrogativas, derechos y libertades de la nobleza o del clero, con consentimiento de la nobleza en el primer caso y, en el segundo, del Sínodo general.

Suecia no ha celebrado Concordato ninguno con la Santa Sede. La Iglesia católica, que vive allí al amparo del derecho común, está constituida en régimen de misiones. Suecia tiene muy escaso número de católicos. Lo mismo debe decirse de Noruega.

II. NORUEGA

La Constitución vigente de Noruega es de 17 de mayo del año 1814.

Su contenido religioso es el siguiente:

Artículo 2. La religión evangélica-luterana continúa siendo la religión oficial del Estado. Los habitantes que la profesan están obligados a educar en ella a sus hijos. No son tolerados los jesuitas.

Artículo 4. El Rey deberá siempre hacer profesión de la religión evangélico-luterana, mantenerla y protegerla.

Artículo 12. El Rey escogerá por sí mismo un Consejo de ciudadanos noruegos, de edad, por lo menos, de treinta años. Este Consejo se compondrá de un ministro de Estado y, por lo menos, de otros siete miembros. Más de la mitad del número de ministros deberá pertenecer a la religión oficial del Estado...

Artículo 16. El Rey regula todo lo que concierne al servicio divino público, y el ritual, las reuniones y las asambleas que tienen la religión por objeto, y vigilar para que los ministros de la religión observen las reglas que les son prescritas.

Artículo 22. ... Los funcionarios eclesiásticos del orden

superior pueden ser removidos por el Rey, oído el Consejo de ministros...

Artículo 27. ... Los miembros del Consejo que no pertenecen a la religión oficial no participan en las deliberaciones y decisiones concernientes a la Iglesia del Estado.

Artículo 44. Los que administren el reino en el caso prevenido en el artículo 41 prestarán por escrito, al Storthing, el juramento siguiente: «Yo prometo y juro querer gobernar de conformidad con la Constitución y las leyes; así Dios todopoderoso y omnisciente me ayude.»

Artículo 92. ... Nadie puede ser nombrado para las funciones... de obispo, si no tiene, por lo menos, treinta años.

Artículo 100. La Prensa será libre. Nadie puede ser castigado como autor de un escrito que haya hecho imprimir o publicar, cualquiera que sea su contenido, a menos que a sabiendas y abiertamente cometa acto de desobediencia a las leyes, de desprecio por la religión, las buenas costumbres y los poderes constitucionales, etc.

Artículo 106. El precio de venta y las rentas de los bienes afectos a los beneficios eclesiásticos no podrán ser empleados más que en interés del clero o para el desarrollo de la instrucción. Las propiedades de los establecimientos de beneficencia no serán empleadas más que en provecho de estos establecimientos.

III. HUNGRÍA

La Constitución flexible húngara se compone de multitud de leyes constitucionales de diferentes fechas.

El contenido religioso de ellas es muy escaso.

El párrafo B del capítulo I de la ley 22 de 1926 sobre la Cámara Alta de la Dieta, dice que son miembros de la Alta Cámara por razón de su dignidad y durante la duración de ella o de sus funciones:

Los grandes dignatarios eclesiásticos o los representantes abajo designados de las confesiones religiosas:

1.º Los grandes dignatarios eclesiásticos católico-romanos, de rito latino o griego, mientras disfrutaban de sus beneficios, a saber: el duque primado de Hungría, los arzobispos de Kalarza y de Eger, los obispos de los condados de Csanad, Gyor, Hajdudorog, Pecs, Szekesfehervar, Szombahely, Vac y Veszprem, el príncipe abad de Pannonhalma, los superiores de las dos órdenes nacionales de premonstratenses, el abad de Zirc, el superior húngaro de la santa orden de la enseñanza y el gran preboste de los cabildos catedrales de las sedes;

2.º Los tres obispos y los tres administradores principales más antiguos en funciones de la Iglesia reformada;

3.º Los dos obispos más antiguos en funciones de la Iglesia evangélica de la confesión de Augburgo y, además, el inspector general y más antiguo en funciones de los inspectores de distrito;

4.º El presidente más antiguo en funciones de la Iglesia unitaria;

5.º El obispo griego oriental de Budapest.

6.º Los dos pastores (rabinos) elegidos por vida por las comunidades israelitas para representar la confesión israelita.

El párrafo 26 de la misma ley preceptúa:

... Si alguno de los grandes dignatarios eclesiásticos enumerados en el párrafo 4, B, 2.º, 3.º y 4.º, pierde el derecho de sentarse en la Alta Cámara..., su lugar es ocupado por el más antiguo de sus colegas que no pertenezca a la Alta Cámara, el cual, después de la exclusión del dignatario precedente, conserva el derecho de sentarse en la Alta Cámara, aun después que cese la causa que le impedía sentarse al miembro de esta manera substituído. Sin embargo, cuando el inspector general de la Iglesia evangélica de la confesión de Augburgo es reemplazado conforme al presente párrafo por el más antiguo en funciones de los inspectores del distrito, éste no se sienta más que hasta el día en que cesa el obstáculo que le impedía sentarse al inspector general.

La Iglesia católica, constituida desde muy antiguo en Hungría, en régimen de jerarquía, sigue regida por el Concordato que celebró el Imperio austrohúngaro con la Santa Sede antes de la guerra, y que viene aquí como parte integrante del Estatuto jurídico-religioso de Austria.

IV. DINAMARCA

5 de junio 1649. Revisada y promulgada el 28 julio 1866.

3. La Iglesia evangélica luterana es la Iglesia nacional danesa, y es, como tal, sostenida por el Estado.

5. El Rey debe pertenecer a la Iglesia evangélica luterana.

VII

75. La constitución de la Iglesia nacional será regulada por una ley.

76. Los ciudadanos tienen el derecho de reunirse en asociación para adorar a Dios de la manera conforme a sus convicciones, sin poder enseñar ni practicar nada contrario a las buenas costumbres y al orden público.

77. Nadie es obligado a contribuir personalmente a otro culto que al suyo; sin embargo, quien no justifique que es miembro de una asociación religiosa reconocida en el país pagará para la instrucción pública las contribuciones personales establecidas por ley en beneficio de la Iglesia nacional.

78. Todo lo que se refiere a las asociaciones religiosas disidentes será regulado por la ley.

79. Nadie puede, por razón de sus creencias religiosas, ser privado del disfrute integral de sus derechos civiles y políticos, ni substraerse al cumplimiento de sus deberes de ciudadano.

V. DANTZIG

La ciudad libre de Dantzig fué declarada tal por el artículo 103 del Tratado de Versalles y el Consejo de la Sociedad de Naciones, bajo cuya garantía está puesta.

Dióse su Constitución en 1922, de la que son los siguientes artículos de contenido religioso:

El 28, que habla del juramento que deben prestar los senadores, y que termina: «La promesa podrá ser completada por una fórmula religiosa de juramento.»

Artículo 73. ... No hay privilegios ni desigualdades de Derecho público relacionados con el nacimiento, la clase o la religión...

Artículo 84. Todos los dependientes del Estado tienen el derecho, sin declaración ni permiso especial, de reunirse pacíficamente y sin armas. Las reuniones al aire libre deben ser objeto de una declaración y pueden ser prohibidas en caso de daño inmediato para la seguridad pública. Podrán ser tomadas medidas especiales para proteger la asamblea popular. Los cortejos religiosos no son obligados a la declaración.

Artículo 85. Todos los dependientes del Estado tienen el derecho de constituir sociedades o asociaciones con fines que no sean contrarios a las leyes penales. Esta estipulación se aplica igualmente a las sociedades y asociaciones religiosas. Toda asociación es libre de adquirir capacidad jurídica conforme a las prescripciones del Derecho civil. Esta capacidad no le será negada por motivos que se refieran a fin político, social o religioso.

El apartado III de la Segunda Parte todo entero está dedicado al problema religioso con este epígrafe: «Religión y comunidades religiosas.» Comprende desde el artículo 96 al 100, ambos inclusive.

Artículo 96. Hay plena libertad de creencia y de con-

ciencia. El libre ejercicio de la religión es garantido y colocado bajo la protección del Estado. El disfrute de los derechos civiles y cívicos, lo mismo que la admisión a empleos públicos, son independientes de la confesión religiosa.

Nadie es obligado a declarar sus convicciones. Las autoridades no tienen derecho de inquirir a qué comunidad religiosa pertenece un individuo sino en la medida en que se deriva de derechos y deberes, o para hacer una estadística ordenada por la ley.

Nadie puede ser obligado a una práctica o a una ceremonia eclesiástica.

En el caso en que el juramento prescrito por las leyes en vigor contenga una fórmula religiosa, la prestación del juramento puede ser igualmente considerado como válido si el que jura reemplaza la fórmula religiosa por las palabras *Yo juro*, cuando en el resto nada se quita en la fórmula del juramento tal y como es fijada por la ley.

Las comunidades religiosas son autorizadas a servirse de fórmulas solemnes de afirmación por las que ellas tengan costumbre de reemplazar el juramento.

Artículo 97. Las comunidades religiosas que son corporaciones de Derecho público son autorizadas a percibir impuestos de sus miembros, sobre la base de los tipos civiles de impuestos.

Artículo 98. Se garantizan el derecho de propiedad y otros derechos de las comunidades y asociaciones religiosas sobre sus establecimientos consagrados al culto, a la educación o a la beneficencia, lo mismo que sobre sus fundaciones y otros bienes.

Artículo 99. Las comunidades religiosas son autorizadas a desplegar su actividad religiosa en la medida en que es necesario para celebrar el culto y administrar los socorros religiosos en los hospitales, prisiones y otros establecimientos públicos; pero deberá ser ejercida sin ningún género de coacción.

Artículo 100. El domingo y los días de fiesta reconocidos por el Estado quedan protegidos por la ley, como días de reposo físico y de edificación espiritual.

Artículo 106. La enseñanza religiosa es materia ordinaria del programa de las escuelas. Dase ella en armonía con

las doctrinas fundamentales de las comunidades religiosas, sin perjuicio del derecho fiscal del Estado.

No darán enseñanza religiosa ni ejecutarán prácticas culturales más que los maestros que hayan expresado la voluntad de ello; en cuanto a los niños, podrán ser exceptuados de las materias de enseñanza religiosa y de las ceremonias o prácticas culturales si las personas que han de decidir sobre la enseñanza religiosa del niño manifiestan así su voluntad.

CAPITULO XVIII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LOS PAISES BAJOS

I. BELGICA

Está vigente en Bélgica la Constitución de 7 de febrero de 1831, modificada el 7 de septiembre de 1893.

El contenido religioso de esta Constitución es como sigue :

Artículo 14. Son garantidas la libertad de cultos, la de su ejercicio público, lo mismo que la libertad de manifestar sus opiniones en toda materia, salvo la represión de los delitos cometidos con ocasión del uso de estas libertades.

Artículo 15. Nadie puede ser obligado a concurrir de una manera cualquiera a los actos y a las ceremonias de un culto ni a observar los días festivos que él prescribe.

Artículo 16. El Estado no tiene derecho de intervenir ni en el nombramiento ni en la instalación de los ministros de un culto cualquiera, ni de prohibirles que se comuniquen libremente con sus superiores y que publiquen sus actos, salvo, en este último caso, la responsabilidad ordinaria en materia de Prensa y de publicación.

El matrimonio civil deberá siempre preceder a la bendición nupcial, salvo las excepciones que se han de establecer por una ley, si ha lugar a ello.

II. HOLANDA

Holanda se rige actualmente por la Constitución de 30 de noviembre de 1887.

Su contenido religioso es el siguiente:

En el artículo 32 admite por igual el juramento a Dios o la promesa. Lo mismo en los artículos 42, 51, 52, 77, 88 y 129.

El capítulo V de dicha Constitución está todo él dedicado al culto y comprende los artículos desde el 168 al 174, ambos inclusive.

Artículo 168. Cada uno profesa sus opiniones religiosas con plena libertad, salvo la protección de la sociedad y de sus miembros contra las infracciones a la ley penal.

Artículo 169. Se acuerda una protección igual a todas las comuniones religiosas del reino.

Artículo 170. Los seguidores de los diversos cultos disfrutan todos de los mismos derechos civiles y políticos, y son igualmente hábiles para las dignidades, funciones y empleos.

Artículo 171. El ejercicio público de todos los cultos es permitido en el interior de los edificios y lugares cerrados, salvo las medidas necesarias para asegurar el orden y la tranquilidad pública. El ejercicio público del culto queda autorizado bajo la misma reserva fuera de los edificios y lugares cerrados, en todas partes donde es él actualmente permitido, en virtud de las leyes y reglamentos.

Artículo 172. Son garantidos los ingresos, pensiones y rentas de toda especie de que disfrutan actualmente las diversas comuniones religiosas o sus ministros. A los ministros que hasta ahora no disfrutaban de ningún ingreso o lo disfrutaban insuficiente a cuenta de la Caja del Estado, se les pueden conceder pensiones o aumento de pensiones.

Artículo 173. El Rey vela para que todas las comuniones religiosas se mantengan en los límites de la obediencia a las leyes del Estado.

Artículo 174. La intervención del Gobierno no es exigida ni para la correspondencia entre los jefes de las diversas comuniones religiosas ni, salvo la responsabilidad resultante de la ley, para la publicación de instrucciones religiosas.

Antes de la división del reino de los Países Bajos habíase concertado un Concordato con la Santa Sede, que sigue siendo vigente en Bélgica y respetado en Holanda.

Este Concordato es como sigue :

III. CONCORDATO ENTRE LEON XII Y GUILLERMO I, REY DE LOS PAISES BAJOS

León, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria.

Lo que desde hace mucho tiempo era un grandísimo deseo, a saber, que las cosas eclesiásticas se compusieran oportunamente en el reino de Bélgica, por fin Nos felicitamos de haberlo conseguido, con la ayuda de Dios, que es Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Pues nada podía ocurrirnos de más agradable, como quiera que estamos constituidos en la cumbre del apostolado, aunque sin merecimientos; por aquella solicitud de todas las iglesias, que nos apremia día y noche, Nos dolíamos vehementemente de los gravísimos males que por las grandes calamidades de los pasados tiempos redundaron sobre los católicos de la misma inclita nación, a los cuales por lo demás recomiendan mucho la constancia de la fe y la devoción a esta Sede Apostólica. Ciertamente, aquella saludabilísima obra que acometió nuestro predecesor Pío VII, de feliz memoria, y Nos después, siguiendo sus huellas, terminamos al fin, se comenzó y acabó por cooperación y munificencia del Serenísimo Príncipe Guillermo, Rey de los belgas, de cuya gran voluntad hacia los católicos, de los que en gran número son súbditos suyos, guardaremos siempre muy grata memoria.

Y así, para gloria del Omnipotente Dios, y en honor de la Virgen María, Madre de Dios, a la cual veneran los belgas como a Patrona con especialísimo culto, y también para el bien espiritual de los mismos belgas, hemos celebrado debidamente una Convención entre Nos y esta Santa Sede apostólica y el Serenísimo Rey Guillermo, que en vigor de las presentes letras confirmamos con apostólica autoridad. El tenor de esta Convención es como sigue:

En nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice León XII y Su Majestad Guillermo I, Rey de los Países Bajos, príncipe d'Orange-Nassau, gran duque de Luxemburgo, etc., etc., deseando venir a un acuerdo sobre los negocios de la Iglesia católica, apostólica, romana en todo el reino de los Países Bajos, han nombrado sus plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad el Rey de los Países Bajos, a su excelencia monseñor Antonio Felipe Fiacre Ghislain, conde de Ceiles, caballero del León Belga, miembro de la segunda Cámara de los Estados generales del reino, etc., etc., su embajador extraordinario y plenipotenciario cerca de la Santa Sede.

Su Santidad el Soberano Pontífice, a su eminencia monseñor Mauro Cappelari Prêtre, cardenal de la Santa Iglesia romana, prefecto de la Sagrada Congregación de la Propaganda.

Los dichos plenipotenciarios, asistidos, el primero, del referendario de primera clase en el Consejo de Estado Juan Pedro Ignacio Germaing, consejero de Embajada, y el segundo, de monseñor Francisco Capaccini, substituto de la Secretaría de Breves.

Después de haber hecho el cambio de sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo I.

El Concordato de 1801 entre el Soberano Pontífice Pío VII y el Gobierno francés, en vigor en las provincias meridionales del reino de los Países Bajos, será aplicado a las provincias septentrionales.

Artículo II.

Cada diócesis tendrá su cabildo y su seminario.

Artículo III.

Para el caso prevenido por el artículo XVII de la Convención de 1801, se ha establecido:

Siempre que una sede arzobispal u obispal vaque, los cabildos de las iglesias vacantes tendrán cuidado durante el primer mes, a partir del día de la vacante, de poner en conocimiento de Su Majestad los nombres de los candidatos pertenecientes al clero del reino de los Países Bajos que juzgasen ellos dignos y capaces de gobernar la iglesia arzobispal o episcopal y en quienes hayan ellos reconocido la piedad, la doctrina y la prudencia exigidas en los obispos por las leyes de la Iglesia.

Si por ventura entre los candidatos los hubiese que no fuesen igualmente agradables al Rey, los cabildos retirarán los nombres de éstos de la lista, que, por tanto, deberá quedar compuesta de un número de candidatos suficiente para que pueda tener lugar la elección del nuevo arzobispo u obispo. Entonces los cabildos procederán a la elección canónica del arzobispo o del obispo, que escogerán, según las formas canónicas en uso, entre los candidatos cuyos nombres serán mantenidos en la lista, y dirigirán dentro de un mes al Santo Padre el acta auténtica de esta elección.

El Soberano Pontífice, a tenor de la instrucción enviada por orden del Papa Urbano VIII, de feliz memoria, dará la comisión de dirigir el proceso de información sobre el Estado de la Iglesia y sobre las cualidades de la persona destinada a ser promovida a la iglesia arzobispal o episcopal, y después de haber recibido el resultado de estas informaciones, si el Santo Padre juzga que las cualidades exigidas en un obispo por los cánones se encuentran reunidas en la persona elegida, él le dará la institución canónica por Letras apostólicas, a tenor de las formas establecidas y en el más breve plazo posible.

Si, al contrario, la elección no ha sido canónicamente llevada o si el candidato no ha sido reconocido por el Santo Padre dotado de las cualidades susodichas, el Soberano Pontífice, por favor especial, concederá al cabildo el poder de proceder a una nueva elección, como arriba se ha dicho, en las formas canónicas.

Las ratificaciones de la presente Convención serán canjeadas en Roma en el plazo de sesenta días, o antes, si es posible.

En Roma, a 18 de junio de 1827. — *Conde de Celles.* — *D. Mauro, Cardenal Cappellari.* — *Germain.* — *Francisco Capacini.*

Esta Convención, pues, que celebramos con el Serenísimo Rey de los belgas y que se contiene en los sobredichos artículos, de nuestra propia voluntad y cierta ciencia y con nuestra madura deliberación y de plenitud de la potestad apostólica, oído el selecto Colegio de los venerables hermanos nuestros los cardenales de la Santa Iglesia romana, a tenor de las presentes la aprobamos y la tenemos por ratificada y le damos la fuerza y la eficacia del poder y de la firmeza apostólica.

Por tanto, declaramos y decretamos, en primer lugar, que la Convención entre la Santa Sede y el Gobierno francés, celebrada el día 15 de julio del año 1801, y confirmada por nuestro predecesor el Papa Pío VII por sus letras apostólicas de 15 de agosto del mismo año, a las cuales nos hemos de referir, y que rige en las provincias meridionales del reino belga, se aplique también a las provincias septentrionales, para que en un mismo reino se traten y rijan de una misma manera las cosas de la Iglesia universal.

Y después, porque para la plena ejecución de la novísima Convención es necesario, del mismo modo que fué necesario en tiempo del Convenio del año 1801, constituir el número de las diócesis y circunscribirlas en sus límites, Nos, celebradas conversaciones con el Serenísimo Rey Guillermo para incremento de la religión católica y salud de las almas, decretamos restablecer, aparte de las cinco ya actualmente existentes, otras tres sedes episcopales por ahora o erigirlas de nuevo, y así dividir todo el reino de los Países Bajos en

ocho diócesis y fundar allí otras tantas iglesias catedrales, de las cuales una metropolitana y las demás, entretanto, sufragáneas de ella. Los límites de estas diócesis aquí sólo los indicamos en general por provincias. Y así, la iglesia de Malinas será la iglesia metropolitana, cuyo territorio diocesano constará de las provincias íntegras de Brabante meridional y de Amberes. Y las siete iglesias sufragáneas serán Lieja, Namur, Tournay y Gante, es decir, las cuatro que ya existían, y además otras tres que al presente establecemos que sean erigidas, a saber: Brujas, Amsterdam y Bois-le-Duc. La iglesia de Lieja tendrá íntegras las provincias de Lieja y Limburgo; la iglesia de Namur, la provincia de Namur y el Gran Ducado de Luxemburgo; la iglesia de Tournay, la Hannonia; la iglesia de Gante, toda Flandes oriental; la iglesia de Amsterdam, las provincias de Holanda septentrional, Holanda meridional, Utrech, Overissel, Frisia, Groninga y Drente; la iglesia de Brujas, toda Flandes occidental, y, finalmente, la iglesia de Bois-le-Duc, las provincias de Brabante septentrional, Güeldres y Zelanda. En cada iglesia catedral habrá también su cabildo. Cada cabildo tendrá su dotación congrua y perpetua y se asignará también igualmente una congrua y perpetua dotación a cada una de las sedes episcopales; el estado de las cuales sedes confiamos firmemente que cada día será mejor y más fácil por la munificencia del Serenísimo Rey. Por lo demás, todo lo demás que se refiere a una más conveniente circunscripción de diócesis y a un perfecto ordenamiento de las sedes episcopales o de los cabildos del reino de los Países Bajos, será prescrito distintamente por otras letras apostólicas que en breve hemos de dar.

Mas antes que los cabildos de todas las iglesias que hemos citado fueren constituídos, damos facultad a los mismos cabildos para que, perdurando las circunstancias previstas en el artículo XVII del Convenio celebrado el año 1801, cuando vacase la sede arzobispal o episcopal, los capitulares de aquella iglesia vacante, a saber, cada cabildo en favor de su iglesia, congregados capitularmente y guardadas las reglas canónicas, puedan elegir nuevos prelados entre los varones eclesiásticos del reino de los Países Bajos, dig-

nos, sin embargo, y según las eclesiásticas sanciones idóneos según la forma del artículo III de la novísima Convención.

Sin embargo, por esta primera vez nos reservamos proveer de pastores a las iglesias del reino de los Países Bajos, como lo hizo nuestro predecesor Pío VII para la diócesis de Malinas; y del mismo modo, y como por la extensión de las diócesis, acontece que los obispos diocesanos necesitan de ministerio ajeno aun en aquellas cosas que requieren carácter episcopal, a Nos y a nuestros sucesores reservamos conceder a los obispos de tales diócesis, según lo juzgáremos necesario, obispos auxiliares que les sirvan en las funciones pontificales como de sufragáneos; a los cuales obispos el Serenísimo Rey, presentándose el caso, asignará una dotación conveniente a su estado.

Consentimos en que el arzobispo y cada uno de los obispos de las sobredichas iglesias del reino de Bélgica, después de haber recibido de esta apostólica sede la canónica institución, y antes de tomar posesión de su cargo, emitan ante el Serenísimo Rey juramento de fidelidad, como se había establecido en el artículo VI de la Convención del año 1801, expresado con estas palabras:

«Juro y prometo sobre estos Santos Evangelios obediencia y fidelidad a Su Majestad el Rey de los Países Bajos, mi legítimo Príncipe. Además, prometo que no tendré comunicación alguna ni asistiré a ningún consejo y no conservaré ni en el interior ni en el exterior ninguna sospechosa unión que dañe a la pública tranquilidad, y si tanto en mi diócesis como en otra parte conociere que se trata algo en daño del Estado, lo manifestaré a mi Rey.»

Igualmente consentimos en que presten este mismo juramento también los eclesiásticos de segundo orden ante las autoridades civiles designadas por el Rey, como se había estatuido en el artículo VII de la misma Convención.

Del mismo modo, para resolver la ambigüedad acerca del modo como puede aplicarse en el presente estado de las cosas la fórmula de las preces establecidas en el artículo VIII de la Convención de 1801, declaramos que ella se ha de cambiar así: *Señor, salva a nuestro Rey Guillermo.*

Los obispos podrán nombrar y elegir libremente a sus vicarios generales en las cosas espirituales.

El principal cuidado del arzobispo y de cada obispo versará acerca de los seminarios. Pues en ellos, los jóvenes que son llamados a la herencia del Señor han de ser formados durante el tiempo oportuno, como tiernas plantaciones en su juventud, en la piedad e integridad de las costumbres y en la disciplina eclesiástica. Pues los buenos y valerosos operarios en la viña del Señor no nacen, sino que se hacen; y hacerlos corresponde a la diligencia y destreza de los obispos.

Para ejecución, pues, del artículo II de la nueva Convención celebrada por Nos con el Serenísimo Rey Guillermo, se constituirán, regirán y administrarán seminarios en cada diócesis del modo que sigue. Y en primer lugar, deben ser alimentados, enseñados y educados en ellos aquel cierto número de jóvenes que corresponda manifiestamente a las necesidades de cada diócesis y a la comodidad del pueblo, y que habrá de ser congruamente determinado por el obispo. Y siendo muy conveniente que los que se consagran a los sagrados ministerios sean instituídos debidamente, no sólo en eclesiásticas disciplinas, sino también en las filosóficas y en otras conducentes a las eclesiásticas, *para que adopten la forma de rebaño y siempre estén dispuestos a dar razón a todo el que la pida*, por eso los obispos constituirán en los seminarios todas aquellas cátedras que juzgaren necesarias para la completa institución de sus clérigos. Finalmente, la institución de la doctrina y de la disciplina, la educación y la administración de los seminarios están sometidas a la autoridad de los obispos respectivos, según las formas canónicas. Así que será libre en los obispos ya la admisión de los clérigos en los seminarios y su expulsión de ellos, ya la elección de rectores y profesores y la remoción de los mismos siempre que lo juzgaren útil o necesario.

Y lo que sea necesario para la fundación y conservación de estos seminarios será suministrado liberalmente por el Serenísimo Rey, que, queriendo mostrar ánimo de gran príncipe, quiere proveer congruamente a todas aquellas cosas que son necesarias para la formación eclesiástica y nos lo

prometió de modo a Nos grato por su extraordinario enviado cerca de Nos.

Finalmente, en las diócesis constituidas, como ya arriba se ha prescrito y muy pronto será prescrito más claramente por Nos por otras letras apostólicas, los obispos, según lo que se contiene en los artículos IX y X de la Convención del año 1801, procedan donde fuere necesario a nueva circunscripción de las parroquias y elijan para las parroquias a dignos y manifestamente idóneos varones eclesiásticos. Y el Serenísimo Rey, según lo que se había establecido en el artículo XIV de la misma Convención, proveerá según su real munificencia a la sustentación de todos los párrocos que también se crearen por la nueva circunscripción de parroquias, la cual debe ser correspondiente al estado de cada uno y que sea igual a la que disfrutaban los párrocos en las provincias meridionales del reino de los Países Bajos.

Y tenemos una firme esperanza de que se hallen entre los católicos de estas regiones quienes quieran usar liberalmente de la libertad que se les asegura en el artículo XV de las muchas veces repetida Convención del año 1801, de proveer para las iglesias; y la bien inclinada voluntad del Rey no nos permite dudar de que Su Majestad no ha de tomar la protección de las fundaciones o donativos que en favor de dichas iglesias se hicieren, como también de las adquisiciones que pudieran ser hechas por las mismas iglesias.

Resta ahora que demos muchas gracias a Dios Nuestro Señor por lo que hasta ahora se ha hecho por la restauración de las cosas eclesiásticas en todo el reino de los Países Bajos, y le instemos con preces para que lo confirme y consolide: *Pues todo don perfecto y toda donación óptima de arriba procede; ni es algo quien planta ni quien riega, sino Dios que fecunda.*

Y decretamos que estas presentes letras de ningún modo puedan ser en ningún tiempo notadas o impugnadas por vicio de subrepción o de obrepción o de nulidad o por cualquier otro defecto, sino que siempre sean firmes, válidas y eficaces y que surtan y obtengan sus plenarios e íntegros efectos, y que se deben observar inviolablemente, no obstante las generales o especiales constituciones y ordenaciones apos-

tólicas y las dadas en concilios generales, provinciales o sinodales, y cualesquiera estatutos y privilegios de cualesquiera iglesias y lugares píos, y cualesquiera otras disposiciones contrarias...

En Roma, a 17 de agosto del año de la Encarnación 1827, cuarto de Nuestro Pontificado.

Como en virtud del precedente Concordato se hace vigente en los Países Bajos el Concordato francés de 1801, ponemos a continuación su texto.

En la bula de promulgación del Concordato con los Países Bajos ya se especifican en parte, como se ha visto, las disposiciones del referido Concordato francés. Pero la fidelidad científica exige que se ponga su texto íntegro.

IV. CONCORDATO ENTRE PIO VII Y LA REPUBLICA FRANCESA

Su Santidad el Soberano Pontífice Pío VII y el Primer Cónsul de la República francesa han nombrado por plenipotenciarios respectivos:

Su Santidad, a su eminencia monseñor Hércules Consalvi, cardenal de la Santa Iglesia romana, diácono de Santa Agueda *ad suburram*, su secretario de Estado; a José Espina, arzobispo de Corinto, prelado doméstico de Su Santidad, asistente al Solio Pontificio, y al P. Caselli, teólogo consultor de Su Santidad, dotados de plenos poderes.

El Primer Cónsul, a los ciudadanos José Bonaparte, consejero de Estado; Cretet, consejero de Estado, y Bernier, doctor en Teología, cura de San Laud de Angers, igualmente dotados de plenos poderes en buena y debida forma;

los cuales, después de cambiados sus plenos respectivos poderes, han contratado la Convención siguiente:

Convención entre Su Santidad Pío VII y el Gobierno francés.

El Gobierno de la República reconoce que la religión católica, apostólica, romana es la religión de la gran mayoría de los ciudadanos franceses.

Su Santidad reconoce igualmente que esta misma religión ha reportado y reporta todavía ahora el mayor bien y el mayor esplendor del establecimiento del culto católico en Francia y de la profesión particular que de ella hacen los cónsules de la República.

En consecuencia, después de este reconocimiento mutuo, tanto por el bien de la religión como para el mantenimiento de la tranquilidad interior, han convenido en lo que sigue:

Artículo 1. La religión católica, apostólica, romana será libremente ejercida en Francia. Su culto será público, conformándose a los reglamentos de policía que el Gobierno juzgase necesarios para la tranquilidad pública.

Artículo 2. Se hará por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno, una nueva circunscripción de las diócesis francesas.

Artículo 3. Su Santidad declarará a los titulares de los obispados franceses que espera de ellos, con una firme confianza, para el bien de la paz y de la unidad, toda especie de sacrificios y aun el de sus sedes.

Después de esta exhortación, si ellos se niegan a este sacrificio, exigido por el bien de la Iglesia (negativa, sin embargo, que Su Santidad no espera), se proveerá, por medio de nuevos titulares, al gobierno de los obispados de la circunscripción nueva de la manera siguiente.

Artículo 4. El Primer Cónsul de la República nombrará, en los tres primeros meses siguientes a la publicación de la bula de Su Santidad, a los arzobispos y obispos de la circunscripción nueva. Su Santidad conferirá la institución canónica según las formas establecidas con relación a Francia antes del cambio de Gobierno.

Artículo 5. Los nombramientos para los obispados que vaquen en lo sucesivo serán igualmente hechos por el Pri-

mer Cónsul; y la institución canónica será dada por la Santa Sede, de conformidad con el artículo precedente.

Artículo 6. Los obispos, antes de entrar en funciones, prestarán directamente, entre las manos del Primer Cónsul, el juramento de fidelidad que estaba en uso antes del cambio de Gobierno, expresado en los términos siguientes:

«Juro y prometo a Dios, sobre los Santos Evangelios, guardar obediencia y fidelidad al Gobierno establecido por la Constitución de la República francesa. Prometo también no tener inteligencia alguna ni asistir a ningún consejo, de no sostener ninguna liga, ni en el interior ni en el exterior, que sea contraria a la tranquilidad pública; y si en mi diócesis o en otra parte averiguo que se trama alguna cosa en perjuicio del Estado, lo haré saber al Gobierno.»

Artículo 7. Los eclesiásticos de segundo orden prestarán el mismo juramento en manos de las autoridades civiles designadas por el Gobierno.

Artículo 8. La fórmula de plegaria siguiente será rezada al fin del oficio divino, en todas las iglesias católicas de Francia: «Señor, salva a la República; Señor, salva a los cónsules.»

Artículo 9. Los obispos harán una nueva circunscripción de las parroquias de sus diócesis, que no tendrá efecto sino después del consentimiento del Gobierno.

Artículo 10. Los obispos nombrarán a los curas. Su elección no podrá recaer sino en personas gratas al Gobierno.

Artículo 11. Los obispos podrán tener un cabildo en su catedral y un seminario para sus diócesis, sin que el Gobierno se obligue a dotarlas.

Artículo 12. Todas las iglesias metropolitanas, catedrales, parroquiales y otras no enajenadas, necesarias al culto, serán puestas a disposición de los obispos.

Artículo 13. Su Santidad, por el bien de la paz y el feliz restablecimiento de la religión católica, declara que ni ella ni sus sucesores molestarán de ningún modo a los que adquirieron bienes eclesiásticos enajenados, y que, en consecuencia, la propiedad de estos mismos bienes, los derechos y las rentas a ellos anejas, permanecerán incommutables entre sus manos o entre las de sus causahabientes.

Artículo 14. El Gobierno asegurará una dotación conveniente a los obispos y a los curas cuyas diócesis y curatos estén comprendidos en la circunscripción nueva.

Artículo 15. El Gobierno tomará igualmente medidas para que los católicos franceses puedan, si quieren, hacer fundaciones en favor de las iglesias.

Artículo 16. Su Santidad reconoce en el Primer Cónsul de la República francesa los mismos derechos y prerrogativas de que disfrutaba cerca de él el antiguo Gobierno.

Artículo 17. Se ha convenido entre las partes contratantes que en el caso en que alguno de los sucesores del Primer Cónsul actual no fuera católico, los derechos y prerrogativas mencionados en el artículo anterior y el nombramiento de obispos serán regulados, con relación a él, por un nuevo Convenio.

Las ratificaciones serán canjeadas en París en el término de cuarenta días.

París, 15 de julio de 1801.—*Hércules, Cardenal Gonsalvi*.—*José Bonaparte*.—*S. Arzobispo de Corinto*.—*Cretet*.—*Fr. Carlos Caselli*.—*Bernier*.

V. EN EL CONGO BELGA

Bélgica aplica al Congo su Estatuto jurídico-religioso de la Metrópoli.

Además, en la ley constitucional del Congo hay un artículo con contenido religioso, el *quinto*, que es de esta manera:

El Gobierno general vela por la conservación de las poblaciones indígenas, y para el incremento de sus condiciones morales y materiales de existencia. El favorece la expansión de la libertad individual, el abandono progresivo de la poligamia y el desarrollo de la propiedad. El protege y favorece sin distinción de nacionalidad ni de cultos todas las instituciones y empresas religiosas, científicas y de cari-

dad creadas y organizadas a estos fines o que tiendan a instruir a los indígenas y a hacerles comprender y apreciar las ventajas de la civilización. Los misioneros cristianos, los sabios, los exploradores, sus escoltas, haberes y colecciones son objeto de una protección especial.

Pero Bélgica vive también en el Congo en régimen concordatado, por virtud de la siguiente Convención:

CONCORDATO PARA LAS MISIONES CATOLICAS DEL CONGO

26 mayo 1906.

La Santa Sede Apostólica, deseosa de favorecer la difusión metódica del catolicismo en el Congo, y el Gobierno del Estado independiente, apreciando la parte considerable de los misioneros católicos en su obra civilizadora del Africa Central, han concertado entre sí y con los representantes de las misiones católicas del Congo, al objeto de asegurar en adelante la realización de sus intenciones respectivas.

A este efecto, los infrascritos, Excmo. Mr. Vico, arzobispo de Filipos, nuncio apostólico, gran cruz de la orden de la Concepción de Villa Viçosa, comendador con placa de la orden de Carlos III, etc., debidamente autorizado por Su Santidad, el Papa Pío X, y

El caballero de Cuvelier, oficial de la orden de Leopoldo, comendador de la orden de San Gregorio el Grande, etc., debidamente autorizado por S. M. Leopoldo II, Rey soberano del Estado independiente, han convenido en las disposiciones siguientes:

1.º El Estado del Congo concederá a los establecimientos de las misiones católicas en el Congo las tierras necesarias a sus obras religiosas en las condiciones siguientes:

2.º Cada establecimiento de misión se encarga, en la medida de sus recursos, de crear una escuela donde los indígenas recibirán instrucción. El programa llevará princi-

palmente un cuestionario agrícola y de agronomía forestal, y un cuestionario profesional, práctico, de materias manuales.

3.º El programa de los estudios y de los cursos será sometido al gobernador general, y las normas que se han de enseñar serán fijadas de común acuerdo. La enseñanza de las lenguas nacionales belgas formará parte esencial del programa.

4.º A fechas periódicas, cada superior de misión entregará al gobernador general relación sobre la organización y el desenvolvimiento de las escuelas, el número de alumnos, el avance en los estudios, etc. El gobernador general, por sí mismo o un delegado que designará expresamente, podrá asegurarse de que las escuelas responden a todas las condiciones de higiene y de salubridad.

5.º El nombramiento de cada superior de misión será notificado al gobernador general.

6.º Los misioneros se comprometen a realizar por el Estado, y mediante indemnización, los trabajos especiales de orden científico que entran dentro de su competencia personal, tales como reconocimientos o estudios geográficos, etnográficos, lingüísticos, etc.

7.º La superficie de tierras aplicables a cada misión, cuyo establecimiento será decidido de común acuerdo, será de cien hectáreas cultivables; ella podrá llegar a doscientas hectáreas, por razón de las necesidades y de la importancia de la misión. Estas tierras no podrán ser enajenadas y deberán quedar afectas a su utilización en obras de la misión. Estas tierras son dadas a título gratuito y en propiedad perpetua; su emplazamiento será determinado de común acuerdo entre el gobernador general y el superior de la misión.

8.º Los misioneros católicos se comprometen, en la medida de su personal disponible, a asegurar el ministerio sacerdotal en los centros donde el número de fieles haga su presencia oportuna. En caso de residencia estable, los misioneros recibirán del Gobierno un tratamiento a convenir en cada caso particular.

9.º Se ha convenido que las dos partes contratantes reco-

mendarán siempre a sus subordinados la necesidad de conservar la más perfecta armonía entre los misioneros y los agentes del Estado. Si surgiesen dificultades, serían arregladas amigablemente entre las autoridades locales respectivas, y si no pudiera conseguirse inteligencia, las mismas autoridades locales se dirigirán a las autoridades superiores.

En fe de lo cual, los infrascritos han firmado la presente convención y la han sellado con sus sellos.

Bruselas, a 26 de mayo de 1906.—*Ch. de Cuvelier*.—*Vico*, arzobispo de Filipos, nuncio apostólico.

CAPITULO XIX

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LA GRAN BRE- TAÑA E IRLANDA

Toda la vida jurídica de la Gran Bretaña, no sólo la vida social, está impregnada de esencia religiosa.

Por otro lado, sabido es que la Gran Bretaña no tiene Constitución escrita, sino Constitución vivida en las costumbres y tradiciones y unas leyes inmutables que tienen carácter constitucional, tan en vigor hoy como hace siglos en que fueron promulgadas. Entre éstas están la *Carta Magna* de Enrique III, del año 1225 (11 de febrero), y el *Bill de Derechos* de 13 de febrero de 1689.

De ambos documentos pondremos su contenido religioso.

MAGNA CARTA DE ENRIQUE III

11 febrero 1225.

Enrique, por la gracia de Dios Rey de Inglaterra, etc., a los arzobispos, obispos, abades, priores, etc...: Sabed que Nos, en presencia de Dios, para la salud de nuestra alma y la de nuestros mayores y sucesores y exaltación de la Santa Iglesia, y para la reforma de nuestro reino, hemos dado y concedido, por nuestra propia y buena voluntad, a los arzobispos, obispos, etc., y a todos los de nuestro reino, las libertades especificadas a continuación...

1.º En primer lugar, hemos acordado y confirmado, en el nombre de Dios y por la presente Carta, para Nos y nuestros sucesores a perpetuidad, que la Iglesia de Inglaterra sea libre y goce de todos sus derechos y libertades, sin que pueda sufrir menoscabo...

14. ... Los eclesiásticos no podrán ser multados en proporción a la importancia de su beneficio, sino sólo en proporción a la importancia de sus feudos seculares y a la del delito cometido...

Por la concesión y otorgamiento de las libertades antedichas, así como de las contenidas en nuestra Carta forestal, los arzobispos, obispos, abades, priores..., nos han dado la décimaquinta parte de sus muebles todos...

BILL DE DERECHOS

13 febrero de 1689.

Hay un párrafo que dice:

Considerando que habiendo abdicado el último Rey, Jacobo II, y quedando así vacante el Gobierno y el trono, Su Alteza el príncipe de Orange (a quien Dios omnipotente tomó como instrumento glorioso para libertar al reino del papismo y del poder arbitrario) ha hecho escribir (de conformidad con el parecer de los lores espirituales y temporales...) cartas a los lores espirituales y temporales protestantes..., con objeto de proveer lo necesario para que la religión, las leyes y las libertades no puedan correr en adelante el peligro de ser destruídas...

Y termina el *bill*:

Confíando, pues, en que S. A. el príncipe de Orange acabará la obra de libertar al país, obra que él lleva ya tan avanzada, esperan que les librárá también de ver violados los derechos antes referidos y de todo ataque contra su religión, sus derechos y sus libertades.

Inglaterra es el país de las máximas libertades y de los máximos respetos religiosos, y, a pesar de ser también el país que más distanciado ha vivido de Roma, al menos tanto como los países escandinavos, sin embargo, prestando el debido acatamiento a la voluntad de sus católicos malteses, estableció, en pacto con el Vaticano, un Estatuto especial religioso para aquella isla, en el cual vive todavía.

Este Estatuto es como sigue:

ACUERDOS ESTIPULADOS PARA LA ISLA DE MALTA

1. EN TORNO AL MATRIMONIO.

17 enero 1890.

Nota del cardenal secretario de Estado a S. E. el señor general Simmons, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Su Majestad la Reina de Inglaterra.

El infrascrito cardenal secretario de Estado ha llamado la alta atención de Su Santidad sobre la demanda dirigida en nombre del Gobierno inglés en torno a la validez de los matrimonios celebrados en Malta en los cuales o ambos contrayentes no profesan la religión católica, o bien uno pertenece a esta religión y el otro profesa diverso culto.

Su Santidad, queriendo secundar esta instancia, dirigida a quitar toda duda sobre la validez de tales uniones y eliminar los inconvenientes que pudieran derivarse de ello, declara:

1.º Que los matrimonios celebrados en Malta por todos aquellos que profesan la religión católica, siendo ambos contrayentes católicos o siendo uno de ellos católico y el otro acatólico, no son ni serán válidos sino cuando hubieren sido o fueren celebrados según la forma prescrita por el Concilio de Trento.

2.º Que todos los que profesaren otro culto religioso po-

drán válidamente unirse en matrimonio sin necesidad de observar la forma tridentina.

La legislación que, de conformidad con esta declaración, aplicare en Malta el Gobierno de Su Majestad Británica para regular los efectos civiles del matrimonio allí celebrado o que se celebrare, no hallará verdadero obstáculo de parte de la Santa Sede.

Después de lo cual el firmante cardenal tiene el honor de confirmar a V. E. el sentimiento de su distinguida consideración.—*M., Card. Rampolla.*

Respuesta del general Simmons.

18 enero 1890.

Eminencia:

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. la Reina de Inglaterra, tiene el honor de acusar recibo de una nota de vuestra eminencia, por la cual queda informado de que, con el fin de remover toda duda sobre la validez de los matrimonios celebrados en Malta en los casos en que ambos contrayentes no profesen la religión católica o uno de ellos pertenezca a esta religión y otro pertenezca a religión distinta, y para eliminar los inconvenientes que puedan surgir de ello, Su Santidad el Papa se ha dignado declarar:

1.º Que los matrimonios celebrados en Malta de todos aquellos que profesen la religión católica, ya que ambas partes sean católicas o que una de ellas sea católica y la otra no católica, no son y no pueden ser válidos si no son celebrados según la forma establecida por el Concilio Tridentino.

2.º Que todos los que profesen otra religión podrán válidamente celebrar en sí su matrimonio sin necesidad de observar la forma tridentina.

El infrascrito debe informar a su eminencia que el Gobierno de Su Majestad Británica procurará que sea propuesto un proyecto de ley en el Consejo del Gobierno de Malta de conformidad con las declaraciones precedentes, teniendo por objeto regular los efectos civiles de los matrimonios ce-

lebrados hasta ahora y de los que en adelante se celebraren en esta isla.

El infrascrito, etc.—*J. L. A. Simmons.*

2. SOBRE EDUCACIÓN DEL CLERO.

Nota del cardenal secretario de Estado al general Simmons.

22 enero 1890.

El infrascrito, cardenal secretario de Estado, como consecuencia de la conferencia habida con su excelencia, habiendo llamado la atención de Su Santidad sobre los deseos manifestados de parte del Gobierno inglés relativamente al seminario de Malta, tiene ya el honor de manifestarle de una manera más precisa cuáles son las disposiciones de Su Santidad relativas a tal asunto.

Ante todo, tiene el placer de declarar a V. E. que el propósito de realzar la instrucción del clero maltés entra de lleno en el propósito de Su Santidad.

El Santo Padre halla, por otro lado, racional que el clero maltés reciba una educación adecuada a las condiciones especiales de la isla, es decir, tal que lo ponga en condiciones de ejercitar con prestigio y con fruto su ministerio, no sólo cerca de las clases inferiores del pueblo, sino también cerca de las clases más elevadas de la sociedad, y de mantener convenientes relaciones con la autoridad gubernativa y con el elemento adventicio de origen inglés. Los mejoramientos que a tal fin se habrán de introducir deberán ser graduales, es decir, a medida de los medios de que se pueda disponer.

Queriendo, sin embargo, el Santo Padre, desde este momento, dar prueba de deferencia al Gobierno inglés, está dispuesto a hacer lo que proceda para que se haga común entre los clérigos el conocimiento de la lengua inglesa, y que, para contribuir a este intento, la lengua inglesa sea adoptada en la enseñanza de la geografía, de la historia, de la aritmética y de las matemáticas. Procurará también que el

rector del seminario de Malta, aparte de las cualidades de que es necesario esté dotado para el cumplimiento de su cometido, sea maltés de origen y de todas maneras sujeto a la dominación inglesa. Si después el Gobierno local suministrase los medios necesarios para el mantenimiento de algunos padres o maestros ingleses, sería fácil adoptar desde ahora esta ulterior medida.

Para llevar todo esto a efecto, Su Santidad hace cuenta de las intenciones manifestadas por el Gobierno inglés de renunciar por su parte a la colación de los beneficios eclesiásticos retenidos por el patronato, consintiendo que, a medida que comenzasen a vacar, la Santa Sede pueda suprimirlos y aplicar las rentas al fomento de la educación de los jóvenes clérigos; como también destinar al dicho fin una conveniente porción a determinar de los bienes pertenecientes a la Gruta de San Pablo.

En la confianza que las sobreenunciadas disposiciones de Su Santidad serán gratas al Gobierno de Su Majestad Británica, el infrascrito cardenal tiene el honor de renovar a V. E. los sentimientos de su distinguida consideración.

Roma, 22 de enero de 1890.—*M., Card. Rampolla.*

Respuesta del general Simmons.

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Reina de Inglaterra, tiene el honor de acusar recibo de una nota de vuestra eminencia, de fecha de hoy, por la cual entiende que el Santo Padre encuentra racional que la educación que ha de darse al clero maltés sea conveniente a las condiciones especiales de la isla de Malta, es decir, que pueda ponerlo en grado de ejercitar sus funciones con prestigio y ventaja, no sólo entre las clases bajas del pueblo, sino igualmente entre las clases más altas de la sociedad, y de conservar las debidas relaciones con la autoridad gubernativa y con el elemento adventicio de origen inglés.

Vuestra eminencia, por otro lado, me da a conocer que el Santo Padre, deseando desde este momento dar una prue-

ba de deferencia al Gobierno inglés, está dispuesto a hacer que el conocimiento de la lengua inglesa sea difundido entre el clero, y para conseguir este fin, a procurar que la lengua inglesa sea adoptada en la enseñanza de la geografía, de la historia, aritmética y matemáticas, y que procurará hacer que el rector del seminario, aparte de poseer las cualidades que le hagan apto para el desempeño de los deberes anejos a su oficio, sea de origen maltés, y, como sea, súbdito británico.

Queriendo dar prueba de su deseo de ayudar las intenciones expresadas por el Santo Padre de mejorar la educación del clero maltés, y principalmente que sea éste instruido en la lengua inglesa y versado en las instituciones inglesas, el Gobierno de Su Majestad estará pronto a ceder la colación de ciertos beneficios eclesiásticos en Malta y a consentir que, a medida que vagen, la Santa Sede pueda suprimirlos y aplicar las rentas en beneficio de la educación en el seminario, confiando que el rector de dicho seminario, aparte de ser hábil para el desempeño de los deberes anejos a su oficio, incluyendo en él el servicio de la enseñanza en lengua inglesa, sea de origen maltés, o, en todo caso, súbdito británico.

El infrascrito, por lo demás, debe dejar la determinación de los particulares beneficios que se han de suprimir, como particularidad, a la futura consideración del Gobierno y de la autoridad eclesiástica en Malta.

Y aprovecha esta oportunidad para renovar a su eminen-
cia, etc.—*Simmons*.

3. SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS OBISPOS.

Nota del cardenal secretario de Estado al general Simmons.

20 marzo 1890.

El infrascrito, cardenal secretario de Estado, ha llevado a conocimiento de Su Santidad los deseos expresados por V. E. en nombre de su Gobierno en torno al nombramiento

de los obispos y otros objetos eclesiásticos relativos a la isla de Malta, y ahora se apresura a manifestarle que el Santo Padre, después de haberlo tomado todo con la debida consideración, queriendo reafirmar siempre más las amistosas relaciones y la buena inteligencia entre la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Británica, le ha ordenado comunicar a V. E. cuanto sigue:

Primeramente, por lo que concierne al modo de proveer a las sedes episcopales de Malta y del Gozo, Su Santidad, aunque no pueda consentir que se le disminuya el derecho de nombramiento que le compete y la libertad de acción sobre el mismo, ha dispuesto, sin embargo, usar respecto al Gobierno de Su Majestad todos aquellos miramientos y consideraciones que sean compatibles con la integridad de tal derecho y de tal libertad.

Por tanto, siempre que pluguiera al Gobierno británico anunciarle oficialmente cuando tenga lugar la vacante de dichas sedes o cuando estén próximas a vacar, el Santo Padre acogerá gustoso los dichos anuncios oficiales, con tal que no quede con esto coartada su libertad de tomar El mismo, independientemente de la comunicación recibida, la iniciativa para aquellas providencias que juzgase a tal fin necesarias y oportunas. Por lo demás, antes de proceder al nombramiento oficial de los titulares de las mencionadas sedes, no omitirá en lo sucesivo la Secretaría de Estado de Su Santidad dar aviso preventivo al Gobierno inglés, según la práctica establecida. La cual práctica se extenderá también a los casos de nombramiento del administrador apostólico y coadjutor con futura sucesión. Y después que el Santo Padre haya provisto, como es su deber, al mayor bien de las almas en la isla de Malta, salvos sus derechos y su libertad, como ninguna otra cosa apetece mayormente que encontrar también el agrado del Gobierno de Su Majestad, no será ajeno a asegurarse preventivamente, no ya por vía de correspondencia escrita y oficial, sino por simple comunicación verbal de carácter estrictamente confidencial y privado, cuando el mismo Gobierno le proporcione acerca de ello el medio o la ocasión.

Con relación al requisito de la nacionalidad maltesa que

se requerirá en los sujetos que deberán ser promovidos al episcopado, se hace observar que para deponer toda preocupación a este propósito, sin innovar nada en la disposición del derecho, deberá bastar al Gobierno de Su Majestad la consideración de que, en el hecho, la Santa Sede, conformándose con el espíritu de los sagrados cánones, jamás destinará a pastor de una diócesis a quien deba resultar menos grato a la población que se le haya de confiar.

En cuanto a la declaración que habrá de hacer el Gobierno de Su Majestad de que cualquiera comunicación referente a los negocios espirituales y eclesiásticos entre los obispos, el clero y el pueblo, de una parte, y la Santa Sede de otra, no dependerá nada del consentimiento de ese Gobierno, sino que será enteramente libre, declaración que se encuentra en plena armonía con el sistema político que tanto honra al Gobierno de Su Majestad, el Santo Padre la recibirá con toda satisfacción, reconociendo en tal libertad una de las condiciones indispensables a la vida de la Iglesia. Pero en cuanto a la comunicación que se requiere de los documentos pontificios de público interés y destinados a la publicidad, ésta podrá tener lugar en aquella materia en que acostumbra practicarla la Santa Sede y en la forma estrictamente confidencial y amigable de la que arriba se ha hecho mención.

Después de lo cual el infrascrito cardenal tiene el honor de confirmar a V. E. los sentimientos de su distinguida consideración.—M., *Cardenal Rampolla*.

Respuesta del general Simmons.

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Su Majestad la Reina de la Gran Bretaña e Irlanda y Emperatriz de la India, tiene el honor de acusar recibo de una nota de vuestra eminencia del 20 de marzo, en la cual se le informa, con relación al nombramiento de los obispos y otras materias eclesiásticas relativas a la isla de Malta, que el Santo Padre, después de haber todas las cosas con la debida consideración, deseando estrechar cada

vez más las relaciones amistosas y la buena inteligencia entre la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Británica, ha ordenado a vuestra eminencia comunicar al infrascrito cuanto sigue:

1. Por lo que se refiere a la manera de proveer las sedes episcopales de Malta y de Gozo, Su Santidad, si bien no puede consentir que el derecho de nombrar a los que él escoja y su libertad de acción relativa a las dichas sedes sean disminuídas, está, sin embargo, dispuesto a tratar al Gobierno de Su Majestad con todo aquel miramiento y consideración que sean compatibles con la integridad de aquel derecho y con aquella libertad. De ahí que siempre que al Gobierno británico plazca anunciar a Su Santidad oficialmente que ha vacado una sede o que es probable que vaque, Su Santidad acogerá gustosamente estas comunicaciones oficiales, con tal que se reserve, no obstante cualquier comunicación que pueda haber recibido, plena libertad de tomar la iniciativa para las disposiciones que pueda considerar necesarias y oportunas en el caso.

Por lo demás, antes de proceder al nombramiento oficial de los titulares de las dichas sedes, el secretario de Estado de Su Santidad no omitirá, en lo sucesivo, dar noticia previa de los mismos al Gobierno inglés, conforme a la práctica establecida. Tal práctica será también extendida al nombramiento de los administradores apostólicos y coadjutores con futura sucesión, y así como el Santo Padre al proveer como es su deber al mayor bien de las almas de la isla de Malta teniendo asegurados sus derechos y su libertad, en ninguna cosa tiene mayor interés sino en que su acción pueda también ser grata al Gobierno de Su Majestad, procurará asegurarse de esto previamente, no precisamente por escrito o con correspondencia oficial, sino por simple comunicación verbal de carácter estrictamente privado o confidencial, siempre que el mismo Gobierno le proporcione para ello medios y ocasión.

Con relación a todo esto, el infrascrito es autorizado para declarar que el Gobierno de Su Majestad no tiene ninguna intención en que los derechos del Papa y su libertad de acción relativamente a los nombramientos para las sedes va-

cantes de Malta y de Gozo sean en cosa alguna disminuídos. El Gobierno de Su Majestad, sin embargo, siendo deseoso de que se establezca una plena inteligencia y que no pueda surgir ninguna causa de diferencia que ponga, si bien parcialmente, la influencia de las dos potestades en antagonismo la una contra la otra en los ánimos del pueblo, acepta con satisfacción las declaraciones de su eminencia; es decir, que antes de proceder a cualquiera nombramiento para una de las dichas sedes, el secretario de Estado de Su Santidad no omitirá dar suficiente noticia de esto, conforme a la práctica establecida; y que el Santo Padre, al proveer al mayor bien de las almas de la isla de Malta, estando asegurados sus derechos y su libertad, no teniendo en tales nombramientos mayor interés sino en ponerse de acuerdo con los deseos del Gobierno de Su Majestad, se asegurará de esto previamente con comunicación verbal de carácter estrictamente confidencial y reservado, siempre que el Gobierno le proporcione para ello medios y ocasión. El Gobierno de Su Majestad observa también con mucha satisfacción que el Santo Padre mismo ha extendido esta declaración a los nombramientos de los administradores apostólicos y de los coadjutores con futura sucesión.

2. Con relación a la demanda del infrascrito de que la persona que ha de ser promovida al obispado sea de nacionalidad maltesa, el Gobierno de Su Majestad, aunque reconoce el derecho del Santo Padre de nombrar para tal obispado a otro que no sea de nacionalidad maltesa, acepta con satisfacción la seguridad de que la Santa Sede no pondrá jamás como pastor de las diócesis de Malta y de Gozo a un eclesiástico que no sea acepto al pueblo confiado a su cuidado.

3. El infrascrito es autorizado a declarar que el Gobierno de Su Majestad no tiene ningún deseo de que ninguna comunicación relativa a los negocios espirituales y eclesiásticos entre el obispo, el clero y el pueblo de Malta, de una parte, y la Santa Sede de otra, pueda depender, ni en lo más mínimo, del consentimiento de dicho Gobierno, sino que debe ser completamente libre; y está satisfecho de que el Santo Padre reciba esta declaración con plena satisfacción,

como la de que está en plena armonía con el sistema político que hace tanto honor al Gobierno de Su Majestad. El Gobierno de Su Majestad recibe con satisfacción la seguridad de que la Santa Sede comunicará al Gobierno de Su Majestad los documentos pontificios de público interés destinados a la publicidad, en la forma estrictamente confidencial y amigable de que se ha hecho mención arriba.

El infrascrito, etc.—*J. L. A. Simmons.*

Merece párrafo aparte Irlanda.

El 6 de diciembre de 1921 firmóse en Londres el Tratado de creación del Estado Libre de Irlanda, que fué aprobado por el *Dail Eireann* el 7 de enero de 1922, y después por el Parlamento británico el 31 de marzo de 1922.

En su virtud, el *Dail Eireann* votó el Estatuto Constitucional del Estado Libre de Irlanda el 25 de octubre de 1922, que fué registrado por el Parlamento británico el 5 de diciembre de 1922, y, finalmente, puesto en vigor el 6 del mismo mes y año.

El Estatuto religioso contenido en dicho Estatuto Constitucional se expresa en los párrafos y artículos siguientes:

Dice el preámbulo:

El *Dail Eireann*, constituido en calidad de Asamblea Constituyente en el presente Parlamento provisional, reconoce que toda autoridad legislativa viene de Dios al pueblo, y confiando que la unidad y la vida nacional de Irlanda serán de esta manera restauradas, proclama por la presente ley el establecimiento del Estado Libre de Irlanda, y en el ejercicio incontestado de su derecho, decreta y ordena lo que sigue.

Luego sigue el articulado.

Artículo 8. Se garantizan a todos los ciudadanos la libertad de conciencia y el derecho de profesar y de practicar

libremente una religión cualquiera, salvos el orden público y las buenas costumbres. Las leyes no podrán, directa o indirectamente, subvencionar ningún culto, suprimir o restringir su libre ejercicio, establecer privilegio o incapacidad fundados en las creencias o la confesión, limitar el derecho de frecuentar una escuela pública sin ser obligado a asistir a la enseñanza de la religión, repartir desigualmente las subvenciones del Estado entre las escuelas colocadas bajo el control de las diversas confesiones, ni privar a confesión alguna o establecimiento de instrucción de alguna parte de sus bienes, si no es por causa de trabajos de construcción de caminos o de ferrocarriles, de alumbrado, de conducción de aguas o de otros trabajos de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización.

Artículo 9. Los ciudadanos tienen el derecho de expresar libremente sus opiniones, de reunirse pacíficamente y sin armas y de formar asociaciones o sindicatos. Las leyes que regularán el modo de ejercicio de estos derechos de asociación y de libre reunión no establecerán distinción alguna de orden político, religioso o de clase.

Artículo 17. Antes de ocupar su asiento, y ante el representante de la Corona o su delegado, los miembros del Parlamento prestarán y firmarán el juramento siguiente:

«Yo... juro solemnemente fidelidad y apoyo a la Constitución del Estado Libre de Irlanda tal como es establecida por la ley, y fidelidad a Su Majestad el Rey Jorge V y a sus herederos y sucesores legítimos, en virtud de la asociación de Irlanda con la Gran Bretaña y de su adhesión y pertenencia a la Federación de las Naciones Británicas.»

CAPITULO XX

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE FRANCIA

La vida religiosa de Francia se desarrolla jurídicamente bajo el Derecho común y los principios básicos en que estriban los *Derechos del Hombre* y más positivamente bajo la famosa ley de separación de la Iglesia y del Estado, que tras larga y enconada lucha parlamentaria y diplomática con Roma fué promulgada al fin el 9 de diciembre del año 1905.

Divídese la ley en títulos y artículos (1).

El extracto de esta ley es el siguiente:

La República asegura a todos los ciudadanos la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión, sin más restricciones que las que, mirando al interés general, en la nueva ley se especifican. No reconoce ni costea ni subvenciona culto alguno, por lo cual, desde la promulgación de la ley, quedarán suprimidos los presupuestos y gastos de tal índole del Estado, de las provincias y de los Ayuntamientos. Se exceptúan las partidas dedicadas a beneficencia y las que se dedicarán a asegurar el libre ejercicio confesional en liceos, colegios, escuelas, hospicios, asilos y prisiones.

(1) El texto íntegro no lo he recibido todavía en este momento. Y no pudiendo retrasar más la publicación de este libro, se publica sin él. Pero será publicado, en breve, separadamente.

Los establecimientos religiosos cuya supresión se decreta continuarán funcionando provisionalmente y con arreglo a las disposiciones actuales hasta la adjudicación de sus bienes a las asociaciones que para tal fin, y dentro de la nueva ley, se constituyen. En el plazo de un año los bienes muebles e inmuebles de fábricas, consejos parroquiales, cabillos, etc., fueron transferidos, con las cargas que los afectan, a las nuevas asociaciones.

A falta de asociaciones, los bienes fueron aplicados a los establecimientos municipales de asistencia o de beneficencia pública, situados en el término de la antigua jurisdicción eclesiástica.

Los ministros del culto que tenían entonces más de sesenta años de edad y que durante treinta, por lo menos, habían percibido congrua del Estado, gozaron de una pensión vitalicia equivalente a los tres cuartos de sus haberes anteriores. Los de más de cuarenta y cinco, con veinte de servicios remunerados, la tuvieron de un 50 por 100, y los restantes percibieron: el primer año, la misma dotación que entonces percibían; el segundo, la mitad; el tercero, dos tercios; el cuarto, uno. Ninguna de estas pensiones podía exceder de 1.500 francos.

Los edificios que pertenecen a la nación y que sirven para el culto y para alojamiento de sus ministros (catedrales, iglesias, capillas, templos, sinagogas, obispados, presbiterios, seminarios), así como los diestros y objetos muebles, son y seguirán siendo propiedad del Estado, de los departamentos y de los municipios. Se decretó por ello hacer catálogos e inventarios minuciosos de los tesoros, archivos, colecciones y bibliotecas. Ordena no efectuar trabajo alguno de restauración o entretenimiento sin que lo autorice e inspeccione el Ministerio de Bellas Artes. Se dispone que sea pública y gratuita la visita a todos los edificios religiosos y a todas sus exposiciones y dependencias.

Las nuevas asociaciones, formadas por siete, quince o veinticinco personas, según el número de habitantes, se atenderán en su funcionamiento, contabilidad y responsabilidad a los preceptos de la ley civil.

Se prohíbe todo género de reuniones políticas en los lo-

cales destinados al culto. Para las ceremonias y manifestaciones exteriores se prescribe que continúe rigiendo la ley municipal de 1884. Se hace pública la celebración de todo culto en los locales destinados a este efecto. Basta una simple declaración para las reuniones permanentes, periódicas o accidentales; pero todas se hallarán, en interés del orden público, bajo la vigilancia de las autoridades respectivas.

Los discursos, sermones o actos que difamen a los ciudadanos y funcionarios serán castigados con multa de 500 a 3.000 francos y prisión de uno a doce meses, y los que propaguen la resistencia a las leyes o fomenten posibles disturbios, con prisión de tres meses a dos años.

Durante ocho años, a contar de la promulgación, los ministros del culto no eran elegibles para los consejos municipales de la comarca en que practicaban su ministerio.

Tal es, en resumen, el contenido de dicha ley. Es de advertir que la Constitución francesa no se ocupa del problema religioso.

* * *

A pesar del rompimiento de toda relación con Roma, Francia se vió obligada a conservar en sus dominios los pactos que tenía celebrados con la Santa Sede y a establecer otros nuevos después de la gran guerra, cuyos textos van a continuación:

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y FRANCIA

Relativamente a los honores litúrgicos en los países donde se ejerce el protectorado francés.

La Santa Sede, teniendo el cuidado de unificar los honores litúrgicos que se han de tributar en el curso de las ceremonias del culto católico a los representantes de Francia en reconocimiento del protectorado religioso francés en los

países de Oriente en que existe este protectorado religioso en virtud de tratados internacionales, capitulaciones, mandatos, usos y costumbres;

La Santa Sede y el Gobierno de la República Francesa se han puesto de acuerdo sobre las disposiciones siguientes:

I

En los países de Oriente donde existe actualmente el protectorado religioso de Francia, en virtud de tratados internacionales, capitulaciones, mandatos, usos y costumbres, y en los lugares o iglesias en que existe, los honores que se han de rendir al representante de Francia le serán rendidos los días de Navidad, Pascua y Pentecostés.

II

Los honores prevenidos en el artículo primero serán los siguientes:

- a) El representante de Francia será invitado a la misa solemne.
- b) Le será reservado un sitio de honor fuera y enfrente del coro o presbiterio; sin embargo, en las iglesias o capillas en que el banco consular francés hiciera parte del mobiliario fijo e inamovible del edificio en el momento de la firma del presente acuerdo, el representante de Francia conservará el uso de él, aun cuando este banco esté situado al interior del coro o presbiterio.
- c) El clero recibirá al representante de Francia a la entrada de la iglesia, le ofrecerá agua bendita y le conducirá a su sitio.
- d) En el curso de las ceremonias el clero le incensará antes de los asistentes.

III

Este privilegio será suspendido si el gobierno local se opone a él. La Santa Sede se reserva suspenderlo igualmente.

te en el caso en que el Gobierno francés acuerde no mantener su Embajada cerca de la Santa Sede.

Si el representante de Francia no fuere católico, le correspondería señalar entre sus colaboradores una persona debidamente cualificada y delegada para representarle en la ceremonia religiosa y recibir allí los honores arriba prevenidos. Sucederá lo mismo si la Santa Sede y el Gobierno de la República están de acuerdo por comprobar que el representante de Francia, aunque originariamente de confesión católica, profesase abiertamente sentimientos incompatibles con la religión católica.

Fecho por duplicado en París el 4 de diciembre de 1926.—
Luis Maglione.—A. Briand.

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y FRANCIA

Relativamente a los honores litúrgicos en los países en que fueron abrogadas las capitulaciones o no fueron aplicadas.

Ciertamente la abolición de las capitulaciones en el territorio de Turquía ha sido sancionado por el artículo 28 del tratado de Lausanne, y la no aplicación actual de las dichas capitulaciones es prevenida por el artículo 5 del mandato sobre Siria, el artículo 8 del mandato sobre Palestina y el artículo 9 del tratado entre la Gran Bretaña y el Irac, y que puede resultar de ello, en el primer caso, la abolición, y en el segundo, la no aplicación actual del protectorado francés, y, por consiguiente, de los honores litúrgicos rendidos a los agentes diplomáticos de Francia.

Sin embargo, la Santa Sede, en reconocimiento de los servicios rendidos desde hace siglos a los individuos y comunidades católicas de todas las nacionalidades en las escalas de Levante por los agentes diplomáticos y consulares de Francia, concede al Gobierno de la República Francesa el privilegio de obtener para los agentes diplomáticos y consulares de Francia los honores litúrgicos que abajo se expresan :

I

Los días que serán especificados en el artículo siguiente:

a) El representante de Francia será invitado a la misa solemne.

b) Le será reservado un sitio de honor fuera y delante del coro o del presbiterio. Sin embargo, en las iglesias o capillas en que el banco consular francés forme parte del mobiliario fijo e inamovible del edificio en el momento de la firma del presente acuerdo, el representante de Francia conservará el uso de él, aun cuando este banco esté situado en el interior del coro o del presbiterio.

c) El clero recibirá al representante de Francia a la entrada de la iglesia, le ofrecerá agua bendita y le conducirá a su sitio.

d) En el curso de la ceremonia, el clero le incensará antes que a los asistentes.

e) Terminada la misa, el clero le acompañará hasta la salida.

II

Los honores que se han de rendir al representante de Francia conforme al artículo primero serán, en los territorios que forman actualmente parte de Turquía, rendidos el día de Navidad, de Pascua y de Pentecostés. En los territorios de la Siria y del Líbano estos honores serán rendidos en las fechas tradicionales y según los usos convenientemente establecidos.

Este privilegio será suspendido si el gobierno local le hace oposición. La Santa Sede se reserva suspenderlo igualmente en el caso en que el Gobierno francés acuerde suprimir la Embajada cerca de la Santa Sede.

Si el representante de Francia no fuese de la religión católica, le corresponde señalar entre sus colaboradores una persona debidamente cualificada y delegarla para representarle en la ceremonia religiosa y recibir allí los honores arriba previstos. Sucederá lo mismo si la Santa Sede y el Go-

bierno de la República se ponen de acuerdo por convenir que el representante de Francia, aunque originariamente de confesión católica, profesa abiertamente sentimientos incompatibles con la religión católica.

III

La Santa Sede no se opone a los usos locales que reservan a los representantes de Francia honores especiales, pero conformes con los usos locales de la liturgia católica, incluso cuando los dichos representantes entran en funciones, el canto del *Tédeum* en las iglesias o capillas sobre las cuales tiene Francia los derechos de propiedad o de patronato, o que son anejos a establecimientos franceses. Dícese lo mismo por lo que concierne a las iglesias o capillas de los ritos orientales, donde estos honores, por consecuencia de una costumbre secular, les son tradicionalmente rendidos en reconocimiento particular de los buenos oficios de Francia.

IV

Entiéndase que en los territorios de Siria y Líbano confiados al mandato de Francia, la misa parroquial llevará, los domingos y días de fiesta religiosa y nacional, salvo las iglesias o capillas afectas al servicio particular de una colonia extranjera, el canto de *Domine, salvam fac Rempublicam*, con exclusión de otros cantos incompatibles con la autoridad y la forma constitucional de la *potencia* mandataria y con el estatuto orgánico de los territorios bajo mandato.

Fecho en París, por duplicado, el 4 de diciembre de 1926.—*Luis Maglione*, nuncio apostólico.—*A. Briand*.

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA
FRANCESA PARA PONDICHERY

1 septiembre de 1886.

Artículo I.

La Prefectura apostólica de Pondichery será suprimida.

Artículo II.

El clero de las parroquias será unido al vicariato.

Artículo III.

La Santa Sede tendrá la facultad de convertir el vicariato en diócesis o archidiócesis.

Artículo IV.

El Gobierno francés sostendrá a los curas de Chander-nagor, Maché y Janaon, mientras que el obispo y los curas de Pondichery y de Karikal serán mantenidos con los fondos de la misión.

Artículo V.

El vicario apostólico o el obispo de Pondichery será elegido siempre entre los miembros franceses del seminario de misiones extranjeras de París.

Vaticano, 1 de septiembre de 1886.—El embajador de la República Francesa, *Léfebvre de Béhaine*.—El secretario de Estado de S. S., *L. Cardenal Jacobini*.

ACUERDO SOBRE LA SISTEMATIZACION DE LA DIOCESIS DE CARTAGO

I.—*Nota diplomática del Emmo. Sr. Card. Secretario de Estado a S. E. el Embajador de Francia.*

7 de noviembre de 1893.

En consideración a la situación especial en que se encuentra la regencia de Túnez bajo el protectorado de Francia, y queriéndose dar a la diócesis de Cartago, que está comprendida en aquel territorio, una sistematización más conforme al nuevo orden de cosas allí establecido, entre la Santa Sede y el Gobierno de la República Francesa ha sido concluído el siguiente acuerdo, el cual, durante el protectorado antes dicho, será por ambas partes constantemente observado:

Artículo I.

El arzobispo de Cartago será nombrado por el Sumo Pontífice, previo acuerdo con el Gobierno francés.

Artículo II.

El Gobierno francés continuará suministrando una especial subvención anual al arzobispo de Cartago, como al difunto cardenal Lavigerie.

El firmante, cardenal secretario de Estado, al manifestar a S. E. el Sr. Embajador de Francia el consentimiento de la Santa Sede al mencionado acuerdo, tiene el honor de confirmarle los sentimientos de su alta consideración.

M. Card. Rampolla.

II.—*Nota diplomática de S. E. el Embajador de Francia al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad.*

7 noviembre de 1893.

Considerando la situación especial en que se encuentra la regencia de Túnez bajo el protectorado de Francia, y a

fin de dar a la diócesis de Cartago, que está comprendida en este territorio, una organización más conforme al orden de cosas así establecido, el Gobierno de la República Francesa y la Santa Sede han concluido el acuerdo siguiente, que, durante la duración de dicho protectorado, será constantemente observado por las dos partes:

Artículo I.

El arzobispo de Cartago será nombrado por el Soberano Pontífice, previo acuerdo con el Gobierno francés.

El Gobierno francés continúa suministrando una subvención especial anual al arzobispo de Cartago, como hizo con el difunto cardenal Lavigerie.

El infrascrito embajador de Francia cerca de la Santa Sede, al dar parte a Su Eminencia el Sr. Cardenal Secretario de Estado de la adhesión del Gobierno de la República al acuerdo arriba expresado, tiene el honor de renovarle las seguridades de su alta consideración.

Ed. Lefebvre de Béhaine.

ESTATUTOS JURIDICO - RELIGIOSOS DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CAPITULO XXI

ESTATUTOS JURIDICO-RELIGIOSOS DE CANADA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y MEJICO

I. CANADA

La vida religiosa del Canadá rígease por costumbres introducidas en tiempo de los dominadores y principalmente por el espíritu tradicional inglés.

De constitución religiosa escrita no tiene más que parte del artículo 93 de su Constitución vigente de 29 de marzo de 1867, que dice:

Artículo 93. En cada provincia el Parlamento podrá legislar sobre instrucción pública, sólo con sujeción a las reglas siguientes:

.....
2.^a Todos los poderes, privilegios y deberes conferidos e impuestos por la ley en el *Alto Canadá*, antes de la unión, a las escuelas confesionales y a la asociación de escuelas de los súbditos católicos romanos de Su Majestad, se extenderán por la presente ley a las escuelas disidentes de los súbditos de la Reina, protestantes y católicos romanos, en la provincia de *Quebec*.

3.^a En cualquier provincia en que exista un sistema de escuelas confesionales o disidentes que estuvieran autorizadas por la ley en el momento de la unión—o si se establece subsiguientemente por el Poder legislativo de la provincia—, se

podrá apelar al gobernador general, en Consejo, de todo acto o resolución de cualquier autoridad provincial que afecte a uno de los derechos o privilegios de la minoría protestante o católica romana de los súbditos de Su Majestad, en cuanto dichos derechos o privilegios se refieran a instrucción pública.

II. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Tampoco tiene este Estado, de tradición inglesa, largo Estatuto jurídico-religioso escrito. Todo es tradicional y de gran amplitud.

Sin embargo, en la vigente Constitución de la poderosa República norteamericana, de 17 de septiembre de 1787, hállase el siguiente contenido religioso:

Capítulo VI, artículo 3. ... Jamás será exigida declaración alguna religiosa como condición de aptitud para alguna función o cargo público bajo la autoridad de los Estados Unidos.

Enmienda I. El Congreso no hará ley alguna estableciendo una religión del Estado o prohibiendo el libre ejercicio de una religión...

III. MEJICO

La vigente Constitución de Méjico es de 31 de enero de 1917.

Su contenido religioso es como sigue:

... ..

Artículo 3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

... ..
Artículo 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurados, los cargos concejiles y los cargos de elección popular, directa o indirecta; y obligatorias y gratuitas, las funciones electorales.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

... ..
Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrada y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o

en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

... ..
 Artículo 27. La capacidad para adquirir dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

... ..
 II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el Gobierno federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto.

Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construído o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público serán propiedad de la nación...

Artículo 37.

La calidad de ciudadano mexicano se pierde:

... ..
 III. Por comprometerse en cualquiera forma ante ministros de algún culto o ante cualquiera otra persona, a no

observar la presente Constitución o las leyes que de ella
emanen... ..

Artículo 130.

Corresponde a los Poderes federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o, en general, del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyen-

do previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo y de los objetos pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos para cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de los templos y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo o del relativo a cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del gobernador del Estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles.

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable, y la dispensa o trámite referidos será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto.

Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que se relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni

recibir por ningún título un ministro de cualquier culto un inmueble ocupado por cualquiera asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado.

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se regirán, para su adquisición por particulares, conforme al artículo 27 de esta Constitución.

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en Jurado.

CAPITULO XXII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE NICARAGUA

La República de Nicaragua dióse su Constitución vigente el 10 de noviembre de 1911.

Su contenido religioso se lee en los apartados siguientes :

En la presencia de Dios—dice el encabezamiento—, nosotros los representantes del pueblo nicaragüense, reunidos en Asamblea constituyente, decretamos y sancionamos lo siguiente :

Artículo 5. La mayoría de los nicaragüenses profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado garantiza el libre ejercicio de este culto y también el de todos los demás en cuanto no se opongan a la moral cristiana y al orden público; quedando prohibido dar leyes que protejan o restrinjan cultos determinados.

Artículo 76. Para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, del estado seglar y mayor de veinticinco años de edad.

Artículo 102. El Presidente de la República, el vicepresidente y los designados deberán ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores de treinta años de edad, de estado seglar y naturales de Nicaragua.

Artículo 114. Los secretarios de Estado deben ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, naturales de Nica-

ragua, del estado seglar y mayores de veinticinco años de edad.

Artículo 118. Los magistrados deben ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, del estado seglar, abogados y mayores de treinta años de edad.

La República de Nicaragua conserva vigente el Concordato que celebró con la Santa Sede el año 1861.

Es como sigue:

CONCORDATO DE LA SANTA SEDE CON LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En el nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República de Nicaragua nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, a su eminencia el señor don Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores;

y el Presidente de la República de Nicaragua, al excelentísimo señor don Fernando de Lorenzana, marqués de Belmonte, caballero de la Sagrada Orden Ecuéstre Jerosolimitana del Santo Sepulcro de N. S. J. C., comendador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno en la clase militar, caballero gran cruz de la misma Orden en la clase civil, comendador de la Real Orden de Francisco I, de las dos Sicilias, caballero con placa de la ínclita Orden Pontificia de Cristo, etc., etc., etc., y ministro plenipotenciario de Nicaragua cerca de la Santa Sede.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado en la República de Nicaragua, y se conservará siem-

pre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las prerrogativas de los sagrados cánones.

Artículo II.

En consecuencia, la enseñanza en las Universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción será conforme a la doctrina de la misma religión católica; al cual efecto, los obispos y ordinarios locales tendrán la dirección libre de las cátedras de Teología, de Derecho canónico y de todos los ramos de enseñanza eclesiástica, y a más de la influencia que ejercerán en virtud de su ministerio sagrado en la educación religiosa de la juventud, velarán por que en la enseñanza de cualquier otro ramo nada haya contrario a la religión ni a la moral.

Artículo III.

Los obispos conservarán asimismo su derecho de censura respecto de todos los libros o publicaciones de cualquiera naturaleza puestos en circulación que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública; y las autoridades competentes de la República, en virtud de sus respectivas atribuciones, darán su apoyo a las disposiciones que los obispos tomaren conforme a los sagrados cánones para defender la religión y evitar lo que pudiera serle contrario.

Artículo IV.

Siendo el Pontífice romano el Jefe de la Iglesia universal por derecho divino, tanto los obispos como el clero y el pueblo tendrán libre comunicación con la Santa Sede Apostólica.

Artículo V.

El Gobierno de Nicaragua se compromete a suministrar las dotaciones del obispo, del cabildo y del seminario y a proveer a los gastos del culto y de fábrica de la iglesia de los fondos del Tesoro nacional, conforme a la escala específica que va al fin del presente Concordato; la cual, en caso de erecciones de nuevos obispados, se adoptará del mismo modo para la dotación de los obispos, de los cabildos, de los seminarios y de las fábricas de las iglesias. Y asentado que tales asignaciones son un compensativo o más bien una subrogación de los diezmos, pues el Gobierno, con miras de utilidad pública local y con el consentimiento del obispo, ha solicitado y obtenido de la Santa Sede esta substitución, deberán considerarse como lo son a título oneroso y reconocidas por el Gobierno como un verdadero crédito de las iglesias contra la nación nicaragüense, adquirirán el carácter de una verdadera renta independiente.

Artículo VI.

Los párrocos seguirán percibiendo las primicias y los emolumentos dichos de estola, quedando al cuidado y conciencia del ordinario el arreglo de los aranceles de éstos hasta que el Gobierno les asigne una congrua segura e independiente, poniéndose de acuerdo para ello con el obispo.

Artículo VII.

En atención a las dotaciones precitadas, mayores en su totalidad de lo que produce actualmente la renta de diezmos, y que el Gobierno espera aumentar en el tiempo venidero, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República de Nicaragua y a sus sucesores en este cargo el Patronato, o sea el privilegio de presentar para cualesquiera vacantes de la diócesis o iglesia de la Asunción de María San-

tísima y de las demás que fueren erigidas en aquel territorio, a eclesiásticos dignos e idóneos adornados de todas las cualidades requeridas por los sagrados cánones; y el Sumo Pontífice, en conformidad a las reglas prescritas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas. Los presentados, sin embargo, no podrán de ninguna manera intervenir en el régimen o en la administración de las iglesias para las cuales hubiesen sido designados, antes de recibir las bulas de institución canónica, como está prescrito en los sagrados cánones. El Presidente de la República procederá a hacer la presentación del candidato no más tarde de un año después del día en que se verificó la vacante.

Artículo VIII.

Por la misma causa, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República el privilegio de nombrar para todas las prebendas del capítulo, ya sean de dignidades, o canonicías, o racioneros, hasta el número de seis, exceptuando la primera dignidad, que será reservada a la libre colación de la Santa Sede, y la teologal (lectoral) y penitenciaria, las cuales serán conferidas por los obispos en concurso de oposición a las personas que considerasen más dignas. Serán de nombramiento del Presidente las seis prebendas que primero vacaren de las no exceptuadas, las cuales quedarán sujetas para siempre a su libre nominación. La provisión de las restantes, cualquiera que fuese su clase y número en el tracto sucesivo, pues ahora sólo hay cinco existentes, corresponderá en adelante a los obispos. Esto no impide que puedan ser fundadas otras prebendas de oposición como las dos antedichas, que deben conferirse en concurso por los obispos, las cuales una vez establecidas no podrán variarse.

Artículo IX.

Todas las parroquias serán provistas en concurso abierto, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento,

debiendo los ordinarios formar las ternas de los concurrentes aprobados y dirigirlas al Presidente de la República, quien nombrará uno entre los propuestos, conforme a la práctica observada en otras Repúblicas de la América antiguamente española.

Artículo X.

La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas según lo requiera la necesidad y la utilidad de los fieles; sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno de Nicaragua. En cada una de estas diócesis se establecerá un cabildo de canónigos y el colegio seminario proporcionado al número del clero diocesano y a las necesidades de la misma diócesis, y para la dotación de las sillas episcopales que hayan de ser erigidas, de los cabildos y de los seminarios se procederá sobre las bases adoptadas para la catedral de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María en la República de Nicaragua, la cual, a la brevedad posible, tendrá un cabildo como se expresa en la escala que se halla al fin del presente Concordato. En los colegios seminarios serán recibidos y educados conforme a lo prescrito por el Sagrado Concilio de Trento, aquellos jóvenes a quienes los obispos creyeran conveniente admitir según la necesidad y utilidad de sus diócesis. Corresponde, por consiguiente, de pleno y libre derecho a la autoridad de los prelados diocesanos todo cuanto concierne al arreglo, a la enseñanza, al régimen y a la administración de los seminarios, cuyos rectores y profesores serán libremente nombrados y revocados por los obispos cuando lo juzgaren útil y necesario.

Artículo XI.

Se erigirán así también por la competente autoridad diocesana nuevas parroquias según lo requieran la necesidad y utilidad de los fieles, procediendo de acuerdo con el Gobierno siempre que fuere necesario conciliar los efectos civiles.

Artículo XII.

En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea nombrará libremente, en el término prefijado y en conformidad a lo establecido por el Sagrado Concilio de Trento, al vicario capitular, sin poder revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo, quedando, por consecuencia, abolida cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dispuesto por los santos cánones.

Artículo XIII.

Las causas relativas a la fe, a los sacramentos, a las funciones sagradas, a las obligaciones y a los derechos anexos al sagrado ministerio, y en general todas las causas de naturaleza eclesiástica, pertenecen exclusivamente al juicio de la autoridad eclesiástica, según lo mandan los sagrados cánones.

Artículo XIV.

Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que se defieran a los tribunales laicos las causas personales de los eclesiásticos en materia civil, así como las causas concernientes a las propiedades y a otros derechos temporales de los clérigos, de las iglesias, de los beneficios y de las demás fundaciones eclesiásticas.

Artículo XV.

Por la misma razón, la Santa Sede no hace dificultad a que las causas criminales de los eclesiásticos por delitos perseguidos por las leyes de la República extraños a la religión sean deferidas a los Tribunales laicos. Pero en los juicios de segunda y de última instancia entrarán a hacer parte del Tribunal como conjuces al menos dos eclesiásticos

nombrados por el ordinario. Estos juicios no serán públicos y las sentencias que resultaren de ellos en caso de condenación a pena capital, aflictiva o infamante, no se ejecutarán sin la aprobación de la autoridad civil competente y sin que el respectivo obispo haya cumplido previamente a la mayor brevedad posible cuanto en tales casos se requiere por los sagrados cánones. En el arresto y detención de los eclesiásticos se les guardarán los miramientos convenientes a su carácter, debiendo darse pronto aviso de dicho arresto al obispo respectivo. En la disposición contenida en este artículo siempre se entienden excluidas las causas mayores, las cuales son reservadas a la Santa Sede conforme a lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 24 de Refor. Cap. V.

- Artículo XVI.

Siendo los ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su ministerio, podrán, conforme a la disciplina vigente aprobada de la Iglesia, corregir también a los eclesiásticos por las faltas a los deberes de su oficio y por las de su conducta moral.

Artículo XVII.

La Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquier título justo; sus adquisiciones serán respetadas y garantidas a la par de las propiedades de todos los ciudadanos nicaragüenses; y por lo que toca a las instituciones u obras pias en beneficio de la Iglesia y de los fieles, no se podrá hacer ninguna supresión ni unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvo las facultades que competen a los obispos, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento.

Artículo XVIII.

La Santa Sede, en vista de las circunstancias actuales, consiente en que los fondos o bienes eclesiásticos sean some-

tidos a las cargas públicas, a la par de los bienes de los ciudadanos nicaragüenses, excepto siempre las fábricas dedicadas al culto divino, es decir, las iglesias.

Artículo XIX.

Atendida la utilidad que del presente Concordato resulta para la religión, el Santo Padre, a instancia del Presidente de la República de Nicaragua, y por proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que las personas que durante las vicisitudes pasadas hubiesen comprado bienes eclesiásticos o redimido censos en los dominios de ella, autorizados por las leyes vigentes en aquellos tiempos, tanto los que se hallan en posesión cuanto los que hayan sucedido o sucedieren de derecho a los dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo y de ninguna manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, de modo que los primeros compradores, lo mismo que sus legítimos sucesores, gozarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes, de sus respectivos emolumentos y productos, siendo entendido que no se renovarán estas enajenaciones abusivas.

Artículo XX.

Los obispos podrán establecer órdenes o congregaciones religiosas de regulares de ambos sexos en sus propias diócesis, según lo prescriben los sagrados cánones; pero deberán ponerse de acuerdo al intento con el Gobierno. Las cosas relativas a regulares serán arregladas según lo disponen las leyes canónicas y las constituciones de las respectivas órdenes.

Artículo XXI.

El Gobierno de la República de Nicaragua suministrará los medios adecuados para la propagación de la fe y para

la conversión de los infieles existentes dentro de los límites de su territorio y favorecerá el establecimiento y progreso de las misiones que con tan laudable objeto llegasen al territorio de la República autorizadas por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

Artículo XXII.

En vista de la declaración del Gobierno emitida por medio de su plenipotenciario, en cuanto al juramento, de que no es su mente obligar en conciencia a quien le preste a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consiente en que los obispos y demás eclesiásticos lo presten en la forma siguiente: «Yo juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Nicaragua, y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional o a la tranquilidad pública.»

Artículo XXIII.

Después de los oficios divinos en todas las iglesias de Nicaragua se hará la siguiente oración: «Domine salvam fac Rempublicam. Domine salvum fac Praesidem et supremas ejus Autoritates.»

Artículo XXIV.

Su Santidad concede a los ejércitos de la República de Nicaragua las exenciones y gracias conocidas bajo la denominación de privilegios castrenses y determinará después en un breve contemporáneo a la publicación del Concordato cada una de las gracias y exenciones que entiende conceder.

Artículo XXV.

Todo lo demás que no se haya arreglado expresamente por los artículos anteriores, sea que pertenezca a cosas o a personas eclesiásticas, será dirigido o administrado conforme a la disciplina vigente de la Iglesia católica, apostólica, romana.

Artículo XXVI.

Quedan abrogadas por la presente Convención todas las leyes, ordenanzas y decretos en cuanto se opongan a ella, promulgados de cualquier modo y en cualquier tiempo en la República de Nicaragua, y la dicha Convención se considerará como ley del Estado, que debe tener fuerza y valor para en adelante.

Artículo XXVII.

El presente Concordato será ratificado legalmente por ambas partes, y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del término de dieciocho meses o antes, si fuese posible.

Artículo XXVIII.

Luego que fueren canjeadas las ratificaciones del presente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus letras apostólicas.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con su sello.

Hecho en Roma a 2 de noviembre de 1861.—*Fernando de Lorenzana.*—*J. Card. Antonelli.*

Escala específica de las dotaciones asignadas al colegio seminario, al ilustrísimo señor obispo, al cabildo eclesiástico y a otros individuos destinados al servicio del culto en la iglesia catedral de León de Nicaragua y a la manutención de la fábrica y demás necesidades de la misma catedral, en virtud del Concordato con la Santa Sede Apostólica:

Pesos

Al colegio seminario, anualmente.....	2.000
Al ilustrísimo señor obispo de Nicaragua, ídem.....	3.000
Al venerable cabildo y demás eclesiásticos.....	4.158

Distribuída esta partida del modo siguiente:

Al señor deán.....	630
Al señor arcediano.....	620
Al señor maestrescuela.....	610
Al canónigo penitenciario.....	600
Al canónigo teologal (lectoral).....	600
A dos canónigos de gracia con 500 pesos cada uno, cuando el Gobierno pueda decretar este gasto. Pesos, 1.000.	
A cuatro capellanes de coro con 200 pesos cada uno	800
Al señor sacristán mayor.....	150
Al señor maestro de ceremonia.....	100
Al sacristán de capilla.....	48

4.158

Para los músicos de canto y de instrumentos de capilla	1.000
Para la fábrica y demás gastos de la catedral.....	1.994

Suma de la escala..... 12.152

Y además 2.000 pesos para gastos eventuales de confesores, iglesias pobres, hospitales y otros.....	2.000
---	-------

Suma total pesos..... 14.152

Fernando de Lorenzana.

G. Card. Antonelli.

CAPITULO XXIII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

La Constitución vigente de esta República es de 13 de agosto de 1896.

Contiene el siguiente Estatuto religioso :

Artículo 12. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.

Artículo 15. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos o servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo que por motivos de necesidad o utilidad públicas se establezca por ley. La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro.

Artículo 32. Ninguna corporación permanente civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para conservar en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

Artículo 33. La enseñanza es libre; la primaria es obligatoria. La enseñanza que se dé en los establecimientos cos-

teados por el Estado será laica y gratuita, y estará sujeta a los reglamentos respectivos.

Artículo 35. Se garantiza el derecho de asociación y sólo se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y toda especie de instituciones monásticas.

Artículo 83. Para ser Presidente o vicepresidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de treinta años de edad, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos sin haberlos perdido en los cinco años anteriores a la elección y ser de honradez e instrucción notorias.

Artículo 125. Ningún ministro de cualquier culto podrá obtener cargo de elección popular.

La República de El Salvador tiene pactado con la Santa Sede un Concordato, que está vigente, aunque hoy se practica restringidamente, a tenor de la nueva Constitución, y es como sigue:

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y LA REPUBLICA DE SAN SALVADOR

(22 abril 1862.)

En nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República del Salvador nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, a su eminencia el señor don Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores;

y su excelencia el Presidente de la República del Salvador, al excelentísimo señor Fernando de Lorenzana, marqués de Belmonte, caballero de la Sagrada Orden Ecuestre Jerosolimitana del Santo Sepulcro de N. S. J. C., comendador de la Real Orden Pontificia de San Gregorio Magno en

clase militar, caballero gran cruz de la misma Orden en la clase civil, comendador de la Real Orden de Francisco I de las dos Sicilias, caballero con placa de la ínclita Orden Pontificia de Cristo, etc., etc., y ministro plenipotenciario cerca de la Santa Sede.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado en la República del Salvador, y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados cánones.

Artículo II.

En consecuencia, la enseñanza en las Universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción será conforme a la doctrina de la misma religión católica; al cual efecto los obispos y ordinarios locales tendrán la dirección libre de las cátedras de Teología, de Derecho canónico y de todos los ramos de enseñanza eclesiástica, y a más de la influencia que ejercerán en virtud de su ministerio sagrado en la educación religiosa de la juventud, velarán por que en la enseñanza de cualquiera otro ramo nada haya contrario a la religión ni a la moral; y verificándose este caso, los obispos llamarán la atención del Gobierno para que ponga remedio a ello.

Artículo III.

Los obispos conservarán asimismo su derecho de censura respecto de todos los libros o publicaciones de cualquiera naturaleza puestas en circulación que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública, mediante cartas pastorales o decretos prohibitivos de su lec-

tura; y el Gobierno del Salvador concurrirá, en cuanto se lo permita su autoridad y con los medios propios de ella, a sostener las disposiciones que los obispos tomaren conforme a los sagrados cánones para defender la religión y evitar lo que pudiera serle contrario.

Artículo IV.

Siendo el Pontífice romano Jefe de la Iglesia universal por derecho divino, tanto los obispos como el clero y el pueblo tendrán libre comunicación con la Sede Apostólica.

Artículo V.

El Gobierno del Salvador se compromete a suministrar las dotaciones del obispo, del cabildo y del seminario y a proveer los gastos del culto y de fábrica de la iglesia de los fondos del Tesoro Nacional, conforme a la escala específica que va al fin del presente Concordato; la cual, en caso de erecciones de nuevos obispados, se adoptará del mismo modo para la dotación de los obispos, de los cabildos, de los seminarios y de las fábricas de las iglesias. Y asentado que tales asignaciones son un compensativo o más bien una subrogación de los diezmos, pues el Gobierno, con miras de utilidad pública local, ha solicitado y obtenido de la Santa Sede esta substitución, deberán considerarse como lo que son a «título oneroso», y reconocidas por el Gobierno como un verdadero crédito de las iglesias contra la nación salvadoreña, adquirirán el carácter de una verdadera renta independiente.

Artículo VI.

Los párrocos seguirán percibiendo las primicias y los emolumentos dichos de estola, quedando al cuidado y conciencia del ordinario el arreglo de los aranceles de éstos, hasta que el Gobierno les asigne una congrua segura e independiente, poniéndose de acuerdo para ello con el obispo.

Artículo VII.

En atención a las dotaciones precitadas, mayores en su totalidad de lo que produce actualmente la renta de diezmos, y que el Gobierno espera aumentar en el tiempo venidero, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República del Salvador y a sus sucesores en este cargo el Patronato, o sea el privilegio de presentar para cualquiera vacante de la diócesis de S. Salvador y de las demás que fueren erigidas en aquel territorio, a eclesiásticos dignos e idóneos adornados de todas las cualidades requeridas por los sagrados cánones, y el Sumo Pontífice, en conformidad a las reglas prescriptas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas. Los presentados, sin embargo, no podrán de ninguna manera intervenir en el régimen o administración de las iglesias para las cuales hubiesen sido designados antes de recibir las bulas de institución canónica, como está prescripto en los sagrados cánones. El Presidente de la República procederá a hacer la presentación del candidato no más tarde de un año después del día en que se verificó la vacante.

Artículo VIII.

Por la misma causa, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República el privilegio de nombrar para todas las prebendas del capítulo, ya sean de dignidades, o canonjías, o racioneros, hasta el número de seis, exceptuando la primera dignidad, que será reservada a la libre colación de la Santa Sede, y la teologal (lectoral) y penitenciaria, las cuales serán conferidas por los obispos en concurso de oposición a las personas que considerasen más dignas. Serán del nombramiento del Presidente las seis prebendas que primero vacaren de las no exceptuadas, las cuales quedarán sujetas para siempre a su libre nominación. La provisión de las restantes, cualquiera que fuese su clase y número en el tracto sucesivo, pues ahora sólo hay tres exis-

tentes, corresponderán en adelante a los obispos. Esto no impide que pueden ser fundadas otras prebendas de oposición como las dos antedichas, que deben conferirse en concurso por los obispos, las cuales una vez establecidas no podrán variarse.

Artículo IX.

Todas las parroquias serán provistas en concurso abierto, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento, debiendo los ordinarios formar las ternas de los concurrentes aprobados y dirigirlas al Presidente de la República, que nombrará uno entre los propuestos, conforme a la práctica observada en las otras Repúblicas de la América antiguamente española.

Artículo X.

La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas según lo requiera la necesidad y la utilidad de los fieles; sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno del Salvador. En cada una de estas diócesis se establecerá un cabildo de canónigos y el colegio seminario proporcionado al número del clero diocesano y a las necesidades de las mismas diócesis, y para la dotación de las sillas episcopales que hayan de ser erigidas de los cabildos y de los seminarios se procederá sobre las bases adoptadas para la de S. Salvador, la cual, a la brevedad posible, tendrá un cabildo como se expresa en la escala que se halla al fin del presente Concordato. En los colegios seminarios serán recibidos y educados conforme a lo prescrito por el Sagrado Concilio de Trento, aquellos jóvenes a quienes los obispos creyeran conveniente admitir según la necesidad y utilidad de sus diócesis. Corresponde, por consiguiente, de pleno y libre derecho a la autoridad de los prelados diocesanos todo cuanto concierne al arreglo, a la enseñanza, al régimen y a la administración de los seminarios, cuyos rectores y profe-

sores serán libremente nombrados y revocados por los obispos cuando lo juzgaren útil y necesario.

Artículo XI.

Se erigirán así también por la competente autoridad diocesana nuevas parroquias según lo requieran la necesidad y la utilidad de los fieles, procediendo de acuerdo con el Gobierno siempre que fuere necesario conciliar los efectos civiles.

Artículo XII.

En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea nombrará libremente, en el término prefijado y en conformidad a lo establecido por el Sagrado Concilio de Trento, el vicario capitular, sin poder revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo, quedando por consecuencia abolida cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dispuesto por los santos cánones.

Artículo XIII.

Las causas relativas a la fe, a los sacramentos, a las funciones sagradas, a las obligaciones y a los derechos anejos al sagrado ministerio, y en general todas las causas de naturaleza eclesiástica, pertenecen exclusivamente al juicio de la autoridad eclesiástica, según lo mandan los sagrados cánones.

Artículo XIV.

Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que se defieran a los Tribunales laicos las causas personales de los eclesiásticos en materia civil, así como las causas concernientes a las propiedades y a otros derechos temporales de los clérigos, de las iglesias, de los beneficios y de las demás fundaciones eclesiásticas.

Artículo XV.

Por la misma razón, la Santa Sede no hace dificultad a que las causas criminales de los eclesiásticos, por delitos perseguidos por las leyes de la República extraños a la religión, sean deferidas a los Tribunales laicos. Pero en los juicios de segunda y de última instancia entrarán a hacer parte del Tribunal como conjueces al menos dos eclesiásticos nombrados por el ordinario. Estos juicios no serán públicos, y las sentencias que resultaren de ellos, en caso de condenación a pena capital, afflictiva o infamante, no se ejecutarán sin la aprobación del Presidente de la República y sin que el respectivo obispo haya a la mayor brevedad cumplido plenamente cuanto en tales casos se requiere por los sagrados cánones. En el arresto y detención de los eclesiásticos se les guardarán los miramientos convenientes a su carácter, debiendo darse pronto aviso de dicho arresto al obispo respectivo. En la disposición contenida en este artículo siempre se entienden excluidas las causas mayores, las cuales son reservadas a la Santa Sede, conforme a lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 24 *de Refor.* Cap. V.

Artículo XVI.

Siendo los ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su ministerio, podrán, conforme a la disciplina vigente, aprobada, la Iglesia, corregir también a los eclesiásticos por las faltas a los deberes de su oficio y por las de su conducta moral.

Artículo XVII.

La Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquier título justo; sus adquisiciones piadosas serán respetadas y garantidas a la par de las propiedades de todos los ciudadanos salvadoreños; y por lo que toca a las fundaciones, no se podrá hacer ninguna supresión ni unión sin la inter-

vención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los obispos, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento.

Artículo XVIII.

La Santa Sede, en vista de las circunstancias actuales, consiente en que los fondos o bienes eclesiásticos sean sometidos a las cargas públicas, a la par de los ciudadanos salvadoreños, excepto siempre las fábricas dedicadas al culto divino, es decir, las iglesias.

Artículo XIX.

Atendida la utilidad que del presente Concordato resulta para la religión, el Santo Padre, a instancias del Presidente de la República del Salvador, y por proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que las personas que durante las vicisitudes pasadas hubiesen comprado bienes eclesiásticos o redimido censos en los dominios de ella, autorizados por las leyes vigentes en aquellos tiempos, tanto los que se hallan en posesión cuanto los que hayan sucedido o sucedieren de derecho a los dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo y de ninguna manera por su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, de modo que los primeros compradores, lo mismo que sus legítimos sucesores, gozarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes, de sus respectivos emolumentos y productos, siendo entendido que no se renovararán esas enajenaciones abusivas.

Artículo XX.

Los obispos podrán establecer órdenes o congregaciones de regulares de ambos sexos en sus propias diócesis, según

no prescriben los sagrados cánones; pero deberán ponerse previamente de acuerdo al intento con el Gobierno. Las cosas relativas a regulares serán arregladas según lo disponen las leyes canónicas y las constituciones de los respectivos órdenes.

Artículo XXI.

En vista de la declaración del Gobierno emitida por medio de su plenipotenciario en cuanto al juramento de que no es su mente obligar en conciencia a quien le preste a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consiente en que los obispos y demás eclesiásticos lo presten en la forma siguiente: «Yo juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República del Salvador, y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional o a la tranquilidad pública.»

Artículo XXII.

Después de los oficios divinos en todas las iglesias del Salvador se hará la siguiente oración: *Domine salvam fac Rempublicam: Domine salvum fac Praesidem ejus et supremas ejus Auctoritates.*

Artículo XXIII.

Su Santidad concede a los ejércitos de la República del Salvador las exenciones y gracias conocidas bajo la denominación de privilegios castrenses, y determinará después, en un breve contemporáneo a la publicación del Concordato, cada una de las gracias y exenciones que entiende conceder.

Artículo XXIV.

Todo lo demás que no se haya arreglado expresamente por los artículos anteriores, sea que pertenezca a cosa o a personas eclesiásticas, será dirigido y administrado conforme a la disciplina vigente de la Iglesia católica, apostólica, romana.

Artículo XXV.

El presente Concordato, que ha de ser substituído a todas las leyes, decretos y ordenanzas en cuanto se opongan a él, se considerará como ley del Estado y será publicado.

Artículo XXVI.

El presente Concordato será ratificado legalmente por ambas partes, y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del término de dieciocho meses o antes, si fuese posible.

Artículo XXVII.

Luego que fueren canjeadas las ratificaciones del presente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus letras apostólicas.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con su sello.

Hecho en Roma a 22 de abril de 1862.—*Fernando de Lorenzana.*—*J. Card. Antonelli.*

Escala específica de las dotaciones asignadas al seminario, al ilustrísimo señor obispo, al cabildo eclesiástico y a la fábrica de la iglesia catedral de la diócesis de San Salvador.

Pesos

1.º Al colegio seminario, anualmente.....	4.200
2.º Al señor obispo de San Salvador.....	4.200
3.º Al cabildo eclesiástico.....	5.100

Distribuída la última partida del modo siguiente:

Dignidades.

Al deán	1.200
Al tesorero	1.000

Canónigos.

Al penitenciario	800
Al teologal (lectoral).....	800
A un canónigo de gracia.....	600

Racioneros.

Dos racioneros con 350 pesos cada uno.....	700
--	-----

Suma, pesos..... 5.100

4.º A la fábrica de la catedral de San Salvador.....	1.500
--	-------

Suma, pesos..... 15.000

Fernando de Lorenzana.

CAPITULO XXIV

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE HONDURAS

Honduras se dió su Constitución el 10 de septiembre de 1924.

El contenido religioso de esta Constitución es como sigue :

Artículo 53. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones que no contraríen las leyes del país. La Iglesia está separada del Estado, el cual no podrá dar subvenciones, en caso alguno, para ningún culto.

Artículo 54. No podrá someterse el estado civil de las personas a una creencia religiosa determinada.

Artículo 56. Se garantiza la libre enseñanza. La que se costee con fondos públicos será laica, y la primaria y la de artes y oficios será, además, gratuita, obligatoria y subvenida por el Estado. La ley reglamentará la enseñanza sin restringir su libertad ni la independencia de los profesores.

Artículo 57. Se garantiza la libertad de reunión sin armas y la de asociación para cualquier objeto lícito. Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas y conventuales. La entrada al país de los individuos pertenecientes a estas asociaciones será reglamentada por la ley.

Artículo 61. Son prohibidas las vinculaciones y toda institución en favor de establecimientos religiosos.

Artículo 64. Todos los hondureños son iguales ante la

ley. La República no reconoce fueros ni privilegios personales.

En la provisión de los cargos públicos se atenderá a la idoneidad del nombrado y a las demás condiciones que señale la ley para servirlos.

Se prohíbe la acumulación de cargos o empleos remunerados, aun con carácter de interinidad, excepto los de enseñanza.

Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos.

Sin embargo, Honduras conserva la vigencia del Concordato que se pone a continuación, aunque restringidamente practicado.

CONCORDATO DE LA SANTA SEDE CON LA REPUBLICA DE HONDURAS

En nombre de la Santísima Trinidad:

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República de Honduras nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, a su eminencia el señor D. Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia Romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores.

Y el presidente de la República de Honduras, a su excelencia el señor D. Carlos Guitérrez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de dicha República cerca de la Santa Sede.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado en la República de Honduras, y se conservará siem-

pre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados cánones.

Artículo II.

En consecuencia, la enseñanza en las Universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción, será conforme a la doctrina de la misma religión católica, al cual efecto los obispos y ordinarios locales tendrán la dirección libre de las cátedras de Teología, de Derecho canónico y de todos los ramos de enseñanza eclesiástica, y, a más de la influencia que ejercerán, en virtud de su ministerio sagrado, en la educación religiosa de la juventud, velarán porque en la enseñanza de cualquiera otro ramo nada haya contrario a la religión ni a la moral.

Artículo III.

Los obispos conservarán asimismo su derecho de censura respecto de todos los libros o escritos que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública, y el Gobierno de Honduras concurrirá, en cuanto se lo permita su autoridad y con los medios propios de ella, a sostener las disposiciones que los obispos tomaren, conforme a los sagrados cánones, para defender la religión y evitar todo lo que pudiera serle contrario.

Artículo IV.

Siendo el pontífice romano el jefe de la Iglesia universal por derecho divino, tanto los obispos como el clero y el pueblo tendrán libre comunicación con la Santa Sede apostólica.

Artículo V.

El Gobierno de Honduras se compromete a conservar el pago del diezmo y a obligar autoritariamente a él, recono-

ciéndose y siendo esta contribución sin la menor reserva, ni aun para el caso de Silla o de beneficio vacante, destinada en su totalidad hasta cubrir las dotaciones del obispado, cabildo y seminario, y para los gastos del culto y de la fábrica de la iglesia catedral y demás edificios eclesiásticos, conforme a la escala específica que va al fin del presente Concordato. Las pujas que hubiesen en los remates se destinarán a la promoción de establecimientos de enseñanza y beneficencia pública. Pero en el caso que los diezmos no fuesen suficientes para cubrir los indicados gastos, el Gobierno de Honduras se compromete a cubrir anualmente el déficit que resultase para el pago de presupuesto eclesiástico. La recaudación de los referidos diezmos y su inversión será a cargo de una junta de eclesiásticos presidida por el ordinario o por el vicario capitular en sede vacante. Si, por circunstancias que no pueden ahora ser previstas, debieran abolirse los diezmos o hacerse alguna variación en ellos, no podría esto efectuarse como de derecho si no es con la intervención de la autoridad de la Santa Sede, y substituyendo de cuenta del Gobierno otros fondos, de modo que formen una renta decorosa e independiente tan verdadera propiedad de la Iglesia como otra cualquiera lo es de su propietario en los dominios de la República de Honduras.

Artículo VI.

Los párrocos seguirán percibiendo las primicias y los emolumentos dichos de estola, quedando al cuidado y conciencia del ordinario el arreglo de los aranceles de éstos hasta que el Gobierno les asigne una congrua segura e independiente, poniéndose de acuerdo para ello con el obispo.

Artículo VII.

En vista de los precitados comprometimientos contraídos, el Sumo Pontífice concede al presidente de la República de Honduras y a sus sucesores en este cargo el patronato, o

sea el privilegio de presentar para cualquiera vacante de la diócesis de Comayagua y de las demás que fuesen erigidas en aquel territorio, a eclesiásticos dignos e idóneos, adornados de todas las cualidades requeridas por los sagrados cánones; y el Sumo Pontífice, en conformidad a las reglas prescriptas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas. Los presentados, sin embargo, no podrán de ninguna manera intervenir en el régimen o en la administración de las iglesias para las cuales hubieren sido designados, como está prescripto en los sagrados cánones. El presidente de la República procederá a hacer la presentación del candidato a lo más tarde dentro de un año después del día en que se verificó la vacante.

Artículo VIII.

Por la misma causa el Sumo Pontífice concede al presidente de la República el privilegio de nombrar, para todas las prebendas del capítulo, ya sean las dignidades o canonjías o racioneros, hasta el número de seis, exceptuando la primera dignidad, que será reservada a la libre colación de la Santa Sede, y la teologal (doctoral) y penitenciaria, las cuales serán conferidas por los obispos, en concurso de oposición, a las personas que fuesen consideradas más dignas. Serán del nombramiento del presidente las seis prebendas que primero vacaren de las no exceptuadas, las cuales quedarán sujetas para siempre a su libre nominación. La provisión de las restantes, cualquiera que fuese su clase y número en el tiempo sucesivo, pues ahora sólo hay seis existentes, corresponderá en adelante al obispo. Esto no impide que puedan ser fundadas otras prebendas de oposición como las dos antedichas, que puedan conferirse, en concurso, por los obispos, las cuales, una vez establecidas, no podrán variarse.

Artículo IX.

Todas las parroquias serán provistas en concurso abierto, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento, debiendo los ordinarios formar las ternas de los concurrentes aprobados y dirigirlas al presidente de la República, quien nombrará uno entre los propuestos, conforme a la práctica observada en otras Repúblicas de la América antiguamente española.

Artículo X.

La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas, según lo requiera la necesidad y la utilidad de los fieles; sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno de Honduras. En cada una de estas diócesis se establecerá un cabildo de canónigos y el colegio seminario proporcionado al número del clero diocesano y a las necesidades de las mismas diócesis, y para la dotación de las Sillas episcopales que hayan de ser erigidas, de los cabildos y de los seminarios, se procederá sobre las bases adoptadas para la de Comayagua, la cual, a la brevedad posible, tendrá un cabildo formado como se expresa en la escala que se halla al fin del presente Concordato. En los colegios seminarios serán recibidos y educados, conforme a lo prescripto por el Sagrado Concilio de Trento, aquellos jóvenes a quienes los obispos creyeran conveniente admitir, según la necesidad y la utilidad de sus diócesis. Corresponde, por consiguiente, de pleno y libre derecho a la autoridad de los prelados diocesanos todo cuanto concierne al arreglo, a la enseñanza, al régimen y a la administración de los seminarios, cuyos rectores y profesores serán libremente nombrados y revocados por los obispos cuando lo juzgaren útil y necesario.

Artículo XI.

Se erigirán así también por la competente autoridad diocesana nuevas parroquias, según lo requieran la necesidad y la utilidad de los fieles, procediendo de acuerdo con el Gobierno siempre que fuere necesario conciliar los efectos civiles.

Artículo XII.

En sede vacante, el cabildo de la iglesia catedral nombrará libremente, en el término prefijado y en conformidad a lo establecido por el Sagrado Concilio de Trento, al vicario capitular, sin poder revocar el nombramiento una vez hecho, ni hacer otro nuevo, quedando, por consecuencia, abolida cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dispuesto por los sagrados cánones.

Artículo XIII.

Las causas relativas a la fe, a los sacramentos, a las funciones sagradas, a las obligaciones y a los derechos anexos al sagrado ministerio y, en general, todas las causas de naturaleza eclesiástica, pertenecen exclusivamente al juicio de la autoridad eclesiástica, según lo mandan los sagrados cánones.

Artículo XIV.

Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que se defieran a los Tribunales laicos las causas personales de los eclesiásticos en materia civil, así como las causas concernientes a las propiedades y a otros derechos temporales de los clérigos, de las iglesias, de los beneficios y de las demás fundaciones eclesiásticas.

Artículo XV.

Por la misma razón, la Santa Sede no hace dificultad a que las causas criminales de los eclesiásticos por delitos perseguidos por las leyes de la República extraños a la religión, sean deferidas a los Tribunales laicos. Pero en los juicios de segunda y de última instancia entrarán a hacer parte del Tribunal como conjuces al menos dos eclesiásticos nombrados por el ordinario. Estos juicios no serán públicos, y las sentencias que resultaren de ellos, en caso de condenación a pena capital, afflictiva o infamante, no se ejecutarán sin la aprobación del presidente de la República y sin que el respectivo obispo haya cumplido previamente cuanto en tales casos se requiere por los sagrados cánones. En el arresto y detención de los eclesiásticos se les guardarán los miramientos convenientes a su carácter, debiendo darse pronto aviso de dicho arresto al obispo respectivo. En la disposición contenida en este artículo siempre se entienden excluidas las causas mayores, las cuales son reservadas a la Santa Sede, conforme a lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento. Sess. 24 de Refor. C. V.

Artículo XVI.

Siendo los ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su ministerio, podrán, conforme a la disciplina vigente, aprobada, de la Iglesia, corregir también a los eclesiásticos por las faltas a los deberes de su oficio y por las de su conducta moral.

Artículo XVII.

La Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquiera título justo; sus adquisiciones y las fundaciones piadosas serán respetadas y garantidas a la par de todas las propiedades de todos los ciudadanos hondureños, y por lo que toca a las fundaciones no se podrá hacer ninguna supresión ni

unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvo las facultades que competen a los obispos, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento.

Artículo XVIII.

La Santa Sede, en vista de las circunstancias actuales, consiente en que los fondos o bienes eclesiásticos sean sometidos a las cargas públicas, a la par de los bienes de los ciudadanos hondureños, excepto siempre las fábricas dedicadas al culto divino, es decir, las iglesias.

Artículo XIX.

Atendida la utilidad que del presente Concordato resulta para la Religión, el Santo Padre, a instancias del Presidente de la República de Honduras, y por proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que las personas que durante las vicisitudes pasadas hubiesen comprado bienes eclesiásticos o redimido censos en los dominios de ella, autorizados por las leyes vigentes en aquellos tiempos, tanto los que se hallan en posesión cuanto los que hayan sucedido o sucedieren de derecho a los dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo y de ninguna manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, de modo que los primeros compradores, lo mismo que sus legítimos sucesores, gozarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes, de sus respectivos emolumentos y productos, siendo entendido que no se renovararán esas enajenaciones abusivas.

Artículo XX.

No se impedirá el establecimiento de monasterios o conventos de ambos sexos, y de cualquiera de los institutos aprobados por la Santa Sede. Las cosas relativas a regulares

serán arregladas según lo disponen las leyes canónicas y las constituciones de las respectivas órdenes.

Artículo XXI.

El Gobierno de la República de Honduras suministrará los medios adecuados para la conversión de los infieles existentes dentro de los límites de su territorio, y favorecerá el establecimiento y progreso de las misiones que con tan laudable objeto llegasen al territorio de la República autorizados por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

Artículo XXII.

En vista de la declaración del Gobierno, emitida por su plenipotenciario, en cuanto al juramento, de que no es su mente obligar en conciencia a quien le preste a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consiente en que los obispos y demás eclesiásticos lo presten en la forma siguiente: «Yo juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Honduras, y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional o a la tranquilidad pública.»

Artículo XXIII.

Después de los oficios divinos, en todas las iglesias de Honduras se hará la siguiente oración: *«Domine salvam fac Rempublicam. Domine salvum fac Praesidem ejus.»*

Artículo XXIV.

Su Santidad concede a los ejércitos de la República de Honduras las exenciones y gracias conocidas bajo la deno-

minación de privilegios castrenses, y determinará después en un Breve contemporáneo a la publicación del Concordato, cada una de las gracias y exenciones que entiende conceder.

Artículo XXV.

Todo lo demás que no se haya arreglado expresamente por los artículos anteriores, sea que pertenezca a cosa o a personas eclesiásticas, será dirigido y administrado conforme a la disciplina vigente de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana.

Artículo XXVI.

Quedan abrogadas por la presente Convención todas las leyes, ordenanzas y decretos, en cuanto se opongan a ella, promulgados de cualquier modo y en cualquier tiempo en la República de Honduras, y la dicha Convención se considerará como ley del Estado que debe tener fuerza y valor para en adelante.

Artículo XXVII.

El presente Concordato será ratificado legalmente por ambas partes y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del término de dieciocho meses, y antes si fuese posible.

Artículo XXVIII.

Luego que fueren canjeadas las ratificaciones del presente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus Letras Apostólicas.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con su sello.

Hecho en Roma, a 9 de julio de 1861.—*J. Card. Antonelli.*
Carlos Gutiérrez.

Escala de las dotaciones asignadas al seminario, al obispo, al cabildo eclesiástico y a la fábrica de la iglesia catedral de la diócesis de Comayagua.

	Pesos
1.º Al colegio-seminario, anualmente.....	3.000
2.º Al obispo de Honduras, ídem.....	3.000
3.º Al cabildo eclesiástico, ídem.....	4.000

DISTRIBUIDAS DEL MODO SIGUIENTE :

Dignidades.

Al deán	600
Al arcediano	500
Al maestro-escuela	500
Al tesorero	500

Canónigos.

Al plenipotenciario	450
Al teologal (lectoral).....	450
A un canónigo de gracia.....	300

Racioneros.

A los dos racioneros, con pesos 200 c/u..	400
---	-----

Medio-racioneros.

A los dos medio-racioneros, con pesos 150 c/u.	300
	4.000

A la fábrica de la catedral.....	1.000
	11.000

G. Card. Antonelli.—Carlos Gutiérrez.

CAPITULO XXV

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE VENEZUELA

La Constitución vigente de Venezuela es de 24 de junio de 1925.

Su contenido religioso se halla en el preámbulo y en tres artículos, según a continuación se expresa:

Preámbulo.

El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en el nombre de Dios todopoderoso y en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 133 del pacto federal vigente, decreta la presente Constitución.

.....

Artículo 32.

La nación garantiza a los venezolanos:

.....

14.^a La libertad religiosa, bajo la suprema inspección de todos los cultos por el ejecutivo federal con arreglo a las leyes, y quedando siempre a salvo el derecho de patronato eclesiástico a que se refiere el artículo 52.

.....

Artículo 52.

En posesión como está la nación del derecho de patronato eclesiástico, lo ejercerá conforme lo determina la ley de 28 de julio de 1824.

... ..

Artículo 95.

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela debe ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar y estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos.

Habrá también un Vicepresidente de la República, que debe reunir las mismas condiciones requeridas para ser Presidente.

Venezuela se rige en lo católico por un Concordato, que es como sigue :

CONCORDATO DE LA SANTA SEDE CON LA REPUBLICA
DE VENEZUELA

En el nombre de la Santísima e Individua Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República de Venezuela nombraron para sus respectivos plenipotenciarios :

Su Santidad, a su eminencia el señor D. Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia Romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores.

Y el Presidente de la República, al excelentísimo señor D. Silvestre Guevara, arzobispo de la metropolitana iglesia de Santiago, de Caracas.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes :

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana continúa siendo la religión de la República de Venezuela y el Gobierno reconoce el derecho de defenderla y conservarla eficazmente con todos los derechos y prerrogativas que le corresponden por la ordenación de Dios y sanciones canónicas.

Artículo II.

En consecuencia, la educación de la juventud en las universidades, colegios, escuelas, tanto públicas como privadas, y demás establecimientos de instrucción, será enteramente conforme a la doctrina de la misma religión católica y, por tanto, los obispos y ordinarios tendrán del todo libre la dirección y vigilancia en la doctrina perteneciente a las Facultades de Teología, Derecho canónico y demás instituciones eclesiásticas, de cualquier género que sean. Los mismos ordinarios y obispos, además de la solicitud que por su propio ministerio ejercen en la educación religiosa de la juventud, vigilarán que nada haya en la enseñanza de cualquiera otra ciencia que sea contraria a la religión católica y a la honestidad de las costumbres.

Artículo III.

Se conservarán los seminarios existentes en las diócesis de la República, y conforme al Santo Concilio de Trento, los obispos serán del todo libres en la erección, orden, doctrina y administración de dichos seminarios. Los rectores y profesores de los seminarios serán nombrados por los obispos y removidos cuando lo estimen necesario.

Artículo IV.

Los obispos conservarán expedito el derecho de examinar y censurar los libros y escritos de cualquier género relativos

a los dogmas de la fe, disciplina eclesiástica y moral pública; y el supremo Gobierno de Venezuela prestará el auxilio de su autoridad y cooperará a sostener las disposiciones que dictaren los mismos obispos con arreglo a los cánones, en defensa de la religión y para evitar todo lo que a ella se oponga.

Artículo V.

Tanto los obispos como el clero y el pueblo comunicarán libremente con el Romano Pontífice, como que por derecho divino es la cabeza y el centro de la Iglesia universal.

Artículo VI.

El Gobierno de Venezuela, por medio de su ministro plenipotenciario, pidió y obtuvo de la Sede Apostólica que, en atención a las circunstancias extraordinarias de los tiempos y lugares, se substituyese la asignación eclesiástica en lugar de los diezmos. En consecuencia, el mismo Gobierno se obliga a pagar del Erario público, como deuda del Estado, las asignaciones que se expresan en la nota adjunta a este Concordato, para la congrua sustentación del arzobispo, de los obispos, cabildos eclesiásticos, párrocos, seminarios, fábricas de iglesias y demás gastos necesarios y acostumbrados para el mantenimiento del culto divino, en legítima compensación de la renta decimal abolida. Los párrocos continuarán gozando del derecho de percibir las primicias y los emolumentos llamados *de estola*, según la costumbre de cada diócesis y con arreglo a la tasa vigente prescrita por los Sínodos, o que se estableciera en lo sucesivo por la autoridad eclesiástica.

Artículo VII.

Con motivo de las obligaciones contraídas por el Gobierno, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República

de Venezuela el derecho de patronato y el privilegio de proponer los obispos, según los términos establecidos en la presente Convención.

Artículo VIII.

En esta virtud, el Presidente de la República propondrá a Su Santidad para la silla arzobispal, o cualesquiera otras sillas episcopales vacantes, eclesiásticos dignos e idóneos, adornados de las cualidades que requieren los sagrados cánones, y el Sumo Pontífice les dará la institución canónica en la forma acostumbrada y conforme a las reglas prescritas por la Iglesia. Mas antes de recibir estos eclesiásticos las bulas de institución canónica, de ningún modo podrán mezclarse en el régimen o administración de las iglesias para que fueren designados, como está establecido por los sagrados cánones. El Presidente de la República propondrá a estos eclesiásticos tan pronto como sea posible.

Artículo IX.

Quedan vigentes todas las disposiciones que hasta ahora han regido en la República de Venezuela relativas a expolios de los arzobispos y obispos, y, en consecuencia, dichos expolios pertenecerán a las respectivas iglesias catedrales.

Artículo X.

El Presidente de la República nombrará para todas las dignidades y canonjías de las iglesias catedrales, a excepción de las que se llaman *de oficio*, así como también para las demás prebendas, presentando los nombrados a los prelados eclesiásticos para que, si los encuentran dignos, les den la institución canónica. Mas se reserva perpetuamente la primera dignidad en la iglesia metropolitana de Santiago de Caracas a la libre disposición del Romano Pontífice, y en las otras catedrales de la República hoy existentes o que se

erijan en lo sucesivo, una de las canonjías nombradas *de merced*, la cual quedará designada para la provisión que haga Su Santidad en la primera vacante.

Artículo XI.

Las canonjías *de oficio* se proveerán en concurso, según los sagrados cánones, y el obispo presentará al Presidente de la República tres de los eclesiásticos aprobados para que elija uno de ellos.

Artículo XII.

Tan luego como lo permita el estado de las rentas del Erario público, se restablecerán las dignidades suprimidas en la iglesia metropolitana de Caracas.

Artículo XIII.

Estando ya erigido en la diócesis de Guayana el capítulo catedral, con aprobación de la Santa Sede, se erigirá tan pronto como sea posible el colegio seminario, según la norma del Concilio Tridentino.

Artículo XIV.

En sede vante, el capítulo de la iglesia metropolitana o sufragánea elegirá libremente en la forma y término prescrito por el Santo Concilio Tridentino el vicario capitular que deba gobernar la diócesis durante el tiempo de la vacante, y hecha esta elección no podrá ser revocada ni procederse a otra.

Artículo XV.

Todas las parroquias se proveerán en público concurso, con arreglo al Santo Concilio de Trento. Los ordinarios for-

marán ternas de los opositores aprobados y las presentarán al Presidente de la República, el cual, o por sí mismo o por medio de sus delegados en las provincias, elegirá uno a quien se conferirá la parroquia.

Artículo XVI.

Los coadjutores de las iglesias parroquiales serán elegidos exclusivamente por los ordinarios, previo examen sinodal.

Artículo XVII.

La Santa Sede, en ejercicio de su derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de las mismas, cuando lo exija la necesidad o utilidad de los fieles, poniéndose de acuerdo con el Gobierno de la República de Venezuela.

En cada una de estas diócesis se establecerán el capítulo de canónigos y el seminario episcopal. En la dotación de cada sede, capítulo o seminario que haya de erigirse se seguirá la norma establecida por los ya existentes.

Artículo XVIII.

Las nuevas parroquias eclesiásticas se erigirán por los respectivos ordinarios en cada diócesis con arreglo a los sagrados cánones, cuando sea necesario, de acuerdo con el Gobierno.

Artículo XIX.

Todas las causas de fe, sacramentos, funciones sagradas y demás deberes y derechos anexos al santo ministerio, y generalmente las causas matrimoniales y cualquiera otras de naturaleza eclesiástica, pertenecen únicamente al juicio de la autoridad eclesiástica, conforme a los sagrados cánones.

Artículo XX.

El fuero eclesiástico se conservará en la República en las causas civiles de los clérigos. En cuanto a las criminales, se conservará igualmente el mismo fuero, consintiendo la Santa Sede en que quede dentro de los límites a que hoy está reducido por las leyes civiles.

Artículo XXI.

Siendo los ordinarios del todo libres en el desempeño de su ministerio, podrán, según la disciplina vigente y aprobada de la Iglesia, corregir a los eclesiásticos que faltando a sus deberes no lleven una vida conforme a su estado.

Artículo XXII.

La Iglesia conserva el derecho que tiene de adquirir y poseer bienes bajo cualquier justo título, y sus propiedades y fundaciones sagradas serán inviolables y respetadas como las de los ciudadanos venezolanos; y, por tanto, sin que intervenga la autoridad de la Santa Sede, no podrá hacerse supresión o anexión alguna de las fundaciones existentes, salvo las facultades de los obispos según el Concilio Tridentino.

Artículo XXIII.

Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que los bienes eclesiásticos estén sujetos a los impuestos comunes, como los de los ciudadanos de la República de Venezuela, exceptuando siempre las iglesias, los seminarios y demás institutos dedicados al culto divino.

Artículo XXIV.

Considerando la utilidad que la religión católica reportará del presente Concordato, Su Santidad, accediendo a las

peticiones del Presidente de la República de Venezuela, y deseando proveer a la tranquilidad pública, declara que las personas que por consecuencia de la ley civil de 11 de abril de 1833 hayan dejado de pagar los diezmos, así como también aquellos que desde el año de 1810 hasta el presente hayan comprado bienes eclesiásticos en los dominios de la misma República, o redimido censos con arreglo a las leyes civiles vigentes en el enunciado espacio de tiempo, o las que hayan sucedido a los mismos compradores, o sucedan por derecho, no serán inquietados en su posesión por Su Santidad ni por sus sucesores los romanos Pontífices. Mas deberá tenerse presente que estas abusivas enajenaciones no se repetirán jamás.

Artículo XXV.

Se conservarán los monasterios de monjas que hoy existen en la República, y los prelados ordinarios podrán erigir con entera libertad otros monasterios. En cuanto a los conventos de religiosos, los mismos ordinarios podrán fundarlos según las disposiciones canónicas, poniéndose de acuerdo con el Gobierno.

Artículo XXVI.

El Gobierno de la República de Venezuela, por los medios que estén a su alcance, seguirá procurando la conversión a la fe católica y la instrucción cristiana de los infieles que aun existen en el territorio de la nación, y prestará su cooperación y auxilio para el establecimiento y progreso de las sagradas misiones que para tan laudable fin sean enviadas por la Sagrada Congregación de *Propaganda Fide*.

Artículo XXVII.

Atendida la declaración que por medio de su ministro plenipotenciario hizo el Gobierno de Venezuela de que con el siguiente juramento no entiende el mismo Gobierno que

quien lo preste quede obligado en conciencia a actos contrarios a las leyes de Dios y de la Iglesia, Su Santidad conviene en que los eclesiásticos puedan prestarlo en esta forma: «Yo juro y prometo a Dios por los Santos Evangelios obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Venezuela, y prometo igualmente no ingerirme personalmente ni tampoco por medio de consejo en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional y a la tranquilidad pública.»

Artículo XXVIII.

Se permite que en la antigua colecta «*Et famulos tuos*» se mencione el nombre del Presidente de la República, después de los de Su Santidad y obispos diocesanos, diciéndose: «*Es Rempublicam nostram cum Praeside suo N.*»

Artículo XXIX.

Todo lo demás relativo a las personas o cosas eclesiásticas de que no se hace mención en este Concordato se arreglará según la disciplina vigente de la Iglesia aprobada por la Santa Sede.

Artículo XXX.

Por la presente Convención quedan abrogadas las leyes, ordenanzas y decretos de la República de Venezuela que hasta ahora se hayan dado, en cuanto sean contrarias a esta misma Convención, la cual se considerará en todo tiempo subsistente y como ley de la República.

Si ocurriere alguna dificultad sobre los puntos contenidos en este Tratado, Su Santidad y el Presidente de la República lo resolverán amigablemente de común acuerdo.

Artículo XXXI.

La ratificación del presente Concordato será canjeada en Roma en el espacio de un año, o más pronto si fuere posible.

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Convenio con sus respectivos sellos.

Dado en Roma en el día 26 de julio de 1862.—*Silvestre Guevara*, arzobispo de Caracas y Venezuela.—*J. Card. Antonelli*.

ASIGNACIONES ECLESIAÍSTICAS

En la diócesis de Caracas se pagarán:

Al seminario conciliar, dos mil pesos.....	2.000
A la mitra, seis mil pesos.....	6.000

Cuerpo capitular:

Deán, en cada año, dos mil pesos.....	2.000
Arcediano, mil seiscientos pesos.....	1.600
Canonjía doctoral, mil cuatrocientos pesos.....	1.400
Idem penitenciaria, mil cuatrocientos pesos.....	1.400
Idem magistral, mil cuatrocientos pesos.....	1.400
Idem de merced, mil cuatrocientos pesos.....	1.400
Dos racioneros, a mil doscientos pesos.....	2.400
Dos medios racioneros, a mil pesos.....	2.000

Coro de catedral:

Secretario de cabildo, doscientos sesenta y tres.....	263
Seis capellanes de erección, a doscientos pesos.....	1.200
Dos ídem de extracreación, a ciento cincuenta.....	300

Suma pesos..... 23.363

Apuntador de faltas, que puede servirse por un capellán y como por gratificación, ciento ocho pesos.	108
Maestro de ceremonias, doscientos pesos.....	200
Sochantre, doscientos pesos.....	200
Sacristán mayor de catedral.....	300
Dos sacristanes menores, a cien pesos.....	200
Seis monaguillos, el primero a cincuenta pesos, los otros cinco a cuarenta y dos.....	260
Dos monaguillos del Sagrario y un caniculario, a veinticinco pesos.....	75
Pertiguero, ciento ochenta.....	180
Maestro de capilla, cuatrocientos.....	400
Organista, doscientos cincuenta.....	250
Bajonista, cien pesos.....	100
Campanero, doscientos cincuenta.....	250
Relojero, ciento cincuenta.....	150
Dos sacristanes mayores de San Pablo y Candelaria, a ciento cincuenta pesos.....	300
Venerables curas de esta ciudad (Caracas) y del interior:	
Dos curas de catedral a ochocientos pesos.....	1.600
Cinco más de esta ciudad, a seiscientos pesos uno..	3.000
Dos ídem de la Guaira y Puerto Cabello, a quinientos pesos	1.000
Ocho ídem de las capitales de provincia, a saber: dos de Valencia, dos de Baquisimeto, uno de Guanare, uno de Calaboso, uno de la Victoria y uno de Achaguas, a cuatrocientos pesos.....	3.200
Dos ídem de Focuyo y dos de San Carlos, a trescientos pesos cada uno.....	1.200
Cien curas de las parroquias del interior que no tenían renta asignada en la masa decimal y a quienes se da por la presente ley, a doscientos pesos cada uno	20.000
Seis curas de cabeceras de cantón que tenían asignada renta en los diezmos, a saber: Villa de Cura, San Sebastián, Nirgua, San Felipe, Carora, Araura y el Pai, a trescientos pesos cada uno.	2.100
A la fábrica de catedral, mil pesos.....	1.000

A las fábricas de ciento ochenta y dos parroquias de esta ciudad y del interior, a cuarenta pesos cada una.....	7.280
---	-------

Suma pesos..... 66.716

En la diócesis de Mérida se pagarán:

Al seminario conciliar, mil quinientos pesos.....	1.500
A la mitra, cinco mil.....	5.000

Cuerpo capitular:

Al deán, mil quinientos.....	1.500
Canonjía doctoral, mil doscientos.....	1.200
Idem magistral, mil doscientos.....	1.200

Suma pesos..... 10.400

Canonjía lectoral, mil doscientos pesos.....	1.200
Idem de merced, mil doscientos.....	1.200
Dos racioneros, a mil pesos cada uno.....	2.000

Coro de catedral:

Secretario de cabildo, ciento cincuenta pesos.....	150
Sochantre, doscientos	200
Maestro de ceremonias, doscientos.....	200
Sacristán mayor, doscientos.....	200
Seis capellanes de erección, a doscientos.....	1.200
Sacristán menor, ciento veinte.....	120
Seis acólitos, a cincuenta.....	300
Organista, doscientos.....	200
Pertiguero, ciento ochenta.....	180
Maestro de capilla, doscientos cincuenta.....	250
Bajonista, cien	100
Fuellerero, cincuenta	50
Campanero, ciento cincuenta.....	150
La fábrica de catedral, mil.....	1.000

Venerables curas:

El cura del Sagrario de catedral, seiscientos pesos...	600
A los dos curas de la ciudad de Mérida, a cuatrocientos pesos cada uno.....	800
A los seis curas de las iglesias principales de Maracaibo, Coro, Trujillo, La Grita y Nutrias, a cuatrocientos pesos	2.400
A los cinco curas que existen además de las parroquias mencionadas, a saber: dos en la ciudad de Maracaibo, Chiquinquira y Santa Bárbara, uno en coro en San Gabriel, otro en Trujillo en la Chiquinquerá y otro en la gruta de Nuestra Señora de los Angeles, a trescientos pesos uno.....	1.500
Cien curas, a doscientos pesos uno.....	20.000
A las fábricas de ciento sesenta parroquias, a cuarenta pesos	6.400
<i>Suma pesos</i>	50.800

En la diócesis de Guayana se pagarán:

Para el rev. obispo, cinco mil pesos.....	5.000
Dos canonjías (de merced), a mil pesos.....	2.000
Asignación al cura de Sagrario de catedral, seiscientos pesos	600
Para los curas de las capitales: dos de Cumaná, uno de Barcelona y otro de Margarita, a cuatrocientos pesos cada uno.....	1.600
Para los curas de las iglesias parroquiales de Carupano y Maturin, en la provincia de Cumaná, y de las de Aragua y el Pao, en la de Barcelona, a trescientos pesos cada uno.....	1.200
<i>Suma pesos</i>	10.400

Sínodos de cincuenta curas para todas las diócesis, diez mil pesos.....	10.000
Para fábrica y otros gastos, dos mil trescientos cin- cuenta pesos	2.350
Para oblatas de las cincuenta parroquias, a cincuen- ta pesos	2.500
<i>Suma pesos</i>	25.250

Para la protección del culto en la reparación y edificación de las iglesias parroquiales se destina la suma anual de 7.000 (siete mil) pesos, en esta forma: tres mil para la diócesis de Caracas, dos mil para la de Mérida y dos mil para la de Guayana, cuyas sumas emplearán oportunamente los prelados, atendidas las necesidades más urgentes en cada caso, con acuerdo del poder ejecutivo.

Nota.—Que las asignaciones eclesiásticas correspondientes a la dignidad de deán, la canonjía magistral, dos racioneros y demás empleados de la catedral de Guayana no constan en la ley de 1885, por haberse erigido canónicamente el capítulo de aquella iglesia posteriormente; pero sí se expresa en otra ley de la República, que no se trajo por no haberse previsto que fuese necesaria.—*J. Card. Antonelli.*—*Silvestre Guevara*, arzobispo de Caracas y Venezuela.

CAPITULO XXVI

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE COLOMBIA

El contenido religioso de la vigente Constitución de Colombia es como sigue :

Preámbulo.

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegatarios de los Estados colombianos de Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo nacional constituyente.

... ..

Artículo 38. La religión católica, apostólica, romana es la de la nación ; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social.

Artículo 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia.

Artículo 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al Derecho común.

Artículo 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.

Artículo 47. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.

Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.

Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva autoridad eclesiástica.

Artículo 53. La Iglesia católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada diócesis por el respectivo legítimo prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles por derecho propio que la presente Constitución le reconoce.

Artículo 54. El ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos. Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o beneficencia pública.

Artículo 55. Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales no podrán ser gravados con contribuciones ni ocupados para aplicarlos a otros servicios.

Artículo 56. El Gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica, a fin de arreglar las cuestiones pendientes y definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.

Artículo 116. El Presidente de la República electo tomará posesión de su destino ante el presidente del Congreso, y prestará juramento en estos términos: «Juro a Dios cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.»

También Colombia celebró su Concordato con la Santa Sede, que es como sigue:

CONCORDATO CON LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En nombre de la Santísima e Individua Trinidad:

Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr. Rafael Núñez, nombraron como plenipotenciarios, respectivamente:

Su Santidad, al eminentísimo Sr. Mariano Rampolla del Tindaro, cardenal presbítero de la santa iglesia romana del título de Santa Cecilia y su secretario de Estado, y el Presidente de la República, a su excelencia el Sr. Joaquín Vélez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede;

Quienes, después de exhibirse mutuamente sus correspondientes credenciales, han convenido en lo siguiente:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana es la de Colombia; los Poderes públicos la reconocen como elemento esencial del orden social, y se obliga a protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus ministros, conservándola a la vez en el pleno goce de sus derechos y prerrogativas.

Artículo II.

La Iglesia católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil, y, por consiguiente, sin ninguna intervención de ésta podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes.

Artículo III.

La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta; pero será solemnemente respetada por las autoridades de la República.

Artículo IV.

En la Iglesia, representada por su legítima autoridad jerárquica, reconoce el Estado verdadera y propia personería jurídica y capacidad de gozar y ejercer los derechos que le corresponden.

Artículo V.

La Iglesia tiene facultad de adquirir por justos títulos, de poseer y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por el Derecho común, y sus propiedades y fundaciones serán no menos inviolables que las de los ciudadanos de la República.

Artículo VI.

Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las demás propiedades particulares; se exceptúan, sin embargo, los edificios destinados al culto, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales, que no podrán nunca gravarse con contribuciones ni ocuparse o destinarse a usos diversos.

Artículo VII.

Los individuos del clero secular y regular no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles con su ministerio y profesión, y estarán además siempre exentos del servicio militar.

Artículo VIII.

El Gobierno se obliga a adoptar en las leyes de procedimiento criminal disposiciones que salven la dignidad sacerdotal siempre que por cualquier motivo tuviere que comparecer en el proceso un ministro de la Iglesia.

Artículo IX.

Los ordinarios diocesanos y los párrocos podrán cobrar de los fieles los emolumentos y proventos eclesiásticos canónica y equitativamente establecidos y que se funden, ya en la costumbre inmemorial de cada diócesis, ya en la prestación de servicios religiosos; y para que los actos y compromisos de este origen produzcan efectos civiles y la autoridad temporal les preste su apoyo, los ordinarios procederán de acuerdo con el Gobierno.

Artículo X.

Podrán constituirse y establecerse libremente en Colombia órdenes y asociaciones religiosas de un sexo y de otro, toda vez que autorice su canónica fundación la competente superioridad eclesiástica. Ellas se regirán por las constituciones propias de su instituto; y para gozar de personería jurídica y quedar bajo la protección de las leyes, deben presentar al Poder civil la autorización canónica expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Artículo XI.

La Santa Sede prestará su apoyo y cooperación al Gobierno para que se establezcan en Colombia institutos religiosos que se dediquen con preferencia al ejercicio de la caridad, a las misiones, a la educación de la juventud, a la enseñanza en general y a otras obras de pública utilidad y beneficencia.

Artículo XII.

En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con

los dogmas y la moral de la religión católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en tales centros y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la religión católica.

Artículo XIII.

Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza los respectivos ordinarios diocesanos, ya por sí, ya por medio de delegados especiales, ejercerán el derecho, en lo que se refiere a la religión y a la moral, de inspección y de revisión de textos. El arzobispo de Bogotá designará los libros que han de servir de textos para la religión y la moral en las universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad de la enseñanza en las materias indicadas, este prelado, de acuerdo con los otros ordinarios diocesanos, elegirá los textos para los demás planteles de enseñanza oficial. El Gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia.

Artículo XIV.

En el caso de que la enseñanza de la religión y la moral, a pesar de las órdenes y prevenciones del Gobierno, no sea conforme a la doctrina católica, el respectivo ordinario diocesano podrá retirar a los profesores o maestros la facultad de enseñar tales materias.

Artículo XV.

El derecho de nombrar para los arzobispados y obispados vacantes corresponde a la Santa Sede. El Padre Santo, sin embargo, como prueba de particular deferencia, y con el fin de conservar la armonía entre la Iglesia y el Estado, conviene en que en la provisión de las sillas arzobispales y

episcopales proceda el agrado del Presidente de la República. Por consiguiente, en cada vacante podrá éste recomendar directamente a la Santa Sede los eclesiásticos que en su concepto reúnen las dotes y cualidades necesarias para la dignidad episcopal; y la Santa Sede, por su parte, antes de proceder al nombramiento, manifestará siempre los nombres de los candidatos que quiera promover, con el fin de saber si el Presidente tiene motivos de carácter civil o político para considerar a dichos candidatos como personas no gratas. Se procurará que las vacantes de las diócesis queden provistas lo más pronto posible y no se prolonguen por más de seis meses.

Artículo XVI.

Podrá la Santa Sede erigir nuevas diócesis y variar la circunscripción de las que hoy existen cuando lo creyere útil y oportuno para el mayor provecho de las almas, consultando previamente al Gobierno y acogiendo las indicaciones que de éste le fueren justas y convenientes.

Artículo XVII.

El matrimonio que deberán celebrar todos los que profesan la religión católica producirá efectos civiles respecto a las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes sólo cuando se celebre de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento. El acto de la celebración será presenciado por el funcionario que la ley determine con el sólo objeto de verificar la inscripción del matrimonio en el registro civil, a no ser que se trate del matrimonio *in articulo mortis*, caso en el cual podrá prescindirse de esta formalidad si no fuere fácil llenarla y reemplazarse por pruebas supletorias. Es de cargo de los contrayentes practicar las diligencias relativas a la intervención del funcionario civil para el registro, limitándose la acción del párroco a hacerles oportunamente presente la obligación que la ley civil les impone.

Artículo XVIII.

Respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento y que deban surtir efectos civiles, se admiten de preferencia como pruebas supletorias las de origen eclesiástico.

Artículo XIX.

Serán de la exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica las causas matrimoniales que afecten el vínculo del matrimonio y la cohabitación de los cónyuges, así como las que se refieren a la validez de los esponsales. Los efectos civiles del matrimonio se regirán por el poder civil.

Artículo XX.

Los ejércitos de la República gozarán de las exenciones y gracias conocidas con el nombre de privilegios castrenses, que se determinarán por el Padre Santo en acto separado.

Artículo XXI.

Después de los oficios divinos se hará en todas las iglesias de la República la oración que sigue: «Domine salvam fac Rempublicam; Domine salvum fac Praesidem eius et supremas eius auctoritates.»

Artículo XXII.

El Gobierno de la República reconoce a perpetuidad, en calidad de deuda consolidada, el valor de los censos redimidos en su Tesoro y de los bienes desamortizados pertenecientes a iglesias, cofradías, patronatos, capellanías y establecimientos de instrucción y beneficencia regidos por la Iglesia, que hayan sido en cualquier tiempo inscritos en la

deuda pública de la nación. Esta deuda reconocida ganará sin disminución el interés anual líquido de cuatro y medio por ciento, que se pagará por semestres vencidos,

Artículo XXIII.

Las rentas procedentes de patronatos, capellanías, cofradías y demás fundaciones particulares se reconocerán y pagarán directamente a quienes, según las fundaciones, tengan derecho a percibir las, o bien a sus apoderados legalmente constituídos. El pago se verificará sin disminución, como en el artículo anterior, y comenzará desde el próximo año 1888. En el caso de extinguirse algunas de las entidades indicadas, previo acuerdo entre la competente autoridad eclesiástica y el Gobierno, se aplicarán los productos que les corresponden a objetos piadosos y benéficos, sin contrariar en ningún caso la voluntad de los fundadores.

Artículo XXIV.

La Santa Sede, en vista del estado en que se halla el Tesoro nacional de Colombia y de la utilidad que deriva a la Iglesia de la observancia de este convenio, hace a la República las siguientes condonaciones: a) Del valor del capital no reconocido hasta ahora en ninguna forma de los bienes desamortizados pertenecientes en su mayor parte a conventos o asociaciones religiosas de uno y otro sexo, ya extinguidas y no comprendidas en los anteriores artículos. b) De lo que daba por réditos o intereses vencidos, o por cualquier otro motivo procedente de la desamortización, a entidades eclesiásticas hasta el 31 de diciembre de 1887.

Artículo XXV.

En compensación de esta gracia el Gobierno de Colombia se obliga a asignar a perpetuidad una suma anual líquida,

que desde luego se fija en cien mil pesos colombianos y que se aumentará equitativamente cuando mejore la situación del Tesoro, los cuales se destinarán, en la proporción y términos que se convengan, entre las dos supremas potestades, al auxilio de diócesis, cabildos, seminarios, misiones y otras obras propias de la acción civilizadora de la Iglesia.

Artículo XXVI.

Los miembros sobrevivientes de las extinguidas comunidades religiosas continuarán disfrutando de la renta que disposiciones anteriores les han asignado para su manutención y demás necesidades.

Artículo XXVII.

Subsistirán asimismo las rentas o asignaciones anteriormente destinadas al sostenimiento del culto en iglesias capillas y otros lugares religiosos no comprendidos en el artículo XXII. Si acerca de este punto hubiere dudas o dificultades, el Gobierno se entenderá con la competente autoridad eclesiástica a fin de establecer lo que proceda.

Artículo XXVIII.

El Gobierno devolverá a las entidades religiosas los bienes desamortizados que les pertenezcan y que no tengan ningún destino; y en caso de que el dueño no aparezca o no tenga misión que cumplir, se aplicará el producto de tales bienes o el de su manejo a objetos análogos benéficos y piosos, según las necesidades más apremiantes de cada diócesis, procediéndose en ello de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica.

Artículo XXIX.

La Santa Sede, a fin de proveer a la pública tranquilidad, declara por su parte que las personas que en Colombia, durante las vicisitudes pasadas, hubieren comprado bienes eclesiásticos desamortizados o redimido censos en el Tesoro nacional según las disposiciones de las leyes civiles a la sazón vigentes, no serán molestadas en ningún tiempo ni en manera alguna por la autoridad eclesiástica; gracia que se le hace extensiva no sólo a los ejecutores de tales actos, sino a cuantos en ejercicio de cualesquiera funciones hayan tomado parte en los mismos, de modo que los primeros compradores o rematadores, lo mismo que sus legítimos sucesores y los que hayan redimido censos, disfrutarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes y de los emolumentos y productos, quedando firme, sin embargo, que en lo por venir no se repetirán semejantes enajenaciones abusivas.

Artículo XXX.

El Gobierno de la República arreglará con los respectivos ordinarios diocesanos todo lo concerniente a cementerios, procurando conciliar las legítimas exigencias de carácter civil y sanitario con la veneración debida al lugar sagrado y las prescripciones eclesiásticas; y en caso de discordancia este asunto será materia de un acuerdo especial entre la Santa Sede y el Gobierno de Colombia.

Artículo XXXI.

Los convenios que se celebren entre la Santa Sede y el Gobierno de Colombia para el fomento de las misiones católicas en las tribus bárbaras, no requieren ulterior aprobación del Congreso.

Artículo XXXII.

Por el presente acuerdo quedan derogadas y abrogadas todas las leyes, órdenes y decretos que en cualquier modo y tiempo se hubieren promulgado, en la parte en la que contradijeren o se opusieren a este Convenio, cuya fuerza en lo por venir será firme, como ley del Estado.

Artículo XXXIII.

La ratificación y el canje del presente Convenio se harán en el plazo de seis meses desde la fecha de la suscripción, o más pronto si fuere posible.

En fe de lo cual, los indicados plenipotenciarios pusieron su firma y sello en este Convenio.

Hecho en Roma el día 31 de diciembre de 1887.—(Firmado.) *Cardenal Rampolla*, L. S.—(Firmado.) *Joaquín F. Vélez*, L. S.

2.—*Concordato adicional.*

20 julio 1892.

En el nombre de la Santísima Indivisible Trinidad:

Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y su excelencia D. Carlos Holguín, Presidente de la República de Colombia, a fin de prevenir todo desacuerdo respecto al fuero clerical y principalmente en la aplicación del artículo VIII del Concordato de 31 de diciembre de 1887, así como para dar cumplida ejecución al artículo 30 del mismo Concordato sobre cementerios y establecer lo más conveniente sobre el registro civil, han resuelto celebrar un Convenio especial, nombrando al efecto dos plenipotenciarios, o sea, por parte de Su Santidad, al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Mariano Rampolla de Tindaro, secretario de Estado, y por parte del excelentísimo señor Presidente de la República, al exce-

lentísimo señor general D. Joaquín F. Vélez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede. Los cuales, después de exhibirse mutuamente sus respectivas credenciales y de hallarlas en propia y debida forma, convinieron en las disposiciones que expresan los artículos siguientes:

Fuero eclesiástico.

Artículo I.

Las causas civiles de los eclesiásticos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las Iglesias, de los beneficios y de otras fundaciones eclesiásticas, serán deferidas a los Tribunales civiles.

Artículo II.

Teniendo en cuenta las circunstancias de los tiempos, la necesidad de la pronta administración de justicia y la falta de los medios correspondientes en los Tribunales episcopales, la Santa Sede no pone dificultad en que las causas criminales de los eclesiásticos por delitos extraños a la religión y que estén penados en los Códigos de la República, sean deferidos también a los Tribunales laicos.

Artículo III.

Dichos juicios criminales no serán públicos y asistirán a ellos solamente los funcionarios del caso, los testigos, peritos y demás personas que necesariamente deban intervenir en los juicios, los parientes próximos y otros individuos que puedan estar interesados, a petición del acusado con el consentimiento del Tribunal.

Artículo XIV.

Los arzobispos, obispos, gobernadores eclesiásticos, vicarios capitulares y generales y dignidades de los cabildos eclesiásticos, declararán por medio de certificación jurada.

C e m e n t e r i o s .

Artículo XV.

Se establece como regla general que todos los cementerios que existen en el territorio de la República, con excepción de los que sean de propiedad de individuos o entidades particulares, serán entregados a la autoridad eclesiástica, que los administrará y los reglamentará independientemente de la autoridad civil.

Artículo XVI.

Asimismo, en atención a las circunstancias especiales en que se hallan algunos cementerios de las ciudades de la República, como los de Bogotá, Cartagena, Mompox, y cuya conservación demanda cuantiosas derogaciones de parte del Erario y en los cuales ha habido varias traslaciones de dominio a favor de particulares, la autoridad eclesiástica conviene en que la administración continúe a cargo de la autoridad civil, reservándose la plena jurisdicción espiritual y la vigilancia sobre ellos, a fin de que se observen el orden, el decoro debido a estos lugares sagrados y las prescripciones canónicas.

Artículo XVII.

El Poder ejecutivo establecerá, con los ordinarios diocesanos, cuáles sean los cementerios, fuera de los citados, que se encuentran en el caso de la disposición que precede.

Artículo XVIII.

Se fundarán cementerios para los cadáveres que no puedan sepultarse en sagrado, especialmente en las poblaciones donde sean más frecuentes las defunciones de individuos no católicos. Para tal objeto se destinará un lugar profano, obteniéndolo con fondos municipales, y donde fuere imposible, el terreno de estos cementerios se obtendrá secularizando y separando una parte del cementerio católico, que quedará separado del no católico por una cerca.

Artículo XIX.

La Iglesia reconoce al Estado el derecho de vigilar los cementerios en lo tocante a la higiene, de dictar reglamentos de policía en casos extraordinarios, verbi gracia, de epidemia, y de pedir la sepultura en ocasiones también excepcionales, como el abandono de cadáveres, de acuerdo con la autoridad eclesiástica. Si lo requiere la comisión de un delito, el orden público o cualquier otro conflicto, la autoridad competente tendrá libre acceso a los cementerios.

Artículo XX.

En todas esas circunstancias el poder civil procurará obrar siempre en armonía con la autoridad eclesiástica, para evitar cualquier disentimiento.

Artículo XXI.

Los ordinarios diocesanos, a fin de evitar desacuerdos entre los párrocos y las autoridades civiles subalternas, determinarán puntualmente los casos en que, conforme a las leyes canónicas y a la disciplina de la Iglesia, debe negarse la sepultura eclesiástica.

Artículo XIV.

Los arzobispos, obispos, gobernadores eclesiásticos, vicarios capitulares y generales y dignidades de los cabildos eclesiásticos, declararán por medio de certificación jurada.

C e m e n t e r i o s .

Artículo XV.

Se establece como regla general que todos los cementerios que existen en el territorio de la República, con excepción de los que sean de propiedad de individuos o entidades particulares, serán entregados a la autoridad eclesiástica, que los administrará y los reglamentará independientemente de la autoridad civil.

Artículo XVI.

Asimismo, en atención a las circunstancias especiales en que se hallan algunos cementerios de las ciudades de la República, como los de Bogotá, Cartagena, Mompox, y cuya conservación demanda cuantiosas derogaciones de parte del Erario y en los cuales ha habido varias traslaciones de dominio a favor de particulares, la autoridad eclesiástica conviene en que la administración continúe a cargo de la autoridad civil, reservándose la plena jurisdicción espiritual y la vigilancia sobre ellos, a fin de que se observen el orden, el decoro debido a estos lugares sagrados y las prescripciones canónicas.

Artículo XVII.

El Poder ejecutivo establecerá, con los ordinarios diocesanos, cuáles sean los cementerios, fuera de los citados, que se encuentran en el caso de la disposición que precede.

Artículo XVIII.

Se fundarán cementerios para los cadáveres que no puedan sepultarse en sagrado, especialmente en las poblaciones donde sean más frecuentes las defunciones de individuos no católicos. Para tal objeto se destinará un lugar profano, obteniéndolo con fondos municipales, y donde fuere imposible, el terreno de estos cementerios se obtendrá secularizando y separando una parte del cementerio católico, que quedará separado del no católico por una cerca.

Artículo XIX.

La Iglesia reconoce al Estado el derecho de vigilar los cementerios en lo tocante a la higiene, de dictar reglamentos de policía en casos extraordinarios, verbi gracia, de epidemia, y de pedir la sepultura en ocasiones también excepcionales, como el abandono de cadáveres, de acuerdo con la autoridad eclesiástica. Si lo requiere la comisión de un delito, el orden público o cualquier otro conflicto, la autoridad competente tendrá libre acceso a los cementerios.

Artículo XX.

En todas esas circunstancias el poder civil procurará obrar siempre en armonía con la autoridad eclesiástica, para evitar cualquier disentimiento.

Artículo XXI.

Los ordinarios diocesanos, a fin de evitar desacuerdos entre los párrocos y las autoridades civiles subalternas, determinarán puntualmente los casos en que, conforme a las leyes canónicas y a la disciplina de la Iglesia, debe negarse la sepultura eclesiástica.

R e g i s t r o c i v i l .

Artículo XXII.

Para mejor proveer a ciertas necesidades especiales en lo civil, los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que se registran los actos relativos a los nacimientos, matrimonios y defunciones, pasarán cada seis meses a la autoridad o empleados que designe el Gobierno de Colombia, copia auténtica de dichos asientos; pero estas copias no servirán de pruebas sino en el caso de pérdida o de adulteración de los libros parroquiales. En la copia no se incluirán los actos o partidas que, conforme a las disposiciones de la Iglesia, deben ser reservados.

Artículo XXIII.

El Gobierno suministrará a los párrocos los modelos o *esqueletos*, para tener mayor facilidad y uniformidad en el trabajo.

Artículo XXIV.

Si en lo por venir surgiese alguna dificultad en la aplicación de cualesquiera de las disposiciones contenidas en los artículos precedentes, el Padre Santo y el excelentísimo Presidente de la República se pondrán de acuerdo para arreglarlas amistosamente.

Artículo XXV.

La presente Convención será canjeada y ratificada dentro de seis meses, o antes si fuere posible, a contar desde la fecha del presente acto.

Roma, veinte de julio de mil ochocientos noventa y dos.—
M. Card. Rampolla.—Joaquín F. Vélez.

CAPITULO XXVII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DEL ECUADOR

La Constitución vigente del Ecuador es de 23 de diciembre de 1906.

Su contenido religioso es como sigue :

.....

.....

Artículo 16.

La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades son esencialmente seglares y laicas.

La enseñanza primaria y la de artes y oficios son gratuitas, y, además, la primera es obligatoria, sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus hijos la enseñanza que a bien tuvieren.

Ni el Estado ni las municipalidades subvencionarán ni auxiliarán en forma alguna otras enseñanzas que no fueren la oficial y la municipal.

.....

.....

Artículo 26.

El Estado garantiza a los ecuatorianos:

3.º La libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones, en tanto que éstas no sean contrarias a la moral y al orden público.

Es también el Ecuador nación de régimen concordado con la anta Sede. Son varios los Concordatos por que se rige: dos especiales y uno general, que, en su forma vigente, es posterior al de Presupuestos.

PRESUPUESTO PERMANENTE QUE REGIRA DE 1867
EN ADELANTE

Artículo 1.º La masa total de los diezmos se dividirá, desde 1867 en adelante, en dos partes iguales, la una para la Iglesia y la otra para el Estado, sin que éste pueda disponer nada de la mitad correspondiente a aquélla. La Iglesia, por su parte, quedará obligada al pago de las cuotas que ha satisfecho hasta el día en favor de los hospitales y seminarios; y el Estado, por la suya, pagará las de las escuelas, colegios destinados a la instrucción moral y religiosa y casas de beneficencia que no paga actualmente o que se establezcan en lo sucesivo.

Art. 2.º La masa decimal correspondiente a la Iglesia, esto es, la mitad del producto total, se distribuirá según el presupuesto siguiente por cada año:

	Pesos
Para la archidiócesis.....	65.000
Diócesis de Cuenca.....	39.850
Diócesis de Guayaquil.....	83.000
Diócesis de Loja.....	29.668,5 r.
Diócesis de Riobamba.....	29.668,5 r.
Diócesis de Ibarra.....	29.668,5 r.

Cuando la mitad de la renta decimal que se reserva la Iglesia no alcanzare a cubrir la cifra total del presupuesto consignado en el presente artículo para la dotación de las seis diócesis del Ecuador, el Gobierno se obliga a suplir el déficit, tomándolo de otra mitad de la renta decimal que la Iglesia cede a la Nación, pero quedando siempre al Fisco libre el tercio que le correspondía antiguamente.

Art. 3.º El residuo, si hubiese, se invertirá en el auxilio de las mismas iglesias, a proporción de sus necesidades, o en la erección de nuevas diócesis, según lo estipulado en el artículo 16 del Concordato (1), o establecimiento y fomento de misiones, según lo estimare conveniente la Santa Sede o el ordinario eclesiástico.

Art. 4.º La Iglesia designará, como ha hecho hasta ahora, los colectores y tesoreros eclesiásticos encargados para la recaudación de diezmos, en el modo que se acordará entre los obispos y el Poder ejecutivo.

Art. 5.º La dotación asignada a cada una de las seis iglesias catedrales en el presupuesto que obra en el artículo segundo, se repartirá por los ordinarios respectivos con sus cabildos a los partícipes, sin que intervenga en ello ninguna otra autoridad, ni aun para revisar las cuentas.

Art. 6.º La asignación señalada para la cátedra de Teología en la Universidad se derogará para la subsistencia de los misioneros de montaña.

Art. 7.º El presente arreglo será sometido a la aprobación del Congreso que está actualmente reunido, y con esta aprobación en todas sus partes quedará perfeccionado definitivamente.

Añádase la demostración de la parte de diezmos que percibe la Iglesia y el Estado para el bienio de 1865 y 1866, según los tres artículos del presupuesto provisional.

Francisco Tavaní Aplico.

Ant. Flores.

(1) El Concordato anterior al vigente es de 1862.

CONCORDATO DE LA SANTA SEDE CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República del Ecuador nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, al excelentísimo y reverendísimo señor Mario Mocenni, arzobispo de Heliópolis, enviado extraordinario y delegado apostólico, y su excelencia el Presidente de la República, al excelentísimo señor general Cornelio E. Vernaza, ministro de Relaciones Exteriores.

Los cuales, después de exhibirse sus respectivas credenciales, en uso de la autorización que concede el artículo 24 del Concordato celebrado en Roma el 26 de septiembre de 1862, convinieron en la nueva versión de dicho Concordato en los términos que expresan los artículos siguientes:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana continuará siendo la única religión de la República del Ecuador y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar, según la ley de Dios y las disposiciones canónicas. En consecuencia, jamás podrá ser permitido ningún otro culto disidente ni sociedad alguna condenada por la Iglesia.

Artículo II.

En cada una de las diócesis actualmente existentes y en las que se erigieren después habrá un seminario diocesano, cuya dirección, régimen y administración pertenecerán libre y exclusivamente a los ordinarios diocesanos, según las disposiciones del Concilio de Trento y demás leyes canónicas. Los rectores, profesores y demás empleados en la enseñanza y dirección de dichos establecimientos, serán libremente nombrados y removidos por los ordinarios.

Artículo III.

La instrucción de la juventud en las Universidades, colegios, Facultades, escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina católica. Los obispos tendrán al efecto, para ello, el exclusivo derecho de designar los textos para la enseñanza, tanto de las ciencias eclesiásticas como de la instrucción moral y religiosa. Además, los prelados diocesanos conservarán su derecho de censurar y prohibir, mediante cartas pastorales y decretos prohibitivos, los libros y publicaciones, de cualquier naturaleza que sean, que ofendan al dogma, la disciplina de la Iglesia y la moral, debiendo también vigilar el Gobierno y adoptar las medidas oportunas para que dichas publicaciones no se propaguen por la República.

Artículo IV.

Los obispos, según el deber de su ministerio pastoral, cuidarán de que ninguna enseñanza sea contraria a la religión católica y a la honestidad de las costumbres. Con tal objeto, nadie podrá enseñar en ningún establecimiento, ya público, ya privado, la Teología, el catecismo o la doctrina religiosa sin haber obtenido autorización del prelado diocesano, quien podrá revocarla con justa causa, a su juicio, cuando le parezca oportuno. Para los exámenes de los institutos primarios, el diocesano nombrará, si le parece, un asistente destinado a reconocer la instrucción religiosa y la conducta moral del examinando, el cual no podrá entrar en el desempeño de su oficio cuando fuere reprobado en este reconocimiento.

Artículo V.

Perteneciendo al Romano Pontífice, por derecho divino, el primado de honor y la jurisdicción en la Iglesia universal, tanto los obispos como el clero y los fieles tendrán libre

comunicación con la Santa Sede. Por tanto, ninguna autoridad secular podrá poner obstáculo al pleno y libre ejercicio de dicha comunicación, obligando a los obispos, al clero y al pueblo a servirse del intermedio del Gobierno para ocurrir en sus necesidades a la Sede Romana, o sujetando las bulas, los breves o los rescritos de ésta al *Exequatur* del Gobierno.

Artículo VI.

Los ordinarios eclesiásticos de la República podrán gobernar su diócesis con toda libertad, convocar y celebrar Concilios provinciales y diocesanos y ejercer los derechos que le competen, en virtud de su sagrado ministerio y de las disposiciones canónicas aprobadas por la Santa Sede, sin que se ponga embarazo a la ejecución de sus providencias. Así, pues, el Gobierno del Ecuador dispensará su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deban oponerse a la maldad de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus costumbres.

Artículo VII.

Quedan abolidos los recursos de fuerza en cuanto a la ejecución y las sentencias pronunciadas por los jueces ordinarios y eclesiásticos; sólo se podrá apelar de ellas a los Tribunales superiores eclesiásticos o la Santa Sede, según la disciplina establecida en el breve *Exposcit*, del Sumo Pontífice Gregorio XIII, y conforme a las prescripciones canónicas, y particularmente en cuanto a las causas matrimoniales, a las de Benedicto XIV, en la Constitución *Dei miseratione*, o bien hacer uso del recurso de nulidad o del de queja ante los mismos superiores. Los jueces eclesiásticos pronunciarán sus juicios sin sujetarlos al dictamen previo de asesores seculares, a quienes, sin embargo, podrán consultar cuando lo creyeren oportuno. Los eclesiásticos que fueren abogados podrán desempeñar el oficio de asesores en esta clase de juicios.

Artículo VIII.

Todas las causas eclesiásticas, y especialmente las que miran a la fe, a los sacramentos (comprendidas las causas matrimoniales), a las costumbres, a las funciones santas, a los deberes y derechos anexos al sagrado ministerio, sea por razón de la persona, sea por razón de la materia, pertenecen a los Tribunales eclesiásticos. Mas la Santa Sede, atendidas las circunstancias, a petición del Gobierno del Ecuador, no impide: 1.º Que las causas civiles de los eclesiásticos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de la Iglesia, beneficios y otras fundaciones eclesiásticas, sean deferidas a los Tribunales civiles; 2.º Que las causas criminales de los eclesiásticos por derechos extraños a la religión y que estén penados en los Códigos de la República, sean también deferidas a los Tribunales laicos. Mas en los juicios de segunda y tercera instancia formarán necesariamente parte de los respectivos Tribunales, como conjueces, dos eclesiásticos, que el respectivo ordinario nombrará en los últimos días de cada año. Esos juicios no serán públicos, y las respectivas sentencias que produzcan pena de muerte, afflictiva o infamante, no se pondrán en ejecución antes de que sean puestas en conocimiento del Presidente de la República, ni antes de que el obispo propio del eclesiástico haya cumplido a la brevedad posible cuando prescriben los sagrados cánones en semejantes casos. En ningún caso podrá recaer sentencia de obras públicas contra un sacerdote. Para el arresto o detención de los eclesiásticos se les guardarán los miramientos debidos a su carácter y se dará inmediatamente aviso al ordinario respectivo. 3.º De las causas criminales que se sigan contra los vicarios generales, dignidades y demás miembros de los cabildos eclesiásticos conocerán las Cortes superiores; y esto aun en los delitos sujetos al Jurado.

Se entienden excluidos de las disposiciones contenidas en este artículo las causas mayores de los obispos, las cuales quedan reservadas a la Silla Apostólica y a los Tribunales eclesiásticos superiores, que deben conocer de ellas, según

el Santo Concilio de Trento, Sess. XXIV, cap. V *de Reform.*, y demás disposiciones canónicas. En todos los juicios que sean de competencia eclesiástica, la autoridad civil prestará su apoyo y patrocinio a fin de que los jueces puedan hacer observar y ejecutar las penas y las sentencias pronunciadas por ellos. Las causas civiles y criminales de que se habla en este artículo, y que se encuentran actualmente pendientes, se pasarán a los jueces y Tribunales que quedan determinados aquí, en cualquier instancia o estado en que se encuentren.

Artículo IX.

La Santa Sede permite que tanto las personas como los bienes eclesiásticos estén sujetos a los impuestos públicos a la par que las personas y bienes de otros ciudadanos. La autoridad civil no podrá proceder a la coactiva cuando ésta fuese necesaria, sino después de haber solicitado la conciliación con la eclesiástica. Quedan exceptuados de tales impuestos los seminarios y los bienes y casas destinadas inmediatamente al culto y establecimientos de beneficencia.

Artículo X.

Por respeto a la Majestad de Dios, que es Rey de los Reyes y Señor de los Señores, será respetada la inmunidad de los templos en cuanto lo permita la seguridad pública y las exigencias de la justicia. En tal caso, la Santa Sede consiente que la autoridad eclesiástica, a solicitud de la civil, dé el permiso respectivo para la extracción de los refugiados.

Artículo XI.

Estando destinado el provento de los diezmos al sostenimiento del culto divino y de sus ministros, el Gobierno del Ecuador se obliga a conservar en la República esta institución católica hasta que pueda sustituirla con otra con-

tribución, de acuerdo con la Santa Sede. Mientras tanto, continuará rigiendo en la República el Convenio de 30 de septiembre de 1865, celebrado en Quito por los plenipotenciarios respectivos y aprobado por Su Santidad y por la autoridad civil ecuatoriana.

Artículo XII.

En virtud del derecho de patronato concedido por el Sumo Pontífice al Presidente del Ecuador o jefe legítimo de la República, éste, en cada vacante de las diócesis del Ecuador y de las demás que fueren erigidas en la República, presentará a la Santa Sede eclesiásticos dignos e idóneos, en el sentido de los sagrados cánones, a fin de que el Sumo Pontífice les dé la institución canónica de obispos, según la forma y reglas que prescriben los sagrados cánones. Los presentados no podrán, sin embargo, ingerirse en manera alguna en el régimen y administración de las diócesis para las que son presentados, antes de recibir las bulas de su institución canónica según las prescripciones de los sagrados cánones. El Presidente de la República hará la presentación del candidato dentro de un año desde el día de la vacante, y si no la hiciere, queda la elección reservada a la Santa Sede.

Artículo XIII.

De igual modo, Su Santidad concede al Presidente de la República el derecho de nombrar eclesiásticos dignos, tanto para las prebendas de las dignidades y canonjías cuanto para las raciones de los capítulos catedrales, exceptuando la primera dignidad, que será de la libre colación de la Santa Sede; y aquellas prebendas que, no siendo de concurso, vacaren en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, serán de libre colación de los obispos, con la aprobación del Gobierno, que podrá rechazar a los que fueren presentados por razones de conveniencia política, comunicándolo a los diocesanos respectivos. La prebenda del doctoral, peniten-

ciario, magistral y las demás de concurso serán igualmente provistas por sólo los obispos, previos los exámenes de concurso, según los cánones.

Artículo XIV.

Por lo que concierne a la provisión de los beneficios parroquiales, los ordinarios, cumplidas las prescripciones del Santo Concilio de Trento, remitirán al Gobierno una terna de los eclesiásticos dignos a quienes deba conferirse la parroquia, y el Presidente, sea directamente por sí o por medio de sus delegados en las provincias, elegirá uno de aquéllos. En caso de que el Gobierno, por especiales razones, pida una segunda terna, el ordinario se la remitirá, compuesta de diferentes eclesiásticos; bien que de ningún modo estará facultado a rechazar esta segunda terna. Si fuere necesario hacer divisiones territoriales en las parroquias, podrán verificarse con acuerdo del ordinario y de la autoridad local.

Artículo XV.

En la vacante de una iglesia episcopal el capítulo de esa iglesia elegirá libremente el vicario capitular en el tiempo y forma prescritos en el Concilio de Trento, cuyo nombramiento se pondrá en conocimiento del Poder ejecutivo, sin que jamás pueda revocar la elección una vez hecha, o procederse a otra nueva, quedando, al efecto, abolida cualquiera costumbre, por antigua que sea y que de cualquier modo fuere contraria a los sagrados cánones.

Artículo XVI.

La Santa Sede, usando de su propio derecho, podrá erigir, de acuerdo con el Gobierno, nuevas diócesis y hacer nuevas circunscripciones en las ya existentes.

Artículo XVII.

Queda abolido en el Ecuador el decreto ejecutivo de 28 de mayo de 1836, sobre redención de los censos impuestos en favor de las causas pías, y la Santa Sede, en vista de la utilidad que resulta del presente Concordato, y deseando proveer a la tranquilidad pública y remediar los males causados en el país por la traslación de los censos al Tesoro nacional, accediendo a las reiteradas instancias del Presidente, decreta y declara que aquellos que durante la época desde el año de 1836, hasta el presente, hubiesen hecho o promovido tales traslaciones, como también los poseedores de los fundos que de tal modo han sido redimidos y aquellos que de cualquiera suerte sucedieron en la posesión de los mismos, ni recibirán en ningún tiempo, ni en manera alguna, la más leve molestia, ni por parte de Su Santidad ni de los Romanos Pontífices sus sucesores. Se declara también que los propietarios gravados por censos a favor de la Iglesia que hubiesen pagado sus réditos al 2 por 100, aprovechándose de la autorización de la ley civil, quedan libres de cualquier responsabilidad, y pueden en lo sucesivo continuar pagando legalmente el 2 por 100 en dinero o el 3 por 100 en especie.

Artículo XVIII.

En cuanto a las obligaciones contraídas por el Gobierno con sus acreedores por censos trasladados, la Santa Sede permite que pagando la décima parte (o menos si conviniere al ordinario eclesiástico), tanto de los capitales trasladados al Tesoro público como de los réditos vencidos, el Gobierno quede libre de toda responsabilidad. Para seguridad del pago de esta cantidad, el Gobierno asigna la cuarta parte del tercio que percibe de los fondos decimales, la cual será puesta en manos de los ordinarios para que ella sea dividida por éstos en partes proporcionales en favor de sus legítimos acreedores, cuidando que el principal se capitalice

de un modo seguro y fructífero. Para lo sucesivo, a ningún poseedor de bienes acensuados le será permitido trasladar al Tesoro público los capitales reconocidos, y los que quisieren libertar sus fundos del censo impuesto en ellos, no lo pueden hacer de otro modo que con previa autorización del respectivo ordinario, y consignando en manos del ordinario los capitales reconocidos, quedando éste facultado a someterlos, en caso necesario, a una prudente y equitativa reducción; bien entendido que en todo evento debe atenderse a la utilidad de la Iglesia.

Artículo XIX.

La Iglesia gozará del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título, conforme a las leyes de la República, y las propiedades que actualmente posee y las que poseyere después le serán garantizadas por la ley. La administración de los bienes eclesiásticos corresponde a las personas designadas por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los reglamentos canónicos. No podrán ser enajenados los bienes eclesiásticos pertenecientes a comunidades y congregaciones religiosas sin licencia de la Santa Sede y permiso del Gobierno. Los bienes de fundación eclesiástica, de cualquier clase que sean, pertenecientes a los hospitales y demás establecimientos de beneficencia y que no estuvieren administrados por autoridad eclesiástica, le serán devueltos a fin de que ella pueda darles inmediatamente la inversión debida. Se entienden excluidos de la antedicha devolución aquellos bienes que desde mucho tiempo se hallan destinados a objetos de utilidad pública o beneficencia. Los individuos que por causa de los pasados acontecimientos adquirieron del Gobierno bienes pertenecientes a la Iglesia, o que sucedieren a los compradores en la posesión de los mismos bienes, no serán jamás molestados en cosa alguna por este motivo, ni por parte del Sumo Pontífice reinante ni de sus sucesores. Así, pueden los mismos segura y pacíficamente gozar de la propiedad de las rentas y demás emolumentaos de dichos bienes. En cuanto

a las antiguas y nuevas fundaciones, no se podrá hacer ninguna supresión o unión sin intervención de la autoridad de la Santa Sede, salva la facultad que compete a los obispos, según el Santo Concilio de Trento.

Artículo XX.

Además de las órdenes y congregaciones religiosas existentes ahora en la República del Ecuador, los ordinarios diocesanos podrán, libremente y sin excepción, admitir y establecer en sus respectivas diócesis, de acuerdo con el Gobierno, nuevas órdenes o institutos aprobados por la Iglesia, en conformidad a las necesidades de sus pueblos, a cuyo efecto el Gobierno prestará su apoyo.

Artículo XXI.

Después de los divinos oficios, en todas las iglesias de la República del Ecuador se dirá la siguiente oración: «*Domine salvam fac Rempublicam—Domine salvum fac Presidem ejus.*»

Artículo XXII.

El Gobierno de la República del Ecuador se obliga a suministrar todos los medios oportunos para la propagación de la fe y para la conversión de los infieles existentes en aquel territorio, y, además, a prestar todo el favor y ayuda al establecimiento y progreso de las santas misiones que con tan laudable objeto se enviasen por autoridad de la Sagrada Congregación de Propaganda.

Artículo XXIII.

Todo lo demás que pertenece a las personas y cosas eclesiásticas, y acerca de lo cual nada se provee en los artículos

del presente Concordato, será dirigido y administrado según la disciplina canónica vigente en la Iglesia y aprobada por la Santa Sede.

Artículo XXIV.

En virtud de este Concordato quedan revocadas, en cuanto a él se opongan, todas las leyes, decretos y disposiciones publicados hasta ahora en el Ecuador, en cualquier manera y forma, y únicamente el presente Concordato se considerará siempre en lo sucesivo como ley del Estado. Por tanto, cada una de las partes contratantes promete por sí y sus sucesores la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que se compone. Si después se presentare alguna dificultad, el Santo Padre y el Presidente del Ecuador se pondrán de acuerdo para resolverla amistosamente.

Artículo XXV.

La ratificación de la presente versión del Concordato de 1862 será canjeada en el espacio de un año o antes si fuese posible.

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente pacto con sus respectivos sellos.

Quito, 2 de mayo de 1881.

Cornelio E. Vernaza.

Mario, Arzobispo Heliopolitano.

CONCORDATO CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR SOBRE LA SUBSTITUCION DE LOS DIEZMOS

8 noviembre 1890.

En nombre de la Santísima Trinidad :

Su Santidad el Sumo Pontífice León XIII y su excelencia el señor D. Antonio Flores, Presidente de la República del Ecuador, queriendo proveer de común acuerdo al arreglo ne-

cesario para la definitiva substitución o conversión de los diezmos, en consonancia con el artículo XI de la nueva versión del Concordato de 1881, han resuelto hacer un convenio especial, nombrando al efecto dos plenipotenciarios, a saber: por parte de Su Santidad, el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, su secretario de Estado; por parte de su excelencia el señor Presidente del Ecuador, el honorable señor D. Leónidas A. Larrea, encargado de los Negocios de esta República ante la Santa Sede; quienes, habiendo canjeado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo I.

Los diezmos de la República del Ecuador serán substituídos o convertidos en una contribución predial de tres por mil, o sea de treinta centavos al año por cada cien sucres de valor real de los predios rústicos. Se exceptúan de tal contribución los terrenos cuyo valor no alcance a cien sucres, los edificios anexos a los fundos y destinados para habitación, y las huertas de cacao.

Artículo II.

Esta contribución predial de tres por mil será de exclusiva propiedad de la Iglesia, y el Gobierno no podrá substituir la con otra ni alterarla o modificarla directa o indirectamente, sino previo el acuerdo con la Santa Sede.

Artículo III.

Previéndose fundadamente que el producto del impuesto predial del tres por mil no alcance por ahora a cubrir el presupuesto de las diócesis ecuatorianas, estimado en la suma anual de sucres 245.804,67 (incluso la de Manabí), el

Gobierno se obliga a suplir la diferencia con el impuesto de uno por mil ya existente, pero sólo en la parte que pesa sobre los fondos rústicos, retirando la cesión que de ella se hizo a las provincias, y con el producto del nuevo impuesto de ochenta centavos por cada 46 kilogramos de cacao que se exporte de la República.

Artículo IV.

El Gobierno no podrá abolir estos impuestos destinados al objeto indicado sino cuando la experiencia de cinco años consecutivos haya comprobado que la contribución predial de tres por mil cubre enteramente el presupuesto de las diócesis del Interior.

Sin embargo, cuando quiera que el Gobierno pretendiere abolir el impuesto sobre el cacao y substituirlo por otro equivalente, deberá entenderse previamente con la Santa Sede.

Es entendido que si, con el tiempo, la contribución de tres por mil no cubriere por cualquier motivo el presupuesto anual de las diócesis del interior, quedará de nuevo en pleno vigor la obligación por parte del Gobierno de suplir el déficit eventual con los dos impuestos expresados, y si éstos estuvieren ya abolidos o destinados estable y definitivamente a otros usos, con otras rentas fructíferas que han de determinarse de común acuerdo.

Artículo V.

La contribución de tres por mil, así como la suplementaria del uno, se cobrará por semestres adelantados, o en el tiempo que determine el Reglamento especial de cada diócesis. En cuanto al suplemento procedente del impuesto al cacao, el Gobierno se compromete a entregar adelantada la cantidad de veinte mil sucres cada dos meses.

Artículo VI.

A las diócesis de Guayaquil y Manabí se cubrirá el presupuesto con la contribución sobre el cacao; y si el Gobierno quisiera abolir tal impuesto deberá reemplazarlo previamente por una contribución que cubra la renta asignada a las dos diócesis. Esta contribución, que ha de imponerse sobre fondos situados dentro de los límites de las mismas diócesis, pasará a ser exclusiva propiedad de la Iglesia, y el Gobierno quedará siempre con la obligación de suplir el déficit eventual del modo antes indicado para las diócesis del interior.

Artículo VII.

Una vez comprobado por los obispos ecuatorianos, sin ingerencia gubernativa, que la contribución predial del tres por mil deja un excedente sobre el presupuesto de las diócesis, la autoridad eclesiástica deberá aplicarlo a las misiones, a la erección de nuevas diócesis y, por último, a las casas de beneficencia, actualmente a cargo del Gobierno.

Artículo VIII.

El Gobierno asume para sí exclusivamente la obligación de hacer los gastos que requiere la formación y revisión de los catastros. Sin embargo, se establecerá una junta semejante a la de los diezmos, compuesta de cuatro comisarios, dos de la Iglesia y dos del Gobierno, la cual, además de presidir los trabajos, se ocupará de resolver las reclamaciones que hicieren los contribuyentes. Se declara que la obligación de pagar la contribución de acuerdo con el catastro no se suspenderá respecto de ninguna reclamación, quedando, por supuesto, al declarante su derecho a salvo para repetir lo que hubiere pagado indebidamente.

El Gobierno se compromete a no exigir en adelante contribuciones de las diócesis que no estén expresamente autorizadas por el Concordato.

Artículo IX.

El Gobierno se obliga a entregar a la Iglesia, dentro de dos meses, contados desde la fecha de este Convenio, los catastros que sirven actualmente para el cobro del impuesto predial del uno por mil, bien formulados, revisados y legalmente autentizados, y en los cuales deberá constar solamente el valor de los fundos, con exclusión de los edificios de que se hace mención en el artículo I. Se obliga, además, a hacer a sus expensas un nuevo y esmerado avalúo de los fundos rústicos de la República por medio de peritos nombrados en igual número por la autoridad eclesiástica y la civil.

Artículo X.

Los colectores eclesiásticos tendrán a su disposición los mismos medios coactivos que los colectores fiscales.

Artículo XI.

No obstante la conversión de los diezmos en la forma y condiciones indicadas, permanecen íntegros e inviolables los deberes contraídos por ambas partes (la Iglesia y el Estado), según el artículo I del convenio adicional al Concordato (título de presupuesto permanente), con respecto al pago de las cuotas relativas en favor de hospitales, seminarios, escuelas y colegios destinados a la instrucción moral y religiosa, y de las casas de beneficencia actualmente establecidas o que en lo futuro se establecieren, salvo el caso previsto en el artículo VII.

Artículo XII.

Si, por cualquier evento o motivo, este Convenio no tuviere en alguna época pleno cumplimiento y vigor, queda explícitamente convenido que la Iglesia recuperará, tanto res-

pecto al Gobierno como a los fieles, el derecho incontestable de exigir y percibir la contribución decimal como antes lo hacía.

Artículo XIII.

Este Convenio deja en todo su valor los derechos de los obispos y los capítulos a las rentas atrasadas que se les deban.

Artículo XIV.

Con el fin de hacer cesar cuando sea el tiempo el suplemento provisional de que se ha hablado, los obispos darán todos los años cuenta al Gobierno del producto neto del impuesto de tres por mil sobre el valor de los predios y le restituirán dentro de los tres primeros meses del año siguiente la suma que el Estado les haya anticipado a título de suplemento y que resulte ser superior al presupuesto establecido de la diócesis. Por otra parte, la obligación de rendir cuenta anual cesará apenas el experimento de los cinco años de que trata el artículo IV haya demostrado que el producto de la indicada contribución cubre el presupuesto permanente de las diócesis.

Artículo XV.

Si surgiere alguna dificultad en cuanto a las disposiciones aquí consignadas, Su Santidad y el presidente de la República del Ecuador se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.

Artículo XVI.

El presente Convenio se considerará como parte integran-

te del Concordato, y el canje de las respectivas ratificaciones se hará dentro de un año contado desde la fecha.

En fe de lo cual, los antedichos plenipotenciarios firman el presente Convenio y lo sellan cada uno con su propio sello.

Hecho en Roma a 8 de noviembre de 1890.

(L. S.) *Leónidas A. Larrea.*

(L. S.) *M. Car. Rampolla.*

CAPITULO XXVIII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE COSTA RICA

La vigente Constitución de Costa Rica es de 7 de diciembre de 1871.

Su contenido religioso es como sigue:

PREAMBULO

Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, convocados legítimamente para establecer la justicia, proveer a la defensa común, promover el bien general y asegurar los beneficios de la libertad, implorando el auxilio del Soberano Regulador del Universo para alcanzar estos fines, hemos decretado y sancionado la siguiente constitución:

.....

Artículo 12.

Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria y comercio, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas ni extraordinarias.

.....

Artículo 36.

Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por acto alguno en que no infrinja la ley, ni por las manifestaciones de sus opiniones políticas.

No se podrá, sin embargo, hacer en ninguna forma propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de las creencias religiosas del pueblo.

Artículo 51.

La religión católica, apostólica, romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de ningún otro culto que no se oponga a la moral universal ni a las buenas costumbres.

Artículo 96.

Para ser presidente de la República se requiere:

2.º Ser de estado seglar.

Artículo 102.

Son deberes y atribuciones del Poder ejecutivo:

12.º Ejercer el patronato con arreglo a las leyes, hacer las presentaciones y nombramientos que éstas le cometan y ejercer los demás actos a que las mismas le llamen en los asuntos de la iglesia.

13.º Conceder o negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios y cualesquiera otros despachos de la autoridad eclesiástica.

Artículo 113.

Para ser secretario de Estado se requiere:

3.º Ser de estado seglar.

Artículo 123.

Para ser magistrado se requiere:

3.º Pertenecer al Estado seglar.

Artículo 133.

El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 21, sección primera, título III de esta Constitución, será bajo la fórmula siguiente: «¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?» «Sí juro.» «Si así lo hicieréis, Dios os ayude; si no, El y la Patria os lo demanden».

También Costa Rica celebró su Concordato con Roma.

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y LA REPUBLICA DE
COSTA RICA

7 octubre 1852.

En el nombre de la Santísima Trinidad:

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el presidente de la República de Costa Rica nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, a su eminencia el señor D. Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia Romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores.

Y el presidente de la República de Costa Rica, al excelentísimo señor D. Fernando de Lorenzana, marqués de Belmonte, caballero de la Sagrada Orden Equestre Jerosolimitana del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, comendador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno en la clase militar, caballero Gran Cruz de la misma orden en la clase civil, comendador de la Real Orden de Francisco I de las dos Sicilias, etc., etc., y ministro residente de la República de Costa Rica cerca de la Santa Sede.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.

La religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado en la República de Costa Rica, y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados cánones.

Artículo II.

En consecuencia, la enseñanza en las Universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción será conforme a la doctrina de la misma religión católica, al cual efecto los obispos y ordinarios locales tendrán la dirección libre de las cátedras de Teología, de Derecho canónico y de todos los ramos de enseñanza eclesiástica, y a más de la influencia que ejercerán, en virtud de su ministerio sagrado, en la educación religiosa de la juventud, velarán por que en la enseñanza de cualquiera otro ramo nada haya contrario a la religión ni a la moral.

Artículo III.

Los obispos conservarán asimismo su derecho de censura respecto a todos los libros o escritos que tengan relación al dogma, a la disposición de la Iglesia y a la moral pública, y el Gobierno de Costa Rica concurrirá, en cuanto se lo permita su autoridad y con los medios propios de ella, a sostener las disposiciones que los obispos tomarán conforme a los sagrados cánones para defender la religión y evitar todo lo que pudiere serle contrario.

Artículo IV.

Siendo el Pontífice Romano el jefe de la Iglesia universal por derecho divino, tanto los obispos como el clero y el pueblo tendrán libre comunicación con la Santa Sede Apostólica.

Artículo V.

El Gobierno de Costa Rica se compromete a suministrar las dotaciones del obispo, del cabildo y del seminario y a proveer a los gastos del culto y de fábrica de la Iglesia de los fondos del Tesoro nacional, conforme a la escala específica que va al fin del presente Concordato, la cual, en caso de erecciones de nuevos obispados, se adoptará del mismo modo para la dotación de los obispos, de los cabildos, de los seminarios y de las fábricas de las iglesias. Y asentado que tales asignaciones son un compensativo o más bien una subrogación de los diezmos, pues el Gobierno, con miras de utilidad pública local, ha solicitado y obtenido de la Santa Sede esta substitución, deberán considerarse como lo son a «título oneroso», y, reconocidas por el Gobierno como un verdadero crédito de las iglesias contra la nación costarricense, adquirirán el carácter de una verdadera renta independiente.

Artículo VI.

Los párrocos seguirán percibiendo las primicias y los emolumentos dichos de estola, quedando al cuidado y conciencia del ordinario el arreglo de los aranceles de éstos hasta que el Gobierno les asigne una congrua segura e independiente, poniéndose de acuerdo para ello con el obispo.

Artículo VII.

En atención a las dotaciones precitadas, mayores en su totalidad de lo que produce actualmente la renta de diezmos, y que el Gobierno espera aumentar en el tiempo venidero, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República de Costa Rica y a sus sucesores en este cargo el patronato, o sea el privilegio de presentar para cualesquiera vacante de la diócesis de San José y a las demás que fueren erigidas en aquel territorio, a eclesiásticos dignos e idóneos, adornados de todas las cualidades requeridas por los sagrados cánones; y el Sumo Pontífice, en conformidad a las reglas prescriptas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas. Los presentados, sin embargo, no podrán de ninguna manera intervenir en el régimen o en la administración de las iglesias para las cuales hubiesen sido designados, antes de recibir las bulas de institución canónica, como está prescripto en los sagrados cánones. El Presidente de la República procederá a hacer la presentación del candidato no más tarde de un año después del día en que se verificó la vacante.

Artículo VIII

Por la misma causa, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República el privilegio de nombrar, para todas las prebendas del capítulo, ya sean de dignidades o de canongías, o racioneros, hasta el número de seis, exceptuando

la primera dignidad, que será reservada a la libre colación de la Santa Sede, y la teologal (lectoral) y penitenciaria, las cuales serán conferidas por los obispos, en concurso de oposición, a las personas que fuesen consideradas más dignas.

Serán de nombramiento del Presidente las seis prebendas que primero vacaren de las no exceptuadas, las cuales quedarán sujetas para siempre a su libre nominación. La provisión de las restantes, cualquiera que fuese su clase y número en el tracto sucesivo, pues ahora sólo hay tres existentes, corresponderá en adelante al obispo. Esto no impide que puedan ser fundadas otras prebendas de oposición, como las dos antedichas, que deben conferirse en concurso por los obispos, las cuales, una vez establecidas, no podrán variarse.

Artículo IX.

Todas las parroquias serán provistas en concurso abierto, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento, debiendo los ordinarios formar las ternas de los concurrentes aprobados y dirigirlas al Presidente de la República, quien nombrará uno entre los propuestos, conforme a la práctica observada en otras Repúblicas de la América antiguamente española.

Artículo X.

La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas, según lo requiera la necesidad de los fieles; sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno de Costa Rica. En cada una de estas diócesis se establecerá un cabildo de canónigos y el colegio seminario proporcionado al número del clero diocesano y a las necesidades de las mismas diócesis, y para la dotación de las Sillas episcopales que hayan de ser erigidas, de los cabildos y de los semi-

narios se procederá sobre las bases adoptadas para la de San José, la cual, a la brevedad posible, tendrá un cabildo formado como se expresa en la escala que se halla al fin del presente Concordato.

En los colegios seminarios serán recibidos y educados, conforme a lo prescripto en el Sagrado Concilio de Trento, aquellos jóvenes a quienes los obispos creyeran conveniente admitir, según la necesidad y utilidad de sus diócesis. Corresponde, por consiguiente, de pleno y libre derecho, a la autoridad de los prelados diocesanos todo cuanto concierne al arreglo, a la enseñanza, al régimen y a la administración de los seminarios, cuyos rectores y profesores serán libremente nombrados y revocados por los obispos cuando lo juzgaren útil o necesario.

Artículo XI.

Se erigirán así también, por la competente autoridad diocesana, nuevas parroquias, según lo requieran la necesidad y la utilidad de los fieles, procediendo de acuerdo con el Gobierno, siempre que fuere necesario conciliar los efectos civiles.

Artículo XII.

En la sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea nombrará libremente, en el término prefijado y en conformidad a lo establecido por el Sagrado Concilio de Trento, al vicario capitular, sin poder revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo, quedando, por consecuencia, abolida cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dispuesto por los sagrados cánones.

Artículo XIII.

Las causas relativas a la fe, a los sacramentos, a las funciones sagradas, a las obligaciones y a los derechos anexos

al sagrado ministerio, y, en general, todas las causas de naturaleza eclesiástica, pertenecen exclusivamente al juicio de la autoridad eclesiástica, según lo mandan los sagrados cánones.

Artículo XIV.

Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que se defieran a los Tribunales laicos las causas personales de los eclesiásticos en materia civil, así como las causas concernientes a las propiedades y a otros derechos temporales de los clérigos y de las iglesias, de los beneficios y de las demás fundaciones eclesiásticas.

Artículo XV.

Por la misma razón, la Santa Sede no hace dificultad a que las causas criminales de los eclesiásticos por delitos perseguidos por las leyes de la República extraños a la religión, sean deferidas a los Tribunales laicos. Pero en los juicios de segunda y última instancia entrarán a hacer parte del Tribunal, como conjuces, dos eclesiásticos nombrados por el ordinario. Estos juicios no serán públicos, y las sentencias que resultaren de ellos, en caso de condenación a pena capital, afflictiva o infamante, no se ejecutarán sin la aprobación del Presidente de la República y sin que el respectivo obispo haya cumplido previamente cuanto en tales casos se requiere por los sagrados cánones. En el arresto y detención de los eclesiásticos se les guardarán los miramientos convenientes a su carácter, debiendo darse pronto aviso de dicho arresto al obispo respectivo. De la disposición contenida en este artículo siempre serán excluidas las causas mayores, las cuales son reservadas a la Santa Sede conforme a lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento. Ses. 24 de *Reform.*: C. V.

Artículo XVI.

Siendo los ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su ministerio, podrán conforme a la disciplina vigente aprobada de la Iglesia corregir también a los eclesiásticos por las faltas a los deberes de su oficio, y por las de su conducta moral.

Artículo XVII.

La Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquiera título justo: sus adquisiciones y fundaciones piadosas serán respetadas y garantidas a la par de las propiedades de todos los ciudadanos costaricenses; y por lo que toca a las fundaciones, no se podrá hacer ninguna supresión ni unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvo las dificultades que competen a los obispos, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento.

Artículo XVIII.

La Santa Sede, en vista de las circunstancias actuales, consiente en que los fondos o bienes eclesiásticos sean sometidos a las cargas públicas, a la par de los bienes de los ciudadanos costaricenses, excepto siempre las fábricas dedicadas al culto divino, es decir, a las iglesias.

Artículo XIX.

Atendida la utilidad que del presente Concordato resulta para la religión, el Santo Padre, a instancias del presidente de Costa Rica, y por proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que las personas que durante las vicisitudes pasadas hubiesen comprado bienes eclesiásticos o redimido censos en los dominios de ella, autorizadas por

las leyes vigentes en aquellos tiempos, tanto los que se hallan en posesión cuanto los que hayan sucedido o sucedieren de derecho a los dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo y de ninguna manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, de modo que los primeros compradores, lo mismo que sus legítimos sucesores, gozarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes y de sus respectivos emolumentos y productos, siendo entendido que no se renovar^{án} esas enajenaciones abusivas.

Artículo XX.

No se impedirá el establecimiento de monasterios o conventos de ambos sexos y de cualquiera de los institutos aprobados por la Santa Sede. Las cosas relativas a regulares serán arregladas según lo disponen las leyes canónicas y las constituciones de los respectivos órdenes.

Artículo XXI.

El Gobierno de la República de Costa Rica suministrará los medios adecuados para la propaganda de la fe y para la conversión de los infieles existentes dentro de los límites de su territorio, y favorecerá el establecimiento y progreso de las misiones que con tan laudable objeto llegasen al territorio de la República autorizadas por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

Artículo XXII.

En vista de la declaración del Gobierno emitida por medio de su plenipotenciario, en cuanto al juramento, de que no es su mente obligar en conciencia a quien le preste a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consiente en que los obispos y demás eclesiásticos lo pres-

ten en la forma siguiente: «Yo juro, y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios, obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Costa Rica, y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional o a la tranquilidad pública.

Artículo XXIII.

Después de los oficios divinos en todas las iglesias de Costa Rica se hará la siguiente oración:

Domine salvam fac Rempublicam.
Domine savum fac Praesidem ejus.

Artículo XXIV

Su Santidad concede a los ejércitos de la República de Costa Rica las exenciones y gracias conocidas bajo denominación de privilegios castrenses, y determinará después de un Breve contemporáneo a la publicación del Concordato, cada una de las gracias y exenciones que entiende conceder.

Artículo XXV.

Todo lo demás que no se haya arreglado expresamente por los artículos anteriores, sea que pertenezca a cosas o a personas eclesiásticas, será dirigido y administrado conforme a la disciplina vigente de la Iglesia católica, apostólica, romana.

Artículo XXVI.

Quedan abrogadas por la presente Convención todas las leyes, ordenanzas y decretos, en cuanto se opongan a ella,

promulgadas de cualquier modo y en cualquier tiempo en la República de Costa Rica, y la dicha Convención se considerará como ley del Estado, que debe tener fuerza y valor para en adelante.

Artículo XXVII.

El presente Concordato será ratificado legalmente por ambas partes, y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del término de dieciocho meses, o antes, si fuese posible.

Artículo XXVIII.

Luego que fuesen canjeadas las ratificaciones del presente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus letras apostólicas.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con su sello.

Hecho en Roma a 7 de octubre de 1852.—*Jacobo, Card. Antonelli.*—*Fernando de Lorenzana* (L. S.).

Escala de las dotaciones asignadas al seminario, al obispo, al cabildo eclesiástico y a la fábrica de la iglesia catedral de la diócesis de San José de Costa Rica.

1.º Al colegio seminario, anualmente.....	3.000
2.º Al obispo de San José, ídem.....	3.000
3.º Al cabildo eclesiástico, ídem.....	3.000
<i>Suma y sigue.....</i>	<u>9.000</u>

Suma anterior..... 9.000

Distribuidos del modo siguiente:

Dignidades:

Al deán..... 600

Al tesorero..... 500

Canónigos:

Al penitenciario..... 450

Al teologal (lectoral)..... 450

A un canónigo de gracia..... 300

Racioneros:

A dos racioneros con 200 pesos... 400

Medios racioneros:

A dos medios racioneros con 150. 300

Suma..... 3.000

4.º A la fábrica de la catedral de San José, anualmente 1.000

Suma total..... 10.000

Roma, 7 octubre de 1852.—(F.) *Fernando de Lorenzana.*

CAPITULO XXIX

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE GUATEMALA

El contenido jurídico-religioso de la vigente Constitución de Guatemala es como sigue :

Artículo 24.

El ejercicio de todas las religiones, sin preeminencia alguna, queda garantizado en el interior de los templos; pero ese libre ejercicio no podrá extenderse hasta ejecutar actos subversivos o prácticas incompatibles con la paz y el orden público, ni da derecho para oponerse al cumplimiento de las obligaciones civiles y políticas.

Artículo 25.

Se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monásticas.

.....

Artículo 50.

No podrán ser electos diputados los contratistas de obras o servicios públicos de cualquiera clase que se costeen con

los fondos del Estado, ni los que, de resultas de tales contrataciones, tengan pendientes reclamaciones de interés propio.

Tampoco podrán serlo los secretarios de Estado, y por el departamento o distrito electoral en que ejerzan sus funciones, los jefes políticos, comandantes de armas, jueces de primera instancia, administradores de rentas públicas y ministros de los cultos...

.....

Artículo 65.

Para ser elegido Presidente se requiere:

.....

4.º Ser de estado seglar.

Artículo 86.

Para ser electo magistrado o fiscal se necesita estar en el goce de los derechos de ciudadano, ser mayor de veintiún años, abogado y de estado seglar.

Guatemala celebró con la Santa Sede el siguiente Concordato, que sigue en vigor aunque con algunas restricciones:

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República de Guatemala, capitán general D. Rafael Carrera, nombraron para sus respectivos plenipotenciarios:

Su Santidad, a su eminencia el Sr. D. Jacobo Antonelli, cardenal de la Santa Iglesia romana, diácono de Santa Agata de Suburra y secretario de Estado.

Y el Presidente de la República de Guatemala, al exce-

lentísimo Sr. D. Fernando Lorenzana, marqués de Belmonte, caballero de la Sagrada Orden ecuestre Jerosolimitana y del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, comendador de la Orden pontificia de San Gregorio Magno en la clase militar, caballero gran cruz de la misma Orden en la clase civil, comendador de la Real Orden de Francisco I, de las Dos Sicilias, etc., y ministro plenipotenciario de la República de Guatemala cerca de la Santa Sede.

Los cuales, después de haber cambiado sus respectivos plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.—La religión católica, apostólica, romana continuará siendo la religión de la República de Guatemala, y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados cánones.

Art. II. En consecuencia, la enseñanza de las Universidades, colegios, escuelas públicas y privadas, y demás establecimientos de instrucción, será conforme a la doctrina de la misma religión católica. A este fin, los obispos y ordinarios locales tendrán la libre dirección de las cátedras de Teología y de Derecho canónico, y de todos los ramos de enseñanza eclesiástica, y a más de la influencia que ejercerán en virtud de su ministerio sobre la educación religiosa de la juventud, velarán por que en la enseñanza de cualquier otro ramo, no haya nada contrario a la religión ni a la moral.

Art. III. Los obispos conservarán asimismo su derecho de censura sobre todos los libros y escritos que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública, y el Gobierno de Guatemala, no obstante que con sus leyes ha dado ya providencias sobre el particular, se compromete a concurrir con los medios propios de su autoridad a sostener las disposiciones que ellos tomaren conforme a los sagrados cánones para proteger la religión y evitar todo lo que pudiera serle contrario.

Art. IV. Siendo el Pontífice romano el jefe de la Iglesia universal por derecho divino, tanto los obispos como el clero y el pueblo tendrán libre comunicación con la Santa Sede.

Art. V. El Gobierno guatemalteco se compromete a conservar el pago del diezmo y a obligar autoritativamente a él; reconociéndose y siendo esta contribución sin la menor reserva ni aun para el caso de silla o de beneficios vacantes, destinada en su totalidad para las dotaciones del arzobispo, del cabildo y del seminario, y para los gastos del culto y de la fábrica de la iglesia metropolitana. Será instituida una comisión de eclesiásticos escogidos por el ordinario, si fuere posible entre los canónigos de la catedral, presidida por el ordinario o por el vicario capitular en sede vacante; la cual, mientras dure la vacante de la mitra o de algún beneficio, cobrará y administrará las rentas que corresponderían al arzobispo o a los prebendados para invertirlas según la necesidad, y conforme al dictamen de la misma comisión en reparos de iglesias, o en limosnas, o en otros objetos cuya institución o naturaleza sea religiosa.

Si por circunstancias que no pueden ahora ser previstas debiera hacerse alguna variación en los diezmos, no podrá ésta efectuarse como de derecho si no es con la intervención de la autoridad de la Santa Sede y substituyendo de cuenta del Gobierno otros fondos, de modo que formen una renta decorosa e independiente, tan verdadera propiedad de la Iglesia como otra cualquiera lo es de su propietario en los dominios de la República de Guatemala.

Visto que el diezmo no ofrece en la actualidad una renta suficiente al objeto a que está destinada, el mismo Gobierno suministrará de los fondos del Tesoro nacional una asignación anual que mantendrá aun después de haberse mejorado los productos del diezmo, y que se considera como un verdadero crédito de la Iglesia contra el Estado en la cantidad de cuatro mil pesos, distribuidos conforme a la escala específica que se halla al fin del presente Concordato.

Art. VI. Los párrocos, hasta que el Gobierno no les asigne una congrua segura e independiente, que deberá aprobarse por el ordinario, seguirán percibiendo las primicias y los emolumentos llamados de estola; cuyos aranceles serán arreglados por el ordinario mismo concienzudamente; y estos aranceles quedarán sujetos a ser revisados cuando con-

venga y aprobados por el ordinario, de acuerdo con el Gobierno, por el apoyo que él prestará para el cobro de dichos emolumentos.

Existiendo en la República de Guatemala algunos fondos procedentes de los derechos o impuestos llamados de fábrica, el Gobierno tendrá la conveniente vigilancia a fin de que tales fondos se inviertan bien en favor de las iglesias, sostenimiento del culto y socorro de los pobres en las respectivas parroquias, sin que por esto se entienda con derecho a la administración de estos ramos, y excitará al ordinario a remediar debidamente los abusos que se notaren en el empleo de ellos. Cuando en algunas parroquias faltaren los medios para el sostén de sus menesteres, el Gobierno, entendiéndose con el ordinario eclesiástico, se compromete a proveer lo que fuere necesario.

Art. VII. En vista de los precitados comprometimientos contraídos, el Sumo Pontífice concede al Presidente de la República de Guatemala y a sus sucesores en este cargo el patronato, o sea el privilegio de presentar para cualesquiera vacantes de iglesias arzobispaes o episcopales si fueren erigidas canónicamente, a eclesiásticos dignos e idóneos, adornados de todas las cualidades requeridas por los sagrados cánones; y el Sumo Pontífice, en conformidad a las reglas prescritas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas. Pero no podrán los presentados intervenir de ningún modo en el régimen o la administración de las iglesias para las cuales hubiesen sido designados antes de recibir las bulas de institución canónica, como está prescrito por los sagrados cánones. El Presidente de la República procederá a hacer estas presentaciones dentro del término de un año, contado desde el día de la vacante.

Art. VIII. Por la misma causa, Su Santidad concede al Presidente de la República el privilegio de nombrar en cada capítulo para seis prebendas, ya sean de dignidades o canonjías o racioneros, exceptuada la primera dignidad, que será reservada a la libre colación de la Santa Sede, la cual, que-

riendo dar pruebas de consideración al clero de la República de Guatemala, la conferirá a un individuo del mismo clero y la lectoral, penitenciaria y magistral, que serán conferidas por los obispos en concurso de oposición a las personas consideradas más dignas. Serán de nombramiento del Presidente las seis prebendas que primero vacaren de las no exceptuadas, las cuales quedarán sujetas para siempre a su libre nominación. La provisión de las restantes cualquiera que fuese su clase y número, corresponderán en adelante a los obispos. Esto no impide el que se puedan fundar otras prebendas de oposición, como las tres antedichas, que deben conferirse en concurso por los obispos, las cuales, una vez establecidas, no podrán variarse.

Art. IX. Todas las parroquias se proveerán en concurso abierto, según lo dispuesto por el Sagrado Concilio de Trento, debiendo los ordinarios formar las ternas de los concurrentes aprobados y dirigirlas al Presidente de la República, quien nombra uno de los propuestos conforme a la práctica observada hasta ahora.

Art. X.—La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis y hará nuevas circunscripciones de ellas, según lo requieran la necesidad y la utilidad de los fieles. Sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno de Guatemala. En cada una de estas diócesis se establecerá un cabildo de canónigos y un colegio seminario proporcionado al número del clero diocesano y a las necesidades de las nuevas diócesis, y para la dotación, tanto de las sillas que hayan de erigirse y de los cabillos, como para los seminarios, se procederá sobre las bases establecidas para las otras ya existentes, poniéndose la Santa Sede de acuerdo con el Gobierno para que dichas votaciones sean decorosas e independientes.

Art. XI. Se erigirán igualmente por los respectivos ordinarios nuevas parroquias, según lo requieran la necesidad y la utilidad de los fieles, procediéndose igualmente de acuer-

do con el Gobierno siempre que fuere necesario conciliar los efectos civiles.

Art. XII. El colegio seminario metropolitano será conservado en la diócesis de Guatemala, y cuando fueren erigidas nuevas diócesis se fundará inmediatamente un seminario en cada una de ellas. En estos seminarios serán recibidos y educados conforme a lo prescripto por el sacro Concilio de Trento aquellos jóvenes a quienes los obispos creyeran conveniente admitir, según la necesidad y utilidad de sus diócesis. Corresponde, por consiguiente, de pleno y libre derecho a la autoridad de los prelados diocesanos todo cuanto concierne al arreglo, a la enseñanza, al régimen y a la administración de los seminarios, cuyos rectores y profesores serán libremente nombrados y revocados por los obispos cuando lo juzgaren conveniente.

Art. XIII. En sede vacante, el cabildo de la Iglesia metropolitana o sufragánea nombrará libremente en el término prefijado, y en conformidad a lo establecido por el sagrado Concilio de Trento, al vicario capitular, sin poder revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo, quedando, por consiguiente, abolida cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dispuesto en los sagrados cánones.

Art. XIV. Las causas concernientes a la fe, a los sacramentos, a las funciones sagradas, a las obligaciones y a los derechos anexos al sagrado ministerio, y, en general, todas las causas de naturaleza eclesiástica pertenecen exclusivamente al juicio de las autoridades eclesiásticas, según la regla de los sagrados cánones.

Art. XV. Atendiendo a las circunstancias de los tiempos, la Santa Sede consiente en que se defieran a los tribunales laicos las causas personales de los eclesiásticos en materia civil, así como las causas concernientes a las propiedades y a otros derechos temporales, tanto de los clérigos como de las iglesias, de los beneficios y demás fundaciones eclesiásticas. Pero si las demandas fueren entre todos eclesiásticos podrán los obispos intervenir como árbitros, con el fin de

dirimir las diferencias o conciliarlas; sin cuyo requisito previo y constancia legal de no haber bastado este arbitrio, ningún tribunal del Estado podrá oír ni dar curso a las demandas.

Art. XVI. Por la misma razón, la Santa Sede no hace dificultad a que las causas criminales de los eclesiásticos por delitos perseguidos por las leyes de la República extrañas a la religión sean deferidas a los tribunales laicos; pero en los juicios de segunda y de última instancia entrarán a hacer parte del tribunal, como conjuces, al menos dos eclesiásticos nombrados por el ordinario. Estos juicios no serán públicos y las sentencias que resultaren de ellos en caso de condenación a pena capital, afflictiva o infamante, no se ejecutarán sin la aprobación del Presidente de la República y sin que el respectivo obispo haya cumplido previamente cuanto en tales casos se requiere por los sagrados cánones. En el arresto y detención de los eclesiásticos se usarán los miramientos convenientes a su carácter, debiendo darse pronto aviso de dicho arresto al obispo respectivo. En la disposición contenida en este artículo siempre se entienden excluidas las causas mayores, las cuales son reservadas a la Santa Sede conforme a lo dispuesto por el Concilio de Trento. Sess. 24 de Ref., cap. V.

Art. XVII. Siendo los ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su ministerio, podrán, conforme a la disciplina vigente aprobada de la Iglesia, corregir y poner penas adecuadas a los eclesiásticos por las faltas a los deberes de su oficio y por las de su conducta moral.

Art. XVIII. La Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquier título justo; sus adquisiciones y las fundaciones piadosas serán respetadas y garantidas a la par de las propiedades de todos los ciudadanos guatemaltecos, y, por lo que toca a las fundaciones, no se podrá hacer ninguna supresión ni unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvo las facultades que competen a los obispos según lo dispuesto por el sagrado Concilio de Trento.

Art. XIX. La Santa Sede, en vista de las circunstancias actuales, consiente en que los fondos o bienes eclesiásticos sean sometidos a las cargas públicas a la par de los bienes de los ciudadanos guatemaltecos, excepto, siempre, las fábricas dedicadas al culto divino, es decir, a las iglesias.

Art. XX. Atendida la utilidad que resulta para la religión del presente Concordato, el Santo Padre, a instancias del Presidente de la República de Guatemala y por proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que las personas que durante las vicisitudes pasadas hubiesen comprado bienes eclesiásticos o redimido censos en los dominios de ella, autorizados por las leyes civiles vigentes en aquellos tiempos, tanto los que se hallen en posesión cuanto los que hayan sucedido o sucedieren de derecho a dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo y de ninguna manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, de modo que los primeros compradores, lo mismo que sus legítimos sucesores, gozarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes, de sus respectivos emolumentos y productos, siendo entendido que no se renovarán esas enajenaciones abusivas.

Art. XXI. Se conservarán los monasterios de regulares de ambos sexos actualmente existentes en el territorio de la República de Guatemala y no se impedirá el establecimiento de otros. Las cosas relativas a los regulares serán arregladas según se haya establecido por las leyes canónicas y por las constituciones de las respectivas órdenes.

Art. XXII. El Gobierno de la República de Guatemala suministrará los medios adecuados para la propagación de la fe y para la conversión de los infieles existentes dentro de los límites de su territorio, y favorecerá el establecimiento y progreso de las misiones que con tan laudable objeto llegasen al territorio de la República autorizadas por la Sagrada Congregación de *Propaganda Fide*.

Art. XXIII. En vista de la declaración del Gobierno, emitida por su plenipotenciario en cuanto al juramento, de que no es su mente obligar en conciencia a quien lo preste a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consiente en que los obispos, los vicarios capitulares y demás eclesiásticos lo presten en la forma siguiente: Yo Juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República de Guatemala, y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos en proyecto alguno que pueda ser contrario a la independencia nacional o a la tranquilidad pública.

Art. XXIV. Después de los oficios divinos en todas las iglesias de la República de Guatemala se hará la siguiente oración:

*«Domine salvam fac Rempublicam.
Domine salvum fac Praesidem ejus.»*

Art. XXV. Su Santidad concede a los ejércitos de la República de Guatemala las exenciones conocidas bajo la denominación de privilegios castrenses y determinará después, en un Breve contemporáneo a la publicación del Concordato, cada una de las gracias y exenciones que entiende conceder.

Art. XXVI. Todo lo que no se haya arreglado expresamente por los artículos anteriores, sea que pertenezca a cosa o a persona eclesiásticas, será dirigido y administrado conforme a la disciplina vigente de la Iglesia católica, apostólica, romana.

Art. XXVII. Quedan abrogadas por la presente Convención todas las leyes, ordenanzas y decretos promulgados de cualquier modo, y en cualquier tiempo, en cuanto se opongan a ella en la República de Guatemala, y la dicha Convención se considerará como ley del Estado, que debe tener fuerza y valor para en adelante.

Art. XXVIII. El presente Concordato será ratificado legalmente por ambas partes, y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del término de dieciocho meses, o antes, si fuese posible.

Art. XXIX. Luego que fueren canjeadas las ratificaciones del presente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus letras apostólicas.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con su sello..

Hecho en Roma, a siete de octubre de mil ochocientos y cincuenta y dos.—*Jacobo, Cardenal Antonelli.*—*Fernando Lorenzana.*

Escala específica de las asignaciones suplementarias de que se habla en el artículo V.

	Pesos
Al ilustrísimo y muy reverendo arzobispo.....	1.000
A cada una de las cinco dignidades, 300.....	1.500
A cada uno de los cinco canónigos, 200.....	1.000
A la fábrica de la Iglesia metropolitana.....	500
<i>Suma</i>	4.000

Roma, a siete de octubre de mil ochocientos cincuenta y dos.—*Fernando de Lorenzana.*

CAPITULO XXX

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LA REPUBLICA DE HAITI

Breve es el contenido constitucional religioso de la República de Haití. Es como sigue:

.....

.....

Artículo 17.

Todos los cultos son igualmente libres.

Cada cual tiene el derecho de profesar su religión y ejercer libremente su culto, con tal que no turbe el orden público...

.....

Artículo 74.

Antes de entrar en el ejercicio de su cargo, formulará el Presidente ante la Asamblea nacional el siguiente juramento:

«Juro ante Dios y ante la nación observar y hacer observar fielmente la Constitución y las leyes del pueblo haitiano, respetar sus derechos y mantener la independencia nacional y la integridad del territorio.»

El antiguo dominio francés también celebró Concordato con la Santa Sede, que es como sigue:

CONCORDATO ENTRE PIO IX Y LA REPUBLICA DE HAITI

28 marzo 1860.

En nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad.

Su Santidad el Soberano Pontífice Pío IX y Su Excelencia el Presidente de la República de Haití, Fabre Geffard, desean-
do organizar y reglamentar convenientemente el ejercicio de
la religión católica, apostólica, romana en la República de
Haití, han escogido por ministros plenipotenciarios:

Su Santidad el Soberano Pontífice Pío IX, a su eminencia el cardenal Jacobo Antonelli, su secretario de Estado, etc., etcétera.

Su Excelencia el Presidente de Haití, Fabre Geffard, a Mr. Pedro Faubert, antiguo ayuda de campo y secretario del Presidente de Haití J. P. Boyer, y antiguo ministro del Gobierno haitiano cerca del Gobierno francés:

Los cuales plenipotenciarios, después del canje de sus respectivos plenos poderes, han concertado la Convención siguiente:

Artículo 1.

La religión católica, apostólica, romana, que es la religión de la gran mayoría de los haitianos, será especialmente protegida, lo mismo que sus ministros, en la República de Haití, y disfrutará de los derechos y atributos que le son propios.

Artículo 2.

La ciudad de Porto Príncipe, capital de la República de Haití, es erigida en arzobispado. Serán establecidas otras

diócesis dependientes de esta metrópoli cuanto antes sea posible, lo mismo que otros arzobispados y obispados, si es necesario, y las circunscripciones serán reguladas por la Santa Sede de acuerdo con el Gobierno de Haití.

Artículo 3.

El Gobierno de la República de Haití se obliga a acordar y mantener para los arzobispos y obispos un régimen anual conveniente sobre los fondos del Tesoro público.

Artículo 4.

El Presidente de Haití disfrutará del privilegio de nombrar a los arzobispos y obispos, y si la Santa Sede les halla las cualidades requeridas por los sagrados cánones, les dará la institución canónica.

Se entiende que los eclesiásticos nombrados para los arzobispados y obispados no podrán ejercer su jurisdicción antes de haber recibido la institución canónica; y en el caso en que la Santa Sede creyese deber aplazar o no conferir esta institución, informará de ello al Presidente de Haití, el cual, en este último caso, nombrará a otro eclesiástico.

Artículo 5.

Los arzobispos y los obispos, antes de entrar en el ejercicio de su ministerio pastoral, prestarán directamente en manos del Presidente de Haití el juramento siguiente: «Yo juro y prometo a Dios, sobre los Santos Evangelios, como conviene a un obispo, guardar obediencia y fidelidad al Gobierno establecido por la Constitución de Haití y no acometer nada ni directa ni indirectamente que sea contrario a los derechos y a los intereses de la República.»

Los vicarios generales, los curas y los vicarios de las pa-

rruquias, lo mismo que todos los demás miembros de la jerarquía eclesiástica y todos los jefes de escuelas o instituciones religiosas, prestarán, antes de ejercer su oficio, entre las manos de la autoridad civil designada por el Presidente de Haití, el mismo juramento que el de los arzobispos y obispos.

Artículo. 6.

El arzobispo u obispo podrá instituir para el bien de la diócesis, después de ponerse previamente de acuerdo con el Presidente de Haití o sus delegados, un cabildo compuesto de un número conveniente de canónigos, conforme a las disposiciones canónicas.

Artículo 7.

En los grandes y pequeños seminarios que, según necesidad, podrán ser establecidos, el régimen, la administración y la instrucción serán reguladas conforme a las leyes canónicas por los arzobispos o los obispos, que nombrarán también libremente a los superiores, directores y profesores de estos establecimientos.

Artículo 8.

Los arzobispos y obispos nombrarán sus vicarios generales. En el caso de muerte o de dimisión del arzobispo o del obispo diocesano, la diócesis será administrada por el vicario general que el uno o el otro hayan designado como tal; y, en defecto de esta designación, por aquel que fuere más antiguo en el oficio de vicario general. Todos los demás, si los hay, ejercerán sus funciones bajo la dependencia de este vicario, y ello en virtud del poder extraordinario acordado a este efecto por la Santa Sede. Esta disposición estará en vigor en tanto no haya un cabildo catedral, y cuando este

cabildo exista, él nombrará conforme a las prescripciones canónicas el vicario capitular.

Artículo 9.

Los arzobispos y obispos nombrarán los curas y los vicarios de las parroquias, lo mismo que los miembros de los cabildos, que podrán ser instituidos; y estos nombramientos se harán conforme a las leyes canónicas. Ellos examinarán las letras de ordenación, las dimisorias y los *exeat*, lo mismo que las otras letras testimoniales de los eclesiásticos extranjeros que entren en la República para ejercer el sagrado ministerio.

Artículo 10.

Los arzobispos y los obispos, para el régimen de sus iglesias, serán libres de ejercer todo lo que está dentro de las atribuciones de su ministerio pastoral, según las reglas canónicas.

Artículo 11.

Si fuera necesario establecer cambios en la circunscripción actual de las parroquias o erigir nuevas, los arzobispos y obispos proveerán a ello, concertándose previamente con el Presidente de Haití o sus delegados.

Artículo 13.

No se pondrá ninguna traba a la libre correspondencia de los obispos, del clero y de los fieles en Haití con la Santa Sede sobre las materias de religión, lo mismo que de los obispos con sus diócesanos.

Artículo 14.

Los fondos curiales no serán empleados en cada parroquia más que para gastos del culto y de sus ministros, lo mismo que para los gastos de los seminarios y otros establecimientos piadosos. La administración de estos fondos será confiada, bajo la alta dependencia del arzobispo o del obispo diocesano, al cura de la parroquia o al director del Consejo de Notables, los cuales escogerán un cajero entre los ciudadanos del lugar.

Artículo 15.

La fórmula siguiente de plegaria será rezada o cantada al fin del oficio divino en todas las iglesias católicas de Haití:

«Señor, salva la República con nuestro Presidente N...»
«Y óyenos el día en que te invocáremos.»

Artículo 16.

Se ha declarado de parte del Presidente de Haití, y queda bien entendido de parte de la Santa Sede, que la ejecución de todo cuanto se ha estipulado en el presente Concordato no podrá ser impedida por ninguna disposición de las leyes de la República de Haití o ninguna interpretación contraria de dichas leyes o de usos en vigor.

Artículo 17.

Todos los puntos concernientes a materias eclesiásticas no mencionados en el presente Concordato serán regulados conforme a la disciplina en vigor en la Iglesia, aprobada por la Santa Sede.

Artículo 18.

El presente Concordato será de una y otra parte ratificado, y el cambio de ratificaciones tendrá lugar en Roma o en París, en el término de seis meses o antes, si es posible.

Roma, 28 de marzo de 1860.—*J., Card. Antonelli.—Pedro Faubert.*

CAPITULO XXXI

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LAS REPUBLICAS DE PANAMA, SANTO DOMINGO, PUERTO RICO Y CUBA

I. PANAMA

La pequeña República del Panamá dióse su vigente Constitución el 13 de febrero de 1904.

Su contenido religioso está en el preámbulo y en cuatro artículos.

Preámbulo.

Nosotros, los representantes del pueblo de Panamá, reunidos en convención nacional con el objeto de constituir la nación, mantener el orden, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que habiten en el suelo panameño, invocando la protección de Dios, ordenamos, decretamos y establecemos para la nación panameña la siguiente Constitución:

.....

Artículo 26.

Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los habitantes de la República, y la ley dispondrá se le auxilie para fundar un seminario conciliar en la capital, y para las misiones a las tribus indígenas...

.....

Artículo 43.

Los edificios destinados a cualquier culto, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales no podrán ser gravados con contribuciones, y sólo podrán ser ocupados en caso de urgente necesidad pública...

.....

Artículo 71.

El Presidente de la República electo, o el ciudadano que llegue a reemplazarlo, tomará posesión de su destino ante el Presidente de la Asamblea, y prestará juramento en estos términos: «Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y leyes de Panamá.»

.....

Artículo 135.

Los ministros de los cultos religiosos no podrán ejercer en la República cargo, empleo o servicio público, personal, civil o militar, exceptuándose los destinos que se relacionen con la beneficencia o enseñanza pública.

II. SANTO DOMINGO

La Constitución vigente de la República Dominicana es de 13 de junio de 1924.

Su contenido religioso es como sigue:

.....
.....

Artículo 6.

Se consagran como inherentes a la personalidad humana:

.....

3.º La libertad de conciencia y de cultos.

.....

Artículo 48.

El Presidente de la República, antes de entrar en funciones, prestará ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento:

«Juro por Dios y por la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo.»

.....

Artículo 92.

Las relaciones de la Iglesia y el Estado seguirán siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la religión católica, apostólica, romana, sea la que profesen la mayoría de los dominicanos.

.....

Artículo 95.

No se pueden fundar censos a perpetuidad, tributos, capellanías, ni ninguna clase de vinculaciones.

.....

Artículo 98.

El escudo de armas de la República lleva los colores nacionales; en el centro, el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo de lanzas y banderas con ramos de laurel y de palma exteriormente y coronado con una cinta, en la cual se lee este lema: «Dios, Patria y Libertad», y en la base otra cinta con estas palabras: «República Dominicana».

III. PUERTO RICO

La ley constitucional de Puerto Rico es de 2 de marzo de 1917.

He aquí su contenido religioso:

.....

.....

.....

Artículo 2.

.....

.....

No se dictará ninguna ley relativa al establecimiento de cualquiera religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, y se permitirá en todo tiempo el libre ejercicio y goce de profesiones y cultos religiosos sin distinción ni preferencias, y no se exigirá como condición para desempeñar cualquier cargo o puesto de confianza en el Gobierno de Puerto

Rico ningún otro requisito político o religioso que un juramento de defender la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

Jamás se asignará, aplicará, donará, usará, directa o indirectamente, dinero o propiedad públicos para el uso, beneficio o sostenimiento de ninguna secta, iglesia, denominación, institución o asociación sectaria, o sistema religioso, o para el uso, beneficio o sostenimiento de ningún sacerdote, predicador, ministro u otro instructor o dignatario religioso, como tal, o para fines caritativos industriales, educativos o benévolos, a persona alguna, corporación o comunidad que no esté bajo la dependencia absoluta de Puerto Rico. La poligamia o matrimonios polígamos quedan de aquí en adelante prohibidos.

Un año después de la aprobación de esta ley, y en lo sucesivo será ilegal importar, fabricar, vender, ceder o exponer a la venta o regalo cualquier bebida o droga embriagante; *Disponiéndose* que la Asamblea Legislativa podrá autorizar y reglamentar la importación, fabricación y venta de dichos licores y drogas para usos medicinales, sacramentales, industriales y científicos únicamente. La penalidad por infracciones de esta disposición, con referencia a las bebidas, drogas y embriagantes será una multa no menor de 25 dólares por la primera vez, y por la segunda y subsiguientes, una multa no menor de 50 dólares y prisión por un término mínimo de un mes y un máximo de un año; y *Disponiéndose además* que en cualquiera elección general que se celebre dentro de cinco años después de la aprobación de la presente ley, esta disposición podrá, a petición de no menos del 10 por 100 de los electores capacitados de Puerto Rico, ser sometida a votación de los electores capacitados de Puerto Rico; y si una mayoría de todos los electores capacitados de Puerto Rico que vote sobre esa cuestión votaren por la derogación de esta disposición, quedará ésta desde entonces sin fuerza y vigor; de otro modo, quedará con toda su fuerza y efecto.

IV. CUBA

Breve es el contenido jurídico-religioso de la Constitución vigente en Cuba, que es de 21 de febrero de 1901.

Helo aquí:

Preámbulo.

Nosotros, los delegados del pueblo de Cuba, reunidos en Convención Constituyente, a fin de redactar y adoptar la ley fundamental de su organización como Estado independiente y soberano, estableciendo un Gobierno capaz de cumplir sus obligaciones internacionales, mantener el orden, asegurar la libertad y la justicia, promover el bienestar general, acordamos y adoptamos, invocando el favor de Dios, la siguiente Constitución.

... ..

Artículo 26.

Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público.

La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar, en caso alguno, ningún culto.

CAPITULO XXXII

ESTATUTO JURIDICO-RELIGIOSO DE LAS REPUBLICAS DE CHILE, URUGUAY, PARAGUAY, PERU, BRASIL, ARGENTINA Y BOLIVIA

I. CHILE

La Constitución de Chile es de 18 de septiembre de 1925.
Su contenido religioso es como sigue:

Preámbulo.

El Presidente de la República, por cuanto la voluntad soberana de la Nación, solemnemente manifestada en el plebiscito verificado el 30 de agosto último, ha acordado reformar la Constitución política promulgada el 25 de mayo de 1833 y sus modificaciones posteriores, e *invocando el nombre de Dios Todopoderoso*, ordenó que se promulgue la siguiente, como la Constitución política de la República de Chile:

Artículo 10.

La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

2.º La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas, erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros.

Los templos y sus dependencias destinados al servicio de un culto estarán exentos de contribuciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Quedan derogadas las leyes existentes sobre las materias de los artículos 30, núm. 3.º; 73, núms. 8.º, 13, y 14, y 95, núms. 3.º y 4.º de la Constitución de 1833, suprimidos por la presente reforma.

Durante cinco años entregará el Estado al señor arzobispo de Santiago la cantidad de dos millones quinientos mil pesos anuales para que se inviertan en el país en las necesidades del culto de la Iglesia católica.

II. URUGUAY

Sólo un artículo de la Constitución del Uruguay habla de religión. Es el quinto :

.....

.....

Artículo 5.

Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o parcialmente, construídos con fondos del erario nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exento de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones.

III. PARAGUAY

La República del Paraguay dióse su Constitución el 24 de noviembre de 1870.

Su contenido religioso es como sigue :

Preámbulo.

Nos, los representantes de la nación del Paraguay, reunidos en Convención Nacional Constituyente por la libre y es-

pontánea voluntad del pueblo paraguayo, con objeto de establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y hacer duraderos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que lleguen a habitar el suelo paraguayo, invocando a Dios Todopoderoso, supremo legislador del Universo, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la República del Paraguay.

.....

Artículo 3.

La religión del Estado es la católica, apostólica, romana, debiendo ser paraguayo el jefe de la Iglesia; sin embargo, el Congreso no podrá prohibir el libre ejercicio de cualquiera otra religión en todo el territorio de la República.

.....

Artículo 33.

Los extranjeros gozan en todo el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer sus industrias, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias .

.....

Artículo 69.

Ningún eclesiástico podrá ser miembro del Congreso;

tampoco podrán serlo los empleados a sueldo de la nación sin renunciar antes a su puesto.

.....

Artículo 72.

Corresponde al Congreso :

.....

13.º Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios o promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización.

.....

Artículo 89.

Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere ser natural de la República, tener treinta años de edad y profesar la religión cristiana.

.....

Artículo 93.

Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado (la primera vez ante el presidente de la Convención Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes :

«Yo, N. N., juro solemnemente ante Dios y la Patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vice) de la República del Paraguay y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación paraguaya. Si no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.»

.....

Artículo 102.

El Presidente de la República tiene las siguientes atribuciones:

7.º Ejercer los derechos de patronato nacional de la República en la presentación de obispos para las diócesis de la nación, a propuesta interna del Senado, de acuerdo con el Senado eclesiástico o, en su defecto, del clero nacional reunido.

8.º Conceder el paso o detener los decretos de los Concilios, las bulas, breves y rescritos del Sumo Pontífice, con acuerdo del Congreso.

Artículo 104.

Cinco ministros secretarios, a saber: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra y Marina, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecerán de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministerios.

Decreto adicional.

Artículo 5.º El mismo día de la jura, los párrocos de los tres distritos de la capital celebrarán un *Tédeum* poniendo de manifiesto al Señor, después de rendirle el culto debido y tributarle las gracias.

Artículo 12. Concluída la lectura, previas las formalidades prevenidas en el artículo anterior, jurará el jefe, el párroco y los hombres de más representación, hasta el número de diez, en manos del Presidente, y éste en las del jefe, y, en su defecto, ante el público, a quien seguirán en un solo acto todos los concurrentes, ocupando otra vez para esto su asiento el Presidente.

IV. PERU

La Constitución del Perú es de 29 de diciembre de 1919. He aquí su contenido religioso:

Pedámbulo.

La Asamblea Nacional, en uso de las facultades constituyentes que le confirió el pueblo soberano para integrar y concordar las reformas sancionadas por el plebiscito, invocando los sagrados nombres de Dios y de la Patria, ha dado la siguiente Constitución:

Artículo 5.

La nación profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado la protege.

Artículo 22.

No hay ni puede haber esclavos en la República. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución. La ley no reco-

pontánea voluntad del pueblo paraguayo, con objeto de establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y hacer duraderos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que lleguen a habitar el suelo paraguayo, invocando a Dios Todopoderoso, supremo legislador del Universo, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la República del Paraguay.

.....

Artículo 3.

La religión del Estado es la católica, apostólica, romana, debiendo ser paraguayo el jefe de la Iglesia; sin embargo, el Congreso no podrá prohibir el libre ejercicio de cualquiera otra religión en todo el territorio de la República.

.....

Artículo 33.

Los extranjeros gozan en todo el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer sus industrias, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias .

.....

Artículo 69.

Ningún eclesiástico podrá ser miembro del Congreso;

tampoco podrán serlo los empleados a sueldo de la nación sin renunciar antes a su puesto.

.....

Artículo 72.

Corresponde al Congreso:

.....

13.º Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios o promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización.

.....

Artículo 89.

Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere ser natural de la República, tener treinta años de edad y profesar la religión cristiana.

.....

Artículo 93.

Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado (la primera vez ante el presidente de la Convención Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes:

«Yo, N. N., juro solemnemente ante Dios y la Patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vice) de la República del Paraguay y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación paraguaya. Si no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.»

.....

Artículo 102.

El Presidente de la República tiene las siguientes atribuciones:

7.º Ejercer los derechos de patronato nacional de la República en la presentación de obispos para las diócesis de la nación, a propuesta interna del Senado, de acuerdo con el Senado eclesiástico o, en su defecto, del clero nacional reunido.

8.º Conceder el paso o detener los decretos de los Concilios, las bulas, breves y rescritos del Sumo Pontífice, con acuerdo del Congreso.

Artículo 104.

Cinco ministros secretarios, a saber: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra y Marina, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecerán de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministerios.

Decreto adicional.

Artículo 5.º El mismo día de la jura, los párrocos de los tres distritos de la capital celebrarán un *Tédeum* poniendo de manifiesto al Señor, después de rendirle el culto debido y tributarle las gracias.

Artículo 12. Concluída la lectura, previas las formalidades prevenidas en el artículo anterior, jurará el jefe, el párroco y los hombres de más representación, hasta el número de diez, en manos del Presidente, y éste en las del jefe, y, en su defecto, ante el público, a quien seguirán en un solo acto todos los concurrentes, ocupando otra vez para esto su asiento el Presidente.

IV. PERU

La Constitución del Perú es de 29 de diciembre de 1919. He aquí su contenido religioso:

Preámbulo.

La Asamblea Nacional, en uso de las facultades constituyentes que le confirió el pueblo soberano para integrar y concordar las reformas sancionadas por el plebiscito, invocando los sagrados nombres de Dios y de la Patria, ha dado la siguiente Constitución:

.....

Artículo 5.

La nación profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado la protege.

.....

Artículo 22.

No hay ni puede haber esclavos en la República. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución. La ley no reco-

noce pacto ni imposición alguna que prive de la libertad individual.

Artículo 23.

Nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por razón de sus creencias.

... ..

Artículo 76.

No pueden ser elegidos senadores por ningún departamento, ni diputados por ninguna provincia:

... ..

4.º Los arzobispos, obispos, gobernadores eclesiásticos, vicarios capitulares y provisoros por los departamentos o provincias de sus respectivas diócesis, ni los curas por las provincias a que pertenezcan sus parroquias.

... ..

Artículo 121.

Son atribuciones del Presidente de la República:

... ..

16.º Ejercer el patronato con arreglo a las leyes y prácticas vigentes.

17.º Presentar para arzobispos y obispos, con aprobación del Congreso, a los que fueren electos según la ley.

18.º Presentar para las dignidades y canonjías de las catedrales, para los curatos y demás beneficios eclesiásticos, a los sacerdotes de nacionalidad peruana, con arreglo a las leyes y prácticas vigentes.

19.º Celebrar Concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose a las instrucciones dadas por el Congreso.

20.º Conceder o negar el pase de los decretos conciliares,

bulas, breves y rescriptos pontificios con asentimiento del Congreso, y oyendo previamente a la Corte Suprema de Justicia si fueren relativos a asuntos contenciosos.

21.º Proveer los empleos vacantes cuyo nombramiento le corresponda según la Constitución y las leyes.

Decreto adicional.

Art. 5.º Los Ministerios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Justicia cuidarán de invitar a estas ceremonias a los miembros de ambas Cámaras, a la municipalidad de Lima, al cuerpo diplomático, a los tribunales de Justicia y al jefe de la Iglesia nacional, y acordarán con aquélla y con éste la forma en que puedan concurrir al mayor realce y brillo de los actos políticos anunciados.

V. BRASIL

La vigente Constitución del Brasil es de 24 de febrero de 1891.

Su contenido religioso es como sigue:

Artículo 70.

Son electores los ciudadanos mayores de veintiún años que se inscriban o registren con arreglo a la ley.

1.º No pueden registrarse como electores para las elecciones federales o para la de los Estados:

4.º Los religiosos de órdenes monásticas, compañías, congregaciones o comunidades de cualquiera denominación,

que estén sujetos a un voto de obediencia, regla o estatuto que equivalga a una renuncia de la libertad individual.

.....

Artículo 72.

La Constitución garantiza a los brasileños y extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de sus derechos relativos a la libertad individual y garantía de vidas y haciendas, en los términos siguientes:

.....

3.º Todos los individuos y denominaciones religiosas podrán ejercer pública y libremente su culto, asociarse con tal fin y adquirir bienes, con tal que se observen las prescripciones del Derecho común.

4.º La República sólo reconoce el matrimonio civil, cuya celebración será gratuita.

5.º Los cementerios tendrán carácter secular y serán administrados por la autoridad municipal quedando libre a todos los cultos religiosos la práctica de los respectivos ritos en armonía con sus creencias, con tal que no ofendan a la moral pública ni las leyes.

6.º La instrucción dada en los establecimientos públicos será secular.

7.º Ningún culto o iglesia gozará de subvención oficial ni tendrá relaciones de dependencia o de alianza con el Gobierno de la Unión o con el de los Estados.

.....

29.º Los que alegaren un motivo de creencia religiosa para eximirse de cualquier deber que las leyes de la República impongan a sus ciudadanos, y los que aceptaren condecoraciones o títulos de nobleza extranjeros, perderán todos sus derechos políticos.

.....

Enmienda número 5.

Artículo 1.

.....

3.º Todos los individuos y comunidades religiosas pueden ejercer pública y libremente su culto asociándose para ese fin y adquiriendo bienes de acuerdo con las disposiciones del Derecho común.

4.º La República sólo reconoce el matrimonio civil, cuya celebración será gratuita.

.....

28.º Por motivo de creencias o de funciones religiosas ningún ciudadano brasileño podrá ser privado de sus derechos civiles y políticos, ni tampoco eximirse de cumplir sus deberes cívicos.

29.º Los que alegaren como motivo sus creencias religiosas para eximirse de cualquiera de las obligaciones que las leyes de la República imponen a los ciudadanos, y los que aceptaren condecoraciones o títulos nobiliarios extranjeros, perderán todos los derechos políticos.

VI. ARGENTINA

La vigente Constitución de la República Argentina es de 25 de septiembre de 1860.

Su contenido religioso es el siguiente:

Preámbulo.

Nos, los representantes del pueblo de la Argentina, reunidos en Congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de

pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina.

... ..

Artículo 2.

El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano.

... ..

Artículo 14.

Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender.

... ..

Artículo 19.

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la

autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 20.

Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtiene nacionalización residiendo dos años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite alegando y probando servicios a la República.

.....

Artículo 65.

Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincias por las de su mando.

.....

Artículo 67.

Corresponde al Congreso:

.....

19.º Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y los Concordatos con la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la nación.

.....

Artículo 76.

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la nación se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país extranjero, pertenecer a la comunión católica, apostólica, romana, y las demás cualidades exigidas para ser elegido senador.

... ..

Artículo 80.

Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente, prestarán juramento en manos del presidente del Senado (la primera vez del presidente del Congreso Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: «Yo, N. N., juro por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vicepresidente) de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la nación me lo demanden.»

... ..

Artículo 86.

El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

... ..

8.º Ejercer los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales, a propuesta, en terna, del Senado.

9.º Concede el pase o detiene los decretos de los Concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley cuando contiene disposiciones generales y permanentes.

Artículo 87.

Cinco ministros secretarios, a saber: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y de Guerra y Marina, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.

VII. BOLIVIA

La vigente Constitución boliviana es de 17 de octubre de 1880.

He aquí su contenido religioso:¹

Preámbulo.

En el nombre de Dios, el pueblo boliviano, representado por la Convención Nacional de mil ochocientos ochenta, sanciona y proclama la Constitución de mil ochocientos setenta y ocho, con las modificaciones acordadas en la forma siguiente:

... ..

Artículo 2.

El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica, romana, permitiendo el ejercicio público de todo otro culto.

... ..

Artículo 17.

Los bienes raíces de la Iglesia y las propiedades pertenecientes a los establecimientos de educación, beneficencia y municipalidades, a comunidades y corporaciones religiosas, gozarán de las mismas garantías que los de los particulares.

... ..

Artículo 64.

Son atribuciones de la Cámara de senadores:

... ..

2.º Proponer ternas para arzobispos y obispos a fin de que sean presentados por el poder ejecutivo para la institución canónica.

... ..

Artículo 89.

Son atribuciones del presidente de la República:

... ..

14.º Ejercer los derechos del patronato nacional en las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas;

15.º Presentar arzobispos y obispos, escogiendo uno de los propuestos en terna por el Senado.

... ..

Artículo 111.

Son atribuciones de la Corte Suprema, a más de las que señalan las leyes:

... ..

6.ª Conocer de todas las materias contenciosas relativas al patronato nacional que ejerce el Gobierno supremo de la República.

Artículo 112.

La Corte Suprema, en la primera sesión que celebre después de haber prestado ante el Congreso juramento de cumplir la Constitución y las leyes, elegirá a su presidente, que también lo será de cada una de sus salas, debiendo durar en este carácter por el término de diez años, con derecho a reelección.

Cuando el Congreso funcionare fuera de la capital de la República, comisionará para la recepción del juramento al cabildo eclesiástico, constituido por el salón del Cuerpo legislativo.

F I N

Í N D I C E

Páginas

PREFACIO	5
ESTATUTOS JURIDICO-RELIGIOSOS DE EUROPA	
CAPÍTULO PRIMERO.—Estatuto jurídico-religioso de Alemania	11
CAP. II.—Estatuto jurídico-religioso de Baviera.....	17
CAP. III.—Estatuto jurídico-religioso de Prusia.....	31
CAP. IV.—Estatuto jurídico-religioso de los Estados Menores Alemanes	43
CAP. V.—Estatuto jurídico-religioso de Polonia.....	63
CAP. VI.—Estatuto jurídico-religioso de Letonia.....	83
CAP. VII.—Estatuto jurídico-religioso de Lituania.....	88
CAP. VIII.—Estatuto jurídico-religioso de Checoslovaquia	101
CAP. IX.—Estatuto jurídico-religioso de Rumania.....	105
CAP. X.—Estatuto jurídico-religioso de Grecia, Turquía, Rusia, Estonia y Finlandia.....	118
CAP. XI.—Estatuto jurídico-religioso de España.....	125
CAP. XII.—Estatuto jurídico-religioso de Yugoslavia...	160
CAP. XIII.—Estatuto jurídico-religioso de Italia.....	174
CAP. XIV.—Estatuto jurídico-religioso de Portugal.....	209
CAP. XV.—Estatuto jurídico-religioso de Austria.....	220
CAP. XVI.—Estatuto jurídico-religioso de Suiza.....	234
CAP. XVII.—Estatuto jurídico-religioso de Suecia, Noruega, Hungría, Dinamarca y Dantzig.....	255

CAP. XVIII.—Estatuto jurídico-religioso de los Países Bajos	264
CAP. XIX.—Estatuto jurídico-religioso de la Gran Bretaña e Irlanda	281
CAP. XX.—Estatuto jurídico-religioso de Francia.....	294

ESTATUTOS JURIDICO-RELIGIOSOS DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CAP. XXI.—Estatutos jurídico-religiosos de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Méjico.....	307
CAP. XXII.—Estatuto jurídico-religioso de Nicaragua...	314
CAP. XXIII.—Estatuto jurídico-religioso de la República de El Salvador	326
CAP. XXIV.—Estatuto jurídico-religioso de Honduras...	338
CAP. XXV.—Estatuto jurídico-religioso de Venezuela.....	350
CAP. XXVI.—Estatuto jurídico-religioso de Colombia.....	365
CAP. XXVII.—Estatuto jurídico-religioso del Ecuador...	383
CAP. XXVIII.—Estatuto jurídico-religioso de Costa Rica.	403
CAP. XXIX.—Estatuto jurídico-religioso de Guatemala.	417
CAP. XXX.—Estatuto jurídico-religioso de la República de Haití	428
CAP. XXXI.—Estatuto jurídico-religioso de las Repúblicas de Panamá, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba.	435
CAP. XXXII.—Estatuto jurídico-religioso de las Repúblicas de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia	441

Obras de D. Jaime Torrubiano Ripoll

PUBLICADAS

Relecciones Teológicas, de *Fray Francisco de Vitoria*.—Versión directa del original latino.—Prólogos, notas y apéndice del traductor.—Obra declarada de mérito relevante por el Ministerio de Instrucción pública.—*Tres volúmenes: 12 pesetas.*

Tratado de las Leyes y de Dios legislador, del *P. Francisco Suárez*.—Versión directa del original latino.—Prólogo y notas del traductor.—*Once volúmenes: 77 pesetas en Madrid; 82,50 en provincias.*

Novísimas instituciones de Derecho canónico.—Comentario completo a los 2.414 cánones del nuevo Código, con los textos latino y castellano de los mismos cánones.—Adoptada en muchas Universidades de la República.—*Dos gruesos volúmenes: 32 pesetas. Agotada.*

Del Derecho de la guerra y de la paz, de *Hugo Gracio*.—Versión directa del original latino.—*Cuatro volúmenes: 28 pesetas en Madrid; 30 en provincias.*

El Divorcio Vincular y el Dogma Católico.—*Un volumen.*

Del Derecho y la Justicia, de *Domingo Soto*.—Versión directa del original latino.—*Siete volúmenes*.

¿Son ellos adúlteros?—*Un volumen: 5 pesetas*.

La Confesión.—*Un volumen: una peseta*.

Imitación de Cristo de San Isidoro de Sevilla.—Versión directa del original latino.—*Un volumen: 4 pesetas*.

Que nada se sabe..., por el *Dr. Francisco Sánchez*.—Versión directa del original latino.—*Un volumen: 4 pesetas*.

El Real Patronato de la Corona de España y las Hijas de la Caridad.—*Un volumen: 1,50 pesetas*.

Virilidad y catolicismo.—*Un folleto: una peseta*.

La Iglesia rica y el Clero pobre.—*Un folleto: una peseta*.

La enseñanza científica de la religión y su restauración en España.—*Un folleto: una peseta*.

Teología y Eugenesia.—*Un volumen: 5 pesetas*.

Beatería y religión.—*Un volumen: 5 pesetas*.

Política religiosa de la democracia española.—*Un volumen: 5 pesetas*.

Consecuencias históricas y sociales de la Reforma.—*Un folleto: una peseta*.

EN PRENSA

Legislación y Jurisprudencia matrimonial.—*Seis gruesos volúmenes. Impresos, dos*.

Arte Magna, de *Raimundo Lulio*.—Versión directa del original latino.—*Tres volúmenes*.

EN PREPARACION

El Sexto Mandamiento de la Ley de Dios.

La Gran Ramera del Apocalipsis.

La Biblia y la Propiedad.

¿Son adúlteras ellas?

El confesonario y la vida íntima.

Patología matrimonial.

BV
630
.A1T6

8 16-37
Torrubiano
LOs concordatos...

1256291

MAY 27 1947

W. G. Garrison

MAY 29 1947

Fac. Ex

2- 8321

UNIVERSITY OF CHICAGO



48 433 650

BV
630
AIT6

1256291

UNIVERSITY OF CHICAGO



48 433 650

